



Los desafíos de la democracia



298

50
AÑOS

NUEVA SOCIEDAD

es una revista latinoamericana abierta a las corrientes de pensamiento progresista, que aboga por el desarrollo de la democracia política, económica y social.

Se publica cada dos meses en Buenos Aires, Argentina, y circula en toda América Latina.

Directora: Svenja Blanke

Jefe de redacción: Pablo Stefanoni

Coordinadora de producción: Silvina Cucchi

Plataforma digital: Mariano Schuster, Eugenia Corriés

Administración: Vanesa Knoop, Karin Ohmann

NUEVA SOCIEDAD Nº 298

Diseño original de portada: Horacio Wainhaus

Diagramación: Fabiana Di Matteo

Ilustraciones: Pablo Picyk

Fotografía de portada: Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Argentina

Corrección: Germán Conde, Vera Giaconi

Traducción al inglés de los sumarios: Kristie Robinson

Impreso en Talleres Gráficos Nuevo Offset,
Viel 1444, Buenos Aires, Argentina

Los artículos que integran **NUEVA SOCIEDAD** son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Revista. Se permite, previa autorización, la reproducción de los ensayos y de las ilustraciones, a condición de que se mencione la fuente y se haga llegar una copia a la redacción.

NUEVA SOCIEDAD – ISSN 0251-3552

Oficinas: Humberto Primo 531, C1103ACK Buenos Aires, Argentina.

Tel/Fax: (54-11) 3708-1330

Correo electrónico: <info@nuso.org>

<distribucion@nuso.org> (distribución y ventas)

<www.nuso.org>

El portal **NUEVA SOCIEDAD** es una plataforma de reflexión sobre América Latina.
Articula un debate pluralista y democrático sobre política y políticas latinoamericanas.

 **NUEVA
SOCIEDAD**

es un proyecto de la

**FRIEDRICH
EBERT**

STIFTUNG

Marzo-Abril 2022

Índice

COYUNTURA

- 4767 **Natalia A. Volosin.** En las cloacas de la política. Politización y cuentapropismo de la inteligencia argentina..... 4
- 4768 **Benedicte Bull / Antulio Rosales / Manuel Sutherland.** Venezuela: lujo, desigualdades y «capitalismo bodegonero» 14

TRIBUNA GLOBAL

- 4769 **Pavel Barša.** Europa del Este: los sueños extraviados de los liberales del 89 27

TEMA CENTRAL

- 4770 **Yanina Welp.** Sin partidos la democracia no funciona; con estos partidos, tampoco..... 43
- 4771 **Nabila Abbas / Yves Sintomer.** Tres imaginarios del sorteo en la política. ¿Democracia deliberativa, antipolítica o radical?..... 55
- 4772 **Steven Forti.** Posverdad, *fake news* y extrema derecha contra la democracia 75
- 4773 **Cristina Lafont.** Las asambleas ciudadanas y la concepción populista de representación..... 92
- 4774 **Nuria Alabao.** Por una democracia feminista (siempre por hacer) 109
- 4775 **Santiago Gerchunoff.** La crisis de la democracia como melancolía 121
- 4776 **Alicia Lissidini.** Democracia directa y movilización social: lo que nos muestra Uruguay 129
- 4777 **Patricio Gómez Talavera.** América Latina y los gatos de Cambises. Fragmentación política y desafíos para la democracia..... 139

ENTREVISTAS | 50 AÑOS

- 4778 **Maristella Svampa / Pablo Stefanoni.** Pensar y actuar de manera anfibia 152

SUMMARIES

Segunda página

La «crisis de la democracia» parece formar parte del sentido común de nuestra época: desacople entre representantes y representados, erosión de los partidos políticos, *fake news*, emergencia de nuevos autoritarismos con apoyo popular... Al mismo tiempo, también hay intentos de fortalecer la participación ciudadana, luchas por una mayor igualdad de género y diversas propuestas para (re)pensar la representación. A todo esto se dedica el Tema Central de este número de NUEVA SOCIEDAD.

En el artículo que abre el *dossier*, Yanina Welp se enfoca en los partidos políticos y en sus dificultades para articular demandas sociales y canalizar aspiraciones ciudadanas. Si la democracia no funciona sin partidos, tampoco lo puede hacer con partidos como estos; resulta necesario entonces pensar en su transformación, y para ello propone algunas ideas tendientes a cambiar el sistema de incentivos.

Algunos de los mecanismos que han emergido en estos años –en textos académicos, pero también en algunas experiencias políticas específicas– es la elección al azar. En un contexto de desconfianza frente a los partidos políticos y las formas tradicionales de representación, el sorteo y los minipúblicos aparecen como modos alternativos de garantizar la presencia de las personas comunes frente al poder de las elites. Nabila Abbas e Yves Sintomer señalan que el sorteo ha vuelto a la escena promovido por actores que responden a imaginarios diversos. Los autores se enfocan en tres tipos ideales –la democracia deliberativa, la democracia antipolítica y la democracia radical– para pensar los diferentes sentidos que puede asumir el sorteo como figura del sistema democrático. Cristina Lafont, a su turno, analiza las propuestas para insertar asambleas ciudadanas y otros minipúblicos deliberativos en el proceso político, con el objeto de superar las numerosas «brechas» de representación que aquejan actualmente a los

sistemas de partidos tradicionales. Su artículo muestra de qué forma opera la noción de representación como «encarnación» del pueblo propia del populismo y los riesgos de que termine por debilitar la idea de sociedades plurales con diferentes visiones, más allá del «lugar» que cada quien ocupa en la sociedad.

Steven Forti desarrolla los efectos de la posverdad, las *fake news* y el crecimiento de las extremas derechas en las democracias actuales. Si bien las noticias falsas no son un fenómeno nuevo, su articulación con la difusión de las redes sociales y plataformas de internet está transformando su amplitud y naturaleza. Al mismo tiempo, las extremas derechas han sabido adaptarse a esta nueva ecología comunicacional y han sacado provecho de ella. Por eso es que hoy la posverdad desborda los márgenes y atraviesa la prensa convencional e incluso los parlamentos.

En otra dirección, uno de los movimientos que en estos años han contribuido a profundizar la democracia es el feminismo. Tanto en Europa como en América Latina, los movimientos de mujeres han ganado las calles y han incidido en las legislaciones, en temas como los derechos sexuales y reproductivos, los cupos o la interrupción voluntaria del embarazo. Nuria Alabao muestra las tensiones entre diferentes formas de pensar el feminismo y sus efectos sobre las políticas públicas y la propia concepción de la democracia.

Pero ¿qué tan en crisis está la democracia liberal? Patricio Gómez Talavera plantea que la pandemia de covid-19 ha dejado expuestas vulnerabilidades en los sistemas de representación partidaria en América Latina, pero que no todos los factores negativos son de gestación reciente, y algunos muy importantes se encuentran enraizados en la génesis misma de los Estados latinoamericanos. Analiza asimismo algunas tendencias de las democracias actuales, como la «turbopolítica», la fragmentación partidaria y la desconfianza. Por su parte, Santiago Gerchunoff se pregunta cuánto de melancolía hay en la forma de entender la crisis de la democracia y sostiene que los lamentos y quejas que suscitan la crisis de representación y la transformación digital de la esfera pública son tan impotentes como recurrentes. Apelando a exponentes del liberalismo clásico, su artículo propone repensar el nuevo espacio digital como una forma de conversación pública de masas.

Finalmente, Alicia Lissidini analiza el caso uruguayo como un ejemplo exitoso de articulación entre democracia representativa y democracia directa en América Latina. La autora sostiene que, más allá de los resultados concretos en cada caso, las iniciativas ciudadanas, casi siempre coordinadas con partidos políticos, suman densidad a la conversación pública y canalizan la movilización por vías institucionalizadas.

Pese a la crisis, sin duda, los reflejos democráticos perviven en las sociedades occidentales. Y reflexionar sobre cómo dinamizar las democracias realmente existentes resulta urgente, en el contexto de graves problemas globales que desafían la capacidad para la toma de decisiones, sin caer en formas de decisionismo autoritario ni ceder ante los cantos de sirena de las nuevas demagogias.

En las cloacas de la política

*Politización y cuentapropismo
de la inteligencia argentina*

Natalia A. Volosin

En Argentina, el reciente escándalo por el uso de los servicios de inteligencia para armar causas judiciales contra opositores y sindicalistas durante el gobierno de Mauricio Macri dejó en evidencia, una vez más, el papel extorsivo de los espías argentinos y las imposibilidades de construir una agencia moderna, acorde con el Estado de derecho.

Los servicios de inteligencia se dedican, como se dice en la jerga argentina, a «carpetear» (extorsionar y comprar) a jueces, políticos, periodistas y empresarios; a armar y desarmar causas judiciales; a financiar ilegalmente campañas políticas; al crimen organizado; incluso a encubrir atentados terroristas. A fines de diciembre de 2021, en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se encontró un disco con un contenido particular: se trata de videos de una reunión realizada en 2017 en oficinas del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, en la que su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, coordina con un

grupo de empresarios de la construcción el impulso de una causa penal por extorsiones y amenazas contra un poderoso y cuestionado sindicalista. Allí el entonces ministro lanza la frase destinada a causar escándalo en caso de ser filtrada (y lo fue): «Creeme que si yo pudiera tener –y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte– si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría». Hoy la justicia investiga el caso, pero la historia del uso de la inteligencia con fines políticos y la propia autonomía de los espías para generar sus actividades por cuenta propia son tan viejas como la propia institución, pese

a los cambios de nombres y personajes durante el siglo xx y lo que va del xxi.

Desde la transición democrática de 1983 hubo varias reformas, pero ninguna logró conciliar las necesidades de inteligencia propias de un Estado moderno con los principios básicos de una democracia constitucional: el secreto es necesario para la efectividad de las actividades de inteligencia, pero se opone a la transparencia y la publicidad. Todos los sistemas lidian mejor o peor con este dilema que, además, es paradójico, pues los Estados requieren la información también para proteger la democracia.

Ni las repúblicas más robustas, y menos aún las latinoamericanas, están libres de escándalos de politización de los organismos de inteligencia; por el contrario, abundan los casos de servicios que se autonomizan y usufructúan su carácter clandestino, desde la venta ilegal de información a particulares hasta la participación directa en organizaciones criminales¹. En Argentina están presentes los dos tipos de problemas: politización y cuentapropismo.

Pero no es imposible encontrar el equilibrio. La academia y diversas organizaciones no gubernamentales han publicado extensamente sobre el tema².

Un menú abreviado de lo que habría que hacer incluye: desconcentración de las distintas actividades de inteligencia; control interno de cada área; prohibición de que los organismos no policiales hagan inteligencia criminal, salvo en casos de amenazas a la seguridad del Estado o al sistema democrático; transparencia del control externo; ombudsman para el control ciudadano; requerimiento de escuchas sin intermediación (que los jueces se lo pidan directamente a las empresas telefónicas); reducción de fondos reservados a lo estrictamente necesario; profesionalización del personal; fortalecimiento del control legislativo; y desclasificación activa de información.

El problema estructural

No parece tan complejo. Pero entonces, ¿por qué no se hace? Una respuesta es que, como ocurre con la economía política de muchas reformas institucionales, no hay suficientes incentivos. Hay dos obstáculos fundamentales. Primero, el cortoplacismo. Los políticos viven del apoyo popular. Los escándalos son propicios para las reformas porque la

1. Florina Cristiana Matei y Carolyn Halladay: «The Role and Purpose of Intelligence in a Democracy» en F.C. Matei y C. Halladay (eds.): *The Conduct of Intelligence in Democracies: Processes, Practices, Cultures*, Lynne Rienner, Boulder, 2019.

2. José Manuel Ugarte, uno de los principales referentes, tiene infinidad de publicaciones y fue corrector de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior. V. tb., entre otros, Paula Litvachky, Ignacio Bollier y Ximena Tordini: «El sistema de inteligencia en democracia» en Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): *Derechos humanos en la Argentina. Informe 2016*, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2016; Asociación por los Derechos Civiles (ADC): *El (des)control democrático de los organismos de inteligencia en Argentina*, Buenos Aires, 1/2015; y Fundación Vía Libre: *Informe: Sistema Nacional de Inteligencia*, Buenos Aires, 2016. Además, en mayo de 2016, un grupo de organizaciones conformó la Iniciativa Ciudadana para el Control de los Organismos de Inteligencia (iccsi).

demanda ciudadana obliga a restaurar la confianza. Sin embargo, el habitual cortoplacismo hace que cuando aumenta la presión social nadie haya planificado nada y que los cambios fracasen o no tengan un impacto tangible³.

Esto es especialmente grave en Argentina. Como explican Pablo Spiller y Mariano Tommasi, la práctica institucional a partir del golpe de Estado de 1930 produjo un sistema muy frágil en el que es imposible lograr acuerdos intertemporales entre grupos que gobiernan en distintos momentos. Las interacciones son siempre cortoplacistas y, en consecuencia, las políticas públicas son de baja calidad, improvisadas, incoherentes e inestables⁴. Segundo, la política suele convencerse de que hay que cambiar no solo por la demanda ciudadana, sino porque responde a presiones de grupos de interés influyentes. Pero si esas corporaciones (medios, empresas, jueces, abogados) son una parte privilegiada que se alimenta del sistema, difícilmente querrán cambiarlo. Fu Hualing lo explica en el contexto de las políticas de lucha contra la corrupción en la China comunista: se aceptan cambios, incluso se cortan cabezas, pero todo tiende a reforzar el *statu quo* (eliminar enemigos políticos, limitar a las burocracias administrativas, restaurar la confianza en el partido)⁵. Las

reformas que amenazan en serio el sistema son inadmisibles, aunque eso sea precisamente lo que se necesite.

La historia de las reformas en la era democrática en Argentina es la historia de estos dos obstáculos. Las purgas, los cambios de caras y las modificaciones legislativas giraron alrededor del cortoplacismo producido por el descubrimiento de actividades *non sanctas* y por las necesidades del poder. No solo del poder político, sino también de empresarios, sindicalistas, periodistas, lobistas, jueces, fiscales y estudios de abogados que se alimentan de este sistema, que desde los tiempos del gobierno de Carlos Menem se conoce en el mundo de la política argentina como la «cadena de la felicidad».

Como consecuencia de ello, los cambios han sido pura cosmética o insostenibles en el tiempo. Algunas de las últimas reformas implementadas por el gobierno de Alberto Fernández, trascendentales en lo sustancial, también son, por esas mismas razones estructurales, precarias.

La inteligencia predemocrática

La primera agencia civil de inteligencia del país fue la Coordinación de Informaciones de Presidencia de la Nación

3. Sergio Berensztein: «The Politics of Tax Reform in Argentina and Mexico», tesis doctoral, The University of North Carolina at Chapel Hill, Carolina del Norte, 1998.

4. P.T. Spiller y M. Tommasi: *The Institutional Foundations of Public Policy in Argentina: A Transactions Cost Approach*, Cambridge UP, Nueva York, 2007.

5. Fu Hualing: «Wielding the Sword: President Xi's New Anti-Corruption Campaign» en Susan Rose-Ackerman y Paul Lagunes (eds.): *Greed, Corruption, and the Modern State: Essays in Political Economy*, Edward Elgar, Cheltenham, 2015.

(CIPN), creada por un decreto de Juan Domingo Perón en 1946⁶ y luego denominada Coordinación de Informaciones del Estado (CIDE). Dependía directamente del presidente y funcionaba en un despacho contiguo al suyo. La dirigía Rodolfo «Rudi» Freude, señalado como responsable de organizar el refugio de criminales nazis⁷. La CIDE centralizaba y coordinaba información vinculada con la seguridad externa, pero también con la detección de «enemigos internos»⁸.

Con el golpe de Estado de 1955, la autodenominada «Revolución Libertadora» hizo una purga masiva y en enero de 1956, con un decreto secreto, transformó la CIDE en Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE)⁹. El nuevo organismo se dedicó al proceso de «desperonización» y a la persecución del comunismo. Estuvo a cargo del infame general Juan Constantino Quaranta. La principal innovación de la época fue la creación de gastos reservados para la SIDE, organismos de seguridad e incluso el Congreso de la Nación mediante dos decretos secretos de 1955 y 1956¹⁰. En 1969, una «ley» del presidente de facto Juan Carlos Onganía¹¹, también secreta, limitó los

fondos a determinados organismos, incluyendo la Secretaría¹².

La SIDE fue crucial para el plan de Conmoción Interna del Estado (Conintes), el programa secreto de represión del gobierno de Arturo Frondizi por el cual las Fuerzas Armadas persiguieron, detuvieron y condenaron en juicios sumarios a trabajadores, estudiantes e intelectuales. En febrero de 1973 se dictó otra «ley» secreta (un decreto del presidente de facto Agustín Lanusse) que reguló el funcionamiento de la SIDE y mantuvo los fondos reservados. Estuvo vigente hasta 2001. La SIDE también tuvo un rol fundamental en la violencia paraestatal de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) durante el tercer gobierno peronista (1973-1976), en especial a través de la banda de Aníbal Gordon, un delincuente común que comandó una patota especializada en contrainsurgencia y que, en paralelo, cometía robos y secuestros extorsivos.

En octubre de 1975, la famosa Directiva 1/75 del Consejo de Defensa que estableció la «ofensiva contra la subversión para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas» puso

6. Decreto 337/46.

7. Uki Goñi: *La auténtica Odessa*, Paidós, Buenos Aires, 2008.

8. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos: *Plan Conintes. Represión política y sindical*, Buenos Aires, 2014.

9. Decreto s 776/56.

10. Decreto s 2452/55, derogado y reemplazado por el Decreto s 5315/56.

11. Ley s 18.302.

12. Las leyes secretas se autorizaron en 1944, aunque se utilizaban desde el siglo XIX. En 2006 el Congreso las prohibió, ordenó la publicación de 146 que se habían dictado desde 1891 y derogó la Ley s 18.302 y el Decreto s 5315/56. V. Ley 26.134.

a la SIDE bajo control funcional del Ejército. Gordon pasó a comandar una base secreta que siguió manejando durante la dictadura junto con Raúl Guglielminetti, torturador del Batallón 601 del Ejército condenado a prisión perpetua en 2006. Era el centro clandestino de detención Automotores Orletti, fuertemente vinculado al Plan Cóndor, programa cuya meta era coordinar la represión entre los países del Cono Sur¹³.

Durante la última dictadura militar, en mayo de 1976, el organismo se transformó en Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), nombre que mantuvo hasta 2001¹⁴. Entre 1976 y 1983, fue un apéndice de la inteligencia militar y un instrumento clave del terrorismo de Estado.

Las reformas «democráticas»

Raúl Alfonsín, presidente de la transición, modificó la exigencia de que la SIDE fuera comandada por un militar y designó a un civil, el abogado Roberto Pena. Pena hizo una purga masiva de 860 empleados (familiares y amigos de militares) a quienes reemplazó con militantes de la Unión Cívica Radical (UCR), pero no mucho más¹⁵. Comenzaban los cambios cosméticos y la generación de la denominada «mano de

obra desocupada», dos clásicos hasta la actualidad. La purga fue insuficiente para subordinar a una agencia que había estado casi 40 años al servicio de la corporación militar. Entonces el gobierno de la democracia cometió lo que podríamos llamar el «pecado original», con un movimiento que se repetiría en el futuro: en lugar de reformarla, armó una SIDE paralela.

Se la conoció como «Grupo Alem» (por la calle en que funcionaba) y decía reportar ante el subsecretario general de la Presidencia Dante Giadone. La idea la promocionaron dos tenientes de la Marina que habían aportado datos útiles sobre el pacto entre los militares y el sindicalismo peronista que denunciaba Alfonsín¹⁶. Los comandaba ni más ni menos que el torturador Guglielminetti y lo integraban otros ex-integrantes del Batallón 601, conocido por su aciago pasado en la dictadura.

Guglielminetti también fue apuntado por famosos secuestros de empresarios en la década de 1980, como los que hacía la banda de su amigo Gordon en los años 70. La aparición de una foto de Alfonsín con el torturador hizo estallar el escándalo. Algunos dijeron que era custodio del presidente; otros, un agente infiltrado de inteligencia. En cualquier caso, lideraba una SIDE paralela.

13. «La SIDE y Orletti: las claves del eje Argentina-Uruguay en la Operación Cóndor» en *Fiscales.gob.ar*, 27/8/2015.

14. Decreto 416/76.

15. Gerardo Young: *SIDE: la Argentina secreta*, Planeta, Buenos Aires, 2006.

16. Oscar Muñio: *Alfonsín: mitos y verdades del padre de la democracia*, Aguilar, Buenos Aires, 2013.

En 1988 se sancionó la Ley 23.554 de Defensa Nacional, que limitó las competencias de la inteligencia militar a las amenazas externas. Para la SIDE fue irrelevante: ya no trabajaba para el poder militar, sino para sus propios intereses y los del poder político.

Todo se intensificó durante los dos gobiernos de Carlos Menem, en los que el presupuesto de inteligencia se multiplicó por diez¹⁷. Lo único destacable de la época fue el impacto marginal de la Ley 24.059 de Seguridad Interior de 1992, que creó una Comisión Bicameral del Congreso con facultades para investigar a los organismos de inteligencia.

La SIDE estuvo casi toda la década a cargo de Hugo Anzorreguy, vinculado a la justicia penal federal a través del estudio jurídico que compartía con su hermano Jorge, influyente ex-juez. En este periodo se establecieron las bases del funcionamiento perverso que subsisten hasta la actualidad, cuyo actor crucial es el Poder Judicial. ¿Con qué objetivo? El de siempre: ayudar a los amigos y combatir a los enemigos, desde el comunismo y el peronismo en los años 50 hasta la «subversión» en los 70 y luego, en democracia, simplemente a la oposición.

A este nuevo actor, al igual que a los medios de comunicación, se lo compró con sobres llenos de dinero de los fondos reservados, pero también se lo hizo dependiente de la SIDE. ¿Cómo? Con el

monopolio de la interceptación de comunicaciones, crucial para las investigaciones criminales complejas.

Hasta 1992 las escuchas estaban a cargo de la empresa pública de telecomunicaciones ENTEL, que respondía órdenes judiciales desde su Dirección de Observaciones Judiciales: la «Ojota» (OJ). En octubre, con la privatización de ENTEL, el gobierno la trasladó por decreto a la SIDE¹⁸. Ahora los jueces ya no podían conseguir intervenciones sin pasar por el Poder Ejecutivo. Con el tiempo, las escuchas empezaron a pedirse directamente desde la SIDE sin orden judicial¹⁹ o con órdenes falsas, incluso para alimentar servicios ilegales de empresas de seguridad de los propios agentes. A la SIDE de Anzorreguy se le pasó por al lado el atentado terrorista contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992 y dos años después, el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), aún más cruento (hubo 85 muertos y 300 heridos). Los responsables de contra-inteligencia eran Jorge Luis Lucas y un tal Antonio «Jaime» Stiuso, quien luego saltaría de las sombras a la fama y que formaba parte de la agencia desde 1972.

Como si tamaña ¿negligencia? fuera poco, los fondos reservados de la SIDE se usaron para encubrir el atentado contra la AMIA. El caso fue investigado por el juez federal Juan José Galeano (designado en la magistratura a pedido de Anzorreguy)²⁰, quien

17. «Una extensa historia siempre al filo de la ley» en *La Nación*, 3/3/2008.

18. Decreto 1801/92.

19. G. Young: ob. cit.

20. S.V.: «Anzorreguy y Galeano, una amistad de vieja data» en *Página/12*, 5/10/2003.

más tarde fue condenado por pagarle 400.000 dólares al imputado Carlos Telleldín con dinero del organismo de inteligencia para que incriminara a policías bonaerenses. Se cree que el objetivo era encubrir la denominada «pista siria» que apuntaba a Knoor Edul, amigo de Menem vinculado a Moshen Rabbani, agregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires. Según archivos desclasificados en 2015 por un decreto de Cristina Fernández de Kirchner²¹, Rabbani estuvo en la SIDE en una plácida reunión con el subdirector del organismo dos años después del atentado. En 2005, Argentina llegó a una solución amistosa con víctimas y familiares de víctimas del atentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado reconoció su responsabilidad y se comprometió a transparentar el uso de los gastos secretos²². Pero esto ocurrió recién diez años después, y no por buenas razones.

Los gastos reservados de la SIDE también se usaron para pagarles 466 millones de dólares en sobresueldos a altos funcionarios del gobierno menemista. Anzorreguy fue procesado; Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo resultaron condenados. La información la dio a conocer en 2003 María Julia Alsogaray, secretaria de Ambiente (1991-1999) condenada

por corrupción, para intentar justificar su enriquecimiento ilícito.

Durante el gobierno de la Alianza que comandó Fernando de la Rúa (1999-2001), el Congreso reemplazó el régimen vigente desde 1973 con una nueva Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520 y Decreto 950/02). Pero no lo hizo por amor a la patria, sino impulsado por un escándalo: el de las «coimas» del Senado. En junio de 2000, un diario reveló que senadores peronistas habían recibido pagos ilegales del gobierno para aprobar una ley de flexibilidad laboral que pedía el Fondo Monetario Internacional (FMI)²³. Se inició una investigación y se acusó al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, de haber hecho los pagos con fondos... de la SIDE. En 2003, el secretario parlamentario Mario Pontaquarto confesó que había llevado una valija con más de cuatro millones de dólares a la casa de un senador. Se incriminó a sí mismo, a De la Rúa, a quienes estaban a cargo de la inteligencia en ese momento y a 12 senadores peronistas²⁴. El caso terminó con todos absueltos en 2013 y se cerró definitivamente en 2016.

Además de producir una crisis institucional sin precedentes, el escándalo motivó la reforma de la Ley de Inteligencia. La nueva norma cambió el nombre de la SIDE a Secretaría de Inteligencia (SI) y estableció límites a las actividades de inteligencia. Les prohibió

21. Decreto 395/2015.

22. V. Decreto 812/2005.

23. Joaquín Morales Solá: «Carencias y defectos del Gobierno» en *La Nación*, 25/6/2000.

24. Victoria Ginzberg: «A la manera de la famosa servilleta» en *Página/12*, 17/12/2003.

realizar tareas represivas y cumplir por sí funciones policiales o de investigación criminal (salvo a pedido de autoridad judicial); obtener información de personas por razones políticas, religiosas, sindicales, etc.; influir en la vida institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en la vida interna de los partidos o en la opinión pública; y revelar información de inteligencia sin orden judicial. Pero al disponer una excepción para cooperar con el Poder Judicial y dejar las escuchas en manos de la SI, se mantuvieron las relaciones promiscuas de siempre.

La ley también creó una Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia a la que, como novedad, facultó a monitorear los fondos reservados. Fue el primer control desde que se crearon en 1955. También dispuso la intervención de la Comisión en una consulta no vinculante para designar al titular de la nueva SI. No obstante, limitó absurdamente su acceso a información clasificada a lo que decida el propio Poder Ejecutivo. La Comisión empezó a funcionar recién en 2004. Todo lo que hace es secreto.

En 2004 se le pidió la renuncia al entonces ministro de Justicia de Néstor Kirchner Gustavo Béliz, quien acusó a la SI de tener como rehén o como cómplice al gobierno. La llamó «la Gestapo de la era democrática». Al día siguiente, en un programa de televisión, Béliz mostró una foto del espía Stiuso. Le armaron una causa por

violación de secretos de Estado, recibió amenazas y se fue del país (hoy Béliz es secretario de Asuntos Estratégicos del presidente Alberto Fernández).

El amor entre el gobierno y la SI de Stiuso continuó hasta que diez años después, en diciembre de 2014, la presidenta Cristina Fernández, en medio de internas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2015, advirtió que perdía el control del organismo, lo descabezó y echó al poderoso espía. Entonces se dijo que la presidenta tenía una AFI paralela a cargo del jefe del Ejército César Milani, quien debió renunciar en 2015 para enfrentar causas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Mano de obra desocupada, otra vez.

En enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman denunció a Cristina Fernández por encubrir el atentado a la AMIA con la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013. Un día antes de declarar ante una comisión del Congreso, Nisman apareció muerto en su departamento con un tiro en la cabeza. Dos meses después, el Congreso reformó la Ley de Inteligencia²⁵.

La SI se transformó en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de un director y subdirector designados con acuerdo del Senado. Además, se limitó el uso de fondos reservados a las actividades de inteligencia y se dispuso el registro y documentación de todos los gastos, reservados o no. Se cumplía así el acuerdo amistoso por AMIA que se había hecho diez años antes, en 2005. También se transfirieron

25. Ley 27.126 y Decreto 1.311/15.

las escuchas a la Procuración General de la Nación.

No obstante, se mantuvo el limitadísimo control de la Comisión Bicameral y el rol de la agencia como auxiliar de la Justicia, y se habilitó la producción de inteligencia criminal no solo respecto de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, sino también de delitos federales complejos (terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, cibercrimen), que deberían ser investigados por las policías.

El presidente Mauricio Macri le entregó la AFI a un íntimo amigo y socio, Gustavo Arribas, y a Silvia Majdalani, ex-diputada menemista e integrante de la Comisión Bicameral, desde donde había tejido importantes relaciones con la comunidad de espías²⁶.

A días de asumir, el 29 de diciembre de 2015, Macri transfirió la oficina de escuchas de la Procuración a la Corte Suprema por un decreto de necesidad y urgencia²⁷. El Tribunal hizo algo de berrinche, pero en febrero de 2016 dijo que sí. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) fue muy criticada por filtraciones que se usaron a partir de 2015 para hacer operaciones políticas en los medios de comunicación. La Corte nunca dijo nada.

En marzo de 2016 Macri derogó por decreto el nuevo régimen de

administración de fondos reservados y todo volvió a ser secreto²⁸. Su administración fue acusada de usar a la AFI para perseguir a sus adversarios políticos, a sus socios partidarios y a sus familiares. Hay múltiples causas y más de diez agentes fueron procesados. Los altos mandos fueron desvinculados por un fallo de la Cámara Federal, que consideró que los espías actuaban por sus propias motivaciones.

La respuesta de los «cuentapropistas» no se hizo esperar. Al poco tiempo, la AFI encontró el mencionado disco con el video de una reunión de funcionarios de la ex-gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal con empresarios y tres altos jefes de la agencia de inteligencia para armar una causa contra un gremialista acusado de corrupción²⁹. Y fue allí donde el ministro de Trabajo pronunció la frase referida a la Gestapo antisindical. La «Gestapo» estaba ahí, como había advertido Béliz en 2004.

Macri, a su vez, fue procesado por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino *ARA San Juan*, que se hundió a fines de 2017 con sus 44 tripulantes. Ya había sido procesado en 2010 por integrar una asociación ilícita dedicada a hacer escuchas ilegales a sus opositores políticos e incluso familiares del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos

26. Manuel Tarricone: «La primera 'Señora 8' de la AFI: quién es Silvia Majdalani» en *Chequeado*, 3/8/2016.

27. Decreto DNU 256/15.

28. Decreto 656/2016.

29. N. Volosin: «La Gestapo de la democracia» en *Infobae*, 1/1/2022.

Aires, de lo que fue desvinculado ya siendo presidente³⁰.

En 2019, apenas asumió, Alberto Fernández intervino la agencia por seis meses mediante un decreto de necesidad y urgencia³¹ que prorrogó sucesivamente³² y derogó el decreto de Macri con el fin de volver a limitar y transparentar los fondos reservados. Además, por un DNU de marzo de 2020 modificó la Ley de Inteligencia para impedir que los organismos colaboren en investigaciones criminales³³.

Los cambios son fundamentales en su sustancia, pero contingentes en lo procedimental. En lugar de una designación con acuerdo del Senado, la AFI está intervenida. La interventora elaboró un anteproyecto de nueva Ley

de Inteligencia con un consejo de expertos, pero el presidente no lo envió al Congreso y reformó la ley por decreto. Las escuchas continúan en manos de la Corte, lo que viola el principio básico de que «quien autoriza no escucha y quien escucha no autoriza»³⁴.

Purgas para meter a los propios, mano de obra desocupada que utiliza la inteligencia para cometer delitos, agencias paralelas, cambios cosméticos, reformas mediante decretos presidenciales, persecución de enemigos políticos y descontrol. Esta es la historia de politización y cuentapropismo del principal organismo de inteligencia argentino.

Una deuda permanente de la democracia desde 1983. ☒

30. «Confirmaron el sobreseimiento de Macri por las escuchas ilegales» en *Infobae*, 14/6/2016.

31. Decreto DNU 52/2019.

32. Decretos 540/20, 987/20, 359/21 y 832/21.

33. Decreto DNU 214/20.

34. CELS: «Escuchas: el proyecto de ley del peronismo que tiene el apoyo del PRO consolidará el descontrol», 21/5/2018.

Venezuela: lujo, desigualdades y «capitalismo bodegonero»

Benedicte Bull / Antulio Rosales / Manuel Sutherland

La expansión de los bodegones en Venezuela –tiendas de productos importados, incluso de lujo, para quienes pueden pagarlos– va de la mano del proceso de «dolarización» de la economía (y de la apelación a diversas formas de pago) y de mecanismos de decisión opacos para establecer ganadores y perdedores de la crisis. Las zonas económicas especiales (ZEE) son la cara complementaria de este proceso.

La dolarización de las actividades comerciales ha sido una válvula de escape que yo la veo como positiva (...) es una forma de resistencia de nuestro pueblo.

Nicolás Maduro, diciembre de 2020

En los últimos años, la economía venezolana ha cambiado significativamente. La producción petrolera cayó a partir de 2015 y, después de 2019, se desplomó por debajo del millón de barriles diarios. El país atravesó más de cuatro años de hiperinflación y en siete años el PIB se ha contraído en más de

Benedicte Bull: es profesora en el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Oslo y dirige la Red Noruega de Investigación sobre Latinoamérica.

Antulio Rosales: es profesor asistente de Ciencias Políticas de la Universidad de New Brunswick (Canadá).

Manuel Sutherland: es economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), Caracas.

Palabras claves: bodegones, desigualdad, dolarización, hiperinflación, Venezuela.

Nota: este texto es una versión abreviada de los resultados de una investigación llevada a cabo a finales de 2020 como parte de una colaboración entre la Universidad de Oslo y el CIFO. Una versión más extensa fue publicada por la Fundación Friedrich Ebert con el título «Venezuela: de la crisis económica al capitalismo elitista bodegonero», Caracas, 11/2021, disponible en <<https://library.fes.de/>>.

80%¹. Como respuesta a la crisis y a las sanciones financieras y sectoriales (que afectan al petróleo y oro venezolanos) impuestas por Estados Unidos en 2017 y 2019, el gobierno de Nicolás Maduro ha avanzado en un conjunto de reformas económicas que buscan liberalizar ciertos sectores comerciales y productivos. El objetivo ulterior es mantener el poder pese a la conflictividad política y social que ha generado su gobierno y a la peor crisis económica de la historia republicana del país.

Los cambios propuestos no han venido acompañados de reformas fiscales que permitan aumentar la recaudación, ni de una discusión formalizada del presupuesto nacional con actores políticos y económicos diversos. Al contrario, estas reformas se caracterizan por la opacidad —se desconocen los alcances de las alianzas, los términos de las contrataciones y las transferencias de activos—, así como por la arbitraria ejecución de regulaciones y cambios legales. Hemos visto cómo el gobierno nacional ha aplaudido la dolarización informal como una «válvula de escape»², sin regularla en una forma consistente y transparente.

En este contexto, vale la pena preguntarse: ¿cómo podemos caracterizar el sistema económico que rige actualmente en Venezuela? ¿Quiénes lo controlan? ¿Cuál es el destino de estos cambios? En un esfuerzo por

comenzar a dar cuenta de estos procesos de transformación en política económica, intentamos desentrañar algunos de los fenómenos fundamentales que han emergido como cambios económicos recientes en el país. Entre estos fenómenos se encuentra la emergencia de los llamados «bodegoneros» como la nueva cara del consumo, después de años de escasez y en medio de una de las hiperinflaciones más dilatadas de la historia. «Bodegón» es el término que se usa para designar tiendas de bienes importados. Estos bodegoneros pueden concentrarse en alimentos y bebidas, como supermercados regulares, pero también hay algunos que, por ejemplo, son expendios de electrodomésticos y otros productos. Los bodegoneros gozan en general de excepciones arancelarias y muchos consiguen sus bienes a través del sistema «puerta a puerta», que permite importar sin tener que cumplir con requisitos sanitarios ni fitosanitarios. Los enormes beneficios fiscales y tributarios poco a poco han ido disminuyendo, pero aun así resultan onerosos si se consideran en contraste con las enormes trabas que enfrentan la industria y el agro local.

El estudio de los bodegoneros forma parte de una serie de investigaciones con el propósito de describir y analizar cambios experimentados en diferentes ámbitos de la economía venezolana en

1. Juan Manuel Puente Camba y Jesús Adrián Rodríguez: «Venezuela en etapa de colapso macroeconómico. Un análisis histórico y comparativo» en *América Latina Hoy* vol. 85 N^o 1, 2020.

2. Daniel Lozano: «'Válvula de escape': Maduro reconoce el avance de la dolarización de la economía venezolana» en *La Nación*, 2/1/2021.

tiempos recientes³. Prestamos particular atención al surgimiento de nuevas desigualdades, tanto entre consumidores y trabajadores como entre empresarios y comerciantes. En segundo lugar, se revela una arbitraria y opaca liberalización focalizada, de la cual el gobierno de Maduro busca extraer réditos políticos (estabilidad), así como materiales: determinar *a priori* los ganadores del proceso de desregulación. Observamos la formación de nuevas elites comerciales y el creciente empoderamiento de clases económicas importadoras y extractivas en alianza con el poder estatal.

Los antecedentes y el soporte legal de la economía del bodegón

Como respuesta a la crisis económica que se inició en 2014 y se extiende hasta hoy, a partir de 2016 el gobierno de Maduro comenzó a forjar espacios de experimentación regulatorios en la economía venezolana. Ese año creó la zona de desarrollo especial Arco Minero del Orinoco (AMO) con el objetivo de formalizar alianzas y dinámicas preexistentes en el estado Bolívar en

torno de la minería de oro. Con ese decreto, aumentó la presencia del Estado en la actividad minera, mientras que se mantuvieron prácticas informales de control territorial por parte de grupos armados y se profundizaron el contrabando y la venta ilegal de oro *manu militari*⁴. Asimismo, en 2017, por vía del Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno trató de modificar la distribución accionaria de las empresas mixtas de la industria petrolera, contraviniendo la Ley Orgánica de Hidrocarburos⁵.

Después de las sanciones impuestas por Estados Unidos a finales de enero de 2019, el gobierno de Maduro derogó la Ley de Ilícitos Cambiarios y facilitó así el uso y cambio del dólar estadounidense en la economía nacional. Además, reanudó los esfuerzos por abrir nichos de mercado a la inversión extranjera directa tanto en el sector de hidrocarburos como en otros⁶. En octubre de 2020, la supraconstitucional Asamblea Nacional Constituyente aprobó la denominada Ley Antibloqueo que permite la transferencia, concesión, privatización o arriendo de activos de la República a inversionistas privados⁷.

3. Es el resultado de entrevistas a 81 encargados de bodegones en seis estados del país y de encuestas a más de 100 clientes de esos mismos bodegones.

4. Bram Ebus y Thomas Martinelli: «Venezuela's Gold Heist: The Symbiotic Relationship between the State, Criminal Networks and Resource Extraction» en *Bulletin of Latin American Research* vol. 41 Nº 1, 2022.

5. Tomás Straka: «Crónica de un autogolpe» en *Nueva Sociedad* edición digital, 4/2017, <www.nuso.org>.

6. B. Bull y A. Rosales: «Into the Shadows: Sanctions, Rentierism, and Economic Informalization in Venezuela» en *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 2020.

7. Carlos Seijas Meneses: «A la calladita el chavismo reprivatiza empresas que expropió y llevó a la quiebra» en *Tal Cual*, 12/1/2021.

La polémica Ley Antibloqueo abre la puerta a la privatización masiva de activos en manos del Estado. Esta privatización se ha denominado «reestructuración empresarial de activos», cosa que ya se ha venido haciendo con propiedades públicas como Abastos Bicentenarios y la red de locales de expendio de alimentos Mercado de Alimentos SA (Mercal) y Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL). No se cuenta con información pública sobre las privatizaciones en cuestión, es decir, no se sabe en cuánto dinero se han vendido los establecimientos, ni cuánto ha podido ingresar al fisco en concepto de enajenación de activos. La inconsulta Ley Antibloqueo busca darles un marco legal a los procesos de privatización que se han venido ejecutando discretamente, y profundiza los procedimientos opacos que han venido sucediendo. La opacidad se convierte en política de Estado, justificada bajo el paraguas de la hostilidad externa y las denominadas «medidas coercitivas unilaterales» (sanciones). En este contexto, se ofrecen elevados castigos penales a quienes publiquen información sobre la negociación, es decir, los precios y los nombres «beneficiarios» de los bienes estatales a enajenar. Más aún, no se contempla un reglamento abierto con respecto al proceso legal de liquidación de activos, es decir, no hay una normativa que regule las formas legales de proceder: licitación, concurso, subasta pública, entre otras.

Después de la elección de una nueva Asamblea Nacional en diciembre de

2020 marcada por altos niveles de abstención (69%) y varias irregularidades, casi la totalidad de las curules han sido ocupadas por aliados del gobierno, con una escueta minoría opositora alentada desde el poder. Eso permitió al gobierno avanzar en una agenda legislativa que buscaría ampliar esos espacios de experimentación regulatoria aún más con una Ley de Zonas Económicas Especiales (LZEE), así como una nueva reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, entre otras.

Las medidas propuestas parecen ser insuficientes para la magnitud de la crisis; si la vemos desde su PIB per cápita, la economía ha retrocedido a niveles de hace unos 70 años, según la última data disponible a julio de 2021.

Un aspecto importante de la crisis económica venezolana es la elevada inflación, seguida por hiperinflación. Aunque la inflación ha venido disminuyendo desde el descontrolado 130.060% de 2018, sigue siendo extremadamente alta. La tasa oficial de inflación en 2021 fue de 686%, la más alta del mundo y casi 13 veces más alta que la de Argentina, la tercera más alta del mundo. En enero de 2022 se ha salido de la hiperinflación, pero las tasas intermensuales son aún muy elevadas.

Como resultado de la derogación de la Ley de Cambios Ilícitos, emergió una dolarización anarquizada, o la circulación multimoneda. También se pulverizó la confianza de la población en la moneda nacional. Esto se ha reflejado en un deterioro del tipo de cambio en Venezuela. Desde diciembre de

2017, previo a la eliminación de cinco ceros del cono monetario (2018), hasta julio de 2021, el tipo de cambio entre bolívares y dólares se ha incrementado en 288.000.000%. Pero en la actualidad se pasó al otro extremo, y al estar el tipo de cambio bastante estable la alta inflación provocó una sobrevaluación del bolívar que algunos calculan en más de 100%.

Características de los bodegones

Según los resultados que pudimos obtener en nuestro estudio, 80% de los bodegones tienen menos de cinco años de funcionamiento. Es un periodo cónsono a una de las razones centrales de su aparición: suplir con mercancías importadas terminadas lo que suministraba la industria nacional que en 2014 estaba abatida por la crisis económica, los controles de precios y de cambio, y la escasez de divisas provenientes de la renta petrolera. Una industria nacional dependiente de las exportaciones petroleras y de las divisas subsidiadas por el Estado que podía adquirir se vino a la ruina dejando los anaqueles vacíos. La forma elitista de solucionar en el corto plazo esta situación fue facilitar la onerosa importación de bienes que otrora eran producidos en el país. Ello permitió solventar parcialmente la severa escasez que enfrentaba el país, pero a precios

considerablemente mayores, lo que merma aún más el debilitado poder adquisitivo de la población asalariada, aumenta la desigualdad e impacta en la capacidad productiva nacional.

La primera pregunta que nos hicimos fue: ¿qué nos puede decir la operación de los bodegones sobre el sistema monetario del país? Recientemente se ha popularizado la idea de que la economía venezolana se está dolarizando. Como plantea el economista Ronald Balza, en la economía nacional circulan tanto el dólar como el peso colombiano, el real brasileño, e inclusive el oro y las criptomonedas como medios de pago⁸. Pero efectivamente el dólar estadounidense ha venido ganando terreno, en detrimento del bolívar, en especial porque la moneda de *referencia* termina siendo el dólar en las transacciones cotidianas, más allá de la moneda en que se haga el intercambio. Es decir, mientras que empleadores y consumidores continúan usando el bolívar en sus transferencias y pagos, lo hacen muchas veces con referencia en el dólar como marcador del precio, debido a la inestabilidad del valor de la moneda nacional y la dificultad de manejar cotidianamente elevadas cifras en bolívares.

Distintos trabajos de empresas consultoras han venido mostrando el avance del dólar, así como también el de otros medios de pago como el euro, el peso colombiano, el real brasileño y el oro. Ha sido notable el aumento del uso

8. R. Balza Guanipa: «Ni dolarización ni desdolarización: sistema multimonedado en Venezuela» en *Pro-davinci*, 22/2/2021.

de sistemas electrónicos de pago, como Zelle, a través de los cuales se hacen transferencias en dólares entre cuentas de bancos estadounidenses para el consumo de bienes dentro de Venezuela. En varios medios, se ha planteado que más de 80% de los pagos en bodegones se hacen con dólares. Nuestro estudio muestra una realidad algo diferente. Pese a que la coexistencia de distintos medios de pago es un elemento central de la nueva economía, según nuestras indagaciones alrededor de dos tercios de los bodegones indican que el bolívar —en efectivo, con tarjeta o mediante transferencias— representa el medio de pago más usado, mientras que un tercio afirma que la moneda que más recibe es el dólar estadounidense —en efectivo o por transferencias electrónicas (Zelle)—.

Aunque la cantidad de bolívares en la economía (liquidez monetaria) equivale a alrededor de 500 millones de dólares, casi 99% menos que en 2011, los venezolanos siguen usando con más frecuencia los bolívares a través de medios electrónicos para pagar montos pequeños, que son los importes más recurrentes en las ventas. Esto se refiere a las compras de baja cuantía que no encuentran disponibilidad de cambio en divisas por lo bajo de los montos. Supongamos que nueve de los diez clientes de un bodegón compraron bienes por un total de 20 dólares, pero un cliente pagó 80 dólares

en una sola compra. La frecuencia de pagos en bolívares sería de 90%, pero el total de pagos en bolívares sería de apenas 20%. Las extremas dificultades para ofrecer vuelto para montos pequeños y lo «valiosos» que son los dólares de monto bajo (en mercados populares se venden dólares de baja denominación por encima de su valor nominal⁹) hace que la gente trate de atesorarlos al máximo y la impele a tratar de pagar en bolívares la mayor cantidad de montos posibles.

El proceso de «dolarización» es parte de una respuesta más amplia al estallido anárquico de una circulación multimoneda en la que brillan diversos medios de pago: desde el euro hasta un cartón de huevos o bolsas de café en grano. Se podría argumentar que el desastre monetario fue el resultado esperado de una devastadora hiperinflación que, a partir de octubre de 2017, pulverizó los registros históricos inflacionarios del continente americano y llegó a ser el tercer fenómeno de este tipo más extenso, luego de los registrados en Nicaragua y Grecia. Pero la severa caída de la cantidad de dinero en efectivo, principal medio de pago en las regiones, ocurrió mucho antes de la hiperinflación.

Muchos bodegones venden mercancías con precios de uno o dos dólares y esos productos son generalmente comprados en bolívares, mediante tarjetas de débito. Igualmente,

9. Guillermo D. Olmo: «Me dan un billete de us\$20 por 18 billetes de us\$1»: los problemas de encontrar cambio en dólares» en *BBC Mundo*, 7/4/2021.

en gran cantidad de compras los clientes «completan» pagos en bolívares. Muchas transacciones terminan en una sensación de molestia y pérdida, porque los consumidores tienen que adquirir mercancías adicionales, que no desean, para «completar» compras. También se da el caso contrario: muchos clientes no pueden comprar ciertos productos porque no hay formas de ofrecerles «vuelto». Este fenómeno ocurre también en otros establecimientos y contribuye a un sistema donde no solo los precios, sino también las posibilidades de hacer el pago, influyen en las decisiones de compra. Eso se puede considerar como una forma de «distorsión» en el mercado, que facilita la extracción de rentas extraordinarias y desfavorece a los consumidores.

Los bodegones, entonces, son una cara de la creciente dolarización y el uso de divisas mixtas con diversos impactos en la economía. Varias empresas de opinión pública han mostrado la dispersión geográfica del uso del dólar y otros medios de pago¹⁰. Estos estudios revelan que la penetración de monedas distintas al bolívar es mayor en las zonas fronterizas y los grandes centros urbanos. Comienzan además a registrarse pagos por medio de criptomonedas, cuya minería e intercambio han sido crecientemente

incentivados por el gobierno nacional¹¹. Las diferencias geográficas y la coexistencia de distintos mecanismos de pago dan cuenta de importantes retos para la economía venezolana. Por un lado, el permitido pero informal uso del dólar dificulta calcular el valor real de la economía y complica las formas de contabilidad de los negocios y del Estado, que está dejando de percibir ingresos por la vía de impuestos en divisas por la dificultad de armonizar una contabilidad que refleje ese ingreso. Asistimos entonces a una nueva capa de opacidad, que ya ha sido común en los últimos años en el sector público, pero que ahora se hace patente en el sector privado. Esta opacidad genera importantes desigualdades y profundiza la incapacidad estatal, que ha visto mermada su inversión social y capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

Los bodegones son una respuesta a la crisis económica y a la falta de confianza en la moneda nacional y la economía general. Con la apertura comercial que permitió la aparición de los bodegones, el gobierno nacional buscaba atender el problema de la escasez que afectó el mercado nacional durante años anteriores y llenar los anaqueles por la vía de importaciones puerta a puerta. En términos de las consecuencias monetarias de

10. Ahiana Figueroa: «Ecoanálítica: pagos con dólares en efectivo en comercios bajó de 80% a 51,4%» en *Tal Cual*, 3/8/2020.

11. A. Rosales: «Unveiling the Power behind Cryptocurrency Mining in Venezuela: A Fragile Energy Infrastructure and Precarious Labor» en *Energy Research & Social Science* vol. 79, 2021.

este modelo, es importante subrayar la pérdida de confianza en el bolívar.

Comercio desregulado: proteccionismo a la inversa

Debemos resaltar los efectos desiguales de la liberalización focalizada que ha llevado a cabo el gobierno nacional. La desigualdad no solo afecta a las trabajadoras y los trabajadores, sino también a comerciantes y empresarios. En este sentido, no todos los actores del sector privado tienen igual acceso a mecanismos de importación y financiamiento en divisas que permitan aprovechar las ventajas de la apertura comercial. En Venezuela persiste una endémica dificultad burocrática que se impone como barrera para hacer negocios; ello se refleja en múltiples procesos jurídicos para abrir un comercio, adquirir una licencia de expendio de licores, obtener permiso para importar alimentos, etc. Resulta evidente la necesidad de tener vínculos con autoridades gubernamentales que ofrezcan permisos, licencias y autorizaciones.

Esta condición de apertura arbitraria guarda paralelos con las reformas liberalizadoras que se llevaron a cabo en la antigua Unión Soviética en la década de 1990, así como en la

Federación Rusa en los años 2000¹². La emergencia del patrimonialismo capitalista ruso se caracteriza por mantener elevados costos de entrada para nuevos inversionistas, gran incertidumbre para el sector privado local y reglas arbitrarias con escasa transparencia y rendición de cuentas de las autoridades que las ejecutan¹³. En ese sentido, resalta la transferencia de activos públicos a nuevos oligarcas privados asociados con el gobierno¹⁴, así como la imposición de prácticas irregulares, tales como sobornos y coimas, que de forma inadvertida socavaron la autonomía del sector privado¹⁵.

Con la aparición de la pandemia de covid-19 en Venezuela, la arbitrariedad se ha insertado en inconsistentes políticas de cuarentenas y otras restricciones a la movilidad. En este sentido, los cierres forzosos de locales comerciales han operado de forma desigual, y así ciertos conglomerados privados tienen ventajas comerciales partiendo de las facilidades que les otorgan las autoridades. Quien no tenga conexión con las elites del poder parte con desventaja comercial.

En la política gubernamental de «llenado de anaqueles» con mercancías importadas, se han concretado eliminaciones de impuestos, aranceles y tributos a las mercancías importadas

12. Neil Robinson: «Russian Patrimonial Capitalism and the International Financial Crisis» en *Journal of Communist Studies and Transition Politics* vol. 27 N° 3-4, 2011.

13. N. Robinson: ob. cit.; Peter Rutland: «Neoliberalism and the Russian Transition» en *Review of International Political Economy* vol. 20 N° 2, 2013.

14. P. Rutland: ob. cit.

15. Alexandra Vasileva: «Trapped in Informality: The Big Role of Small Firms in Russia's Statist-Patrimonial Capitalism» en *New Political Economy* vol. 23 N° 3, 2018.

que entran a rivalizar con, y en muchos casos a desplazar a los productos de una famélica industria nacional que sí debe pagar una serie de tributos. Así las cosas, importaciones *door to door* (sin nacionalización) ingresan al bodegón sin los correspondientes pagos arancelarios, controles sanitarios y de calidad normalmente requeridos. Ello implica el ingreso de mercancías con «pronto vencimiento» o fecha de caducidad borrada, o en casos más graves, de productos que no pasan los controles de calidad en aduanas *exigentes*. A la sazón, esta política comercial termina siendo un proteccionismo a la inversa, al otorgar facilidades a la importación de mercancías terminadas de las que los industriales locales no gozan. La reciente reforma al Impuesto a las Transacciones Financieras, en marzo de 2022, que impone alícuotas que van desde 3% hasta 20% para pagos realizados en divisas y criptomonedas, parece tratar de frenar la dolarización, pero lo que hace es simplemente castigar a la producción interna, ya que esta pagaría ese tributo a lo largo de toda la cadena productiva, lo que la encarece más y la hace menos competitiva. La importación generalmente no paga ese impuesto por hacerse por fuera del mercado nacional, por lo cual tendría otra ventaja adicional, muy poderosa.

La escasa claridad en las normas y formas de regulación implica la sostenida arbitrariedad en el manejo de la economía en la etapa aperturista del gobierno

bolivariano. En este caso, el gobierno nacional ha otorgado facilidades de expansión comercial y productiva a nuevos grupos económicos cuya información de origen y transparencia de gestión lucen bastante limitadas.

Las ZEE o el boom del capitalismo precario

La ley que crea las ZEE es la «novedad» que el gobierno está discutiendo con más ahínco en la Asamblea Nacional. De este modo se pretende facilitar un marco legal para abrir varias zonas en las cuales se apliquen normativas especiales a las inversiones. Según los diputados oficialistas, las ZEE pueden contribuir al crecimiento y el desarrollo de un país que no tiene alternativas al «bloqueo». En teoría, el gobierno venezolano busca emular el modelo chino, estableciendo áreas de lo que coloquialmente llamaríamos «libre explotación de recursos humanos y naturales». El mayor ejemplo de éxito es, según sus proponentes, la zona de Shenzhen en China, originalmente una villa pesquera de 30.000 habitantes que fue convertida en ZEE en 1980. En realidad, Shenzhen funcionó como una región donde experimentar con políticas comerciales más flexibles, alejadas de la planeación central del gobierno chino. Pero las ZEE han fracasado en muchos países, quizás en la mitad de ellos¹⁶; por lo general se enfrentan a

16. Valeria Moy: «Zonas Económicas Especiales: ¿un paso hacia el desarrollo?» en *Foreign Affairs Latinoamérica*, 29/8/2016.

graves problemas de escasez de recursos, infraestructura y fuerza de trabajo capacitada. La gravísima crisis eléctrica venezolana, la escasez de agua potable, la caída en la distribución de gas y en la producción de combustibles se erigen como serios obstáculos para la instalación de las ZEE. Debido al bajo nivel de los salarios, ha habido un fuerte éxodo de fuerza de trabajo cualificada; por ende, los procesos industriales o incluso de manufactura simple pueden enfrentarse con una severa escasez de mano de obra. Crear ZEE en diversos sitios del país puede empeorar gravemente el servicio de energía eléctrica, que presenta graves fallas en el suministro y que en el pasado reciente ha llegado a colapsar casi totalmente¹⁷. Familias que sufren de severos racionamientos eléctricos pueden ver acrecentadas las horas en las cuales no reciben el servicio. Lo mismo podría decirse del agua, el gas y la gasolina.

Los beneficios de las ZEE parecen ser más que dudosos. Dada la amplia competencia mundial de ZEE en actual creación y la muy profunda inseguridad política y jurídica general en Venezuela para la inversión (además de las sanciones), sería preciso ofrecer condiciones exageradamente ventajosas a la inversión tanto nacional como internacional. Entre las prerrogativas ofrecidas por la ley, figuran amplias exenciones en los tributos a cancelar por concepto de aranceles a la importación (ventaja de la que gozan en la

actualidad los bodegones, microformas de ZEE urbanas), impuestos cero o de un dígito en la exportación e importantes descuentos en los impuestos sobre la renta. Por ende, los milagrosos beneficios fiscales no parecen estar ni cerca de un erario público que con extrema urgencia requiere de recursos líquidos. Otro asunto menospreciado es el impacto que las zonas intensivas en manufacturas generan sobre el medio ambiente y la escasez de recursos naturales (privatizados en la ZEE). Teniendo como antecedente el lamentable *ecocidio* que acontece en el Arco Minero del Orinoco (una *precursora* de las ZEE) y los penosos desastres sociales, replicar ese modelo en más áreas sería funesto. Por la experiencia reciente, el gobierno actual no tiene ninguna fuerza de control real sobre este tipo de actividades, por lo que su desarrollo podría ser aún más voraz en la destrucción ambiental y social.

Las ZEE parecen ser la continuidad del modelo de acumulación de capital «bodegonero», es decir, concentrado en elites muy alejadas de las necesidades básicas de desarrollo más importantes para la nación. Con esto nos referimos a la predilección por la importación de bienes terminados, lo que atenta contra la recuperación de la industria local, y al enfoque en los sectores más pudientes como cliente objetivo a satisfacer, lo que deja de lado a la inmensa mayoría de la población que percibe ingresos muy bajos. Las

17. M. Sutherland: «Venezuela y el colapso eléctrico. ¿Corrupción, impericia o sabotaje imperial?» en *Nueva Sociedad* edición digital, 4/2019, <www.nuso.org>.

ZEE parecen ser la extensión «bodegonera» por el lado de las exportaciones, o sea, desarrollar áreas geográficas costeras para la producción de mercancías manufacturadas para la exportación, sin tener en cuenta las necesidades de consumo de un mercado interno extremadamente deteriorado. Se trataría de la reedición del modelo de economía de enclave en el siglo XXI. Por ende, todo parece indicar que el capitalismo «bodegonero» no requiere, ni promueve, los más mínimos esfuerzos por desarrollar los bienes públicos sociales inherentes al desarrollo *clásico* de la acumulación de capital. Desde esta perspectiva, este modelo de acumulación no necesitaría desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad, ni impulsar la educación técnica, ni la expansión de la investigación; mucho menos crear las condiciones necesarias para tal desarrollo.

La propuesta de expansión de formas de experimentación de apertura económica como las ZEE se relaciona con la experiencia de los bodegones en varios sentidos. En primer lugar, reafirma el interés de generar nichos de mercado con reglas excepcionales que promueven ventajas para ciertos grupos económicos por sobre el resto de la población. Los sectores importadores y extractivos tienden a ser los beneficiados. En segundo lugar, la experiencia de los bodegones revela la profundización de la desigualdad salarial. En tercer lugar, la opacidad en la toma de decisiones, así como la falta de transparencia y de rendición de cuentas, implica retos fundamentales

para la contabilidad nacional y para la recaudación de impuestos que puedan eventualmente traducirse en inversión social para la ciudadanía. Todo ello sugiere la importancia de generar acuerdos políticos y sociales que puedan retomar el Estado de derecho y alcanzar conquistas sociales características de otras épocas de la historia venezolana.

Por la monumental crisis que atraviesa Venezuela, se necesita con urgencia de una serie de cambios estructurales. Si bien los cambios basados en procesos de apertura y flexibilización económica, mas no política, de algunas leyes y normativas que trababan el proceso nacional de acumulación de capital son definitivamente «progresivos», lucen insuficientes. En una economía que probablemente ha perdido alrededor de 80% del PIB en los últimos ocho años, un crecimiento de 5% en un año apenas recuperaría un minúsculo 1% del tamaño que la economía tenía en 2013. Por ende, los cambios que se han producido hasta ahora no parecen ser suficientes para la magnitud de la crisis. Así las cosas, la «bodegonización», si cabe el término, de la economía en su conjunto, es decir, un incremento fuerte de sectores que importan y revenden mercancías a altos precios para consumidores de elevados ingresos en una diversa gama de bienes y servicios, no va a tener un impacto relevante en el proceso de recuperación. Por tanto, la «bodegonización» acompañada de leyes y normativas que la impulsen podría ser «progresiva», en el mejor de los casos,

pero sería apenas una minúscula pieza en el gigantesco esfuerzo necesario para la reconstrucción económica y social del país. Al mismo tiempo, este tipo de apertura comercial está generando consecuencias importantes en términos de desigualdad que afectan tanto a trabajadores como a consumidores y productores nacionales.

El auge de una especie de «variantes de bodegones» dedicados a la venta de electrodomésticos, vehículos importados, cafeterías con café importado, restaurantes de lujo con ingredientes «exóticos» y megabodegones es visto por algunos sectores con agrado y como una señal de recuperación, pero, como se ha dicho anteriormente, esta sensación no siempre se ve acompañada de la activación del aparato productivo. El país necesita reconstruir sus ámbitos de creación y agregación de valor, desarrollar sus fuerzas productivas y satisfacer las necesidades de su población. En la «bodegonización» surgen empresas que escasamente agregan valor y que solo revenden mercancías importadas que, en muchos casos, podrían fabricarse en Venezuela si hubiera mejores condiciones para la inversión productiva a mediano y largo plazo. Es evidente que es más barato y eficiente importar la materia prima para elaborar cervezas o pastas que importar los productos terminados en latas o sobres. Es comprensible que la importación masiva de bienes terminados que antes se producían en el país haya sido una respuesta a la crisis de abastecimiento de 2016 y 2017 y una lucrativa oportunidad de

negocio. Sin embargo, es ineficaz basar el modelo de desarrollo económico, o tan siquiera la recuperación del PIB, en esta política de emergencia sin capacidades reales de impulso económico sostenible.

La burbuja bodegonera está muy limitada a la captación de clientes de poder adquisitivo medio y alto, que en buena parte reciben remesas de la diáspora venezolana en el mundo y ostensiblemente estarían conectados con negocios productivos de índole transnacional. Así las cosas, cada vez hay más competencia por estos clientes debido a la irrupción de más bodegones, y el poder dinamizador de su demanda solvente se está viendo cada vez más disminuido. Teniendo productos prácticamente idénticos, los bodegones parecen estar vendiendo mucho menos que antes, y sus productos parecen permanecer tiempos muy prolongados en el anaquel, lo que se acentúa con la apertura de nuevos locales. En resumen, el crecimiento basado en la «bodegonización» parece estar enfrentando un declive, y paulatinamente revela lo oneroso, poco productivo y eficaz de sus negocios. Esto se traduce en mermas del poder adquisitivo, ya que los consumidores deben comprar productos que podrían fabricarse de manera más económica dentro de Venezuela, con la consiguiente creación de empleos de calidad que eso podría conllevar. Es decir, la «bodegonización» es una estrategia que tiene piernas cortas.

La experimentación económica *ad hoc* no solo es insuficiente, sino que

puede generar perversas dinámicas de opacidad y nuevas desigualdades. Por ello, cambios en el ámbito político, social, económico y jurídico deben ir de la mano de posibles aperturas productivas o comerciales. Ni la expansión bodegonera hacia el sector hotelero y de electrodomésticos, por ejemplo, ni las muy acotadas ZEE pueden ser las únicas respuestas para salir de una

crisis de tan grande magnitud. El diálogo social, el acuerdo nacional y el desarrollo científico y técnico de las fuerzas productivas en concordancia con el respeto al medio ambiente son aspectos necesarios, aunque no aparecen en las propuestas oficiales para la recuperación económica y social de un país que aspira a ver la luz al final del túnel. ☒

PÁGINAS

Marzo de 2022
Lima
Nº 265

ACTUALIDAD: La mancha del aprendizaje, **Susana Cárdenas Alayza**. REFLEXIÓN: Sinodalidad y movimientos populares, **Felipe Zegarra**. «Gritos y clamores que sean nuestros». Ecología integral en clave liberadora, **Silvia Cáceres Frisancho**. Integralidad cristiana como humanización. Desarrollo humano integral, **Javier M. Iguíñiz Echeverría**. Entre lo diverso y lo universal. Cultura, inculcación e interculturalidad, **Juan Ansion**. Diversidad religiosa y nación en perspectiva histórica, **Juan Fonseca**. La filosofía y el cautiverio de las ideologías. Reflexiones sobre la actitud crítica en la vida pública, **Gonzalo Gamio Gehri**. NOTA: Beatifican a Rutilio Grande y otros tres mártires en El Salvador. TESTIMONIOS: Octavio Ortiz Arrieta, el obispo «pecadito», **Gerardo Hanlon**. INFORME: Dos informes cruciales para el futuro de la humanidad, **Carmen Lora**. DOCUMENTOS: Cuando los impuestos son justos, son para el bien común, **Papa Francisco**. Comunicado ante la opinión pública. Ante los recientes cambios en el Consejo de Ministros, **CONFER**.

Edita y distribuye Centro de Estudios y Publicaciones, Belisario Flores 681 – Lince, Lima 14, Perú. Tel.: (511) 4336453 – Fax: (511) 4331078. Correo electrónico: <paginas@revistapaginas.com.pe>. Página web: <www.revistapaginas.com.pe>.

Europa del Este: los sueños extraviados de los liberales del 89

Pavel Barša

El giro «iliberal» en Europa central y oriental ha puesto fin a las esperanzas liberales de la Posguerra Fría. Tres libros recientes tratan de explicar cómo fue posible que, en menos de tres décadas, la historia se haya topado con nuevas formas de autoritarismo. Pero las tesis del totalitarismo, ya sean progresistas o conservadoras, son incapaces de comprender las tendencias endógenas del autoritarismo en estos países (y también la deriva de los Estados Unidos de Donald Trump).

La era de la hegemonía liberal occidental abierta por las revoluciones de Europa del Este en 1989 ha llegado a su fin. Muchos observadores participantes de esas revoluciones se han preguntado por qué un milenio liberal que se suponía iba a durar para siempre llegó a su

fin después de 25 años, para dar paso a líderes neonacionalistas y autoritarios en todo el mundo. Tres libros recientes representan la primera ronda de debate sobre el tema: *El camino hacia la no libertad*, de Timothy Snyder (2018)¹, *La luz que se apaga*, de Ivan Krastev y

Pavel Barša: en 1995 obtuvo un máster en Ciencias Políticas en la Universidad Centroeuropea de Budapest, un baluarte de la occidentalización intelectual de la región. Desde 2002 enseña Teoría Social y Política en la Universidad Carolina de Praga. En 1988 firmó el manifiesto «Democracia para todos», que se convirtió en base del programa de transición del Foro Cívico Checo en 1989-1990. Hasta 1992, fue miembro activo del Movimiento Cívico, un partido que codirigió los dos primeros años de la transición y reivindicaba el legado de lo que sus miembros consideraban el «espíritu original» del Foro Cívico, asociado a Václav Havel.

Palabras claves: 1989, antitotalitarismo, comunismo, iliberalismo, Europa del Este.

Nota: una primera versión de este artículo fue publicada en inglés en *Taxi Magazine*, 1/2022, con el título «The 89-ers Respond to the Collapse of Their Dreams». Traducción: Rodrigo Sebastián.

1. T. Snyder: *The Road To Unfreedom: Russia, Europe, America*, Tim Duggan Books, Nueva York, 2018; edición en español: *El camino hacia la no libertad*, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2018.

Stephen Holmes (2019)², y *El ocaso de la democracia*, de Anne Applebaum (2020)³. Todos estos autores sitúan a Europa central y oriental en el centro de su análisis, observando el ascenso y el giro a la derecha de Viktor Orbán y Fidesz en Hungría y del partido Ley y Justicia (PiS) en Polonia, y se preguntan por qué los valores que parecían ascendentes en el Occidente democrático liberal fueron desplazados tan rápidamente por el nacional-conservadurismo, el antisemitismo, la xenofobia y el autoritarismo. ¿Qué fue lo que desvió de su rumbo a Europa central y oriental y luego al resto de Occidente?

I. Applebaum y Snyder representan respectivamente las alas de centroderecha y centroizquierda de un consenso antitotalitario posterior a 1989 en el que la mayor amenaza para la democracia no es una ideología en particular sino el propio totalitarismo. Applebaum es una observadora y una participante de la transición de Europa central y oriental que se casó con el periodista y político polaco anticomunista de derecha Radosław Sikorski y se mudó a Polonia. Snyder, historiador y analista muy involucrado en el quehacer político de la región, ha actualizado para la Posguerra Fría la perspectiva

de los grandes pensadores liberales de la Guerra Fría, figuras como Tony Judt y Timothy Garton Ash. Snyder procede de la izquierda estadounidense y, en general, se ha opuesto a los neoconservadores como Applebaum en cuestiones como la invasión de Iraq en 2003. Pero, en lo que respecta a la relación de Occidente con Europa central y oriental, no ha habido ningún desacuerdo significativo entre ambos. Tanto Applebaum como Snyder creen en la oposición maniquea entre democracia liberal y dictaduras fascistas o comunistas, y esta oposición define tanto sus escritos historiográficos como su visión de la política contemporánea.

El núcleo de su tesis antitotalitaria puede expresarse del siguiente modo: mientras que los crímenes políticos de las democracias occidentales no pueden compararse con los crímenes cometidos por los nazis o los comunistas, los crímenes de esos dos movimientos no solo pueden, sino que deben compararse entre sí y ponerse en el mismo plano moral si queremos entender su naturaleza. Como dejan en claro el subtítulo y la arquitectura interna de la obra maestra de Snyder, *Tierras de sangre. Europa entre Hitler y Stalin* (2010)⁴, existe una simetría moral entre los crímenes cometidos por los imperios de Hitler y Stalin.

2. I. Krastev y S. Holmes: *The Light That Failed: A Reckoning*, Penguin, Nueva York, 2019; edición en español: *La luz que se apaga. Cómo Occidente ganó la Guerra Fría pero perdió la paz*, Debate, Barcelona, 2019.

3. A. Applebaum: *Twilight of Democracy: The Failure of Politics and the Parting of Friends*, Allen Lane, Londres, 2020; edición en español: *El ocaso de la democracia. La seducción del autoritarismo*, Debate, Barcelona, 2021.

4. T. Snyder: *Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin's Empire*, Basic Books, Nueva York, 2010; edición en español: *Tierras de sangre. Europa entre Hitler y Stalin*, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2021.

Applebaum invoca una moral similar en sus libros *Gulag. Historia de los campos de concentración soviéticos* (2003), *El telón de acero. La destrucción de Europa del Este 1944-1956* (2012), y *Hambruna roja. La guerra de Stalin contra Ucrania* (2017)⁵.

Tierras de sangre, de Snyder, demuestra la utilidad de este enfoque para la historia de la Europa central y oriental de las décadas de 1930 y 1940, pero también sus límites. Por muy productivo que sea, desde el punto de vista heurístico, describir las sociedades de esa región como atrapadas en una lucha titánica entre dos imperios totalitarios, ese enfoque tiene sus costos. Las atrocidades y masacres ocurridas durante esas dos décadas tienden a atribuirse exclusivamente a los dos regímenes y a sus respectivos líderes. La participación de actores locales es considerada como una simple colaboración con los ocupantes, mientras que se dejan de lado sus motivaciones ideológicas endógenas. A pesar de que Snyder relata con honestidad la colaboración local en las masacres perpetradas por ambos invasores, su marco general enfrenta a naciones más o menos «buenas» —que serían inofensivas si se las dejara vivir en paz en sus propios territorios— con dos imperios «malvados» que transformaron literalmente la región en «tierras de sangre».

Snyder matiza este maniqueísmo en *El camino hacia la no libertad* afirmando que la restauración de la soberanía de las naciones semiperiféricas de Europa central y oriental posterior a 1989 trajo inestabilidad y violencia nacionalista, y que por tanto solo su integración en una estructura supranacional como la Unión Europea puede garantizar la justicia y la libertad. Este cambio, sin embargo, lo empuja aún más hacia una explicación exógena del auge del autoritarismo en Europa central y oriental. Según Snyder, no son los elementos ideológicos subyacentes a los regímenes conservadores húngaros y polacos de preguerra, sino «agentes rusos» como Antoni Macierewicz los que han permitido el éxito de Orbán y Jarosław Kaczyński. Por lo tanto, el Kremlin es, una vez más, el que desestabiliza la región en la década de 2010, tal como lo había hecho en las décadas de 1930 y 1940, como si el PIS y Fidesz no estuvieran reutilizando y actualizando los mismos tropos nacional-conservadores locales anteriores a las ocupaciones nazi y soviética.

Mientras que Snyder ve a los agentes rusos como la causa externa, Applebaum identifica una psicología aberrante que se remonta al periodo de dominación extranjera: la «mentalidad autoritaria» fue lo que llevó a muchas personas en Hungría y Polonia a desertar del

5. A. Applebaum: *Gulag: A History*, Anchor, Nueva York, 2003, edición en español: *Gulag. Historia de los campos de concentración soviéticos*, Debate, Barcelona, 2021; *Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe, 1944-1955*, Anchor, Nueva York, edición en español: *El telón de acero. La destrucción de Europa del Este 1944-1956*, Debate, Barcelona, 2014; y *Red Famine: Stalin's War on Ukraine*, Doubleday, Nueva York, 2017, edición en español: *Hambruna roja. La guerra de Stalin contra Ucrania*, Debate, Barcelona, 2019.

proyecto democrático liberal posterior a 1989. Dado que Applebaum afirma pertenecer a la derecha polaca, es aún más difícil para ella reconocer que el giro autoritario en Polonia, en la década de 2010, tuvo algo que ver con la tradición política polaca de preguerra a la que esta derecha se mantiene leal. En efecto, la perspectiva antitotalitaria desconoce las fuentes ideológicas internas del autoritarismo, la xenofobia y el antipluralismo en las sociedades de Europa central y oriental, y solo señala pérfidas influencias externas. Dado que la derecha nacionalista endógena no fue la principal culpable de las catástrofes de los años 1930 y 1940, no puede ser la principal culpable del giro autoritario de la década de 2010.

Las obras históricas de Snyder y Applebaum encarnan un marco antitotalitario que adquirió un estatus más o menos hegemónico en las sociedades de Europa central y oriental en la década de 1990. Su predominio en la política de la memoria tuvo importantes efectos prácticos en la política *tout court* de esa década. Al centrarse en las formas más extremas del antisemitismo y el autoritarismo de entreguerras fuera de Europa central y oriental, los partidarios de este enfoque pudieron rehabilitar los regímenes nacional-conservadores de esta época, al tiempo que guardaban silencio sobre su lado oscuro: la xenofobia y el antisemitismo. Sin embargo, si observamos las décadas de entreguerras en Polonia y Hungría sin ojeras antitotalitarias, podemos ver claramente que no fueron ni los fascistas locales ni los usurpadores extranjeros y sus colaboradores nacionales,

sino las fuerzas nacional-conservadoras, las responsables ideológicas del carácter autoritario y antisemita de la II República polaca y del régimen de Miklós Horthy en Hungría en los últimos años antes de la Segunda Guerra Mundial. No es de extrañar que Kaczyński y Orbán, al resucitar el legado de esos regímenes, estén seducidos por el autoritarismo y dispuestos a jugar la carta antisemita.

II. Inmediatamente después de 1989, los nuevos nacional-conservadores tuvieron que llegar a un compromiso con el liberalismo cosmopolita y soportar el ascenso ideológico de este último. Solo después de que esas dos corrientes ideológicas —que a veces operaban juntas en un solo partido político o incluso a través de una sola persona— terminaran su tarea de transición poscomunista, formalmente consagrada por la adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a la UE, pudieron seguir sus propios caminos en busca de otros proyectos. Esta divergencia se produjo en Polonia y Hungría durante la década de 2000, y en la mayoría de los demás países de Europa central y oriental, en la década de 2010. Liberados de la tutela del globalismo liberal, los nacional-conservadores encontraron su propia voz. Sus puntos de vista más extremos, que habían sido silenciados o marginados durante la primera década poscomunista, pudieron finalmente pasar al primer plano.

Esto causó una conmoción, especialmente en Occidente, ya que los observadores occidentales no solían profundizar en sus análisis sobre el

consenso poscomunista y se conformaban con escuchar lo que querían oír. La sensación de que hubo un giro radical se debe a una ilusión óptica. Los observadores externos contemplaban la fachada liberal-globalista de los nuevos regímenes de Europa central y oriental, pero no se daban cuenta de que solo veían una cara del consenso liberal-conservador que había respaldado la transición.

La sorpresa y la exasperación podrían haber sido menores si los observadores hubieran tenido en cuenta el poder ideológico del paradigma antitotalitario que forjó la memoria y la política en la década de 1990. Este paradigma le dio rienda suelta a la derecha centroeuropea en reconstrucción. Esta no tuvo que arrepentirse de sus pecados antisemitas y autoritarios de preguerra, ya que palidecían en comparación con los crímenes nazis y comunistas. La derecha de los países de Europa central y oriental aprovechó plenamente esta ventaja en el momento de la ruptura del consenso poscomunista en las décadas de 2000 y 2010.

Ni Snyder ni Applebaum son capaces de comprender el importante papel político que desempeñó la premisa de la equivalencia moral entre el comunismo y el nazismo como catalizador de la ofensiva nacional-conservadora en las sociedades de Europa central y oriental. Tampoco pueden ver el papel crucial que desempeñó la «cuestión judía» en este proceso. Dado que la derecha nacionalista de esos países siempre había asociado (o identificado directamente, en el caso de su ala extrema) a los

comunistas con los judíos, pudo explicar los crímenes de sus naciones contra los judíos no solo culpando de ellos a los colaboradores pronazis, sino también, en parte, presentando esos crímenes como una respuesta no del todo ilegítima al enemigo judeo-bolchevique que era —como afirma la premisa de la equivalencia moral— tan inhumano como los nazis. De acuerdo con esta premisa, la idea de la singularidad e incomparabilidad del Holocausto fue atacada en los años 1990 y 2000 por las nuevas elites poscomunistas, que comenzaron a reclamar el mismo estatus para los crímenes comunistas. *Gulag y Hambruna roja*, de Applebaum, y *Tierras de sangre*, de Snyder, se convirtieron en *bestsellers* instantáneos en Europa central y oriental precisamente porque sintonizaban con este proyecto.

Cuando se completó la transición poscomunista en la década de 2000 y los nacional-conservadores pusieron fin a su alianza con los liberales, comenzaron a promover opiniones xenófobas y racistas sin temor a ser estigmatizados como extremistas. El escudo del paradigma antitotalitario los protegía de esa posibilidad. Por un lado, el sufrimiento de los miembros de sus naciones a manos de los comunistas recibió el mismo estatus moral que el sufrimiento de los judíos en el Holocausto. Por otro lado, el propio sufrimiento del Holocausto se atribuyó integralmente a los nazis, mientras que se minimizaba la importancia del antisemitismo de los Estados de la región antes de la guerra y la participación de algunos de sus ciudadanos en este genocidio.

La conexión entre la agenda nacional-conservadora y el paradigma antitotalitario estalló en 2018 en el conflicto diplomático entre Polonia e Israel sobre un proyecto de ley por el cual el Parlamento polaco buscaba criminalizar cualquier acusación de colaboración polaca con los crímenes contra la humanidad durante la guerra. Es difícil tomar en serio la indignación y la sorpresa de Applebaum ante esta ley, porque los intentos nacionalistas por revisar la historia de la Segunda Guerra Mundial no fueron una innovación del gobierno del *pis* en 2015. Estos intentos habían comenzado bajo el gobierno del mismo partido en 2005 en el que su marido fue ministro de Defensa, e incluso ya en 1999, cuando él, como viceministro de Asuntos Exteriores, inició las protestas oficiales del gobierno polaco contra el uso de la expresión «campo de concentración polaco». Mientras el presidente socialdemócrata Aleksander Kwasniewski (antiguo miembro del Partido Comunista) reconocía oficialmente los crímenes de algunos polacos contra los judíos durante la guerra y pedía perdón durante la conmemoración del 60º aniversario de la masacre de Jedwabne el 10 de julio de 2001, la nueva *polityka historyczna* (política de la memoria histórica) del gobierno anti-comunista del *pis* quiso invertir el proceso de contrición y reconciliación. Bajo la dirección de Janusz Kurtyka, el nuevo responsable del Instituto de la Memoria Nacional nombrado por el gobierno del *pis* en 2005, los «verdaderos» polacos debían ser exculpados de cualquier mal que les hubiera ocurrido a los judíos

durante la guerra, y los dos grupos debían permanecer distintos en tanto pertenecían a dos identidades nacionales diferentes. Esto no excluía las buenas relaciones con Israel como Estado judío, al que habían emigrado los «verdaderos judíos» sobrevivientes (es decir, los que concebían su judaísmo como una identidad nacional que debía diferenciarse de la polaca y de otras identidades nacionales). Después de todo, ¿no era el apoyo a la emigración judía a Palestina una política oficial del último gobierno polaco «libre» antes de la ocupación nazi y soviética?

Mientras que en el contexto polaco la tesis de la equivalencia es por lo menos comprensible, dados acontecimientos históricos como el pacto Molotov-Ribbentrop y los posteriores intentos de ambos imperios de destruir la nación polaca, en el contexto húngaro solo puede funcionar si omitimos dos hechos importantes. En primer lugar, lejos de ser una víctima de la expansión de la Alemania nazi hacia el este como Polonia, Hungría (al igual que Eslovaquia, Croacia y Rumania) ganó independencia nominal, territorio o ambas cosas al unirse al Eje. En segundo lugar, el asesinato de más de medio millón de civiles judío-húngaros tras la ocupación de Hungría por el ejército alemán no es comparable a los crímenes que los comunistas cometieron durante la ocupación soviética de Hungría. Negar o desconocer la importancia de esos dos hechos no es una cuestión de interpretación, sino claramente una expresión de nacionalismo étnico húngaro, cuando no de antisemitismo.

Applebaum no parece percibirlo. Ella está tan cegada por el paradigma antitotalitario que alaba el museo de la Casa del Terror de Budapest, concebido y dirigido por Mária Schmidt, precisamente por su tratamiento simétrico de los crímenes de la Cruz Flechada (el partido fascista húngaro) y los de los comunistas. Se trataría en ambos casos de colaboradores de dos «imperios del mal» que invadieron el territorio del país y aterrizaron a la sociedad húngara. A Applebaum se le escapa por completo la función claramente ideológica de la exposición permanente de ese museo: al centrarse en los crímenes contra la humanidad cometidos en territorio húngaro por estos dos grupos, Schmidt barrió debajo de la alfombra el antisemitismo del régimen de Horthy que preparó el terreno para la colaboración lisa y llana de muchos húngaros en la deportación de judíos húngaros que tuvo lugar entre marzo de 1944, cuando Hungría fue ocupada por Alemania, y octubre de 1944, cuando los alemanes entregaron el control del gobierno húngaro a la Cruz Flechada.

Al trasladar el foco de atención del *contenido* de un proyecto político a la *forma* de su promoción o al modo en que gobierna la sociedad, el marco antitotalitario relativiza no solo la diferencia entre la extrema derecha y la extrema izquierda, sino las diferencias ideológicas en general. Construye la imagen de un abismo entre una sociedad buena—pacífica y pluralista— y los malvados totalitarios que la aplastan con violencia. Independientemente de las dinámicas ideológicas *internas* que la extrema

izquierda y la extrema derecha afirman representar dentro de una sociedad determinada, se presume que esa ideología fue impuesta por la fuerza *desde afuera*. En otras palabras, los movimientos totalitarios son siempre *externos* a las sociedades que intentan gobernar. En este sentido, siempre se los presenta como «foráneos», y a sus partidarios, como «colaboradores». Este marco implica que las cosas moralmente reprochables que ocurren en un determinado territorio nacional bajo su dominio no pueden atribuirse a la nación ni a ninguno de sus leales patriotas, sino exclusivamente a los usurpadores extranjeros y a sus agentes locales.

La aplicación de la tesis de la equivalencia a la relación entre la extrema izquierda y la extrema derecha desempeña un papel importante en las interpretaciones de Snyder y Applebaum sobre el autoritarismo de la década de 2010. Consideran que estos movimientos son un retorno del mal totalitario que combina elementos de ambos polos políticos. En *Camino hacia la no libertad*, Snyder describe el régimen de Vladimir Putin como una mezcla de elementos de extrema derecha y de extrema izquierda; en *El ocaso de la democracia*, Applebaum encuentra la misma mezcla en el trumpismo y en los movimientos europeos antiliberales de la última década. Applebaum los trata a todos indistintamente como autoritarios, sin importar qué ideas específicas promuevan y qué estructura organizativa posean. Así, agrupa bajo un mismo paraguas a Nigel Farage y a Jeremy Corbyn, a Podemos y a Vox, a Alexis Tsipras y

a Marine Le Pen, a Jean-Luc Mélenchon y a Matteo Salvini. Este sistema de equivalencias entre la izquierda y la derecha oculta los aspectos antiautoritarios y no violentos de la primera, que están ausentes en la segunda, por no hablar de la diferencia entre el universalismo moral que motiva a la extrema izquierda y el particularismo racista que alimenta a la extrema derecha.

La misma confusión entre racistas y antirracistas, nacionalistas y antinacionalistas, se encuentra en la descripción que hace Applebaum de Trump como heredero tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda estadounidenses. Los intentos de Applebaum de convertir a Trump en un exponente tanto de los nacionalistas blancos como de los antirracistas de izquierda no tienen ningún asidero en la realidad. Es cierto que, como es sabido, Trump reaccionó al enfrentamiento de esos dos bandos en Charlottesville en el verano de 2017 diciendo que «hay gente buena en ambos lados». Sin embargo, si tenemos en cuenta el hecho de que los valores antirracistas se han convertido, al menos en principio, en parte del *mainstream* ideológico estadounidense, mientras que la retórica de la supremacía blanca está fuera de sus límites, la declaración de Trump no expresó en realidad una posición neutral entre ambos movimientos, sino un claro apoyo a los nacionalistas blancos contra sus oponentes de izquierda. A partir de entonces, Trump nunca dejó de afirmar su apoyo a la extrema derecha. Sin embargo, hay una lógica más profunda en la aplicación de Applebaum de la tesis de la equivalencia

a la actual situación estadounidense. La (con)confusión de la extrema derecha con la extrema izquierda le permite describir a Trump no como representante de un tipo de nacionalismo estadounidense nativista y particularista, sino como alguien con una agenda antiestadounidense. También arroja luz, de manera involuntaria, sobre su propia posición: no lo ataca desde un punto de vista algo desencarnado o trascendental, sino desde la perspectiva de otro nacionalismo estadounidense, en este caso de tipo universalista y mesiánico.

III. Si consideramos que el globalismo liberal liderado por EEUU, más que un ideario supuestamente excepcional y universalista, es una ideología entre muchas otras, podríamos preguntarnos también por qué Europa central y oriental siguió este camino ideológico específico. Ivan Krastev y Stephen Holmes abordan esta cuestión en *La luz que se apaga*, donde describen la transición posterior a 1989 de Europa central y oriental como una especie de colonización cultural voluntaria, que caracterizan como «imitación». Si el giro hacia Occidente fue un proceso de colonización, entonces Snyder y Applebaum (y Holmes, para el caso) pertenecerían a los colonizadores, mientras que el búlgaro Krastev sería uno de los colonizados. Snyder y Applebaum son los hijos nativos de Occidente; Krastev se ha convertido en su hijo adoptivo.

A pesar de ser él mismo un exitoso caso de asimilación individual al Occidente colonizador, Krastev considera que la reacción nacional-conservadora

en Europa central y oriental refleja el fracaso de esta asimilación en el nivel colectivo. Él y su coautor explican este fracaso sacando a relucir su contradicción interna. Aunque no hacen referencia a *Modernidad y ambivalencia* de Zygmunt Bauman⁶, es en este libro donde está descrita la manifestación más evidente de esta contradicción, ilustrada con el ejemplo de la emancipación de los judíos en el siglo XIX. En pocas palabras, la asimilación promete la igualdad de los imitadores con los imitados, pero en realidad no hace más que confirmar su continua desigualdad. Por muy generoso que sea el imitado (o no), este proceso produce inevitablemente humillación y resentimiento entre los imitadores. Una vez que se dan cuenta de que la prometida superación de su diferencia estigmatizante se pospone indefinidamente y que seguirán siendo para siempre inferiores a los imitados, algunos de los imitadores deciden invertir su elección y reafirmar su identidad particular. Pensemos en Theodor Herzl y otros «sionistas post-asimilacionistas», como los bautizó Kurt Blumenfeld.

El principal ejemplo de Krastev y Holmes de cómo este mecanismo psicológico se desarrolló en el contexto poscomunista es la conversión del liberalismo cosmopolita del joven Orbán en un nacionalismo étnico húngaro. Según los autores, Orbán experimentó una doble humillación: como ciudadano nacido en la periferia rural húngara, tuvo que enfrentarse a la condescendencia de la elite cosmopolita de Budapest, y como

político húngaro, tuvo que enfrentarse a la condescendencia de la elite de las capitales occidentales. Su respuesta a esta doble humillación consistió en reivindicar su condición de húngaro y defender el particularismo étnico y nacional frente a una ideología supuestamente universalista que lo seguía marginando.

A veces, Applebaum también aplica esta lente poscolonial, pero claramente no le otorga el estatus de explicación más general del fracaso de la transición poscomunista que reivindican Krastev y Holmes. Dos razones pueden explicar esta diferencia. Por un lado, Applebaum asimila estos giros hacia el etnonacionalismo en Europa central y oriental a otros virajes antiliberales de conocidos suyos de la década de 1990 y principios de 2000. Algunos de ellos eran destacados ex-disidentes de Europa central y oriental, pero muchos procedían de los círculos conservadores *tories* de Londres (Simon Heffer, Roger Scruton) o de los círculos neoconservadores de Nueva York (Laura Ingraham) o Madrid (Rafael Bardají). Si les puede pasar lo mismo, en términos de involución ideológica, a intelectuales y políticos occidentales que a sus homólogos de Europa oriental, entonces seguramente la explicación poscolonial de Krastev y Holmes puede solo tener una validez limitada.

La segunda razón por la que Applebaum no comparte la visión de Krastev es que ella defendió una posición opuesta a la suya durante los primeros 20 años de la transición poscomunista. Como parte del ala idealista de los

6. Anthropos, Barcelona, 2005.

neoconservadores, identificó el momento unipolar con la difusión global de los derechos humanos y la democracia. Sin embargo, dado que considera a EEUU como la encarnación directa de esos valores universalistas, la analogía de Krastev entre la occidentalización de Europa central y oriental posterior a 1989 y la colonización cultural no le resulta convincente. Esa comparación solo sería apropiada si Occidente fuera solo una cultura o civilización particular entre otras y no una encarnación de valores universales.

La razón por la que Applebaum no se siente una imperialista cultural queda clara si recordamos una idea compartida por muchos observadores europeos y expresada de manera contundente por G.K. Chesterton: para sus ciudadanos más leales, EEUU no es una nación, sino una religión. No es un Estado territorial concreto que proyecta su poder fuera de sus fronteras (una «gran potencia»), sino una iglesia que difunde su credo universal. Su hegemonía cultural, por lo tanto, no surge a través de la colonización sino del proselitismo: la aceptación del credo, de sus normas y de la correspondiente forma de vida transforma directamente al prosélito en un hombre universal, en una *imago Dei*, no en alguien asimilado a la cultura de otra nación particular.

En su reseña del libro de Applebaum⁷, Krastev afirma que ella no tiene realmente en cuenta lo mucho que sus antiguos amigos de Europa central y oriental que sufrieron un giro nacional-conservador resienten a personas como

ella. Según él, no podrá medir la profundidad de este resentimiento hasta que no abandone su ingenua concepción universalista de EEUU y Occidente y los vea, en cambio, como entidades culturales particulares que ejercen un control y una influencia política, militar y económica sobre regiones no occidentales del mundo. Solo si admitiera que los occidentales como ella no son miembros de la iglesia universal de los derechos humanos y la democracia, sino miembros de la nación más rica y poderosa de la tierra –que hasta hace poco se sentía con derecho a dominar, representar y dirigir al resto de la raza humana–, podría comenzar a apreciar la profundidad e intensidad del resentimiento del que habla Krastev.

IV. En la misma reseña, Krastev afirma también, con razón, que el consenso poscomunista y los compromisos ideológicos que lo acompañan se mantuvieron firmes en tanto la referencia negativa al comunismo tuviera sentido, es decir, hasta que se completó la integración de las naciones de Europa central y oriental en las principales instituciones de Occidente (como la UE y la OTAN) a mediados de la década de 2000. Yo añadiría que, para ese entonces, tanto Europa central como Europa occidental empezaron a enfrentarse a retos que estaban relacionados mucho menos con el pasado comunista que con el presente capitalista. Fue entonces cuando algunos de los antiguos amigos de Applebaum, tanto en el oeste como en el este,

7. I. Krastev: «The Tragic Romance of the Nostalgic Western Liberal» en *Foreign Policy*, 15/8/2020.

se convirtieron en sus enemigos. Este cambio se produjo no por un irresistible atractivo psicológico del autoritarismo, como afirma Applebaum, sino porque el periodo de transición poscomunista había pasado y los retos de superar la división de la Europa de la Guerra Fría fueron sustituidos por los retos de la globalización capitalista.

Algunos protagonistas de la derecha antitotalitaria de Europa central y oriental se dedicaron a conectar ambos tipos de desafíos al afirmar que la actual amenaza del liberalismo globalista, con sus derivas potencialmente «totalitarias» como el «generismo» y el «multiculturalismo», comparte una cosmovisión común con la amenaza pasada del comunismo internacionalista, con su ideología marxista totalitaria. Es lo que hace Ryszard Legutko, uno de los principales ideólogos del *pis*, en su obra *The Demon in Democracy: Totalitarian Temptations in Free Societies* [El demonio en la democracia. Tentación totalitaria en sociedades libres]⁸. Por su lado, varias figuras de la derecha antitotalitaria occidental perdieron la confianza en la capacidad de Occidente y de EEUU para controlar el proceso de globalización que habían desencadenado: mientras que la victoria en la Guerra Fría y la consiguiente occidentalización de Europa central y oriental en la década de 1990 habían confirmado la grandeza de Occidente y de EEUU y su centralidad en la historia mundial, el fracaso de la occidentalización de Oriente Medio en la década

de 2000 y la emergencia de las ambiciones internacionales de China en la década de 2010 fueron señales de que la globalización ya no les convenía a los intereses de las naciones occidentales, ni estaba totalmente en manos de ellas.

En otras palabras, cuando algunos de los portadores del consenso liberal-conservador de la década de 1990 descubrieron que, en lugar de aumentar el poder relativo y mejorar la posición de EEUU y sus aliados occidentales, la globalización había comenzado a disminuirlos, se volvieron contra ella y se separaron de sus amigos liberales. Su alianza anterior estaba ligada al triunfalismo de Occidente en la década de 1990. No pudo sobrevivir a su derrocamiento en la década de 2010. Como resultado del fin de la era post-1989, algunos de los amigos orientales ex-disidentes y anticomunistas de Applebaum se unieron a Orbán y Kaczyński, algunos de sus antiguos amigos *tories* apoyaron el Brexit y a Boris Johnson, y algunos que, como ella, habían sido neoconservadores estadounidenses se convirtieron en partidarios de Trump.

V. Según Krastev, la ceguera de Applebaum ante el paso del tiempo histórico hace que se aferre a la anticuada visión del mundo de una época pasada en lugar de reflexionar sobre sus puntos ciegos. Le pide que abandone el liberalismo de la Guerra Fría y lo reinvente para los tiempos actuales. Este llamamiento podría dirigirse aún mejor a Snyder: después de todo, Applebaum representaba

8. Encounter Books, Nueva York, 2016.

el lado conservador del consenso posterior a 1989, mientras que Snyder reivindica el legado liberal de izquierda de su mentor Tony Judt. Los liberales centristas Krastev y Holmes dieron el primer paso hacia un análisis crítico de su credo cuando reinterpretaron la transición poscomunista a la democracia occidental como un caso de colonización e imitación cultural. Sin embargo, luego estropearon este prometedor comienzo al presentar las contradicciones de la imitación como la principal explicación, si no la única, de por qué fracasó la transición poscomunista. En realidad, deberíamos entender las contradicciones de la imitación no como el principal motor del cambio, sino más bien como un aspecto superestructural de las relaciones político-económicas asimétricas entre el «núcleo» y su «semiperiferia» que se establecieron durante la última ola de globalización capitalista.

Una vez situado en este marco, el análisis de Krastev y Holmes sobre la occidentalización de Europa central y oriental desde el punto de vista de los colonizados queda incompleto sin una descripción del mismo proceso desde el punto de vista de los colonizadores, es decir, de aquellos que pertenecen por nacimiento a las naciones victoriosas de Occidente, cuyo modo de vida y sistema económico y político fue copiado e imitado por el Este postsoviético. Si dejamos de lado a Holmes, que asistió a Krastev, ni Snyder ni Applebaum

están dispuestos a asumir esta tarea. Para ello, tendrían que abandonar su autoimagen de portadores de valores universales y reconocer que EEUU no es una iglesia, sino una nación como cualquier otra. Después de haber escrito la historia del otro desde un punto de vista supuestamente metahistórico, tendrían que historizarse a sí mismos y mirarse no como observadores imparciales, sino como actores parciales cuya actitud hacia los demás está determinada por su pertenencia a una entidad colectiva con intereses e identidad particulares. El reconocimiento del lugar particular desde el que le hablan al mundo tendría que ir acompañado del abandono de cualquier pretensión metahistórica. Tendrían que reconocer que no ven la historia desde afuera, sino desde dentro.

Snyder les pide a los lectores estadounidenses de su libro *Sobre la tiranía. Veinte lecciones que aprender del siglo XX*⁹ ser patriotas aunque su presidente no lo sea. Pero mientras Snyder y Applebaum invocan el patriotismo contra un supuesto Trump antipatriótico y antiestadounidense, Trump, a su vez, invoca el patriotismo contra el globalismo de Snyder, Applebaum y sus correligionarios. Ninguno de los bandos de esta disputa tiene razón. No se trata de un enfrentamiento entre el patriotismo estadounidense y una actitud antiestadounidense y antipatriótica, sino de un enfrentamiento entre dos tipos de patriotismo: el patriotismo de una nación

9. T. Snyder: *On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century*, Tim Duggan Books, Nueva York, 2017; edición en español: *Sobre la tiranía. Veinte lecciones que aprender del siglo XX*, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2017.

elegida para gobernar a otras naciones y el patriotismo de una nación que intenta afirmarse a sí misma en contra y por sobre otras naciones. El primer tipo de patriotismo explica el poder asimétrico de EEUU frente a otras naciones por la misión redentora universal de Washington; el segundo tipo de patriotismo considera que este poder se justifica por sí mismo. Mientras que Snyder explica la supuesta actitud antipatriótica de Trump por el hecho de que sería un agente de Rusia, Applebaum la ve como la expresión de una sensibilidad antiestadounidense que coliga a Trump tanto con la extrema izquierda como con la extrema derecha vernáculas. Al igual que ellos, afirma, Trump quiere destruir el tesoro máspreciado de EEUU: su condición de faro moral de la humanidad, de modelo a imitar, de redentor del mundo.

Sobre este último punto, sin duda Applebaum tiene razón. Este aspecto del proyecto de Trump se recoge magistralmente en las secciones sobre EEUU del libro de Krastev y Holmes. En términos distintos a los que ellos utilizan, podemos resumir su tesis de la siguiente manera: Trump ha sustituido el noble «nacionalismo universalista» (para emplear una expresión de H.J. Morgenthau) de una nación elegida para guiar a los demás fuera de la historia hacia el milenio liberal, por el nacionalismo trivial de una entidad colectiva particular que afirma su lugar bajo el sol frente a otras entidades similares. Para Trump, EEUU debería superar su derrotismo convirtiéndose de nuevo en una gran nación capaz de vencer y someter a las demás,

pero debería dejar de desempeñar el papel de iglesia proselitista. La idea de que los estadounidenses deben ser como los demás —que deben renunciar a su ambición de liderar otras naciones— es insostenible para Applebaum e, implícitamente, también para Snyder, tal como se desprende de su reacción histérica al intento de Putin en 2016 de hacerle a EEUU lo que Clinton le hizo a Rusia en 1997, cuando ayudó a Boris Yeltsin a ser elegido presidente. Uno no puede dejar de pensar que lo que llevó a Applebaum y Snyder a oponerse a Trump con tanta fuerza no es tanto el credo abstracto de los derechos humanos universales y la democracia como el narcisismo herido de dos miembros de la nación elegida.

En lugar de limitarse a invocar un patriotismo estadounidense universalista, Snyder y Applebaum deberían cuestionarlo. ¿Qué significa ser patriota de un país que tiene sus bases militares en la mayoría de los demás países del mundo? Si el patriotismo significa defender la soberanía del propio país contra la injerencia de otras naciones, ¿qué autoriza a los patriotas estadounidenses a hacer a otros lo que no quieren que otros les hagan a ellos? ¿Cómo luciría el patriotismo sin el excepcionalismo estadounidense?

Coda

Los resultados globales de los esfuerzos de nuestros tres nostálgicos del 89 para hacer frente al colapso de sus sueños son bastante míseros. Ante el auge mundial del nacionalismo, Applebaum y Snyder

se aferran a una versión específicamente estadounidense de él, mientras que el búlgaro Krastev lo racionaliza concibiendo el nacionalismo como una respuesta excesiva a los propios excesos del liberalismo, como el retorno de las identidades nacionales fuertes que el liberalismo supuestamente reprimía. Con su identificación ingenua de EEUU con el mundo, Snyder y Applebaum se muestran ciegos tanto a las dinámicas culturales como a los datos estructurales, mientras que Krastev y su coautor Holmes descuidan la estructura y la economía política a favor de la cultura y de la psicología política. Por muy convincente que sea su descripción de las contradicciones de la imitación, desconoce los dos principales defectos del liberalismo posterior a 1989, que son mucho más importantes: su creencia en los efectos de derrame de la globalización capitalista y su fe en la compatibilidad del liberalismo occidental con la supervivencia civilizada del ser humano en el planeta. Se ha demostrado la inviabilidad de estas dos premisas de 1989 con dos acontecimientos catastróficos que para un número creciente de personas son ahora cada vez menos discutibles: las desigualdades

socioeconómicas que socavan las instituciones democráticas y la crisis ecológica que mina la perspectiva de una vida digna para las generaciones futuras. Las respuestas de nuestros tres adalides del 89 a esos dos principales desafíos de la época actual son variadas. Mientras que las ideas de derecha de Applebaum le permiten ignorarlos, las ideas de izquierda de Snyder le hacen dedicar un capítulo entero de su *Camino hacia la no libertad* al desarrollo de la idea de que la desigualdad producida por el capitalismo no regulado en los últimos 30 años ha socavado la democracia estadounidense. Al menos para el caso estadounidense, es capaz de tener en cuenta la base estructural de la realidad política. Mientras descuida el lado económico del liberalismo posterior a 1989 en el libro escrito con Holmes, Krastev se vuelve crítico con el neoliberalismo en el artículo «Seven Early Lessons from the Coronavirus» [Siete primeras lecciones del coronavirus]¹⁰. Allí también se abre al cuestionamiento ecológico radical del modelo globalista de desarrollo capitalista y sugiere que volvamos a localizar nuestras vidas sin perder nuestras aspiraciones cosmopolitas. No es un mal comienzo para un heredero del 89. ☐

10. En *European Council on Foreign Relations*, 18/3/2020.

TEMA CENTRAL

Los desafíos de la democracia



Sin partidos la democracia no funciona; con estos partidos, tampoco

Yanina Welp

Si bien los partidos no han desaparecido del juego democrático, hoy muestran serias dificultades para articular demandas sociales y canalizar las aspiraciones ciudadanas. En ese marco, herramientas como los referendos pueden redinamizar la democracia. Pero para ello es necesario que haya mecanismos sencillos y transparentes para activarlos. De lo contrario, como ocurre a menudo, resultarán más útiles para los poderes políticos que para la participación ciudadana.

Sin partidos no hay democracia, pero la democracia de partidos muestra un funcionamiento cada vez más deficitario en sus niveles fundamentales: los partidos están fallando en su capacidad programática y de gestión, la de generar e implementar soluciones adecuadas; y están fallando también en su capacidad de representar a la ciudadanía y dar sentido a la democracia sosteniendo la legitimidad del sistema. Esto ocurre porque en las democracias del siglo XXI los partidos enfrentan incentivos perversos que los orientan a buscar el poder a costa de atacar a sus adversarios convertidos en enemigos. En campaña electoral, la disputa política se aborda como si se tratara de un campo de batalla en el cual la misma supervivencia de la nación o de los valores

Yanina Welp: es investigadora en el Albert Hirschman Centre on Democracy. Es coordinadora editorial de *Agenda Pública* e integra la Red de Politólogos. Correo electrónico: <Yanina.welp@graduateinstitute.ch>.

Palabras claves: democracia, participación, partidos políticos, referéndum.

Nota: la autora agradece a María Isabel Puerta Riera, Alicia Lissidini, Osvaldo Lazzetta y Félix Pons sus comentarios a una primera versión de este artículo.

democráticos estuviera en juego de forma constante. Una vez en el gobierno, las oposiciones tienen pocos incentivos para gobernar o acompañar la gestión y muchos más para erosionarla y así crear las bases para su posterior acceso al poder. Se repite entonces la dinámica de campaña, lo que genera un intercambio agresivo que va dividiendo al electorado en *alineados* (quienes se ubican a un lado y otro de la *grieta*, por usar un término argentino), *ausentes* (abstencionistas y/o desencantados, quienes consideran que da lo mismo y que la política no tiene valor para transformar cosas) y *apocalípticos exaltados* (quienes comienzan a adherir a salidas autoritarias y/o antipolíticas expresadas desde la crispación máxima).

En un plano sistémico, la democracia, en la teoría y en la práctica, funciona cuando están bien aceitados los canales que conectan la representación y la participación, porque esto cohesiona la comunidad política y

**El conflicto
no puede (ni debe)
eliminarse, sino
canalizarse
democráticamente**

mejora las respuestas a las demandas ciudadanas. El conflicto no puede (ni debe) eliminarse, sino *canalizarse democráticamente*. Aunque el contrato social sea un mito fundante, la adhesión a la comunidad política se basa en una mínima percepción de beneficio y también de justicia. El declive de la función de los partidos erosiona su capacidad de (a) legitimar el sistema, (b) elaborar políticas públicas adecuadas y (c) implementarlas. Y cuando las instituciones son percibidas como injustas, pierden efectividad en lograr sus objetivos. En su análisis de Chile, Guillermo Larraín lo resume así: «¿Por qué pagar impuestos si el Estado es ineficiente y corrupto? ¿Por qué adherir a leyes hechas para favorecer sistemáticamente a las mismas personas? ¿Por qué respetar las instrucciones de los poderes públicos si la violencia recae con demasiada frecuencia en las mismas personas?»¹. Los partidos de gobierno y los principales referentes de la oposición tienen responsabilidad en que estas percepciones tengan cada vez mayor peso en Chile y en el continente.

La representación es central en sociedades complejas como las contemporáneas, porque mantiene en marcha el andamiaje que procesa las demandas ciudadanas y ofrece soluciones. El problema es que nada de eso funciona bien. ¿Por qué? Porque los partidos privilegian uno de sus objetivos fundamentales —conseguir el poder— y desplazan los otros —elaborar, sostener, defender e implementar programas desde el liderazgo y el enraizamiento en la sociedad—. No es una cuestión de lucha entre buenos y malos (puede serlo, pero ese debate resulta poco productivo para transformar el estado de cosas), sino una cuestión de incentivos.

1. G. Larraín: *La estabilidad del contrato social en Chile*, FCE, Santiago de Chile, 2021, p. 46.

El sistema político y las dinámicas comunicacionales contemporáneas han generado incentivos perversos. Ahora bien, ¿se puede hacer algo, además de lamentar amargamente el crecimiento del «populismo» y las opciones autoritarias, la abstención creciente y el aumento de las desigualdades y las frustraciones ciudadanas? Aquí argumentaremos que sí, centrándonos en un elemento que no resuelve todos los problemas, pero que puede destrabar el bloqueo en que se halla inserto el sistema político: la introducción de mecanismos de democracia directa en manos de la ciudadanía o de activación obligatoria, con capacidad de incidencia, efectivos, que permitan acortar las distancias entre representantes y representados, la rendición de cuentas y el debate de ideas. No es naíf ni mucho menos suicida. Así como en Chile el plebiscito constitucional abrió canales institucionales para buscar nuevas respuestas en una situación excepcional, en situaciones de normalidad los referendos activados por ley o por recolección de firmas podrían cambiar radicalmente el marco del debate y los incentivos que movilizan o desmovilizan a los diferentes actores. Con ello no propiciamos ni visualizamos una situación de participación permanente. De lo que se trata es de incorporar al sistema un actor con poder de veto. Su sola posibilidad (cuando puede hacerse efectiva) cambia las reglas del juego, acerca preferencias y obliga al diálogo.

La participación de la ciudadanía es fundante

No hay democracia sin un aval explícito de la ciudadanía. La participación en elecciones ha sido el mecanismo predominante para expresar este aval, pero hay todo un conjunto de procedimientos que también podrían hacer su contribución pese a haber quedado relegados a un segundo plano. El formato adquirido por la representación —a grandes rasgos, una autoridad electa, a diferencia de una que actúe como delegada, tiene discrecionalidad para tomar decisiones buscando representar al conjunto de votantes y no solo a quienes la eligieron— otorga márgenes amplios de discrecionalidad que ponen la primera piedra en la distancia que separa a representantes y representados. Campañas que se convierten en una carrera desenfrenada de promesas a todas luces incumplibles hacen también su contribución al descrédito de la democracia representativa. Luego, y con mayor importancia para el argumento, una vez en el gobierno, la oposición orientada a conseguir el poder no tiene incentivos para cooperar en función del bien común sino para *torpedear* la acción de gobierno con la expectativa de conseguir el poder. La ciudadanía asiste a la escena como convidada de piedra, hasta los siguientes comicios.

El *electoralismo* que guía la acción política es cada vez más la regla. Si cuestiones tan relevantes como un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina o la licitación del litio en Chile debieran ser ratificadas por la ciudadanía en un referéndum, los partidos tendrían que fortalecer sus argumentos y defender ante la población las razones de fondo a favor o en contra; posteriormente, los costos de la acción colectiva, igual que sus potenciales beneficios, se distribuirían de otro modo, disminuyendo la centralidad de los partidos. La ciudadanía también recibiría otros incentivos para intervenir en política. No se trata entonces de aceitar solo el aval que la democracia representativa requiere, sino también la capacidad de intervención de los ciudadanos.

Las resistencias a dejar en manos de la población la toma de decisiones trascendentales no son nuevas. «La gente no está preparada para tomar decisiones de envergadura», «se dejaría seducir por líderes autoritarios», «solucionar el problema de legitimidad podría poner en serio riesgo la efectividad de las políticas públicas»: estos son argumentos corrientes. Albert Hirschman propuso unas tesis que caracterizarían la retórica reaccionaria o de la intransigencia que se habrían manifestado en distintos momentos históricos y que explican la férrea resistencia a defender el *statu quo* frente a la sola posibilidad del cambio: la *tesis de la perversidad*, que propone que los efectos de una reforma empeorarán cualquier aspecto –social, político o económico– que esta busque solucionar; la *tesis de la futilidad*, que señala que cualquier reforma tendrá un efecto nulo o mínimo y, por tanto, es sencillamente cosmética; y la *tesis del riesgo*, más sutil, que propone que los costos de una reforma pueden ser tan altos como para poner en peligro otros logros precedentes². Con inspiración en estas reflexiones, no se trata aquí de defender de manera crítica o descontextualizada una participación ciudadana directa total (imposible e incluso indeseable)³, sino de su incorporación al sistema político democrático como un avance orientado a cambiar los incentivos que el debate político actual enfrenta.

2. Hirschman construye sus tesis siguiendo las reacciones de una selección de pensadores que resistieron tres grandes hitos de su tiempo, aunque fueron posteriormente incorporados al ideario general europeo y, en buena medida, occidental: la Revolución Francesa, los movimientos sufragistas y de ampliación de derechos civiles de principios del siglo xx y la formación de los Estados de Bienestar tras la Segunda Guerra Mundial. A. Hirschman: *La retórica reaccionaria*, Clave Intelectual, Madrid, 2020.

3. Reflexionamos sobre los mitos que han acompañado la defensa y crítica de la participación ciudadana directa e indirecta en décadas recientes en Gisela Zarembeg y Y. Welp: «Más allá de enfoques utópicos y distópicos sobre innovación democrática» en *RECERCA. Revista de Pensament i Anàlisi* vol. 25 N^o 1, 2020, pp. 71-94.



¿Cómo analizar los sistemas de partidos?

La institucionalización del sistema de partidos ha sido reconocida como un prerequisite clave para la consolidación de la democracia en los Estados que enfrentan transiciones postautoritarias, y también como un factor importante para garantizar la calidad de la gobernabilidad democrática en las democracias más consolidadas⁴. La institucionalización se evalúa a menudo mediante una lista de condiciones, como la estabilidad de los partidos y de los patrones de competencia entre ellos; el arraigo, basado en el supuesto de que los partidos más importantes deberían tener un anclaje relativamente estable en la sociedad (sus bases electorales); la legitimidad de los partidos y del proceso electoral otorgada por las elites políticas, que basan su comportamiento en la expectativa de que las elecciones serán la vía principal para gobernar; y, por último, la autonomía de los partidos, en la medida en que estos adquieren valor por sí mismos y un estatus independiente, es decir, son autónomos con respecto a los líderes o las organizaciones que los hayan creado para servir a sus fines⁵. Las situaciones son variadas. Mientras que en países como Perú todos estos elementos se han venido debilitando y algunos prácticamente han desaparecido, en otros, como Uruguay o Argentina, muestran una vigencia significativa.

Hablar de los sistemas de partidos latinoamericanos tiene sus riesgos porque lo primero que salta a la vista y que registran muchos estudios es su diversidad⁶. Asumimos aquí este riesgo para identificar algunas tendencias. Los indicadores que dan cuenta de la crisis de los partidos y sus repercusiones en la declinante satisfacción, confianza y apoyo a la democracia son muchos y de larga data. Las democracias europeas lo habrían comenzado a experimentar ya en las décadas de 1960 y 1970 con el declive de las afiliaciones y el descenso de la participación electoral. Aquellos partidos formados sobre clivajes que dieron sentido a la construcción de identidades políticas de clase condujeron en las democracias europeas más longevas a acuerdos sociales fundantes del Estado de Bienestar. Los partidos socialdemócratas, que tenían sus bases electorales en un grupo relativamente homogéneo de trabajadores y articulaban su acción política con la labor de los sindicatos, impulsaron la

4. Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan: «Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments: An Introduction» en S.M. Lipset y S. Rokkan (eds.): *Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives*, Free Press, Nueva York, 1967.

5. Scott Mainwaring y Timothy Scully (eds.): *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, Stanford UP, Stanford, 1995.

6. Flavia Freidenberg y Betilde Muñoz-Poggosian: *Reformas a las organizaciones de partidos en América Latina (1978-2015)*, PUCP / UNAM / OEA / SAAP, Lima, 2016.

ampliación de derechos laborales y las políticas de bienestar. Pero el mundo ha cambiado, las sociedades se han diversificado y el debate hoy es otro; agendas que no habían tenido mayor relevancia para el proyecto socialdemócrata han ganado peso —género, etnia, diversidades sexuales—.

En Europa y Estados Unidos, en la raíz de la creciente popularidad de los intereses de la extrema derecha está la ruptura de las expectativas de que las futuras generaciones vivirán mejor que las de sus padres. Puede sonar contradictorio, pero cuando cabía esperar que el crecimiento global de las desigualdades registrado desde la década de 1980 se tradujera en más demandas de redistribución, lo que se ha observado es un aumento sin precedentes del nacionalismo y las políticas de identidad. Y lo que es más sorprendente, esto está sucediendo en las democracias consolidadas de Europa y EEUU⁷.

Pero quizás no deba sorprender tanto y más bien invita a revisar la relación esperada entre las ideas y los contextos, o en otras palabras, cabe entenderlo como una consecuencia de la relación no lineal y a menudo subestimada entre las condiciones socioeconómicas y la política.

En cualquier caso, la informalidad, las características de las elites económicas y políticas, y las de la formación del Estado alejaron a los partidos latinoamericanos de este patrón. Si bien la región se ha caracterizado históricamente por ser la más desigual del mundo, las primeras décadas del siglo XXI fueron también las del surgimiento de nuevos proyectos políticos tendientes a la redistribución económica, la inclusión social y el reconocimiento cultural (al menos en teoría, como sucedió con los gobiernos del llamado «giro a la izquierda» en sus inicios). Los resultados distaron mucho de los esperados en el plano económico-social y en el político (lejos del pacto, primó la polarización). Hay más, porque las diferencias entre las democracias consolidadas de Occidente y las nuevas y frágiles democracias latinoamericanas se evidencian desde el punto de partida: el pacto fundante del Estado de Bienestar en los países nórdicos, Alemania o Francia se basó en la institucionalización y el reconocimiento de adversarios políticos que se sentaron a la mesa de negociaciones. Esto no ocurrió en América Latina, donde en esas mismas décadas lo que predominaba como respuesta a las demandas sociales eran los golpes militares. En los países donde sí se avanzó en la construcción de Estados de Bienestar, esto fue a menudo producto de proyectos populistas, entre los que el peronismo es una

En la raíz de la creciente popularidad de los intereses de la extrema derecha está la ruptura de las expectativas

7. Amory Gethin, Clara Martínez-Toledano y Thomas Piketty: *Changing Political Cleavages in 21 Western Democracies, 1948-2020*, Harvard UP, Cambridge, 2021.

experiencia emblemática. Emilio De Ípola y Juan Carlos Portantiero lo analizaban a comienzos de la década de 1980 señalando que el peronismo dio, por primera vez, un principio de identidad a la entidad *pueblo*, pero «las modalidades bajo las cuales el peronismo constituyó al sujeto político *pueblo* fueron tales que conllevaron necesariamente la subordinación/sometimiento de ese sujeto al sistema político instituido –al ‘principio general de dominación’, si se quiere–, encarnado para el caso en la figura que se erigía como su máxima autoridad: el líder»⁸. Es decir, se construye ciudadanía («pueblo») mientras se niegan el pluralismo democrático y la misma autonomía de ese pueblo. Es probable que la adopción de marcos funcionales para analizar otros contextos haya obstaculizado una comprensión más profunda de las limitaciones de origen de los sistemas de partidos latinoamericanos.

Los incentivos perversos que enfrentan los partidos

En su libro *Ruling the Void* [Gobernar el vacío]⁹, Peter Mair puso la mirada en el vacío que ha dejado la ruptura de la conexión entre ciudadanía y partidos. Las dinámicas comunicacionales hacen un aporte notable al reconfigurar esta tendencia con nuevas formas de personalización de la política y polarización afectiva.

Cinco tendencias dan cuenta de estas tensiones, que se observan de distintas formas en diferentes contextos:

(a) *La personalización de los partidos* (dicho coloquialmente, «líder fagocita aparato»). Esto no es nuevo, pero se ha acentuado. El líder aparece como un producto. Cada vez importa más la vida privada, cada vez surgen más candidaturas del espectáculo y el mundo de los medios, mientras la dimensión personal ocupa un espacio más relevante que las cuestiones programáticas. Donald Trump es un ejemplo paradigmático.

(b) *La «dictadura de los sondeos»* («el autogolpe», porque atenta contra los principios funcionales de los partidos y son los propios partidos los que se lo imponen). Esto produce una situación de «campana permanente» que impide la elaboración de políticas y genera el efecto arrastre de estar mirando lo que la gente quiere, negando la función de liderazgo programático del partido y también la esencia de la discusión pública:

8. E. De Ípola y J.C. Portantiero: «Lo nacional popular y los populismos realmente existentes» en *Nueva Sociedad* N° 54, 5-6/1981, disponible en <www.nuso.org>.

9. P. Mair: *Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy*, Verso, Nueva York-Londres, 2013.

inacabada e incompleta, para su mejor funcionamiento debe analizar opciones diferentes, todas con ventajas y desventajas. Conectar con el electorado es hacer trabajo de base, diagnosticar problemas y elaborar soluciones, no responder posicionándose de acuerdo con las encuestas.

(c) *El mito asambleario y plebiscitario*. Los movimientos sociales que surgieron en Europa al calor de la «primavera árabe», el 15-M español u Occupy Wall Street pensaron que podían construir otro tipo de colectivos, que era posible organizar el gobierno sin partidos. No sobrevivieron o se convirtieron en partidos... La expectativa de generar nuevas estructuras horizontales para la toma de decisiones, prescindiendo de los intermediarios, pasa por alto que factores sociales, políticos y socioculturales no hacen viable esta opción. No solo ocurre que las elecciones siguen siendo el principal procedimiento para la distribución del poder político nominal y que todos sus procedimientos distan de la horizontalidad y de la nivelación del acceso, sino que también la misma idea niega o ignora otra serie de intermediaciones que operan en cualquier proceso de toma de decisiones y que juegan un rol (las capacidades retóricas, los conocimientos, el carisma, etc.). Presupone que la ciudadanía desea participar constantemente en política, algo que todas las evidencias desmienten. Ignora que cualquier cambio institucional solo puede ser promovido por aquellos a quienes esa expectativa de cambio en buena medida despreja (los actores con poder en las instituciones, blanco de la antipolítica).

(d) *Las emociones como estrategia*. La «polarización afectiva» apela a las emociones para dividir, crea cortinas de humo con consignas abstractas y confusas como la que se otorga en estos tiempos a la «libertad» frente al «comunismo». Esto también erosiona a los partidos, porque tiende a ubicarlos como titulares de la verdad y no de un punto de vista particular, y promueve la negación de la legitimidad a los otros, impugnando, en definitiva, el pluralismo indispensable para el funcionamiento de la democracia.

(e) *La «turbopolítica»*. La agenda de los medios se impone por sobre la agenda pública. Asistimos a una presencia constante en los medios, a un posicionamiento inmediato de los políticos y a una sobreexposición de la vida privada. Pero una buena definición de políticas públicas no se puede organizar desde las trincheras ideológicas o emotivas, sino desde los diagnósticos, el debate de opciones y la articulación de acuerdos. Cuanto más se necesita de reflexión y diálogo, más prisa y división se observa, un elemento adicional que muestra que los partidos políticos no son capaces de resolver los retos del sistema.

La agenda de los medios se impone por sobre la agenda pública

Cambiar los incentivos, pero de verdad

Los partidos no han muerto, pero no son capaces de cumplir con eficacia las funciones que justifican su existencia. No han sido reemplazados y no hay en este momento ninguna alternativa que aparezca como viable para su reemplazo, pero sí las hay para complementarlos y modificar los incentivos perversos que enfrentan. Queda claro que los partidos se mantienen a costa de erosionar cada vez más sus funciones. Las dinámicas de la competencia electoral, ya no solo en tiempos de campaña, socavan el rol de los partidos en tanto *partes* de un engranaje cuyo buen funcionamiento requiere cooperación. No se trata de cuánta diversidad ideológica pueda tolerar y/o canalizar un sistema político, sino del predominio de estrategias orientadas a acceder al poder y mantenerlo, con las luces muy cortas, descuidando la gestión de los asuntos públicos y la búsqueda del bienestar colectivo.

En este marco, es posible introducir una serie de mecanismos con un papel de control y ampliación de la agenda pública. Se trata de referendos obligatorios para ratificar reformas constitucionales o acuerdos políticos fundamentales para el país (por ejemplo, para casos de renegociación de deuda externa o de inversiones de alto impacto medioambiental), iniciativas ciudadanas (por ejemplo, para realizar propuestas constitucionales) y referendos derogatorios (que permiten someter a voto y eventualmente derogar leyes aprobadas por el Parlamento).

Lejos de suponer que no se ha hecho nada, ha habido una sucesión de reformas de los partidos orientadas a su democratización y apertura (diversas formas de primarias alentadas por el Estado, reformas orientadas a la lucha contra la corrupción, incorporación de segundas vueltas electorales, candidaturas independientes, entre muchas otras), como también a la incorporación de mecanismos de participación de la ciudadanía en la definición de asuntos públicos¹⁰.

Ha habido una sucesión de reformas de los partidos orientadas a su democratización y apertura

Sin embargo, a grandes rasgos y con contadas excepciones, estos mecanismos han dado pocos frutos o han funcionado de forma opuesta a la esperada (con referendos que han empoderado a los poderosos en lugar de a los más vulnerables, o reformas a la regulación del sistema de partidos que lo han debilitado aún más y no han mejorado la representación). En lo que hace a los referendos, en general estos no han permitido canalizar demandas ciudadanas porque o bien la regulación no habilita a la ciudadanía a

10. El Observatorio de Reformas Políticas en América Latina ofrece una completa base de datos que da cuenta de esta reformas. V. <<https://reformaspoliticas.org/>>.

activarlos (Panamá, Argentina, Chile, Brasil), o lo hace pero estableciendo controles y exclusiones o dificultosos procedimientos que no permiten una activación efectiva (Costa Rica, Ecuador, México, Colombia, Perú). Los procedimientos para activar iniciativas ciudadanas a menudo no están claros o no son automáticos (en ocasiones se requiere la aprobación del Congreso, lo que altera sustancialmente su carácter y los convierte en mecanismos mediados por una aprobación que no es procedimental sino política).

Mientras que los presidentes promueven plebiscitos con cierta frecuencia, las iniciativas ciudadanas tienen escaso éxito. Esto ha ocurrido fundamentalmente por falta de voluntad política (gobernantes que se saltan las reglas, como lo hicieron Andrés Manuel López Obrador con las consultas informales de 2018 o Evo Morales al volver a postularse a la reelección pese a los resultados contrarios del referéndum de febrero de 2016), por bloqueos indebidos derivados del mal funcionamiento o cooptación de las instituciones de control (los dos intentos frustrados de activar la revocatoria contra Nicolás Maduro en Venezuela, en 2016 y 2021, dan cuenta de esto) o por problemas en la regulación (diseños institucionales inadecuados que hacen imposible o inútil la activación). Cuando los han activado las autoridades, no se han dado en marcos que alienten la adecuada información de la opinión pública (plebiscito por la paz en Colombia en 2016, consultas de 2018 en Perú y Ecuador). Es común observar la falta de garantías jurídicas por deficiencias procedimentales (los intentos de activación por firmas en Ecuador) o por abierta manipulación de las reglas (México en 2018). Esto se traslada a la inadecuada implementación de resultados y a la postre proyecta la imagen de mecanismos que, lejos de complementar la democracia representativa, operan como elementos que erosionan la confianza en el sistema.

No se trata de inventar configuraciones utópicas, sino de poner el foco en la necesidad de reencauzar un debate político descarrilado en su objetivo de buscar el bien común y canalizar una insatisfacción de la ciudadanía con el sistema político. Uruguay y Suiza (sin idealizar ni subestimar los déficits y retos que ambos países enfrentan) ofrecen una configuración en la que surge un mejor equilibrio entre partidos políticos y ciudadanía. Quienes quieran movilizarse para intervenir en la definición de los asuntos públicos cuentan con procedimientos –garantizados por la ley y respetados por los actores con poder– para ponerlos en marcha¹¹.

La agenda de reformas está sobre la mesa. Hay otras que también podrían comenzar a pensarse. Se podrían convocar asambleas ciudadanas

11. Ver Alicia Lissidini: «Democracia directa contra déficit democrático: el caso uruguayo» en *RECERCA. Revista de Pensament i Anàlisi*, en prensa.

sorteadas para discutir leyes de educación o salud y desarrollar propuestas que logren acuerdos amplios que trasciendan a los partidos, que podrían entrar al debate parlamentario y ser votadas en referéndum (con votación entre varias alternativas, la de la asamblea, la parlamentaria, alguna que pueda ser promovida por iniciativa ciudadana o de los partidos). La «despartidización» de las instituciones de contrapeso también puede avanzar, por ejemplo, en el ámbito de los tribunales constitucionales, con jueces sorteados. La idea es simple: se podría hacer un concurso entre las personas que hayan acreditado las capacidades requeridas para el desempeño del cargo. Esto daría oportunidades a personas altamente capacitadas, pero sin apoyo político-partidario. La combinación de estas fórmulas podría generar nuevas dinámicas y, sobre todo, recuperar el valor de la política y el debate en la toma de decisiones. No existen fórmulas mágicas, pero sí vías más firmes para sostener la democracia, fortalecer la gobernabilidad y generar incentivos para que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer también su contribución. Mejorar la calidad de la representación articulándola con la participación no es solo cuestión de mejorar el discurso político, sino también de producir mejores resultados. ☐



REVISTA DE CULTURA Y CIENCIAS SOCIALES

2021

Gijón

Nº 110

PAISAJES PORTUARIOS Y RELACIONES PUERTO CIUDAD
EN EL ÁMBITO ATLÁNTICO

SUSCRIPCIONES

Suscripción personal: 39 euros

Suscripción bibliotecas e instituciones: 50 euros

Suscripción internacional: Europa - 66 euros (incluye gastos de envío)

América y otros países - 90 euros (incluye gastos de envío)

Suscripción digital: 22 euros

Ábaco es una publicación trimestral de CICEES, C/ La Muralla Nº 3, entlo. 33202 Gijón, España. Apartado de correos 202. Tel./Fax: (34 985) 31.9385. Correo electrónico: <revabaco@arrakis.es>, <revabaco@telecable.es>. Página web: <www.revista-abaco.es>.

Tres imaginarios del sorteo en la política

¿Democracia deliberativa, antipolítica o radical?

Nabila Abbas / Yves Sintomer

El sorteo como forma de selección política ha vuelto a la escena promovido por diferentes imaginarios. En el contexto de la crisis de los partidos políticos y las formas tradicionales de representación, el sorteo y los minipúblicos aparecen en muchos países del Norte global como formas alternativas de garantizar la presencia de las personas comunes frente al poder de las elites. Al menos, eso se cree desde posiciones favorables a la democracia deliberativa, la democracia antipolítica y la democracia radical.

Introducción

En Francia, la Convención Ciudadana por el Clima (ccc), que tuvo lugar entre 2019 y 2020, marcó un importante punto de inflexión respecto a las asambleas ciudadanas y otros «minipúblicos» seleccionados aleatoriamente. Aunque el sorteo fue por mucho tiempo un rasgo tanto de la historia republicana como de la democrática, parecía que

Nabila Abbas: es investigadora de Ciencias Políticas en el Centro de Investigaciones Sociológicas y Políticas de París (CRESPPA, CNRS / Universidad de París 8 / Universidad de París Nanterre). Es la autora de *Das Imaginäre und die Revolution. Tunesien in revolutionären Zeiten* (Campus, Fráncfort, 2019).

Yves Sintomer: es profesor de Ciencias Políticas en el CRESPPA (CNRS / Universidad de París 8 / Universidad de París Nanterre) y miembro asociado del Nuffield College y del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford. Entre sus publicaciones se encuentra *Sortition and Democracy: Practices, Tools, Theories* (ed. con Liliane Lopez-Rabatel, Imprint Academic, Exeter, 2020).

Palabras claves: democracia, minipúblicos, representación, sorteo.

Nota: una versión previa de este artículo fue publicada en *Raisons Politiques* vol. 82 Nº 2, 2021. Traducción del inglés: Mariano Grynszpan.

los actores políticos contemporáneos habían olvidado por completo los potenciales usos de este mecanismo¹. Sin embargo, las exitosas deliberaciones realizadas bajo la égida de la CCC –pese a los trastornos causados por la pandemia de covid-19– convencieron a muchos actores y observadores de que la selección por sorteo es quizás un recurso para hacer frente a la crisis de representación política. Si bien las propuestas efectuadas por la CCC fueron en gran medida desacreditadas por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ello no ocurrió sin fuertes discusiones.

Este cambio refleja una tendencia transnacional, al menos en el Norte global. Desde 2020, se han celebrado en Europa decenas de asambleas ciudadanas sobre el cambio climático, en los niveles local, regional y nacional. A lo largo de la última década, se han organizado cientos, posiblemente miles de minipúblicos para tratar una amplia variedad de temas espinosos. En 2021-2022, la Unión Europea convocó una Conferencia sobre el Futuro de Europa que incluye a diputados nacionales, diputados europeos y paneles de ciudadanos seleccionados al azar.

En América Latina, se han celebrado debates sobre esta posible innovación democrática, pero sin que hayan dado lugar a experimentos significativos. Por ejemplo, en México se ha utilizado la selección aleatoria para elegir candidatos electorales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la agrupación del presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de una lista corta elaborada por los miembros de ese partido, lo que ha contribuido a la promoción de personas de la clase trabajadora a puestos electivos y al éxito electoral del oficialismo².

El significado político de la reintroducción del sorteo para crear organismos políticos colectivos no es fácil de desentrañar. Los numerosos actores que lo apoyan proceden de un entorno muy variado. En Francia, el mecanismo del sorteo fue sugerido como una propuesta viable por el movimiento de los *gilets jaunes* («chalecos amarillos»), que desde octubre de 2018 organizó una violenta oposición al presidente Emmanuel Macron. Al final, el presidente adoptó el mecanismo al organizar la CCC. A su vez, Extinction Rebellion, un movimiento ecologista global, incluyó asambleas ciudadanas sobre el cambio climático como una de sus principales demandas.

1. Bernard Manin: *Los principios del gobierno representativo*, Alianza, Madrid, 1998; Oliver Dowlen: *The Political Potential of Sortition: A Study of the Random Selection of Citizens for Public Office*, Imprint Academic, Exeter, 2008; Hubertus Buchstein: *Demokratie und Lotterie. Das Los als politisches Entscheidungsinstrument von der Antike bis zur EU*, Campus, Fráncfort, 2009; Y. Sintomer: *Petite histoire de l'expérimentation démocratique*, La Découverte, París, 2011.

2. Mathias Poertner: «Does Political Representation Increase Participation? Evidence from Party Candidate Lotteries in Mexico», en prensa.

Nuestra convicción es que se puede aprender algo sobre el atractivo del sorteo construyendo una tipología de los imaginarios que actualmente compiten por definir su lugar en las democracias modernas. El concepto de «imaginarios» ha sido elaborado por los filósofos políticos en un intento de comprender cómo las proyecciones mentales contribuyen al cambio en la sociedad. Los imaginarios son proyecciones de horizontes políticos deseables o preocupantes. Consisten en colecciones de ideas compartidas, historias, leyendas, imágenes y símbolos. El concepto es especialmente útil en nuestro contexto actual, dado que los partidarios del sorteo suelen imaginar sistemas políticos que tienen poco anclaje en la realidad y a menudo parecen utópicos por su propia naturaleza. Por lo tanto, es esencial observar cómo estos actores imaginan el papel que desempeñaría el sorteo en la política de su sociedad ideal.

La reconstrucción de un imaginario trata necesariamente de tipos ideales. Nuestra tesis es que los diversos argumentos en favor de la expansión del sorteo como forma de selección política en el Norte global han surgido junto a al menos tres imaginarios en conflicto: el de la democracia deliberativa, el de la democracia antipolítica y el de la democracia radical. Estos tipos ideales no son específicos de una u otra política o región, aunque su difusión varíe considerablemente de una a otra y cobren sentido en gran medida en relación con los otros. Como todos los tipos ideales, los relacionados con el sorteo rara vez han sido expresados con claridad o perfilados en detalle por los actores que los movilizan. Hemos reconstruido estos imaginarios de forma pragmática, moviéndonos entre la conceptualización y las propias declaraciones explícitas de los actores, y luego poniendo a prueba su pertinencia en conferencias académicas y en conversaciones con las partes interesadas.

Es esencial observar cómo estos actores imaginan el papel que desempeñaría el sorteo en la política de su sociedad ideal

Un nuevo horizonte de expectativa

El valor heurístico del concepto de imaginario fue creciendo durante las últimas décadas. En gran medida, la era de las ideologías concluyó en los años 90 junto con el «corto siglo xx». Las ideologías ya no son referencias tan importantes como lo fueron en su momento para los actores políticos y resultan de poco interés para los observadores que intentan comprender por qué los actores políticos se comportan del modo en que lo hacen.

Para entender la aparición más o menos simultánea de tres imaginarios que colocan el sorteo como eje de la dinámica democrática, debemos apoyarnos en el concepto dual de «espacio de experiencia/horizonte de expectativa» desarrollado por el historiador Reinhart Koselleck³.

Según Koselleck, todas las comunidades humanas tienen un espacio de experiencia vivido (en el cual las cosas del pasado se recuerdan o permanecen presentes) y horizontes de expectativa (que están orientados hacia el futuro). Cualquier tipo de acción estará muy ligada a ambos elementos. Cuando hay hechos o experiencias que cambian profundamente el espacio de experiencia de una determinada población, sus horizontes de expectativa también se abren y permiten así que surjan nuevos imaginarios. Algunos hechos y experiencias, como los movimientos sociales o la implementación de mecanismos institucionales nuevos, pueden generar el desplazamiento de imaginarios que antes eran considerados marginales, no deseables o poco realistas y llevarlos al centro de la escena con el fin de proponer alternativas genuinas. Aunque los imaginarios se inscriben en su horizonte de expectativa junto con ideologías,

teorías de la historia o de la sociedad y utopías, los actores no suelen ofrecer una imagen global, coherente y unificada, sino proyecciones fragmentadas, que incluyen dimensiones afectivas y simbólicas.

El concepto de imaginario nos brinda un marco para analizar la repentina popularidad del sorteo

Sobre esta base, el concepto de imaginario nos brinda un marco para analizar la repentina popularidad del sorteo y las diversas inversiones cristalizadas en torno de él. Después de las primeras décadas del siglo XIX, el tema desapareció casi por completo

de la escena política en el Norte global. Los nuevos imaginarios vinculados a la Ilustración, la soberanía popular, el progreso y el gobierno representativo no le dejaron lugar al sorteo. Durante el resto de los siglos XIX y XX, en los imaginarios desarrollados por los distintos movimientos –republicano, liberal, socialista, comunista, fascista, populista y nacionalista– el sorteo estuvo totalmente ausente como mecanismo de selección política, salvo una excepción en Italia a la que luego nos referiremos. Las primeras conmociones con augurios de cambio se debieron a hechos ocurridos en 1968 y en la década siguiente. El sorteo era mencionado aquí y allá por individuos aislados, como Robert Dahl, Peter Dienel y Ned Crosby, en un marco en el cual la insatisfacción con las democracias capitalistas seguía siendo importante, pero las perspectivas revolucionarias se habían debilitado. Cuando en las décadas de 1980 y 1990 el politólogo James Fishkin conectó el sorteo con la teoría

3. R. Koselleck: *Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos*, Paidós, Barcelona, 1993, pp. 333-357.

de la democracia deliberativa, la idea comenzó a ser considerada con mayor seriedad en el mundo académico angloparlante. En algunos países, a partir del diseño elaborado por teóricos del sorteo, se produjo una primera ola de experiencias muy controladas. De todos modos, la idea de los minipúblicos seleccionados aleatoriamente todavía se circunscribía a unos pocos ámbitos.

Al comienzo del nuevo milenio, el Norte global se vio sacudido por grandes transformaciones. Apenas había pasado una década desde el final del «corto siglo xx» y ya parecía irremediabilmente obsoleta la idea de que habíamos alcanzado el «fin de la historia», habilitado por el triunfo de la democracia liberal en (casi) todos lados⁴. Las promesas incumplidas de las democracias occidentales, la mayor desconfianza frente a los partidos políticos y el gobierno representativo en un sentido más amplio, los cambios geopolíticos traídos por la globalización y las consecuencias del cambio climático modificaron de manera significativa el espacio de experiencia de los ciudadanos: por su magnitud, este punto de inflexión en el espacio de experiencia probablemente pueda compararse con el generado por la Revolución Francesa⁵. Las instituciones y los imaginarios característicos del siglo pasado lucen cada vez más anticuados, con horizontes de expectativa que ya no incluyen el triunfo del gobierno representativo a escala mundial. Esto constituye un terreno fértil para el surgimiento de nuevos imaginarios. Así, crecen tanto el populismo de izquierda como el de derecha, renacen ideas libertarias y aumenta aún más la influencia de los esquemas centrados en temas climáticos. Al mismo tiempo, el mecanismo del sorteo ha quedado incorporado en toda una serie de imaginarios emergentes.

En el mundo francófono y sus alrededores, el libro *Los principios del gobierno representativo* de Bernard Manin (publicado en su versión original en francés en 1995 y luego en español en 1998) ofreció un contraste entre la elección y el sorteo desde una perspectiva básicamente analítica, sin intención alguna de defender la variante aleatoria. El gobierno representativo era presentado como un modelo mixto con excelente resiliencia pese a tantas olas de cambio. Sin embargo, en la década de 2000, los imaginarios políticos desarrollados a partir de este trabajo teórico entraron paradójicamente en conflicto con su propósito cuando decidieron interpretar la obra de Manin como un alegato en favor del sorteo⁶. Estos imaginarios

4. Francis Fukuyama: *El fin de la historia y el último hombre*, Planeta, Barcelona, 1992.

5. R. Koselleck: ob. cit.

6. Samuel Hayat: «La carrière militante de la référence à Bernard Manin dans les mouvements français pour le tirage au sort» en *Participations*, edición especial: *Tirage au sort et démocratie: Histoire, instruments, théories*, 2019, pp. 437-451; Antoine Chollet y B. Manin: «Les postérités inattendues de *Principes du gouvernement représentatif*: une discussion avec Bernard Manin» en *Participations* N° 23, 2019.

eran cultivados, sobre todo, en ámbitos de protesta y entre unos pocos funcionarios políticos. En el mundo angloamericano, una segunda ola de ensayos híbridos llevados más allá de las intenciones de los teóricos del modelo permite que los ejecutores prácticos trasciendan los nichos utópicos o académicos donde se investigaba acerca del tema.

El sorteo jugó un rol central en la ciudad griega que inventó la democracia

El atractivo del sorteo se extendió por todo el Norte global, y este mecanismo comenzó a ser visto cada vez más como una innovación democrática con poder para transformar la política. El éxito internacional del libro *Contra las elecciones*, de David Van Reybrouck⁷, no solo atestigua este cambio, sino que además ayuda a reafirmarlo. El proclamado –aunque muy discutible– vínculo con Atenas⁸ alimenta esta dinámica: el sorteo jugó un rol central en la ciudad griega que inventó la democracia. En ese sentido, el sorteo suele ser visto como un retorno a los orígenes de la democracia, ahora en el contexto del siglo XXI.

En general no es fácil hallar una correspondencia directa entre los tres imaginarios de los que nos ocupamos aquí y las posiciones sociales de quienes los abrazan en la práctica, aunque eso no significa que exista una distribución aleatoria en términos sociológicos.

1. El imaginario de la *democracia deliberativa* se desarrolló primero dentro del mundo académico angloparlante en la década de 1980. En ese caso se creó un modelo teórico, que luego fue combinado con prácticas tradicionales de la educación popular y adoptado por reformistas en el poder, lo que en última instancia derivó en un imaginario que podría ser compartido de manera más amplia. En el inicio de la década de 2020, sus principales impulsos provienen de sectores académicos, políticos y asesores que diseñan y moderan minipúblicos.

2. El imaginario de la *democracia antipolítica* deriva de un término que se popularizó en Europa oriental con el trabajo de George Konrad⁹ y que se usa mucho en Italia. La entrada italiana de *Wikipedia* para «antipolítica» explica que «el término define la posición de aquellos que se oponen a la política (a la que consideran una mera práctica de poder) y, por extensión, a los partidos políticos y funcionarios electos, que según este imaginario colectivo solo sirven a sus intereses personales y no al bien común»¹⁰. Los

7. Taurus, Madrid, 2017.

8. Y. Sintomer: «Sortition and Politics: From Radical to Deliberative Democracy –and Back?» en Dino Piovani y Giovanni Giorgini (eds.): *Companion to Ancient and Modern Democracy*, Brill, Leiden, 2020.

9. G. Konrad: *Antipolitics*, Harcourt, San Diego, 1984.

10. Traducido de <<https://it.wikipedia.org/wiki/Antipolitica>>.

paladines de la antipolítica convocan a la gente a obtener poder mediante la eliminación de las elites políticas y, finalmente, del conflicto. Este imaginario se desarrolló fuera de la academia y no tiene credenciales teóricas de gran calibre. Está difundido, sobre todo, entre movimientos sociales, blogueros antisistema y círculos económicos (especialmente en el área de las nuevas tecnologías), que intentan posicionarse por encima de la riña política y de la tradicional división izquierda-derecha, y también ha sido adoptado por varios teóricos utopistas extraacadémicos.

3. En el imaginario de la *democracia radical*, el sorteo es visto como una estrategia para avanzar hacia ella. Si bien este imaginario se remonta por lo menos a la década de 1960, sus activistas y teóricos desconfiaban al principio y hasta la década de 2000 de un instrumento impuesto desde arriba y diseñado para fomentar el consenso. El imaginario de la democracia radical adoptó el sorteo cuando la experiencia empezó a mostrar que un número cada vez mayor de movimientos ciudadanos defendían los mecanismos de azar en la política y que, si se combinan con la democracia directa, los minipúblicos pueden promover un cambio social y económico real, especialmente en los modos de producción y consumo. Al igual que el de la antipolítica, el imaginario de la democracia radical ha obtenido apoyo de movimientos sociales y blogueros antisistema, aunque la mayor parte de sus seguidores provienen de movimientos políticos de izquierda y ambientalistas, o pertenecen a ellos. Este imaginario también se hace presente entre quienes llegan en la práctica a posiciones de poder gracias a su trabajo en movimientos sociales y organizaciones comunitarias. Es popular entre aquellos teóricos de la democracia radical que se formaron bajo la tradición del movimiento obrero, pero perciben la importancia de la deliberación democrática. Su acción ha ayudado a legitimar la idea de una democracia radical basada en el sorteo.

Argumentos comunes en favor del sorteo

En términos generales, estos tres imaginarios comparten varias ideas centrales vinculadas al valor del sorteo, lo cual explica por qué todos apoyan una misma idea y, por lo demás, parecen diametralmente opuestos entre sí. Los tres imaginarios coinciden en el valor de la imparcialidad ligada al sorteo. Esto es algo que destacan particularmente quienes abogan por una democracia deliberativa o antipolítica, pero en menor medida también forma parte del argumento usado por los impulsores de la variante radical. En una época en la que los partidos políticos han perdido su base de masas, en la que desde la perspectiva de una gran

mayoría de los ciudadanos los políticos están motivados por intereses particulares y en la que el sistema electoral parece haber quedado reducido a un juego de *lobbies* y facciones, el sorteo puede ser visto como un mecanismo imparcial. Su potencial estaría en la constitución de minipúblicos compuestos por individuos sin carrera política ni filiaciones sectoriales. Se limita así el alcance e impacto de las luchas por el poder, lo que permite que este nuevo tipo de representantes trabajen por el bien común.

También se afirma desde los tres imaginarios que el sorteo implica la igualdad radical de todas las partes involucradas. El mecanismo en cuestión permite que sea seleccionada gente común, especialmente de grupos subalternos, la cual no tendría chance en el sistema electoral tradicional, monopolizado por políticos profesionales nacidos en las clases dominantes. La supuesta tradición originada en Atenas alimenta este imaginario. Apoyándose en la famosa frase de Aristóteles, que señalaba que el sorteo era democrático y la elección era aristocrática (un concepto retomado luego por otros pensadores muy citados, como Montesquieu, Rousseau y Jacques Rancière¹¹), la mayoría de los partidarios del sorteo creen que la herramienta es intrínsecamente igualitaria y, por ende, democrática. La fortaleza de la idea casi no se ha visto empañada por las lecciones de la historia, aun cuando esta demuestra que a menudo el sorteo se practicó en círculos pequeños y cerrados para distribuir el poder entre las elites.

El sorteo vuelve a poner en agenda el viejo ideal de la representación descriptiva¹². Como hemos visto, su práctica en el mundo de hoy contrasta fuertemente con los usos históricos, que no asociaban el proceso con ese tipo de representación. Desde esta perspectiva, el sorteo habilita un tipo de representación diferente al de las elecciones. Estas tienden a seleccionar a individuos reclutados en las clases altas de la sociedad y esto ha contribuido en gran medida a la actual crisis de legitimidad del gobierno representativo, porque los partidos políticos ya no parecen representar a quienes provienen de las clases subalternas. Al combinarse con la representación descriptiva, el sorteo permitiría incluir los valores y las experiencias vividas por los ciudadanos comunes en toda su diversidad. Por lo tanto, se trataría de un camino promisorio para revitalizar democracias que están en crisis. Esta forma específica de representación va más allá de la dicotomía participación-representación: los minipúblicos seleccionados aleatoriamente no son sinónimo de democracia directa.

11. J. Rancière: *El odio a la democracia*, Amorrortu, Buenos Aires, 2006.

12. Representación estadística de cada sector según su peso en la sociedad.

A partir de la idea de la muestra representativa se desprende una deducción aparentemente lógica: los minipúblicos encarnan una democracia epistémica, ya que posibilitan un debate con diversos puntos de vista en circunstancias cuasi ideales¹³. Este argumento es compartido por la mayoría de los defensores del sorteo, aun cuando en el bando antipolítico algunos sean más reacios a adoptarlo. A diferencia de los usos históricos del sorteo (como en las cortes de la antigua Atenas o en los colegios electorales florentinos desde finales del siglo XIII hasta mediados del XV), hoy los minipúblicos seleccionados aleatoriamente van siempre acompañados de medidas dirigidas a asegurar una alta calidad deliberativa: se pone a disposición información desde diferentes perspectivas, se escuchan puntos de vista contradictorios, se alternan sesiones de asamblea general con pequeños grupos de debate y existe una moderación que alienta a todos a hablar y escucharse mutuamente. De este modo, los ciudadanos comunes de los minipúblicos contemporáneos constituyen un ejemplo ilustrativo del «saber de las multitudes» y son capaces de desarrollar una deliberación cuya calidad suele ser mejor que la de las asambleas electas¹⁴.

Sin embargo, más allá de estos argumentos compartidos, los tres imaginarios discrepan y, en definitiva, generan visiones opuestas de la sociedad y la política, con diferentes concepciones del rol que debe jugar el sorteo dentro de esta última.

Democracia deliberativa

La primera lógica de igualdad democrática analizada en la sección anterior, es decir, el uso de minipúblicos para obtener muestras aleatorias, representativas e imparciales de la población, es clave para el imaginario de la democracia deliberativa. La principal idea subyacente es que la legitimidad democrática de cualquier decisión será mayor si esa decisión se alcanza a través de una deliberación de alta calidad, informada, transparente e inclusiva. Este proceso debe basarse en el respeto mutuo y debe permitir que todos los participantes tengan igual influencia (lo que supone un marco libre de asimetrías duraderas en términos de poder o dominación).

La opinión adoptada o decisión tomada después de este tipo de deliberación es claramente mejor que una adoptada o tomada antes de la deliberación (o sin ella). Esto implica que un sorteo sin deliberación sería de

13. En este sentido, la película *12 hombres en pugna* (Sidney Lumet, 1957) resulta emblemática.

14. Hélène Landemore: *Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of the Many*, Princeton UP, Princeton, 2012.

escaso interés. Como hemos visto, a los primeros teóricos de la democracia deliberativa –con Jürgen Habermas y John Rawls a la cabeza– no les interesaba en absoluto el sorteo. Pero pronto esa misma corriente, orientada en favor de los minipúblicos seleccionados aleatoriamente, comenzó a presentarlos de manera convincente como una óptima materialización de la democracia epistémica. Esos teóricos deliberativos popularizaron sus ideas entre una cantidad cada vez mayor de funcionarios políticos y dirigentes reformistas electos, que en muchos casos se capacitaron para actuar en la resolución cooperativa de conflictos y la educación ciudadana participativa.

En su mayor parte, los reformistas que inicialmente establecieron minipúblicos deliberativos tenían ambiciones más modestas que los inventores del mecanismo. Por lo general, los veían como un mero complemento del gobierno representativo. Como se ha indicado en innumerables discursos y textos, los minipúblicos han sido diseñados para instituir una opinión pública informada, mientras que la toma de decisiones como tal, en una fase posterior, se deja en manos de funcionarios electos. Esta opinión informada aparece como opuesta a los movimientos de protesta y a la opinión pública más amplia, expresada en comicios, en un referéndum o en las calles (se ve a la opinión pública como fácilmente manipulable, sujeta a la influencia de las emociones y, en general, desinformada).

Contrarrestando las críticas de deliberativistas que siguen siendo leales a la primera interpretación habermasiana, enfocada en la esfera pública más amplia¹⁵, y dado que el impacto de la ola inicial de los minipúblicos deliberativos todavía era bastante limitado, en la década de 2010 los teóricos de la democracia deliberativa adoptaron un «giro sistémico» y comenzaron a insistir en la necesidad de desarrollar múltiples espacios conectados, entre los cuales los minipúblicos son apenas una de las materializaciones¹⁶. Si se combina con una visión más realista de la deliberación, lo cual implica negociar dentro de un marco procedimental equitativo (en lugar de discutir y pactar desde posiciones contrapuestas)¹⁷, y una comprensión funcional de los respectivos sistemas (basados en una división del trabajo entre los diferentes espacios), este cambio ayuda a alinear la teoría deliberativa con la labor concreta de quienes aplican las reformas, ejercen la práctica y realizan el

15. Simone Chambers: «Rhetoric and the Public Sphere: Has Deliberative Democracy Abandoned Mass Democracy?» en *Political Theory* vol. 37 N^o 3, 6/2009; Cristina Lafont: *Democracy without Shortcuts*, Oxford UP, Oxford, 2020.

16. John Parkinson y Jane Mansbridge (eds.): *Deliberative Systems*, Cambridge UP, Cambridge-Nueva York, 2012.

17. J. Mansbridge et al.: «The Place of Self-Interest and the Role of Power in Deliberative Democracy» en *The Journal of Political Philosophy* vol. 18 N^o 1, 2010.

asesoramiento, tareas indispensables para organizar los minipúblicos. Mediante la hibridación, la teoría de la democracia deliberativa ha generado un imaginario cada vez más poderoso. Lo ilustra un informe publicado en 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que llama a establecer minipúblicos seleccionados aleatoriamente y sostiene que «si se institucionalizan, tienen el potencial para ayudar a abordar algunas de las principales causas del malestar con la democracia»¹⁸.

Este imaginario sigue estando marcado por sus raíces y no incita a una movilización popular. Ante todo, alude a aquellos individuos que se encuentran en una posición de poder; sugiere que esas personas deben reinterpretar los valores en los que se cimienta la legitimidad democrática y, por consiguiente, deben reformar las instituciones existentes. La sociedad moderna es vista como una estructura plana y exenta de relaciones de poder (casi nunca se usa este concepto), con desigualdades limitadas pero con una pluralidad de intereses y valores. Se supone que las democracias liberales –el punto de referencia de este imaginario– representan ese pluralismo dentro de un contexto convenientemente regulado y pacífico, que posibilita negociaciones estructuradas entre diferentes grupos de interés y un sistema deliberativo integral. No obstante, para no ser destruidas por una crisis de legitimidad, en el siglo XXI consideran que las democracias deben adaptarse. Este cambio debe ser gradual, y la deliberación pública está llamada a jugar un papel central. Es necesario elaborar un sistema deliberativo que subsuma todo tipo de negociación y canalice las emociones políticas, preservando al mismo tiempo la pluralidad de intereses y valores, alentando la resolución cooperativa de conflictos y promoviendo la justicia social. El imaginario de la democracia deliberativa asume una visión ambivalente de los partidos políticos: por un lado, expresan la pluralidad de intereses y valores pero, por el otro, su actual evolución aumenta cada vez más el riesgo de que se reduzcan a meras facciones dedicadas exclusivamente a defender intereses específicos. En ese sentido, como parte de un proyecto más amplio orientado a elaborar un sistema deliberativo, los minipúblicos seleccionados aleatoriamente pueden ayudar a mejorar el gobierno representativo. Se trata de una de las materializaciones institucionales más plenas de la democracia y del

Mediante la hibridación, la teoría de la democracia deliberativa ha generado un imaginario cada vez más poderoso

18. OCDE: *Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wave*, OCDE, París, 2020, p. 25.

esquema racional de consenso y desacuerdo. Este imaginario afirma ser opuesto al populismo.

Por último, cabe destacar que las experiencias desarrolladas a lo largo de la década de 2010 dieron lugar a la evolución significativa de un aspecto en el imaginario de la democracia deliberativa. Tanto entre quienes ejercían sus funciones en la práctica como entre muchos de los teóricos, los minipúblicos encarnaban hasta entonces una suerte de elitismo deliberativo: la noción de democracia directa generaba un gran escepticismo, ya que muchos creían que los ciudadanos comunes no podían deliberar racionalmente a menos que las condiciones fueran ideales. Los minipúblicos habían sido diseñados en primer lugar como complementos consultivos de la democracia representativa. Debido a la mayor crisis de representación, por un lado, y a experiencias democráticas bastante exitosas que combinan minipúblicos y referendos, por el otro, este imaginario se vio forzado a concebir una transformación más amplia, que integra el potencial empoderamiento de minipúblicos más vinculados a los procesos de toma de decisiones o incluso institucionalizados (como en el caso del Consejo Ciudadano permanente, establecido en la Comunidad Germanoparlante de Bélgica, las comisiones deliberativas mixtas del Parlamento de Bruselas o la asamblea ciudadana de París). El informe de la OCDE y el discurso del presidente Emmanuel Macron sobre el advenimiento de una nueva «república de deliberación permanente»¹⁹ son dos ejemplos paradigmáticos de este imaginario.

Democracia antipolítica

El imaginario de democracia antipolítica deriva de una afinidad electiva con el fundamento de la igualdad democrática: la existencia de un sentido común compartido por todos los ciudadanos. Este imaginario es anterior al que se asocia con la democracia deliberativa, ya que fue adoptado por el primer partido europeo en defender el regreso del sorteo a la política: el Frente dell'Uomo Qualunque (Frente del Hombre Común), creado en 1945 en Italia por Guglielmo Giannini. En las elecciones de 1946 para la Asamblea Constituyente, el partido obtuvo un porcentaje superior a 5% de los votos y se convirtió así brevemente en el quinto más popular del país. El Frente ayudó a popularizar dos términos que luego se siguieron utilizando en gran medida con un sentido peyorativo: *qualunquismo*, que representa una actitud de indiferencia y desdén por la política y las cuestiones sociales;

19. «Emmanuel Macron lors du 'grand débat': 'Ce qui remonte, c'est la fracture sociale'» en *Le Monde*, 16/1/2019.



y *antipolítica*, que implica un rechazo radical a los partidos y la idea de que uno debe ir más allá de la política para establecer un sistema que sirva al interés común²⁰.

En el imaginario de Giannini, la política partidista era simplemente una «farsa» y no había grandes diferencias entre las democracias electorales y sus contrapartes autoritarias. Se incitaba a las masas humilladas a liberarse de la «tiranía» de los políticos. Ya según la lógica de Henri de Saint-Simon, una vez derrocada esta pequeña oligarquía, la sociedad moderna podría «sustituir el gobierno de personas por la administración de cosas»²¹. Giannini agregaba que lo único que se necesitaba para controlar a esos administradores era un «contador» colectivo; imaginaba la presencia de «unos pocos representantes de la comunidad» seleccionados al azar y una rápida alternancia de puestos, dado que cualquier persona adulta de mediana inteligencia sería «suficientemente competente para la tarea»²².

Este imaginario luego fue aprovechado por Peter Dienel para pronunciarse en favor de las células de planificación; y se popularizó mucho en la década de 2000, cuando los horizontes de expectativa quedaron trastocados por completo. Fue adoptado por el Movimiento 5 Estrellas en Italia. Entre la creación del partido en 2009 y su acceso a puestos gubernamentales en 2018, promovió de manera constante la aplicación del sorteo en la política. El imaginario antipolítico y empresarial también prosperó en cientos de blogs antisistema sin filiación política (gestionados con frecuencia por gente perteneciente al mundo de las nuevas tecnologías) y en muchos grupos utopistas extraacadémicos, que buscan ir más allá de la tradicional división derecha-izquierda. Entre los ejemplos se cuentan el ecologista Ernest Callenbach y el fundador de Mastercard, Michael Phillips, cuyo importante trabajo colaborativo de 1985 suele ser citado en estudios internacionales sobre el sorteo²³. Asimismo, desde su sede en la ciudad de Exeter, la editorial británica Imprint Academic ha publicado una gran cantidad de libros con propuestas de modelos políticos basados en este mecanismo. Este imaginario está también en el corazón de la iniciativa ciudadana lanzada por el multimillonario Adrian Gasser para

20. Cabe señalar que los conceptos de democracia deliberativa y democracia radical son utilizados por los actores para describir sus propias teorías, mientras que el de democracia antipolítica, con la excepción de George Konrad, suele ser una etiqueta (peyorativa) con que se califica desde afuera.

21. Esta perspectiva también puede verse en algunos sectores libertarios y socialistas, e incluso, aunque de forma parcial, en la obra de Jean-Jacques Rousseau.

22. G. Giannini: *La Folla. Seimila anni di lotta contro la tirannide* [1945], Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, pp. 60-61, 74, 138-139 y 151-160. El trabajo fue analizado en profundidad por Nadia Urbinati y Luciano Vandelli: *La democrazia del sorteggio*, Einaudi, Turín, 2020; sin embargo, desde el punto de vista de estos autores, el proyecto de Giannini encarna más la idea general del sorteo que la de los imaginarios posibilitados.

23. E. Callenbach y M. Phillips: *A Citizen Legislature* [1985], Imprint Academic, Exeter, 2008.

intentar imponer la selección aleatoria de jueces federales en Suiza²⁴. A su vez, las asambleas ciudadanas seleccionadas por sorteo en Islandia en 2009 y 2010 fueron impulsadas por un objetivo de gestión similar, después de la crisis económica y política que puso al país de rodillas²⁵.

A diferencia de la democracia deliberativa, lo que mueve a este imaginario es un rechazo radical a los partidos políticos y al gobierno representativo, asociados en ambos casos con corrupción, luchas internas y elites autoproclamadas que trabajan para defender sus intereses específicos. Por lo tanto, el imaginario antipolítico llama a generar un cambio que derroque por completo a la oligarquía política (en algunas variantes más izquierdistas, también se apunta a la oligarquía capitalista). Desde esta perspectiva, mientras nuestra sociedad actual está estructurada por luchas por el poder entre la población y las elites, la gente común no aparece dividida por tensiones esenciales ni por una pluralidad de intereses y valores. En consecuencia, los minipúblicos compuestos por ciudadanos comunes seleccionados aleatoriamente pueden convertirse en la materialización institucional más plena de la administración de cosas y de un consenso razonable. Algunos sostienen que los minipúblicos son en realidad la única representación de este último objetivo, en tanto que otros (como los «chalecos amarillos») creen que se los debe combinar con la democracia directa. Por ende, el sorteo y las iniciativas ciudadanas podrían formar parte del mismo imaginario: «Aquí se ve a la gente de manera unificada, sin divisiones partidarias, sin ideologías, como la suma de individuos libres cuya voluntad puede averiguarse mediante un simple mecanismo, que les formule una pregunta o seleccione entre ellos al azar a un cierto número de personas para que deliberen en su nombre»²⁶.

Esta actitud quizás explique por qué el imaginario antipolítico es compartido por algunos cuya perspectiva es gerencial con otros que se remiten a Rancière o a la tradición anarquista. Estos últimos han desarrollado una teoría de la democracia centrada en el conflicto político, pero para ellos el conflicto democrático no se juega en las relaciones de dominación sociológicamente determinadas sino, más bien, en la oposición entre aquellos («la parte sin parte») que no tienen ningún papel en el uso del poder estatal y la oligarquía que lo monopoliza. Su ocasional referencia aprobatoria a

Lo que mueve al imaginario antipolítico es un rechazo radical a los partidos políticos y al gobierno representativo

24. V. sitio web de *Justiz Initiative*, <www.justiz-initiative.ch/startseite.html>.

25. Lionel Cordier: «Échapper à la conflictualité? Le tirage au sort comme outil de management et d'union nationale» en *Raisons Politiques* N° 82, 2021, pp. 91-105.

26. S. Hayat: «Les Gilets jaunes et la question démocratique» en *Contretemps*, 26/12/2018.

la teoría de Rancière es paradójica porque, aunque están de acuerdo con él en que el sorteo es democrático y, al igual que él, se niegan a analizar sociológicamente la división interna de la población, imaginan una sociedad futura libre de conflictos, una conclusión profundamente ajena al pensamiento de Rancière.

De ahí que, en los círculos antipolíticos, algunos no se sientan atraídos por la idea de una «democracia epistémica» basada en el muestreo representativo. Sostienen, en cambio, que el sorteo garantizaría por su naturaleza la representación de todas las perspectivas populares, sin tener que recurrir a la búsqueda activa de un microcosmos sociológicamente diverso. Como dice Étienne Chouard: «El sorteo impide intrínseca y automáticamente a los ricos monopolizar el poder y acumular privilegios. A los ricos (el 1%) les gusta naturalmente el sistema electoral. Los pobres (el 99%) deberían defender el sorteo con la misma naturalidad».

El rechazo de la sociología permite entender por qué este imaginario es compartido tanto por enfoques empresariales como por otros que se vinculan a Rancière o a la tradición anarquista. Esta última mirada desarrolla una teoría de la democracia centrada en el conflicto político y conceptualiza el sorteo como una institución democrática, que hace justicia a las contingencias del orden político y enfatiza, ante todo, la capacidad radicalmente igualitaria de todos los ciudadanos para gobernar. Se trata de un conflicto que no es parte de las relaciones de dominación determinadas en un plano sociológico, sino que se despliega como contraposición entre los «sin parte» en el poder del Estado y la oligarquía que monopoliza ese poder. Paradójicamente, esto habilita a los actores de la antipolítica a movilizar la teoría de Rancière: comparten su hipótesis sobre la calidad democrática del sorteo y se rehúsan a realizar un análisis sociológico de las divisiones internas en el seno del pueblo, pero lo hacen imaginando una sociedad futura libre de conflictos, con lo cual arriban a una conclusión muy lejana al pensamiento de Rancière.

Democracia radical

La democracia radical es un imaginario antiguo, pero solo recientemente incluyó el sorteo. Tanto los teóricos como los activistas se mostraron inicialmente reticentes, dado que el mecanismo debía ser implementado por la elite gobernante de arriba hacia abajo y podría favorecer el consenso en lugar de la democracia agonística y la transformación radical. En 2019, John Gastil y Erik Olin Wright publicaron un manifiesto teórico colectivo, que exploraba desde diferentes puntos de vista la idea de un cuerpo

legislativo seleccionado al azar²⁷. No obstante, varios exponentes de la democracia radical, como Chantal Mouffe e Íñigo Errejón, siguen siendo escépticos o se oponen al sorteo²⁸.

El diagnóstico de la situación actual de los partidarios de la democracia radical es muy distinto del que ofrecen los impulsores de la democracia deliberativa: considera que la democracia opera en un mundo esencialmente injusto, que está gobernado por relaciones de poder entre, por un lado, las elites político-económicas y, por el otro, el pueblo (sobre todo, las clases subalternas)²⁹. En tales sociedades, sería una mera ilusión creer en un cambio producido únicamente a través de la deliberación democrática.

Esta situación implica que se debe prever la transformación simultánea de la política y la sociedad³⁰ y que la política tiene una dimensión agonista. No obstante, a diferencia de lo que piensan los impulsores de la democracia antipolítica, los demócratas radicales sostienen que la estratificación social y los clivajes políticos no pueden reducirse a una simple oposición entre el 1% y el 99%. Las contradicciones y el agonismo no desaparecerán en una sociedad más justa, que seguirá marcada por la pluralidad de intereses y valores. La política, sostienen, nunca se reducirá a la administración de cosas y mantendrá su carácter «emocional y trágico», como el del escenario ateniense descrito por Cornelius Castoriadis³¹.

Los demócratas radicales sostienen que la estratificación social y los clivajes políticos no pueden reducirse a una simple oposición entre el 1% y el 99%

La democratización de la democracia constituye una «utopía real» (Erik Olin Wright), un horizonte de transformación radical que como tal es inalcanzable, pero hacia el cual, de todos modos, debemos dirigirnos. Esta estrategia supone «reformas revolucionarias» (André Gorz), sin creer que un solo centro podrá integrar a todos los actores ni que un solo momento decisivo podrá convertir la sociedad actual en un mundo ideal.

27. J. Gastil y E.O. Wright (eds.): *Legislature by Lot: An Alternative Design for Deliberative Governance*, Verso, Londres, 2019.

28. Jorge Costa Delgado: «Resistencias a la introducción del sorteo entre el asamblearismo y la institucionalización: el caso de Podemos Cádiz» en *Daimon. Revista Internacional de Filosofía* Nº 72, 9-12/2017.

29. Archon Fung: «Deliberation before the Revolution: Toward an Ethics of Deliberative Democracy in an Unjust World» en *Political Theory* vol. 33 Nº 3, 2005.

30. E.O. Wright: «Postscript: The Anticapitalist Argument for Sortition» en J. Gastil y E.O. Wright (eds.): *Legislature by Lot*, cit.

31. C. Castoriadis: *La cité et les lois. Ce qui fait la Grèce 2, séminaires 1983-1984*, Seuil, París, 2008; v. José Luis Moreno Pestaña: *Retorno a Atenas. La democracia como principio antioligárquico*, Siglo Veintiuno, Madrid, 2019.

**Resulta paradigmático
que Extinction
Rebellion defiende
tanto la desobediencia
civil como las
asambleas ciudadanas
seleccionadas
por sorteo**

La transformación radical puede concebirse como un ecosistema, aunque la idea misma de un «sistema» no concuerda con el imaginario de democracia deliberativa: en lugar de basarse en una división armónica del trabajo, el ecosistema se desarrolla con un equilibrio frágil, que constantemente negocia tensiones entre depredadores y presas, y donde la introducción de nuevos elementos en conflicto con las condiciones existentes puede cambiar la dinámica general. Surge el desafío de conectar instituciones con movimientos radicales de protesta, o momentos deliberativos con agonistas. Aun cuando sea poco realista pensar que las tensiones inherentes habrán de resolverse sin inconvenientes, se hace necesario asumir ese desafío³². Desde este punto de vista, resulta paradigmático que Extinction Rebellion defienda tanto la desobediencia civil como las asambleas ciudadanas seleccionadas por sorteo. Por lo tanto, queda relativizado el valor de la imparcialidad que en general se atribuye a los minipúblicos deliberativos: la urgencia de la transformación social y ecológica justifica los vínculos establecidos por ambientalistas radicales con miembros de la CCC francesa o la politización producida en su interior. El siglo xx ha demostrado que se debe ir más allá de las tradiciones schmittianas o leninistas, las cuales aún guían a muchos movimientos radicales de izquierda³³. Las instituciones basadas en el ideal deliberativo y encolumnadas detrás de la herramienta del sorteo deberán ser parte de la sociedad del mañana. Parafraseando a Marx, podemos decir que esas instituciones constituirán una de las formas políticas de la emancipación social; y gracias a las experiencias que actualmente están en marcha, también podemos anticipar –al menos en parte– cómo se configurarán.

El imaginario de democracia radical es ambivalente en lo referido a los partidos políticos y al gobierno representativo. Por un lado, estos órganos permiten expresar una pluralidad de intereses y valores, y algunos partidos de masas han ayudado inmensamente a canalizar la lucha de las clases trabajadoras. Además, parece poco realista imaginar una transformación radical sin coordinar los esfuerzos de minipúblicos, movimientos sociales

32. Andrea Felicetti y Donatella della Porta: «Joining Forces: The Sortition Chamber from a Social-Movement Perspective» en J. Gastil y E.O. Wright (eds.): *Legislature by Lot*, cit.

33. Slavoj Žižek, quien defiende tanto la «lotocracia» como el «terror democrático» desde una perspectiva leninista, es una excepción. Miguel Lorenci: «Žižek, un torbellino filosófico» en *La Verdad*, 30/6/2017.

y partidos políticos. Sin embargo, los gobiernos representativos tradicionales siempre han tenido un marcado rasgo aristocrático, y los partidos de masas como organizadores de las clases trabajadoras en torno de una agenda progresista ya son en gran medida algo del pasado. Desde esta perspectiva, el gobierno representativo va en camino de convertirse en lo que fue durante el siglo XIX y lo que es en la mayoría de los países del Sur global: un gobierno de, por y para las elites privilegiadas. Sin una transformación radical de las instituciones existentes, las clases relegadas jamás podrán jugar un papel central. Es cada vez más necesario considerar otros elementos del ecosistema democrático para tratar de identificar nuevas formas de avanzar. En este sentido, la institucionalización de minipúblicos deliberativos es un importante objetivo estratégico porque da voz a ciudadanos comunes, a quienes el sistema representativo y una gobernanza informal dominada por actores privados les impiden, en general, ejercer cualquier influencia. Los minipúblicos constituyen así un paso crucial hacia el ideal de autogobierno.

Conclusiones

Como hemos visto, muchos actores diferentes han abogado por el sorteo, una herramienta que configura varios imaginarios de política y sociedad con características diametralmente opuestas en numerosos aspectos. Los paladines de la democracia deliberativa fueron los primeros en proponer mecanismos de sorteo y también lograron conceptualizar los minipúblicos. De modo recíproco, estos han ofrecido una especie de laboratorio a la teoría de la democracia deliberativa. Algunos de sus exponentes se mantienen indiferentes respecto al sorteo, mientras que otros apoyan firmemente el desarrollo de los minipúblicos, que dan credibilidad empírica a la democracia deliberativa a los ojos de quienes ejercen la práctica. Sin embargo, esta teoría y el imaginario resultante no hacen casi referencia a las relaciones de poder ni a una transformación radical de la sociedad.

El imaginario de democracia antipolítica parece estar en un *impasse* estratégico debido a su hipótesis ingenua de un pueblo unificado, aunque hay franjas cada vez más amplias de la sociedad que se movilizan bajo sus consignas en busca de un cambio social. Como consecuencia, este imaginario ha tenido un verdadero impacto en la opinión pública, con una influencia indirecta pero significativa en lo que respecta a la popularización del sorteo. No solo se mezcla fácilmente con un imaginario empresarial muy difundido en los ámbitos profesionales vinculados a

la alta tecnología, sino que también prospera en sectores anarquistas, donde el antagonismo entre el 1% y el 99% se yuxtapone a una fuerte perspectiva antisociológica. El imaginario de democracia radical, por su parte, implica una especie de «utopía real» que parece recurrir a una visión más creíble de las relaciones de poder y a la convicción de que la democratización de la democracia provendrá de la relación dialéctica entre el sorteo, los movimientos sociales y los partidos políticos. Con un lenguaje directo, este imaginario generó una cantidad limitada de experiencias, pero indirectamente también sirvió para destacar el perfil del sorteo y para influir en la CCC celebrada en Francia.

Hasta cierto punto, estos imaginarios han sido capaces de fomentar experiencias en forma conjunta porque, en parte, coinciden en las supuestas virtudes del sorteo: imparcialidad e igualdad democrática, entendida esta última en relación con la lógica de representación descriptiva y, en menor grado, con la calidad epistémica producida por la deliberación de ciudadanos comunes y corrientes. De todos modos, si el procedimiento vuelve a adquirir importancia, es probable que los imaginarios terminen confrontando entre sí de manera más directa. Una sociedad reconciliada y gobernada con políticas consensuadas no está a la vuelta de la esquina. ☐

POLÍTICA y gobierno

Segundo semestre de 2021

Ciudad de México

Volumen XXVIII N° 2

ARTÍCULOS: **Alejandra Armesto**, Sobornos en servicios sociales y preferencias redistributivas en América Latina. **Patricio Daniel Navia** y **Vicente Faúndez Caicedo**, El cumplimiento de promesas presidenciales: El caso de Chile, 1990-2017. NOTAS DE INVESTIGACIÓN: **Ernesto Calvo**, **Paula Clerici** y **Sebastián Vallejo Vera**, Ciencia y política en tiempos del covid-19. DOSSIER TRES AÑOS DE LA 4T: **Edwin F. Ackerman**, Posneoliberalismo realmente existente en México. **Caroline Beer**, Contradicciones y conflicto entre la Cuarta Transformación y el movimiento feminista. **Kathleen Bruhn**, AMLO y su partido. **Guadalupe Correa-Cabrera**, Seguridad en México en tiempos de la 4T. DIÁLOGOS ENTRE AUTORES: **Julio Ríos-Figueroa**, **Brett J. Kyle** y **Andrew G. Reiter**, Intervencionismo militar en las democracias latinoamericanas.

Política y Gobierno es una publicación semestral de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Carretera México-Toluca 3655, Km 16,5, Lomas de Santa Fe, 01210 Ciudad de México. Apartado postal 116-114, 01130 Ciudad de México. Tel.: 727.9836/727.9800, ext. 2202. Fax: 570.4277/727.9876. Correo electrónico: <politicaygobierno@cide.edu>. Página web: <www.politicaygobierno.cide.edu>.

Posverdad, *fake news* y extrema derecha contra la democracia

Steven Forti

Las noticias falsas no son un fenómeno nuevo, pero su articulación con la difusión de las redes sociales y plataformas de internet está transformando su amplitud y naturaleza. Al mismo tiempo, las extremas derechas han sabido adaptarse a esta nueva ecología comunicacional y han sacado provecho de ella. Hoy la denominada «posverdad» desborda los márgenes y atraviesa la prensa convencional e incluso los parlamentos.

Sobre la posverdad se ha escrito mucho en el último lustro. El Diccionario de Oxford, que la eligió como palabra del año en 2016, la definió como las «circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las referencias a emociones y a creencias personales». Según Lee McIntyre, «la posverdad no es tanto la afirmación de que la verdad *no existe*, sino la de que *los hechos están subordinados a nuestro punto de vista político*». El filósofo estadounidense considera que a diferencia de las mentiras y los bulos del pasado, «ahora el campo de batalla abarca toda

Steven Forti: es historiador y analista político. Se desempeña como profesor asociado en Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador del Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nueva de Lisboa. Es miembro del consejo editorial de *CTXT, Política & Prosa e Il Mulino*. Es coautor de *Patriotas indignados. Sobre la nueva ultraderecha en la Posguerra Fría* (con Francisco Veiga et al., Alianza, Madrid, 2019) y autor de *Extrema derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla* (Siglo Veintiuno España, Madrid, 2021).

Palabras claves: democracia, extrema derecha, *fake news*, posverdad, Europa.

Nota: este artículo es una reelaboración del capítulo «Las nuevas tecnologías como arma: posverdad y *fake news*» del libro *Extrema derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla*.

la realidad factual»¹. Se habría dado, pues, un salto de calidad respecto a las décadas anteriores por la hibridación de los viejos y los nuevos medios, que comportaría la «sofisticación de las viejas reglas de la propaganda, basadas en la exageración y la simplificación, la ridiculización del adversario, la mentira, la desinformación, la difusión de bulos y la propagación de teorías conspirativas»². Efectivamente, para Maurizio Ferraris, la posverdad nace del encuentro entre una corriente filosófica (el posmodernismo), una época histórica (la documedialidad) y una innovación tecnológica (internet). Se trataría, en consecuencia, de «un fenómeno radicalmente nuevo respecto a las mentiras clásicas», ya que «la verdad alternativa se presenta como la crítica (en nombre de la libertad) hacia algún tipo de autoridad dotada de un valor veritativo y, en concreto, de la ciencia o de los expertos en general»³.

En realidad, el proceso empezó hace décadas con el cuestionamiento y la negación de la ciencia cuando, como en el caso de las compañías tabacaleras sobre los daños del tabaco o el de las industrias de los combustibles fósiles sobre el calentamiento global, se trabajó para sembrar la duda y aprovecharse de la confusión pública. El declive de los medios tradicionales —junto con el sesgo mediático, que creó equivalencias falsas y una cobertura distorsionada de la realidad—, el auge de las redes sociales y la creación de medios de comunicación «alternativos» se solaparon a fenómenos que la psicología social descubrió hace tiempo, como la disonancia cognitiva, la conformidad social y el sesgo de confirmación. Así, en la que Ferraris llama la «era de la documedialidad»⁴, que podríamos definir más sencillamente como «era de la posverdad» o de la «tecno-democracia», el «proceso de atomización» de la sociedad se ha «reforzado por la metamorfosis del pacto social»⁵. Los rasgos fundamentales que explicarían la relación causal entre documedialidad y posverdad serían, según el filósofo italiano, la viralidad, la persistencia, la mistificación, la fragmentación y la opacidad. Como apunta el periodista británico Matthew d'Ancona, la posverdad viene a ser entonces el *software*, mientras que la tecnología digital sería el *hardware*⁶.

1. L. McIntyre: *Posverdad*, Cátedra, Madrid, 2018, pp. 41 y 43.

2. David García-Marín y Roberto Aparici: «Estrategias de la posverdad y política-cyborg» en R. Aparici y D. García-Marín (coords.): *La posverdad. Una cartografía de los medios, las redes y la política*, Gedisa, Barcelona, 2019, p. 116.

3. M. Ferraris: *Posverdad y otros enigmas*, Alianza, Madrid, 2019, pp. 49 y 53.

4. Neologismo con el que el autor define el medio técnico que hizo posible la posverdad: la unión entre la fuerza normativa de los documentos y la penetración de los medios de comunicación de la era de internet.

5. *Ibíd.*, p. 69.

6. M. d'Ancona: *Posverdad. La nueva guerra en torno a la verdad y cómo combatirla*, Alianza, Madrid, 2019, p. 77.

Consecuentemente, la posverdad se puede concebir como una especie de marco de referencia para muchas más cosas. Se trata, en síntesis, de «una condición previa y elaborada» o «una idea, un imaginario, un conjunto de representaciones sociales o sentidos ya incorporados por las audiencias y desde donde son posibles *fake news* que refieren a esa idea afirmándola o ampliándola»⁷. Según la crítica literaria Michiko Kakutani, además, no se trata solo de noticias falsas: también hay «ciencias falsas (fabricadas por los negacionistas del cambio climático o los antivacunas), una historia falsa (promovida por los supremacistas blancos), perfiles de ‘estadounidenses falsos’ en Facebook (creados por troles rusos) y seguidores o *me gusta* falsos en las redes sociales (generados por unos servicios de automatización denominados *bots*)»⁸. Algunos especialistas consideran que antes que de *fake news* sería más apropiado hablar de desinformación, ya que esta «no comprende solo la información falsa, sino que también incluye la elaboración de información manipulada que se combina con hechos o prácticas que van mucho más allá de cualquier cosa que se parezca a noticias, como cuentas automáticas (*bots*), videos modificados o publicidad encubierta y dirigida»⁹.

La capacidad de penetración de las redes sociales es de hecho incomparable con la de los medios de comunicación tradicionales. Por un lado, por una cuestión de números: según el *Informe digital 2021* publicado por Hootsuite y We Are Social, en enero de 2021, 55,1% de la población mundial, es decir 4.300 millones de personas, emplea de forma habitual una red social. Por el otro, porque internet y su evolución hacia la web 2.0 han permitido superar la comunicación unidireccional de los medios tradicionales —prensa, radio y televisión— y llegar a una interacción con el público, facilitando su activación y participación. De la audiencia, en síntesis, se ha pasado al concepto de usuario, es decir alguien que puede crear, editar y compartir contenido generado por él.

Sin embargo, el salto de calidad respecto al pasado del que habla Ferraris no se da solo por esas dos características. A ellas debemos añadir otros elementos absolutamente novedosos, como la perfilación de datos psicométricos

**Algunos
especialistas
consideran que
antes que de *fake
news* sería más
apropiado hablar de
desinformación**

7. Leonardo Murolo: «La posverdad es mentira. Un aporte conceptual sobre *fake news* y periodismo» en R. Aparici y D. García-Marín (coords.): *La posverdad*, cit., p. 68.

8. M. Kakutani: «La muerte de la verdad» en *Ethic*, 12/4/2019.

9. Simona Levi (dir.): *#FakeYou. Fake news y desinformación*, Rayo Verde, Barcelona, 2019, pp. 23-24.

extraídos de las redes sociales para anticipar con precisión las ideas y decisiones individuales, la personalización de la propaganda y la capacidad de los *bots* para imponer agendas y manipular el peso de las informaciones que se difunden. Un caso sintomático es el que reveló el escándalo de Cambridge Analytica, que influyó notablemente en el referéndum británico y las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Se trata de procesos que, además, han evolucionado –y siguen evolucionando– muy rápidamente gracias a la inteligencia artificial o el *machine learning* (aprendizaje automático) que permiten el uso de algoritmos cada vez más elaborados. En el caso de los *bots*, por ejemplo, de las cuentas automáticas fácilmente identificables se ha pasado a las cuentas *sybils* y *cyborgs*, es decir cuentas que fingen ser humanos o cuentas llevadas por humanos pero asistidos por *bots*. Como apunta Simona Levi, «la peculiaridad de la situación actual es que los sesgos [informativos] se pueden generar de forma predictiva y se pueden configurar automáticamente. Es lo que se conoce como ‘gobernanza algorítmica’»¹⁰. El cambio es realmente radical. Obviamente, también en este caso, como ya apuntaba McIntyre, ciertas actitudes cognitivas operan de por sí en el comportamiento humano, pero «los algoritmos de personalización tratan de explotarlas para maximizar el *engagement*, y de este modo las refuerzan»¹¹.

Esto explicaría fenómenos como los filtros burbuja y las cámaras de eco –conectados directamente con el sesgo selectivo o el de confirmación– que producen el gregarismo online y un aumento de la polarización tanto ideológica –es decir, de las opiniones– como de red –es decir, de la estructura de las interacciones–. La era de la posverdad parece pues haber enterrado la visión tecnoutopista de la red que había prosperado en los años 90 y los primeros años 2000 para mostrar el lado oscuro de internet¹².

La extrema derecha 2.0 en la era de la posverdad

La diferencia respecto de otras corrientes políticas e ideológicas es que la extrema derecha 2.0 ha sabido leer mejor que las demás los cambios de la sociedad antes mencionados, aprovecharse de las debilidades y las grietas de las democracias liberales y entender las posibilidades que ofrecen las nuevas

10. S. Levi: ob. cit., pp. 96-97.

11. Emanuele Cozzo y Luce Prignano: «Fake news, polarización en línea y filtros burbuja» en S. Levi: ob. cit., p. 111.

12. Al respecto, v. Evgeny Morozov: *El desengaño de internet. Los mitos de la libertad en la red*, Destino, Barcelona, 2012.

tecnologías. Como apunta D'Ancona, el «desplome de la confianza es la base social de la era de la posverdad»: dado que las instituciones que tradicionalmente han actuado como árbitros sociales se han desacreditado, «los grupos de presión, generosamente financiados, han inducido al público a cuestionar la existencia de una verdad fiable de forma concluyente», lo que lleva a una «batalla interminable por definirla, la batalla de tus 'hechos' contra mis 'hechos alternativos'»¹³. ¿Qué es, si no, el concepto de *hechos alternativos* acuñado por la consejera jefe de Donald Trump, Kellyanne Conway, para negar que a la toma de posesión del líder republicano de 2016 haya acudido menos gente que a la de Barack Obama? De fondo, hay una idea, con un cierto sabor nietzscheano y posmoderno, bien expresada por el ensayista ruso de ultraderecha Aleksandr Dugin: «la verdad es una cuestión de creencia (...) los hechos no existen».

La ultraderecha ha entendido, pues, que las fragilidades y las vulnerabilidades existentes pueden ser explotadas: deconstruyendo la realidad compartida y sembrando confusión se puede polarizar aún más a la sociedad y sacar provecho en el plano electoral. De ahí su interés y sus esfuerzos para generar y difundir noticias falsas: en la campaña electoral estadounidense de 2016, la gran mayoría de las *fake news* eran mensajes pro-Trump u hostiles a Hillary Clinton, mientras que en Polonia las páginas de *fake news* calificadas como conservadoras son el doble que las progresistas¹⁴.

Evidentemente, para que todo esto tenga un resultado, debe haber un terreno abonado. Por un lado, las redes sociales se han convertido en una de las principales vías para informarse, sustituyendo en buena medida a los medios tradicionales. Según un estudio del Pew Research Center de 2016, 62% de los adultos estadounidenses se informa a través de las redes sociales, cuando en 2012 el porcentaje era de 49%. Más concretamente, 44% de ellos se informa vía Facebook, que se ha convertido, al menos hasta ahora, en la principal red social para informarse y, consecuentemente, en el canal más útil para difundir bulos¹⁵. Por otro lado, las mentiras se propagan más rápido que la verdad: según un artículo publicado en la revista *Science*, «las

La ultraderecha ha entendido que las fragilidades y las vulnerabilidades existentes pueden ser explotadas

13. M. D'Ancona: ob. cit., pp. 51, 63 y 25.

14. Datos extraídos, respectivamente, de Richard Gunther, Paul A. Beck y Erick C. Nisbet: «Fake News May Have Contributed to Trump's 2016 Victory», Ohio State University, 8/3/2018 y Robert Gorwa: «Computational Propaganda in Poland: False Amplifiers and the Digital Public Sphere», Working Paper N° 2017.4, Computational Propaganda Research Project, Universidad de Oxford, 2017.

15. Citado por L. McIntyre: ob. cit., p. 111.

noticias falsas llegan 20 veces más rápido [en las redes sociales] que en el contacto personal»¹⁶.

Hay dos elementos más. En primer lugar, una parte nada desdeñable de la población cree en teorías de la conspiración: según diferentes estudios, 60% de los británicos creen en, por lo menos, una teoría conspirativa, mientras que casi la mitad de los húngaros y un tercio de la población de Gran Bretaña, Alemania y Francia opinan que sus legisladores «ocultan la verdad» sobre la inmigración. Los más proclives serían los votantes de opciones conservadoras: 30% de los que votaron a favor del Brexit, de hecho, creían en la teoría del «gran reemplazo», contra solo 6% de quienes votaron por la permanencia¹⁷. En el caso de Estados Unidos, una encuesta de la empresa Ipsos de diciembre de 2016 reveló que 75% de quienes veían los titulares de *fake news* consideraban la información allí presente como exacta¹⁸.

En segundo lugar, la industria de la desinformación se basa en el éxito de los medios «alternativos» que difunden continuamente *fake news*. Se trata de medios, como *Breitbart News*, *Infowars.com*, *El Toro TV*, *ImolaOggi* y un sinfín de blogs, a menudo financiados, patrocinados o directamente creados por los líderes ultraderechistas, a los cuales se suman decenas y decenas de otros medios —desde páginas web a podcasts, pasando por canales de videos en YouTube u otras plataformas— de la galaxia de la derecha más o menos alternativa. En el caso de EEUU, una web como *The Gateway Pundit* recibió más de un millón de visitas diarias durante la campaña para las presidenciales de 2016, mientras que los podcasts de *The Right Stuff*, un blog antisemita y supremacista blanco fundado por Mike Peinovich, atraían cada semana a decenas de miles de oyentes. Según un estudio de Mediapart, las tres primeras páginas de contenido político más visitadas en Francia en 2016 eran de ideología ultra, como *egaliteetreconciliation.fr* o *fdesouche.com*, con contenido identitario y tradicionalista, fundadas por ex-dirigentes del Frente Nacional. Se trata de todo un entramado de webs que ha llevado a hablar en el país galo de la existencia de una verdadera *fachòsphere*. El partido liderado por la familia Le Pen, además, fue el primero en el Hexágono en inaugurar una página web en 1996, convencido de que para poder divulgar sus ideas era fundamental saltarse la intermediación de los medios tradicionales.

Si a esto le añadimos que los principales líderes del Partido Republicano, empezando por el entonces presidente Trump, relanzaban y alababan

16. José Antonio Gabelas y Carmen Marta-Lazo: «Los *influencers*, oráculos del liderazgo, permanes en las redes sociales» en R. Aparici y D. García-Marín (coords.): *La posverdad*, cit., p. 88.

17. Julia Ebner: *La vida secreta de los extremistas. Cómo me infiltré en los lugares más oscuros de internet*, Planeta, Barcelona, 2020, pp. 162-163 y 175-176.

18. M. d'Ancona: *Posverdad*, cit., p. 72.

públicamente a estos medios, podemos entender la potencial viralización que las noticias falsas propagadas por los llamados «medios alternativos» puede tener en las redes sociales. Además, debe tenerse en cuenta que una minoría de usuarios ligados a partidos populistas puede dominar la discusión política en las redes sociales: en el caso de Francia, Alemania, Italia, España y Polonia, menos de 0,1% de los usuarios generan aproximadamente 10% de los contenidos con carácter populista y consiguen amplificar las posiciones antiinmigración y antiestablishment al introducirlas en los debates y foros convencionales¹⁹.

La extrema derecha 2.0, en suma, ha entendido que es provechoso ampliar aún más la desconfianza existente hacia todo lo que huele a establishment, empezando por los intelectuales, los científicos y los periodistas. No es casualidad que el líder de la Liga, Matteo Salvini, haya cargado más de una vez contra los que él define de forma despectiva como los «*professoroni*», o que, en uno de sus numerosos ataques a la prensa, Trump haya llegado a afirmar que «la CNN apesta». Otro ejemplo es el haber abrazado o, como mínimo, legitimado el negacionismo científico durante la crisis del covid-19, minimizando el impacto de la pandemia, criticando las restricciones aplicadas por razones sanitarias, cuestionando las decisiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y hasta poniendo en duda la existencia misma del virus. Esta postura encaja, además, con la interpretación ultraderechista de que existe una hegemonía cultural de izquierdas que impone una agenda progresista, lo que el equipo del presidente brasileño Jair Bolsonaro define como «marxismo cultural».

La extrema derecha 2.0 ha entendido que es provechoso ampliar la desconfianza hacia todo lo que huele a establishment

Estrategias y técnicas de la propaganda ultraderechista

La nueva ultraderecha ha demostrado saber aprovechar muy bien las nuevas tecnologías para difundir *fake news* y bulos. Las estrategias y las técnicas utilizadas han sido distintas. En primer lugar, los estrategas de los partidos ultraderechistas en las campañas electorales han construido un relato basado en las emociones y los sentimientos frente a los hechos y la evidencia: lo visceral ha prevalecido netamente frente a lo racional. La «necesidad de sencillez y de resonancia emocional» ha sido clave en la victoria del

19. Alto Analytics: «Public Digital Debate Ahead of EU Parliamentary Elections», 1/4/2019, disponible en <<https://constellaintelligence.com/eu-elections-public-digital-debate/>>.

Brexit o de Trump en 2016, así como en el éxito de la Liga de Salvini en 2018²⁰. Sus eslóganes —«*Take Back Control*» (Recuperar el control), «*Make America Great Again*» (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande), «*Prima gli Italiani*» (Los italianos primero)— han conseguido conectar con los sentimientos de la ciudadanía y desplazado la reflexión racional sobre cuestiones técnicas.

Esto se conecta con los estudios de *sentiment analysis* en las redes sociales, que permiten analizar los sentimientos de las personas, sus opiniones, prejuicios y miedos, y de esta forma personalizar la propaganda e impulsar determinados mensajes frente a otros. Como apuntan Jonah Berger y Katherine L. Milkman, «el contenido que provoca emociones de alta estimulación tiene más probabilidades de ser compartido»: es decir, un post en Facebook o un tuit que provocan asombro, ansiedad o rabia están vinculados positivamente a la viralidad²¹.

**Un post o un tuit
que provocan
asombro, ansiedad
o rabia están
vinculados
positivamente a la
viralidad**

Christopher Wylie, quien trabajó en el equipo de Cambridge Analytica antes de convertirse en uno de los más famosos *whistleblowers* de la historia, confirma que en los estudios realizados por la empresa dirigida por Alexander Nix se llegó a la conclusión de que «provocar ira e indignación reducía la necesidad de obtener explicaciones racionales y predisponía a los votantes a un estado de ánimo más indiscriminadamente punitivo»²². De ahí el bulo de Bolsonaro sobre el supuesto «kit gay»

que el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, habría distribuido entre los niños de seis años en las escuelas cuando ocupó el cargo de ministro de Educación, o la mentira relanzada por Salvini sobre los 35 euros diarios que el Estado italiano habría dado a cada inmigrante. Como resume Andrew Marantz, «cuanto más incendiario era el mensaje y cuanto más alto y más enérgicamente se repetía, más atención obtenía»²³.

En su estudio sobre la Alt-Right estadounidense, el periodista de *The New Yorker* ha mostrado también cómo los memes —es decir, una imagen, un video o un texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos— son claves en esta estrategia: los algoritmos utilizados por las principales plataformas sociales «no estaban diseñados para evaluar si una idea era verdadera

20. M. d'Ancona: ob. cit., p. 29.

21. J. Berger y K.L. Milkman: «What Makes Online Content Viral?» en *Journal of Marketing Research* vol. 49 Nº 2, 2012.

22. C. Wylie: *Mindf*ck. Cambridge Analytica. La trama para desestabilizar el mundo*, Roca Editorial, Barcelona, 2020, p. 216.

23. A. Marantz: *Antisocial. La extrema derecha y la «libertad de expresión» en internet*, Capitán Swing, Madrid, 2021, p. 271.

o falsa, prosocial o antisocial, sino para medir si un meme provocaba un repunte de emociones activadoras en una gran cantidad de personas»²⁴. Esto explicaría, por ejemplo, la viralización de las ideas supremacistas blancas del columnista ultraconservador Steve Sailer, pero también que el cómico sevillano Juan Joya Borja, mejor conocido como El Risitas, se haya convertido en un ícono de la sátira política internacional. Ha sido sobre todo en Francia donde el meme del Risitas ha tenido más éxito: difundida en un principio en el foro digital Jeuxvideo, una especie de 4chan o Foro Coches galo, su imagen quedó rápidamente asociada a la ultraderecha y ha sido utilizada en una campaña de acoso virtual contra feministas o para parodiar el movimiento antirracista Black Lives Matter. Incluso el entonces número dos del Frente Nacional, Florian Philippot, hizo un guiño a este meme en 2017 al beber de una taza con la pegatina de Joya Borja en la inauguración de su canal de YouTube. La Alt-Right estadounidense ha explotado antes y más que la ultraderecha de otros países esta herramienta desde el llamado *Gamergate* de 2014 —cuando se lanzó una campaña organizada de odio contra lo políticamente correcto— hasta la *Great Meme War* de la campaña de las presidenciales de 2016. Fue en aquel contexto que, por ejemplo, el exitoso meme de Pepe the Frog se convirtió en un símbolo para el suprematismo blanco: bajo el lema «*You can't stop the Trump*» (no puedes parar el triunfo), el personaje con cara de rana y cuerpo humano creado en 2005 por Matt Furie asumió los rasgos del candidato republicano a la Presidencia de EEUU y se convirtió en *mainstream*²⁵.

Los memes se asocian a la táctica del llamado *shitposting*, literalmente «publicar mierda», es decir troleear y atacar a los adversarios políticos o sencillamente a los *normies*²⁶ y llenar de contenido de baja calidad las redes sociales para desviar las discusiones y conseguir que lo publicado en un sitio sea inútil o, como mínimo, pierda valor. El *shitposting* de hecho tiene también la función de «insensibilizar a los oyentes conforme pasa (...) el tiempo»²⁷. En resumidas cuentas, por un lado, si cada vez que entramos en una conversación en las redes sociales encontramos un sinfín de comentarios en que los insultos se mezclan con las estupideces, es muy difícil que nos interese por el post, tuit o texto que ha desencadenado esa discusión. Por el otro,

24. *Ibíd.*, p. 176.

25. Gianpietro Mazzoleni y Roberta Bracciale: *La politica pop online. I meme e le nuove sfide della comunicazione politica*, Il Mulino, Bologna, 2019.

26. Con *normies* se hace referencia a alguien «normal» que sigue las modas. La Alt-Right ha difundido el término que cobra, en palabras de Angela Nagle, un significado especialmente despectivo: «son las personas que tienen un conocimiento muy *mainstream* de internet y no están al día de lo que se está haciendo en la red». Beatriz García: «Nazis 'pop' y 'fascimodernos'. La joven derecha trol que ha convertido internet en El Club de la Lucha» en *The Objective*, 17/5/2018.

27. A. Marantz: *ob. cit.*, p. 395.

si cada día vemos comentarios despectivos y violentos en las redes, es muy probable que al cabo de unos cuantos meses o, como mucho, de un par de años nos acostumbremos a ello.

Es evidente pues que la publicación de *fake news* y teorías de la conspiración favorece tanto la viralización de las noticias como las reacciones emotivas y viscerales de un porcentaje notable de los usuarios. Es lo que explica la difusión de teorías del complot realmente increíbles como la del *Pizzagate* –según la cual los principales líderes del Partido Demócrata en EEUU, a partir de Hillary Clinton, habían creado una red de tráfico de personas y organizaban sesiones de abuso sexual infantil en restaurantes como la pizzería Comet Ping Pong en Washington–, la de QAnon –una especie de Pizzagate 2.0 que interpreta el mundo como una lucha entre el Bien y el Mal, representados por Trump y un supuesto Sistema, respectivamente– o aquella según la cual Bill Gates es el creador del coronavirus. En una realidad desconcertante y ambigua, como aquella en la que nos encontramos, las teorías conspirativas ofrecen «un molde de orden, cuya atractiva sencillez eclipsa sus absurdos»²⁸.

La viralización, además, no se queda solo en las redes sociales, sino que llega a los medios de comunicación tradicionales e inclusive a los parlamentos. Para poner un solo ejemplo, Sara Cunial, activista antivacunas y diputada italiana elegida por el Movimiento 5 Estrellas, responsabilizó al fundador de Microsoft de la creación del virus y de un supuesto plan de despoblación mediante las vacunas. El video de su intervención en la Cámara italiana en mayo de 2020 se viralizó en las redes sociales y fue traducido a diferentes idiomas, lo que le permitió conseguir una notable difusión sobre todo en América Latina, con centenas de millares de visitas. El fenómeno de la retroalimentación entre redes sociales, medios tradicionales y lugares de debate público como los parlamentos es especialmente interesante y demuestra, además, la existencia de redes globales para la difusión de los discursos ultraderechistas. Entre estas, cabe mencionar El Movimiento de Steve Bannon, pero también importantes *lobbies* –como los de armas o los vinculados al integrista cristiano– que promueven una agenda común y financian a partidos de extrema derecha, como hemos apuntado en la primera parte del volumen.

Otro ejemplo es la publicación por parte del líder de la Liga, Matteo Salvini, a finales de marzo de 2020 y en medio del primer *lockdown*, de un extracto de un programa de la televisión pública italiana de 2015 en el

La viralización llega a los medios de comunicación tradicionales e inclusive a los parlamentos

28. M. d'Ancona: ob. cit., p. 109.

que se hablaba de un experimento en un laboratorio chino para la realización de un virus a partir de los murciélagos. El video del TGR Leonardo era verdadero, pero estaba completamente descontextualizado, ya que el experimento del cual se hablaba no tenía ninguna relación con el covid-19. Sin embargo, el post en Facebook de Salvini fue visto por más de 1,5 millones de personas en menos de 24 horas y relanzado por otros políticos e *influencers* ultraderechistas en Italia, como la líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, o el periodista Mario Giordano, para luego convertirse en viral en gran parte del mundo, conectándose con los discursos de Trump sobre el «virus chino».

Si la narración emocional puede considerarse la estrategia de comunicación básica de la ultraderecha a escala global, las técnicas utilizadas son, como se ve, múltiples. Como explica la investigadora Julia Ebner, ejemplos de tácticas populares son la de «emparejar *hashtags* que son tendencia con otros de contenido extremista con el fin de vincular temas de debate populares con otros más extremos» y el denominado *hashtag stuffing*, que «consiste en apropiarse de los *hashtags* de los oponentes»²⁹. Además, los activistas de extrema derecha suelen reclutar y movilizar a simpatizantes en foros de imágenes como 4chan, 8chan, Reddit o Foro Coches para luego llevar las conversaciones a chats encriptados como Whatsapp o Telegram: ahí se organizan y coordinan las campañas que lanzan en las redes sociales más comunes, como Facebook, Twitter o Instagram, para alcanzar a un público mayor.

La viralización de mensajes, videos o memes en las redes sociales es la táctica más utilizada a través de una compleja red donde los *influencers* de extrema derecha son coadyuvados por un sinfín de perfiles falsos o automatizados –*bots* y *sockpuppets*– y activistas que practican el troleo y el *shitposting*. Como apunta Angela Nagle, la Alt-Right utilizó ampliamente antes que los demás y de forma coordinada esta técnica: «*shitposters* adolescentes formaban la reserva de un ejército de creadores de memes consistentes en imágenes graciosas, a menudo oscuras, y de estilo chanero que eran fáciles de convocar en los momentos en que se los necesitaba (...) para acudir en manada a acosar a quien se les oponía»³⁰. Cada vez son más frecuentes técnicas que rozan la ilegalidad o que son punibles como un delito, como el *doxing* –la revelación de datos personales de una persona con el fin de intimidar, silenciar y desacreditar públicamente a voces críticas y opositores políticos– o los ataques coordinados conocidos como *shit storm*, literalmente

29. J. Ebner: ob. cit., p. 141.

30. A. Nagle: *Muerte a los normies. Las guerras culturales en internet que han dado lugar al ascenso de Trump y la alt-right*, Orciny Press, Tarragona, 2018, p. 64.

«tormenta de mierda». El caso de la política de izquierdas Laura Boldrini, defensora de la acogida de migrantes, es quizás uno de los más relevantes y preocupantes. Mientras Boldrini ocupaba el cargo de presidenta de la Cámara de Diputados italiana, lanzaron contra ella una campaña online el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, ambos en la oposición por aquel entonces, que se convirtió rápidamente en un tormenta de insultos misóginos y amenazas de violación, tortura y muerte. No se trató de algo espontáneo, sino de una campaña de *hate speech* y acoso –dirigido, por más inri, contra el cuarto cargo de más importancia del Estado– coordinada principalmente por la galaxia ultraderechista del país transalpino en la cual jugó un papel crucial «la Bestia» de Matteo Salvini³¹.

A menudo estas prácticas se apoyan en lo que se ha denominado fábricas o granjas de trolls

A menudo estas prácticas se apoyan en lo que se ha denominado fábricas o granjas de trolls, es decir, empresas que se dedican a crear cuentas automatizadas, difundir noticias falsas y acosar a periodistas o usuarios en las redes sociales. Estas empresas pueden ser financiadas o creadas por gobiernos –mucho se ha hablado del caso de Rusia–, pero también montadas por individuos aparentemente no vinculados a formaciones políticas o gobiernos con el objetivo de lucrar a través de la publicidad generando tráfico en las redes –como en el caso de los jóvenes que en Macedonia crearon más de 100 páginas pro-Trump en la campaña electoral de 2016–.

A las redes sociales abiertas, como Facebook, Twitter, Instagram o TikTok, se ha sumado también la propaganda difundida en redes cerradas como WhatsApp o Telegram, posiblemente aún más eficaz. Los casos del Partido Popular Indio (BJP, por sus siglas en hindi) de Narendra Modi en la India o de Bolsonaro en Brasil son sintomáticos. Las modalidades pueden ser distintas, incluyendo también, cuando la ultraderecha se encuentra en el gobierno, la creación de medios gubernamentales de *fake news* o la adquisición de medios independientes que se convierten de un día para otro en megáfonos de la propaganda gubernamental, como en el caso de la web de noticias *Origo* en la Hungría de Viktor Orbán. O, como en el caso de Trump en EEUU, la sugerencia de seguir medios «alternativos» de la Alt-Right. Sin contar, *ça va sans dire*, que los mismos perfiles en las redes sociales del presidente norteamericano –así como los de otros líderes ultraderechistas, empezando por Salvini o Le Pen– permitían una visibilidad mucho mayor que la de cualquier medio tradicional, al menos hasta que Twitter y Facebook lo censuraron y cerraron sus cuentas. Para tener una idea, *PolitiFact* consideró

31. Ver Flavio Alivernini: *La grande nemica. Il caso Boldrini*, People, Gallarate, 2019.

que 70% de las afirmaciones que Trump hizo durante la campaña electoral de 2016 eran falsas³², mientras que *The Washington Post* calculó que durante su primer año en el cargo podría haber emitido 2.140 declaraciones que contenían falsedades o equívocos, es decir una media de 5,9 diarias³³.

En este sentido, el caso del líder liguista Salvini es especialmente interesante. Salvini es el político italiano con más seguidores en las redes sociales: en junio de 2021 superó los 4,9 millones de seguidores en Facebook y los 1,4 millones en Twitter. Por un lado, su comunicación se basa en lo que su estrategia, Luca Morisi, ha definido como la «fórmula TRT», es decir, el «círculo virtuoso televisión-red-territorio físico», con una particular utilización de las retransmisiones en directo vía Facebook Live. Por otro lado, como explica Lorenzo Pregliasco, su *framing* se centra en cuatro pilares: el *Zeitgeist*, el llamamiento a su «comunidad» –con constantes *call to action*–, la polarización –con la búsqueda continua de enemigos con los cuales establecer una dinámica de oposición– y la retórica del sentido común. Esto se junta también a otras dos características: la que se ha definido como *política pop* –con repetidas fotografías de su día a día, desde el plato de pasta que se cocina hasta consideraciones sobre el tiempo– y la *gamification*, como en el caso del concurso Vinci-Salvini. Además de aparecer un político cercano a la gente, ya que quien participaba del concurso podía ganar, entre otros premios, una llamada telefónica del líder de la Liga, el objetivo del Vinci-Salvini era aumentar exponencialmente las interacciones de sus canales sociales y conseguir los datos de los usuarios³⁴. Esto último le permitió disponer de una base de datos más amplia y profundizar con más precisión en el *sentiment analysis* para enviar una propaganda aún más personalizada gracias a un sistema que se ha llamado «la Bestia», una poderosa máquina social en la cual trabajaban en 2019 unos 35 expertos digitales que cubrían la vida de Salvini las 24 horas del día.

A fin de cuentas, esto es lo que a una escala mucho mayor hizo Cambridge Analytica influenciando de forma nada desdeñable el voto en el referéndum británico y las presidenciales estadounidenses de 2016. La empresa de Nix, dirigida también por Bannon y financiada por hombres de negocios ultraconservadores como Robert Mercer y Arron Banks, obtuvo de hecho de forma ilegal los registros completos en Facebook de casi 90 millones de

32. Cit. por L. McIntyre: ob. cit., p. 162.

33. Glenn Kessler y Meg Kelly: «President Trump Made 2,140 False or Misleading Claims in His First Year» en *The Washington Post*, 20/1/2018.

34. V., respectivamente, L. Pregliasco: «Framing e strategia comunicativa di Matteo Salvini» en Giovanni Diamanti y L. Pregliasco (eds.): *Fenomeno Salvini. Chi è, come comunica, perché lo votano*, Castelveccchi, Roma, 2019 y Laura Cervi: «Veni, vidi, Facebooked-live: análisis del éxito de Matteo Salvini en Facebook» en *Revista CIDOB d'Afers Internacionals* Nº 124, 2020.

ciudadanos en EEUU y Gran Bretaña. Como explica Wylie, «los modelos de *me gusta* en las redes sociales, las actualizaciones de estado, los grupos, los seguimientos y los clics servían como pistas discretas que podían revelar con mucha precisión el perfil de personalidad de alguien»³⁵. Los sesgos cognitivos, en suma, se usaron para «cambiar las percepciones de la gente» a través de una propaganda personalizada elaborada gracias a los algoritmos. Por un lado, se quiso «incrementar el compromiso» de los usuarios que ya mostraban interés en determinadas temáticas e ideas; por el otro, se desarrollaron formas para «confundir, desmotivar y desempoderar» a ciertos sectores de votantes. El objetivo, en síntesis, era «propagar rumores y desinformación para cambiar el resultado de las elecciones»³⁶.

Los objetivos de la ultraderecha

En la estrategia ultraderechista –en la cual, como hemos visto, las *fake news* resultan una pieza central– podemos diferenciar entre objetivos de corto y de mediano plazo. Entre los primeros, como muestra el caso de Cambridge Analytica, encontramos ganar elecciones o, más sencillamente, aumentar el consenso electoral. El Brexit, la victoria de Trump en 2016 y la de Jair Bolsonaro en 2018, pero también el éxito de la Liga en las legislativas italianas de 2018, el de Marine Le Pen en las presidenciales francesas del año anterior o el de Vox en los comicios de 2019 son ejemplos sintomáticos. Como subraya Simona Levi, «la capacidad [de las *fake news*] para modificar la intención de voto parece ser mucho más eficaz que los anuncios electorales tradicionales»³⁷. *The Washington Post*, por ejemplo, valoró que el impacto de las *fake news* fue decisivo en tres estados en los que Trump ganó por muy pocos votos (y gracias al sistema de colegio electoral)³⁸.

En cuanto a los objetivos de mediano plazo, la ultraderecha se propone socavar la calidad del debate público, promover percepciones erróneas, fomentar una mayor hostilidad y erosionar la confianza en la democracia, el periodismo y las instituciones, lo que permitiría tener el terreno mucho más abonado para la siguiente competencia electoral. De fondo, encontramos tres de las características que nos permiten definir a la extrema derecha 2.0. En primer lugar, la voluntad de sembrar confusión y polarizar a la sociedad.

35. C. Wylie: ob. cit., p. 126.

36. *Ibíd.*, pp. 183, 154, 180 y 172.

37. S. Levi: ob. cit., p. 60.

38. Aaron Blake: «A New Study Suggests Fake News Might Have Won Donald Trump the 2016 Election» en *The Washington Post*, 3/4/2018.

En un contexto de crispación y profunda división, se fomenta el pensamiento del nosotros *versus* ellos y se dificulta el consenso social y político, favoreciendo lo que Marlene Wind definió como la tribalización de la sociedad³⁹.

En segundo lugar, cobra especial relevancia la centralidad otorgada a las guerras culturales. La nueva ultraderecha es deudora de las reflexiones que Alain de Benoist y la Nouvelle Droite hicieron ya en los años 70: Bannon, quizás influenciado por Andrew Breitbart, fundador de *Breitbart News*, estaba convencido de que la batalla, antes que política, tenía que ser cultural, y que esta tenía que llevarse a cabo gracias a las nuevas tecnologías, aprovechando las grietas existentes en nuestras sociedades, favorecidas posiblemente también por el protagonismo de las políticas de identidad. Como resumió la web ultraderechista *The Right Stuff*, «la guerra de la cultura se libra cada día en tu teléfono móvil inteligente». En la visión de Bannon, pues, «una guerra cultural se gana fragmentando primero la sociedad en guetos ideológicos y culturales incommunicados que tienen visiones distintas del mundo, para luego reconstruirla según la propia visión y lograr así la hegemonía cultural»⁴⁰. Como explica D'Ancona, «el guerrero político moderno aspira a *weaponise* [utilizar como arma] las *fake news* para que se conviertan (...) en 'una bomba suicida en el núcleo de nuestro sistema de información'»⁴¹.

Como resumió la web ultraderechista *The Right Stuff*, «la guerra de la cultura se libra cada día en tu teléfono móvil inteligente»

Un ejemplo paradigmático es la llamada teoría del «gran reemplazo» —o del genocidio blanco— elaborada por Renaud Camus en una novela de 2012. El escritor francés sentó las bases de su teoría conspirativa en *El campamento de los santos*, una novela de principios de los años 70 de Jean Raspail, y en la idea de Eurabia, otra teoría del complot desarrollada por la escritora Bat Ye'or en 2005. Según Camus, en síntesis, una elite global y liberal está reemplazando a la población blanca cristiana europea con pueblos no europeos, esencialmente musulmanes, mediante las migraciones y el crecimiento demográfico. Esta teoría, que circulaba en ambientes neofascistas desde hace tiempo, se ha convertido en *mainstream* en los últimos años, sobre todo a partir de la crisis de los refugiados de 2015. Fue entonces, además, cuando se añadió la figura del financista judío de origen húngaro Georges Soros como el «gran titiritero» que estaría detrás de esta operación de sustitución étnica, juntando así islamofobia y antisemitismo.

39. M. Wind: *La tribalización de Europa*, Espasa, Madrid, 2019.

40. E. Cozzo y L. Prignano: ob. cit., p. 118.

41. M. D'Ancona: ob. cit., p. 146.

La teoría de Camus fue citada en múltiples ocasiones, por ejemplo, por Marine Le Pen, Matteo Salvini, Viktor Orbán, Éric Zemmour o los líderes de la Alt-Right estadounidense y, al mismo tiempo, relanzada y difundida en las redes sociales, gracias también a la labor de supuestos investigadores independientes –como el blogger italiano Luca Donadel, en realidad un activista de ultraderecha– que demostrarían su veracidad. El caso de la teoría del «gran reemplazo» nos muestra, consecuentemente, tanto la decisión de la extrema derecha de apostar por las guerras culturales como la capacidad de viralizar y convertir en *mainstream* mensajes e ideas a través de redes más o menos informales tejidas a escala internacional.

En tercer y último lugar, como ha mostrado el tópico de la inmigración, la voluntad de la extrema derecha es la de modificar las agendas políticas, marcar con sus propios temas el debate público y, consecuentemente, mover la ventana de Overton –es decir, el rango de ideas aceptables para que un político, recomendándolas o defendiéndolas, no sea considerado un extremista– introduciendo posiciones y argumentos que hace tan solo un par de décadas eran considerados inaceptables en democracias liberales. Como apunta Ebner, los activistas online de ultraderecha «utilizan teorías de la conspiración en combinación con el activismo de *hashtag* en medios sociales para llevar sus puntos de vista extremistas a la corriente de pensamiento mayoritaria»⁴². En gran medida, lo han logrado: como ha explicado Cas Mudde, «durante la última década hemos permitido que la extrema derecha establezca la agenda para determinar de qué hablamos y, lo que es más importante, cómo hablamos de ello, por lo que hemos hablado de la inmigración como una amenaza a la identidad y seguridad nacional»⁴³.

Además, la extrema derecha 2.0 ha salido de los márgenes también políticamente hablando y se ha convertido en una opción aceptable, tanto para los ciudadanos como para las instituciones internacionales. Cuando a principios del año 2000 se creó el gobierno de coalición entre los populares austríacos y el Partido de la Libertad (FPÖ, por sus siglas en alemán) de Jörg Haider, la Unión Europea impuso sanciones a Austria que iban de la restricción de las reuniones con representantes institucionales a la suspensión de los contactos oficiales en el nivel político, pasando por el no apoyo a los candidatos austríacos que optasen a cargos en organismos internacionales. El Estado de Israel, incluso,

42. J. Ebner: ob. cit., p. 176.

43. María Ramírez: «Cas Mudde: ‘Hemos permitido que la extrema derecha determine de qué hablamos y cómo hablamos de ello’» en *Eldiario.es*, 27/2/2021.

retiró a su embajador en Viena. Asimismo, cuando Jean-Marie Le Pen pasó por primera vez a la segunda vuelta de las presidenciales de 2002, en Francia hubo una verdadera movilización popular para pararle los pies al Frente Nacional: Le Pen pasó de 16,8% en la primera vuelta a 17,8% en la segunda, sin casi conquistar nuevos votantes, mientras que Jacques Chirac obtuvo 82,2% cuando en la primera vuelta no había llegado a 20%.

En menos de dos décadas, el panorama es completamente distinto: cuando en 2017 se formó el gobierno de coalición entre el Partido Popular Austríaco (övp, por sus siglas en alemán) de Sebastian Kurz y el FPÖ liderado por Heinz-Christian Strache, nadie planteó en Bruselas imponer sanciones a Viena. Así, jamás Benjamin Netanyahu se ha planteado retirar al embajador en Budapest desde que gobierna Orbán: al contrario, el ex-presidente israelí defendió en más de una ocasión al premier húngaro de las acusaciones de antisemitismo, llegando a definirlo como un «verdadero amigo de Israel». Es cierto que la UE ha levantado la voz contra los gobiernos de Budapest y Varsovia, pero se han tenido que esperar muchos años y, aunque Fidesz y Ley y Justicia han aprobado leyes que socavan el Estado de derecho en sus países, los reclamos votados a gran mayoría por la Eurocámara se han convertido solo recientemente y a duras penas en medidas concretas o sanciones. Asimismo, cuando Marine Le Pen pasó a la segunda vuelta de las presidenciales en 2017, sumó unos tres millones de votos más respecto a la primera vuelta –pasando de 21,3% a 33,9%– y alrededor de 1,5 millones de franceses decidieron quedarse en casa en vez de votar a Emmanuel Macron. No hubo una verdadera movilización popular, más bien hubo apatía o resignación. La ultraderecha, en suma, ya no es percibida como una amenaza, sino como una opción aceptable, por más que despierte simpatía o antipatía. El objetivo número uno se ha conseguido: normalizarse. Ahora debe enfrentarse a sus dificultades en las segundas vueltas, aunque ha logrado llegar a gobiernos regionales y ha aumentado sus representantes en los parlamentos. ☒

Las asambleas ciudadanas y la concepción populista de representación

Cristina Lafont

Las propuestas de insertar asambleas ciudadanas y otros minipúblicos deliberativos en el proceso político, con el objetivo de superar las numerosas «brechas» de representación que aquejan actualmente a los sistemas de partidos tradicionales, presentan algunas semejanzas con la noción de representación como «encarnación» del pueblo propia del populismo. Esto termina por debilitar la idea de sociedades plurales con diferentes visiones, más allá del «lugar» que cada quien ocupa ellas.

En medio del creciente descontento con las democracias representativas, son cada vez más populares nuevas formas de participación política directa de los ciudadanos. En este contexto, han proliferado las propuestas para insertar minipúblicos deliberativos en el proceso político, tales como asambleas ciudadanas, jurados de ciudadanos o encuestas deliberativas. De hecho, muchos teóricos de la democracia ven estos mecanismos como la mejor esperanza para superar las numerosas «brechas» de representación que aquejan a los sistemas de partidos tradicionales, brechas que han producido niveles alarmantes de apatía y desencanto de los ciudadanos con la democracia. Sin embargo, a pesar del interés que han suscitado estas nuevas formas de participación ciudadana, se ha analizado poco la naturaleza

Cristina Lafont: es catedrática de Filosofía en la Universidad Northwestern, Chicago. Su libro más reciente es *Democracia sin atajos. Una concepción participativa de la democracia deliberativa* (Trotta, Madrid, 2021).

Palabras claves: democracia, lotocracia, minipúblicos, participación ciudadana, populismo, representación.

Nota: traducción del inglés: Luciana Wisky; revisión: Moira Pérez.

específica de la representación política que implican¹. ¿En qué sentido se supone que los ciudadanos que participan en las asambleas son representantes del resto de la ciudadanía? ¿Pueden actuar al mismo tiempo como ciudadanos de pleno derecho y como representantes de quienes no participan? En este ensayo, sostengo que la noción de representación que subyace a muchas de las propuestas para insertar minipúblicos en el proceso político tiene algunas similitudes importantes con la noción de representación como «encarnación» (*embodiment*) del pueblo propia del populismo. Luego de analizar algunas diferencias entre las variedades populistas y lotocráticas (por sorteo) de la representación como «encarnación», destaco dos características que comparten y que son altamente perjudiciales para la democracia: el mayoritarismo excluyente y el supuesto de homogeneidad política de la ciudadanía. En contra de este punto de vista, defiendo una forma de entender la relación entre los participantes de los minipúblicos y la ciudadanía en general que evita los rasgos problemáticos de la concepción de la representación como encarnación. Por último, sobre la base de esta comprensión alternativa, extraigo algunas consecuencias prácticas respecto a propuestas actuales para usos políticos de los minipúblicos. En particular, muestro cómo la defensa de los usos de los minipúblicos basados en la «confianza» ciega es altamente problemática y abogo, en cambio, por los usos participativos de los minipúblicos que realmente empoderarían a la ciudadanía.

Populismo y representación como encarnación del pueblo

De acuerdo con el *Oxford English Dictionary*, el populismo «intenta apelar a la gente común que siente que sus preocupaciones son ignoradas por las

1. De hecho, una de las razones más destacadas de esta laguna es que estas instituciones innovadoras suelen considerarse como lugares de *participación* directa de los ciudadanos y, por lo tanto, no se reconoce su función *representativa*. Como explica convincentemente Mark E. Warren, «Debido en gran medida al lente de la democracia participativa, ha pasado desapercibido el hecho de que, con respecto a la mayoría de los ciudadanos, las funciones de estas instituciones participativas son menos participativas que representativas (...) De hecho, la mayoría de las instituciones participativas están diseñadas de tal manera que algunos ciudadanos representan a otros, ya sea directamente, o –más a menudo– a través de la pretensión de representar las perspectivas, las opiniones, los bienes, los intereses y los valores de aquellos que no están presentes en el proceso (...). Dado que la mayoría de los ciudadanos no participan a través de estas instituciones –sujetas, como están, a las mismas limitaciones de escala y complejidad que otras instituciones– deberíamos concebirlas como órganos representativos». M.E. Warren: «Citizen Representatives» en M.E. Warren y Hilary Pearse (eds.): *Designing Deliberative Democracy: The British Columbia Citizens Assembly*, Cambridge, Cambridge UP, 2008, pp. 56-57.

elites establecidas». La apelación del populismo a la gente común parece tener su origen en una preocupación por la inclusión. Sin embargo, también conlleva una parcialidad excluyente, en tanto que aspira a definir quién pertenece al «pueblo» y quién no. Como bien indica Nadia Urbinati en su *Teoría política del populismo*,

si bien la concepción populista del pueblo pone el acento en la inclusión de la gente «común», no podemos dejar de advertir que este proceso de inclusión es posible gracias a un proceso paralelo de exclusión: el establishment político es la externalidad básica contra la cual el populismo sitúa al pueblo y sin la cual el populismo no puede existir (...). El populismo está estructuralmente atravesado por una parcialidad radical en su interpretación del pueblo y de la mayoría.²

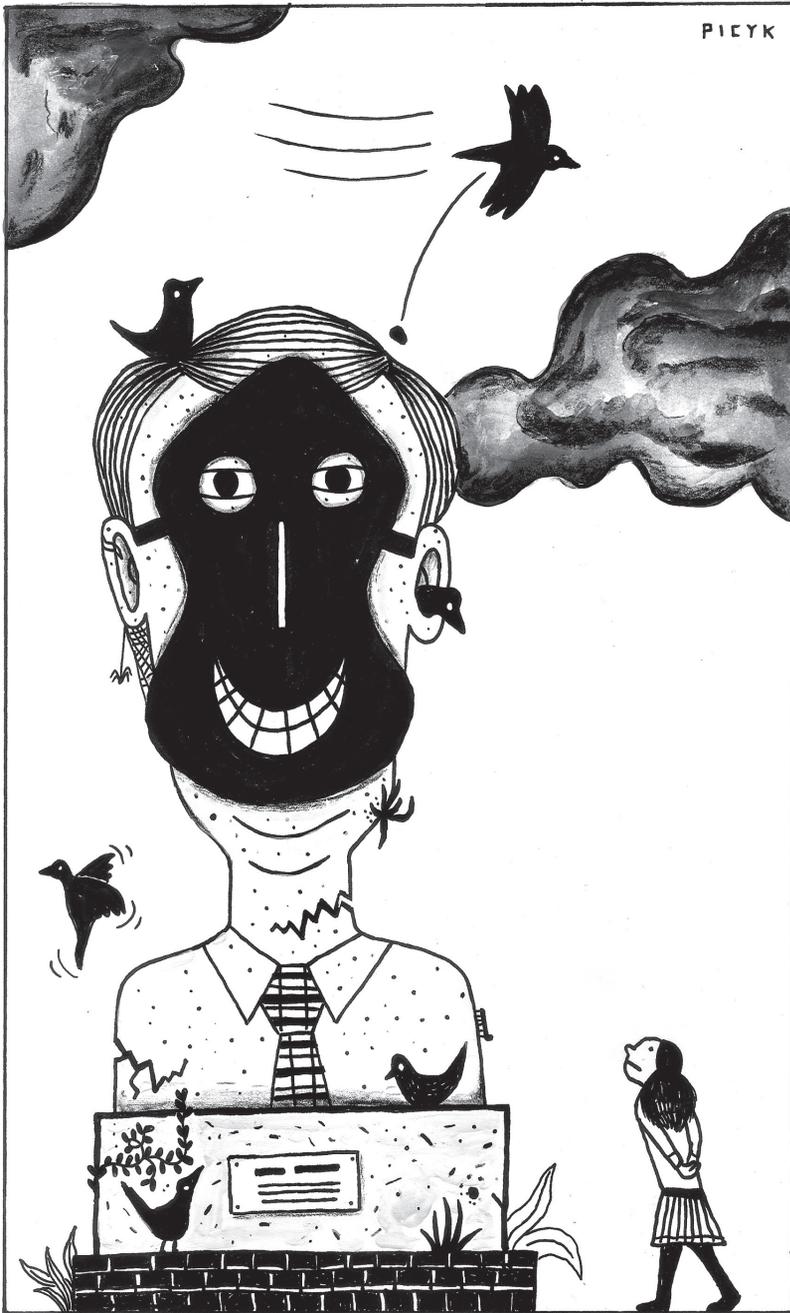
La parcialidad excluyente del populismo tiene su origen en otro de sus aspectos característicos, a saber, la presencia de un líder fuerte que supuestamente *encarna al pueblo* y que puede, por ello, articular sus demandas contra las elites políticas y otros «enemigos del pueblo». A diferencia de la representación electoral, aquí el líder no representa al pueblo porque este le haya transferido autoridad política alguna. Al contrario, según el populismo, el líder *encarna* al pueblo y es en virtud de esta relación directa y sin mediaciones que puede decirse que lo representa.

Yves Sintomer ilustra la idea de la «representación encarnada» con algunos ejemplos útiles:

Las palabras representación-encarnación aparecen de forma explícita en gran parte de la lógica cesarista, ya sea populista o neopopulista. Tal como escribió un teórico del Segundo Imperio en 1853, «El emperador no es un hombre, es un pueblo», algo que parece hacerse eco en aquella proclama del ex-presidente venezolano Hugo Chávez: «Exijo lealtad absoluta a mi liderazgo porque no soy yo mismo (...) no soy un individuo, soy un pueblo»; una proclama que replicaron dos años después sus partidarios cuando, reunidos masivamente con motivo de su funeral, retomaron un lema del régimen: «¡Todos somos Chávez!».³

2. N. Urbinati: «Political Theory of Populism» en *Annual Review of Political Science* vol. 22, 2019.

3. Y. Sintomer: «Les sens de la représentation politique: usages et mésusages d'une notion» en *Raisons Politiques* N° 50, 2013, p. xviii.



El líder solo puede ser «como el pueblo» si el pueblo mismo es un cuerpo homogéneo y unificado

Solo porque (y en la medida en que) el líder es «uno de ellos» puede pretender representarlos. Y es precisamente esta relación directa entre el líder y su pueblo la que hace «sospechosos» a actores intermediarios como los partidos, los medios de comunicación independientes, las normas institucionales, la burocracia, los organismos de control, etc. Obviamente, la relación de «encarnación» solo puede funcionar bajo un supuesto de homogeneidad. El líder solo puede ser «como el pueblo» si el pueblo mismo es un cuerpo homogéneo y unificado, capaz de tener una relación de identidad (o al menos de suficiente similitud) con él; solo así es posible justificar la afirmación de encarnación. Si el pueblo estuviera dividido en grupos plurales o dispares con puntos de vista, valores, intereses y objetivos políticos en conflicto, el líder no podría ser simultáneamente *como todos* ellos. Al ser *como algunos* de ellos, necesariamente sería *distinto de otros*. Los estudios sobre populismo suelen señalar que este elemento de homogeneidad no es más que una construcción ficticia del supuesto «pueblo real» por parte de los propios líderes populistas —una construcción que, a su vez, justifica la exclusión política de las minorías opositoras transformándolas en «enemigas del pueblo»⁴—. Sea como fuere, lo que importa en nuestro contexto es advertir que el supuesto de homogeneidad y la consiguiente exclusión de las minorías heterogéneas son componentes necesarios de la idea de representación como «encarnación» del pueblo.

Minipúblicos y representación como «encarnación» del pueblo

Dentro de la teoría democrática contemporánea está surgiendo una concepción de la democracia que no está directamente relacionada con el populismo, pero que también se basa en la idea de representación como «encarnación» del pueblo. Para simplificar, la llamaré concepción «lotocrática» de la democracia. Muchas de las personas que defienden esta concepción se ven a sí mismas como demócratas radicales. Sostienen que la inclusión y la igualdad políticas se lograrían mejor si las democracias incorporaran procedimientos de sorteo —como la lotería o la selección aleatoria entre ciudadanos comunes— en lugar de elegir a los representantes de las elites políticas. Por esta razón, depositan sus esperanzas democráticas en el uso generalizado de jurados de ciudadanos, asambleas ciudadanas, encuestas

4. Jan-Werner Müller: *What is Populism?*, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 2016. [Hay edición en español: *¿Qué es el populismo?*, Grano de Sal, Ciudad de México, 2017].

deliberativas, etc.⁵ Muchos de los defensores de este enfoque recomiendan con entusiasmo que se les otorgue un estatus consultivo o incluso decisorio a estas instituciones innovadoras. Las propuestas más ambiciosas pretenden complementar o, incluso, sustituir parcialmente a las asambleas legislativas de representantes electos por asambleas de ciudadanos seleccionados al azar. Dado que el objetivo de los lotócratas es aumentar la participación de los ciudadanos comunes en la toma de decisiones políticas, la dependencia populista de un líder está totalmente ausente de este modelo. Pero, al igual que los populistas, los lotócratas suelen albergar una profunda sospecha hacia las elites políticas. En este sentido, la definición de «populismo» del *Oxford English Dictionary* se ajusta también al modelo lotocrático, que pretende «apelar a la gente común que siente que sus preocupaciones son ignoradas por las elites establecidas».

Sin embargo, para los fines de este trabajo, también es importante destacar algunas diferencias claves entre el modelo lotocrático y el modelo populista de la representación como «encarnación» del pueblo. Desde un punto de vista puramente formal, la principal diferencia es que en el modelo de representación populista, en el que el líder encarna al pueblo, se trata de una relación de uno a muchos; mientras que en el modelo lotocrático, en donde una selección aleatoria de ciudadanos comunes «reflejan al pueblo», se trata de una relación de muchos a muchos. Esta diferencia formal tiene consecuencias importantes. Para comenzar, mientras que la afirmación populista de que el o la líder encarna al pueblo porque es «como él» puede ser cuestionada, y a menudo lo es, por aquellas personas que no se ven reflejadas en el o la líder, es más difícil desafiar la afirmación de que una selección aleatoria de ciudadanos comunes encarna al pueblo porque sus miembros son «como ellos». Este es el caso especialmente cuando se utilizan técnicas de estratificación en la selección aleatoria con la intención explícita de generar un grupo que «refleje al pueblo». En suma, me preocupa que los rasgos problemáticos de la noción de representación como «encarnación» del pueblo puedan ser operativos dentro de las concepciones lotocráticas, pero mucho más difíciles de detectar que en las concepciones populistas. Ningún líder,

5. Para un análisis detallado de las principales similitudes y diferencias entre estos tipos de minipúblicos, v. Graham Smith y Maija Setälä: «Mini-Publics and Deliberative Democracy» en Andre Bächtiger, John S. Dryzek, Jane Mansbridge y Mark Warren (eds.): *The Oxford Handbook of Deliberative Democracy*, Oxford UP, Oxford, 2019. Para más información sobre los jurados de ciudadanos, v. Ned Crosby y Doug Nethercut: «Citizen Juries: Creating a Trustworthy Voice of the People» en John Gastil y Peter Levine (eds.): *The Deliberative Democracy Handbook*, Jossey-Bass, San Francisco, 2005; sobre las asambleas de ciudadanos, v. Patrick Fournier, Henk van der Kolk, R. Kenneth Carty, Andre Blais y Jonathan Rose: *When Citizens Decide: Lessons from Citizen Assemblies on Electoral Reform*, Oxford UP, Oxford, 2011, y sobre las encuestas deliberativas, v. James S. Fishkin: *Democracy When the People Are Thinking*, Oxford UP, Oxford, 2018.

partido político u organización puede equiparar la similitud entre una selección aleatoria y estratificada de ciudadanos comunes y la ciudadanía que reflejan. Precisamente porque los grupos de ciudadanos que participan en las selecciones aleatorias y estratificadas se parecen tanto a la ciudadanía que reflejan, albergan la posibilidad de convertirse en los «usurpadores definitivos».

En lo que sigue, exploro esta preocupación a través de un análisis minucioso de los rasgos específicos de la noción de representación como «encarnación» del pueblo que subyace a las concepciones lotocráticas de la democracia y de sus consecuencias negativas potenciales. Aunque la noción de «ciudadano-representante» es esencial en este modelo, todavía no se ha explorado en profundidad⁶. Por ejemplo, no está claro cómo un ciudadano puede desempeñar simultáneamente el papel de ciudadano y de

¿Pueden los ciudadanos-representantes formar parte a la vez del poder «constituyente» y del poder «constituido»?

representante con respecto a una misma decisión política. Tampoco está claro qué obligaciones tienen los ciudadanos-representantes hacia el resto de la ciudadanía que no participa en el proceso de toma de decisiones: ¿pueden los ciudadanos-representantes formar parte a la vez del poder «constituyente» y del poder «constituido»? ¿Pueden rendir cuentas de manera significativa

ante quienes no participan y, al mismo tiempo, seguir ejerciendo su derecho como ciudadanos a tomar sus propias decisiones libremente? Mi análisis no pretende responder a estas intrincadas preguntas. Las menciono solo para indicar cómo, en ausencia de tales respuestas, no podemos evaluar la legitimidad democrática de las propuestas lotocráticas. El objetivo de este artículo es cuestionar el supuesto de que la noción de representación como «encarnación» del pueblo puede aplicarse de forma fructífera a las instituciones lotocráticas, resaltando con ello algunas de las consecuencias preocupantes del modelo lotocrático.

Ciudadanos-representantes: ¿los usurpadores definitivos?

Los lotócratas defienden la proliferación de minipúblicos y otras instituciones lotocráticas como formas de democratización radical⁷. Sus propuestas

6. Para algunos trabajos interesantes sobre esta temática, v. Mark B. Brown: «Survey Article: Citizen's Panels and the Concept of Representation» en *The Journal of Political Philosophy* vol. 14 N^o 2, 2006; M.E. Warren: ob. cit.; Hélène Landemore: *Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the 21st Century*, Princeton UP, Nueva Jersey, 2020.

7. V., por ejemplo, Y. Sintomer: «From Deliberative to Radical Democracy? Sortition and Politics in the Twenty-First Century» en *Politics & Society* vol. 46 N^o 3, 2018.

de otorgar un estatus decisorio a las asambleas legislativas compuestas por sorteo, en lugar de por elección, se basan en la idea de la representación como «encarnación» del pueblo. Los ciudadanos deberían confiar en las decisiones recomendadas por esas instituciones porque los participantes son *como ellos*⁸. Como los participantes son ciudadanos comunes, hablan *como* el pueblo y no simplemente *en su nombre*. En otras palabras, los minipúblicos deben tener autoridad consultiva o incluso decisoria no porque la ciudadanía haya autorizado o seleccionado a sus miembros a través de los mecanismos habituales de representación electoral. Más bien, sería simplemente porque son un «reflejo del pueblo». De hecho, las técnicas para la selección aleatoria y estratificada parecen respaldar la afirmación de que los ciudadanos comunes que participan en los minipúblicos son en realidad un reflejo exacto de la población en su conjunto; en consecuencia, sus opiniones, intereses, valores, etc., reflejan los de la población en general. Más aún, las innovaciones institucionales que recrean un microcosmos del pueblo pueden aportarnos información vital. Así como los juicios iniciales de los participantes reflejan la opinión pública cruda y (habitualmente) desinformada que puede captarse en sondeos, es plausible suponer que los juicios de los participantes tras la experiencia deliberativa reflejan *lo que la gente pensaría si estuviera informada y tuviera la oportunidad de deliberar sobre un asunto*. En este sentido, representan «los juicios ponderados (*considered judgements*) del pueblo»⁹.

Este enfoque se suele asociar con un modelo de representación por selección en contraste con un modelo de representación por sanción¹⁰. Mientras que un modelo de sanción espera que los representantes sigan con exactitud las opiniones de sus electores so pena de perder su cargo, un modelo de selección espera que los electores elijan a representantes con intereses, valores y objetivos que estén en gran medida alineados con los suyos, de modo que los representantes posean razones exógenas y automotivadas para

8. Y. Sintomer: «Les sens de la représentation politique: usages et mésusages d'une notion», cit.

9. James S. Fishkin: *When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation*, Oxford UP, Oxford, 2009, p. 28. En esta sección y la siguiente tomo elementos de mi libro *Democracia sin atajos. Una concepción participativa de la democracia deliberativa*, Trotta, Madrid, 2021.

10. Para un análisis en profundidad del contraste entre el modelo de selección y el de sanción de la representación, v. Jane Mansbridge: «A 'Selection Model' of Political Representation» en *Journal of Political Philosophy* vol. 17 Nº 4, 2009. Para el contraste entre los modelos de selección y sanción en relación con los minipúblicos como encuestas deliberativas, v. J. Mansbridge: «Deliberative Polling as the Gold Standard» en *The Good Society* vol. 19 Nº 1, 2010. Para un interesante análisis del contraste entre estos dos modelos de representación bajo las rúbricas «receptivo» e «indicativo», v. Philip Pettit: «Representation, Responsive and Indicative» en *Constellations* vol. 17 Nº 3, 2010.

implementar (*enact*) la voluntad de sus constituyentes¹¹. En nuestro contexto, la pregunta es si la congruencia o «coincidencia» entre los intereses y valores de los representantes y los de los ciudadanos que los eligieron, que caracteriza el modelo de selección, puede suponerse igualmente entre los intereses y valores de los integrantes del grupo seleccionado al azar y los ciudadanos no participantes que la muestra aleatoria refleja. Dado que las propuestas de conferir estatus decisorio a los minipúblicos se justifican sobre la base de que sus participantes son *como nosotros* (o al menos más parecidos a nosotros que las elites políticas, los jueces, los grupos de interés u otros actores políticos), necesitamos examinar este supuesto de concordancia. El argumento involucra varias afirmaciones.

Los participantes de los minipúblicos son como nosotros en tanto que son ciudadanos comunes

Los participantes de los minipúblicos son *como nosotros* en tanto que son ciudadanos comunes. Por lo que, a diferencia de los políticos, los grupos de presión y otros actores políticos organizados, es poco probable que tengan agendas ocultas o conflictos de intereses en sus deliberaciones sobre el interés público. Podemos confiar en ellos como nuestros representantes en el sentido de que no necesitamos vigilarlos ni amenazarlos con sanciones porque están motivados de manera independiente a buscar lo que es mejor para la comunidad política. Ahora bien, siguiendo el modelo de representación por selección, se supone que los participantes de los minipúblicos son *como nosotros* en un sentido más *fuerte*: comparten en teoría nuestros intereses, valores y objetivos políticos, etc.¹². Por eso deberíamos confiar en ellos, no solo en el sentido de que no necesitamos amenazarlos con sanciones para que rindan cuentas, sino también, y en un sentido más fuerte, porque podemos suponer que sus recomendaciones coinciden con lo que nosotros habríamos pensado si hubiéramos participado. En resumen, debemos confiar en ellos en el sentido fuerte de aceptar sus

11. Miller y Stokes, 1963, citado por J. Mansbridge: «A 'Selection Model' of Political Representation», cit., p. 371. Es importante tener en cuenta que tanto el modelo de selección como el de sanción son modelos *electorales* de representación, mientras que en el caso de los minipúblicos no hay elección alguna, es decir, los ciudadanos no seleccionan a ninguno de los participantes. Las consecuencias de esta cuestión se analizan en la última sección del artículo.

12. Como indica Mansbridge, con respecto al alineamiento de objetivos entre el agente y el director bajo el modelo de selección, «el alineamiento de objetivos puede tener lugar no solo respecto a la comprensión de lo que es mejor para la nación en su conjunto, sino también respecto a lo que es mejor para individuos o comunidades particulares como los agricultores, los mineros o los residentes de los centros urbanos». J. Mansbridge: «A 'Selection Model' of Political Representation», cit., p. 380.

recomendaciones como si fueran las nuestras (por ejemplo, a la hora de votar en referendos)¹³.

Ahora bien, mientras que la primera afirmación es plausible, la segunda es problemática. Dado que en las sociedades pluralistas hay desacuerdos profundos sobre cuestiones políticas y morales entre los ciudadanos, la afirmación más fuerte difícilmente puede ser cierta de una muestra genuinamente representativa de la población. Cuanto más se incluyan en la muestra diversas perspectivas evaluativas (relativas a interpretaciones de necesidades, creencias, perspectivas políticas globales, etc.), menos sentido tendrá para los ciudadanos no participantes suponer que sus propios intereses, valores y objetivos políticos coincidirán invariablemente con los de la *mayoría del grupo aleatorio* con independencia del tema en cuestión. Los ciudadanos que no participan no pueden dar por sentado que las recomendaciones de la mayoría del minipúblico reflejan *lo que ellos habrían pensado si hubieran participado*. Pues, en principio, lo contrario es igualmente posible. A fin de cuentas, los participantes que están en desacuerdo con la mayoría han revisado la misma información y han deliberado tanto como los demás y, sin embargo, han llegado a la conclusión contraria. Incluso si los ciudadanos pudieran confiar en que todos los participantes estarán genuinamente interesados en averiguar qué es lo mejor para la comunidad, saben que en las democracias pluralistas hay disputas constantes (*ongoing contestation*) entre diversos puntos de vista y valores sociales, morales, éticos, religiosos y económicos, y que ello influye significativamente en las consideraciones políticas y en los objetivos de las políticas públicas. Lejos de constituir un cuerpo homogéneo, los ciudadanos en las sociedades pluralistas comprometidos con el mantenimiento de instituciones libres tienen muchos desacuerdos políticos con sus conciudadanos.

Por ello, en sociedades pluralistas el modelo de selección de la representación parece plausible a menor escala. Los ciudadanos pueden confiar en aquellos partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil o individuos que compartan sus intereses, valores y objetivos políticos. Pero por esta misma razón no tendría sentido también confiar en los partidos políticos, organizaciones e individuos que defienden los puntos de vista, valores y objetivos políticos contrarios, sean los que fueren. Si confiamos en las recomendaciones de Oxfam sobre cómo luchar contra

13. Para una defensa de estos usos de los minipúblicos basados en la confianza, v. Michael K. MacKenzie y M.E. Warren: «Two Trust-Based Uses of Minipublics in Democratic Systems» en John Parkinson y J. Mansbridge (eds.): *Deliberative Systems: Deliberative Democracy at the Large Scale*. Cambridge UP, Nueva York, 2012; y M.E. Warren y John Gastil: «Can Deliberative Minipublics Address the Cognitive Challenges of Democratic Citizenship?» en *The Journal of Politics* vol. 77 N^o 2, 2015.

la pobreza, no podemos confiar también en las recomendaciones contrarias de, por ejemplo, la Cámara de Comercio. Si confiamos en las recomendaciones de Planned Parenthood sobre la salud reproductiva de las mujeres, no podemos confiar al mismo tiempo en las recomendaciones contrarias de, por ejemplo, la Liga de Acción Pro-Vida. Dado que no podemos confiar simultáneamente en los puntos de vista, valores y objetivos políticos en conflicto de esta multiplicidad de actores, tampoco podemos confiar en las recomendaciones de la mayoría de la muestra sin saber primero *si se han posicionado del lado del espectro político que yo habría adoptado si hubiera participado*.

Por supuesto, si los contenidos y las deliberaciones se hacen públicos, los ciudadanos siempre podrán averiguar si ese es el caso. Pero una vez que lo hagan, no estarán confiando en la asamblea. Estarán confiando en sí mismos. Y lo que es más importante, muchos de ellos descubrirán que la mayoría de la asamblea *no es como ellos*, ya que en realidad no comparten sus opiniones, valores y objetivos políticos respecto al tema en cuestión. En este punto, la afirmación de que los no participantes deberían confiar en las recomendaciones de los minipúblicos porque los participantes *son como ellos* se derrumba inevitablemente. Porque el hecho de que la muestra aleatoria sea un microcosmos del *pueblo considerado colectivamente* significa que, en cuestiones controvertidas, habrá una mayoría que defienda una opinión y una minoría que defienda la opinión opuesta. Por ello no puede ser cierto de todas *las personas consideradas individualmente* que la mayoría de la muestra es *como ellas*. Pero si esto es así, ¿en qué sentido podemos decir que los participantes en la muestra son *sus representantes*? Si la mayoría de la muestra no es como ellos ni les rinde cuentas, entonces, ¿cuál es la justificación para esperar o requerir que los ciudadanos no participantes simplemente confíen ciegamente en *esta mayoría*? Dado que los ciudadanos no han seleccionado a sus representantes para participar en el minipúblico, ninguno de ellos tiene una razón particular para suponer que las recomendaciones de la mayoría o las de la minoría son las que coinciden con lo que ellos habrían pensado si se hubieran informado y hubieran reflexionado por su cuenta.

A diferencia del modelo estándar de selección de la representación en el que los ciudadanos eligen a sus representantes en función de sus propios intereses, valores y objetivos políticos, cuando se trata de minipúblicos quizá el argumento no es que los ciudadanos deben confiar en la mayoría porque

es como ellos, sino que deben confiar en ella porque es como la mayoría del pueblo¹⁴. Pero ¿lo es?

La ilusión de la democracia o «¡Cuidado con los usurpadores!»

Antes de la experiencia deliberativa, es trivialmente verdadero afirmar que quienes participan en el minipúblico son *como* el pueblo en el sentido de que las perspectivas de los ciudadanos de la muestra aleatoria reflejan con exactitud las opiniones del conjunto de la población. Es por esto que las encuestas regulares pueden usarse (de forma más o menos fiable) para averiguar las opiniones de la población, a pesar de que de hecho solo se entrevista a un puñado de ciudadanos seleccionados al azar. Sin embargo, una vez que se implementa el filtro deliberativo —que es el objetivo principal de organizar minipúblicos deliberativos—, las opiniones de los participantes sufren transformaciones significativas y, a veces, drásticas. Pero, precisamente por eso, pretender que la voz de quienes participan en los minipúblicos después de la deliberación sea la voz del pueblo sería un claro caso de usurpación, sobre todo en aquellos casos en los que consta explícitamente que *disienten del pueblo real*. La tentación populista de «hablar por el pueblo» es común entre actores políticos de todo tipo, pero la flagrante disimilitud entre estos actores y la *población real* contribuye a socavar tales pretensiones. Por el contrario, la similitud entre los participantes de los minipúblicos y el pueblo en la etapa inicial, predeliberativa, hace que su disimilitud después de la deliberación, que es la *etapa empoderada políticamente*, sea más difícil de detectar. Como indiqué antes, por esa razón podrían convertirse en los «usurpadores definitivos». Veamos por qué.

El conjunto de participantes de los minipúblicos se supone que es representativo de la ciudadanía en general en el sentido *descriptivo* del término. Desgraciadamente, esto solo es el caso (si es que lo es) con respecto a las opiniones «crudas» que tienen *antes* del proceso de deliberación, ya que el

14. No se me ocurre ninguna interpretación del modelo de selección de la representación que hiciera plausible afirmar que los ciudadanos deberían confiar en que la opinión ponderada de la mayoría de un grupo aleatorio de personas coincidirá invariablemente con lo que habrían pensado ellos si hubieran sido informados. Analizo las dificultades de esta afirmación en C. Lafont: «Deliberation, Participation and Democratic Legitimacy: Should Deliberative Minipublics Shape Public Policy?» en *Journal of Political Philosophy* vol. 23 Nº 1, 2015, pp. 54-57. Pero, independientemente de que esta visión de la representación pueda considerarse plausible, el problema en nuestro contexto es que la afirmación «modificada» del reflejo entre ambos grupos, en la que se basa, es falsa. En la etapa posdeliberativa empoderada (*post-deliberative empowered stage*), es frecuente que la mayoría de la muestra aleatoria ya no refleje la opinión de la mayoría del pueblo.

objetivo de pasar por ese proceso es justamente provocar una transformación de sus juicios iniciales, la cual da lugar a juicios cualitativamente diferentes que, *por esta misma razón*, ya no son representativos de los juicios que de facto tiene la ciudadanía. Sea como fuere, lo que está claro es que los participantes seleccionados no actúan como representantes de los grupos a los que representan en sentido descriptivo. No se supone en absoluto que las participantes femeninas han de defender las opiniones de las mujeres ni los californianos las opiniones de otros californianos. Participan como ciudadanos individuales con total libertad para expresar sus perspectivas y opiniones y para cambiarlas de la manera que consideren oportuna¹⁵. Brown resume algunas de las dificultades que conlleva la aplicación de la noción de representación descriptiva a los minipúblicos o paneles de ciudadanos:

Primero, cualquier miembro del panel en particular pertenecerá a múltiples categorías estadísticas, y es imposible saber de antemano cómo los individuos concretos priorizan sus diversas identidades en su concepción de sí mismos y en su comportamiento. Segundo, siempre es posible encontrar personas que se ven a sí mismas como miembros de un grupo social pero que carecen de al menos algunos de los atributos supuestamente definitorios del grupo, y viceversa. Tercero, seleccionar a los panelistas como representantes de los intereses del grupo sobre la base de su identidad social sugiere falsamente que las personas solo son capaces de representar los intereses de su propio grupo social. Cuarto, incluso las personas que se definen a sí mismas como miembros de un determinado grupo social pueden diferir mucho en sus valores e intereses políticos. Y finalmente, dar por supuesto que los participantes tienen intereses fijos asociados a categorías sociales particulares obtura el proceso de adquisición de información y transformación de intereses, que es lo que la deliberación pretende fomentar. En resumen, no todos los grupos identitarios son grupos de interés, y la identidad del grupo a menudo existe antes de cualquier sentido de interés compartido, y entra en conflicto con él.

Pero, *por esas mismas razones*, los miembros de los minipúblicos no les rinden cuentas a los ciudadanos que no participan en ellos. La razón es la peculiar naturaleza de la representación inherente al procedimiento de muestreo estratificado aleatorio.

Dado que se supone que la muestra aleatoriamente seleccionada «refleja a la población» en su conjunto, sus miembros se consideran *indicadores fiables* de los juicios ponderados de la ciudadanía (es decir, de lo que la ciudadanía pensaría

15. M.B. Brown: ob. cit., p. 218.

sobre un asunto político particular si tuviera la oportunidad de informarse y deliberar en buenas condiciones). Pero precisamente por esa razón no hay espacio para que los ciudadanos no participantes exijan a los participantes de los minipúblicos que les rindan cuentas por las recomendaciones específicas que hacen, del mismo modo que no se puede exigir a un termostato que rinda cuentas por la temperatura específica que fiablemente indica. Además, dado que lo que las recomendaciones de los minipúblicos se supone que reflejan no son los juicios prerreflexivos de ningún ciudadano o grupo en particular, sino los juicios ponderados del pueblo en su conjunto, el hecho de que un número cualquiera de no participantes no esté de acuerdo con esas recomendaciones no ofrece ninguna base para cuestionar la fiabilidad de quienes participan en los minipúblicos. Después de todo, no se los selecciona para que indiquen de modo fidedigno la opinión pública fáctica, sino la *contrafáctica*, es decir, lo que la gente *pensaría* si hubiera reflexionado sobre el asunto en buenas condiciones epistémicas. En caso de rendir cuentas a alguien, sería a la ciudadanía contrafáctica cuyos juicios ponderados se supone que fiablemente indican, y no los juicios prerreflexivos de la ciudadanía real. Dado esto, ¿por qué debería considerar la ciudadanía que los juicios de estos participantes tienen más valor normativo que sus propias opiniones?

¿Son la mayoría de mis conciudadanos «como yo»?

El problema de la deferencia ciega

En las sociedades pluralistas, es muy probable que los participantes de los minipúblicos discrepen sobre cuestiones políticas controvertidas. Esto es particularmente evidente en casos como las encuestas deliberativas, en las que los participantes no están obligados a llegar a un consenso. El hecho de que una muestra aleatoria sea un microcosmos de la *población considerada colectivamente* significa que, para cuestiones controvertidas, habrá una mayoría defendiendo una opinión y una minoría defendiendo la opinión opuesta. Por consiguiente, no puede ser cierto de todas las *personas consideradas individualmente* que la mayoría de la muestra aleatoria sea *como ellas*. En ausencia de información sobre las razones, los valores, los intereses, etc. específicos que subyacen a la recomendación de la mayoría, ningún ciudadano tiene razón alguna para suponer que la recomendación de la mayoría o la de la minoría coincide con lo que ellos mismos habrían pensado si hubieran deliberado. De hecho, precisamente porque los minipúblicos son un microcosmos del pueblo en su conjunto, *no es posible que todos sean como*

Precisamente porque los minipúblicos son un microcosmos del pueblo en su conjunto, no es posible que todos sean como yo

yo. Algunos compartirán mis intereses y valores y otros no. Dado que no hay ninguna razón en particular para suponer que las recomendaciones de los minipúblicos coincidirán siempre con las que aprueban los participantes que compartan mis intereses y valores (ya sea antes o después de la deliberación), no tengo más razones para aceptar las recomendaciones o decisiones de la mayoría de los minipúblicos de las que tendría para aceptar las de la mayoría de mis conciudadanos en general. La razón es simple: el mero hecho de que una decisión política cuente con el apoyo de la mayoría *no añada nada a las razones en su favor*. Claramente, pedir a quienes no están de acuerdo con una determinada recomendación que defieran ciegamente a la mayoría del minipúblico por el mero hecho de que han considerado otras razones y han llegado a una conclusión diferente sería sencillamente injustificado. Pero esto también revela qué tiene de malo esperar lo mismo de los votantes indecisos o desinformados.

Al esperar que los ciudadanos *defieran ciegamente* a las decisiones políticas de un grupo de sujetos seleccionados al azar, el uso generalizado de los minipúblicos para la toma de decisiones disminuirá, en lugar de aumentar, la capacidad de los ciudadanos de apropiarse e identificarse con las leyes y políticas a las que están sujetos, tal y como requiere el ideal democrático de autogobierno. De hecho, el efecto a largo plazo de tomar decisiones políticas basadas en los juicios ponderados de los participantes en los minipúblicos *en lugar de los juicios reales de la ciudadanía* es que esta última tendrán dificultades para entenderse a sí misma como participante en un proyecto democrático de autogobierno. Institucionalizar minipúblicos con la esperanza de que estos piensen y decidan por el resto de la ciudadanía no sería una forma de aumentar el control democrático ciudadano sobre el proceso político, sino

Para que los minipúblicos puedan tener un efecto democratizador, hay que utilizarlos para mejorar la participación y la influencia de la *ciudadanía en su conjunto*

todo lo contrario. Desde el punto de vista democrático, la diferencia fundamental aquí radica en si los minipúblicos se conciben con el objetivo de *empoderar* a la ciudadanía o de *pasarla por alto*.

Para que los minipúblicos puedan tener un efecto democratizador, hay que pensar en formas de utilizarlos para mejorar la participación y la influencia de la *ciudadanía en su conjunto* en el proceso político. Desde

esa perspectiva, los minipúblicos podrían cumplir dos importantes funciones democráticas: primero, podrían contribuir a *mejorar* la calidad de la deliberación pública, de modo que la ciudadanía también pueda alcanzar una opinión ponderada sobre las decisiones políticas importantes a las que está obligada a obedecer y, segundo, podrían contribuir a hacer el sistema

político más *receptivo* a la opinión pública ponderada sobre las decisiones políticas en cuestión. En mi libro *Democracia sin atajos* ofrezco un análisis detallado de varios modos en que los minipúblicos podrían desempeñar estas importantes funciones. No tengo espacio para reproducir ese análisis aquí. Pero lo importante en este contexto es que los usos de los minipúblicos que tienen como objetivo informar y empoderar a la ciudadanía no se basan en una comprensión de los participantes de esos minipúblicos como sus «representantes» políticos, es decir, como miembros de un órgano representativo con la autoridad para hablar y actuar en su nombre porque supuestamente *encarnan al «pueblo»*.

Una alternativa a la usurpación: de «ser como nosotros» a «dialogar con nosotros»

Los ciudadanos pueden tener muy buenas razones para tomarse *en serio* las opiniones y recomendaciones de los participantes de los minipúblicos en la medida en que son indicativas de la variedad de puntos de vista políticos ponderados con los que sus conciudadanos podrían identificarse. Para ser útiles en este sentido, los minipúblicos tendrían que dar a conocer no solo su recomendación o decisión sobre el asunto en cuestión, sino también la información que consideran esencial para una correcta comprensión de lo que está en juego en esa decisión, así como las razones y los argumentos más importantes a favor y en contra de la recomendación que ha logrado el apoyo mayoritario. La ciudadanía podría utilizar esta valiosa información para decidir sobre los temas que se debaten. No obstante, los ciudadanos no participantes no tienen ninguna razón para suponer una mayor congruencia entre sus intereses y valores y los de la mayoría de los participantes del minipúblico, que entre los intereses y valores de los de la minoría. Por este motivo, no tienen ninguna buena razón para simplemente *confiar* en la recomendación de la mayoría y seguirla ciegamente.

Los ciudadanos pueden confiar en la información relevante seleccionada *colectivamente* por los minipúblicos. También pueden confiar en que las razones escogidas colectivamente a favor y en contra de las decisiones de la mayoría reflejan con exactitud las razones que con mayor probabilidad resonarán en la ciudadanía. Pero para determinar si apoyar o no la recomendación de la *mayoría*, tienen que averiguar por sí mismos *cuáles* de estas razones contrapuestas son más congruentes con sus propios intereses, valores y objetivos políticos. Esto no debería ser sorprendente si tenemos en cuenta que la relación de representación entre la ciudadanía en su totalidad y la muestra aleatoria es solo una relación de muchos a muchos. Dado que

la muestra en su totalidad representa al conjunto de la ciudadanía, parece plausible suponer que la primera puede proporcionar información interesante sobre la segunda a los ciudadanos no participantes. Sin embargo, esto es así únicamente respecto de la información que ha sido seleccionada *colectivamente* por todos los miembros de la muestra aleatoria y, por lo tanto, es *representativa de la muestra tomada en su totalidad*. Por el contrario, dado que los ciudadanos no participantes no han escogido a ningún miembro concreto de la muestra, no hay una relación de representación individual entre ellos y un miembro concreto o subconjunto específico de ese grupo (no hay una relación de representación de uno a uno, ni de uno a muchos). Por eso no tienen razón alguna para esperar una mayor congruencia entre sus intereses y valores y los de algún subconjunto concreto de la muestra aleatoria, y por eso no tienen ninguna buena razón para confiar en una recomendación que haya sido seleccionada *solo por un subconjunto de la muestra*, independientemente de lo grande o pequeño que sea cada subconjunto.

Por lo tanto, el problema de afirmar que los ciudadanos no participantes deben confiar en la recomendación de la mayoría no es que se apoya en el supuesto de que la muestra aleatoria es un reflejo «del pueblo». Al contrario. Precisamente, si el supuesto del reflejo es cierto, no es posible que todos los ciudadanos *sean como* la mayoría y no como la minoría de la muestra. Por tanto, esa afirmación no puede justificar una recomendación generalizada de confiar en la mayoría de la selección. Incluso si suponemos que la selección refleja al pueblo en su conjunto, esto no dice nada sobre qué subconjunto de la muestra es más congruente con los intereses y valores de cada ciudadano no participante. De hecho, para suponer que la mayoría de la muestra representa invariablemente al «pueblo» (y, por tanto, que sus recomendaciones deberían ser seguidas ciegamente por todos los ciudadanos no participantes), uno necesitaría adoptar el mayoritarismo excluyente que caracteriza al populismo y suponer que los intereses y valores de la minoría de participantes no son congruentes con los del «pueblo real» y que, por tanto, deberían ser simplemente rechazados o ignorados por los ciudadanos no participantes.

Como mínimo, esto indica que para conceptualizar adecuadamente la relación entre los participantes y los no participantes en minipúblicos no son útiles ni el modelo de selección ni el de encarnación del pueblo. Los participantes de los minipúblicos no pueden hablar *por nosotros* porque no los hemos elegido para hacerlo. Y no pueden hablar *como nosotros* porque nosotros, el pueblo, no somos un grupo políticamente homogéneo. En lugar de ello, deberían dialogar *con nosotros*, sus conciudadanos, para que podamos mejorar de forma colectiva la calidad deliberativa de nuestras decisiones políticas. ☒

Por una democracia feminista (siempre por hacer)

Nuria Alabao

¿Qué herramientas nos proporciona el feminismo para profundizar la democracia? El feminismo de base del movimiento autónomo entiende la democracia como algo que se está haciendo continuamente, es decir que necesita de una sociedad organizada fuerte que empuje en forma constante por la redistribución del poder y los recursos. Su sujeto político es configurado por una suma de luchas en marcha.

La pregunta por el contenido de la democracia estuvo en primer plano en el ciclo anterior de protestas que se desencadenó como respuesta a la crisis de 2008 y a determinados contextos locales. De Tahrir a la Puerta del Sol, de Syntagma a Plaça Catalunya o Zuccotti Park en Nueva York, los manifestantes invocábamos una y otra vez el signifiante «democracia». Pero ¿qué democracia? No era la de los partidos, la de las cámaras de diputados clausuradas para las necesidades y voluntad de las mayorías; era una «verdadera», que construiría poder ciudadano contra la dictadura financiera, los intereses particulares y los políticos profesionales. Allí se impugnaba un sistema de representación que no alcanzaba; una reivindicación que hoy parece aparcada ante necesidades más urgentes: frenar el cambio climático –problema que está ahí y cuyas soluciones parecen muy lejanas, pero que lo modifica todo– o el ascenso de las extremas derechas y los posfascismos, que en algunos lugares identificamos como la mayor amenaza a estas democracias imperfectas que ayer desafiábamos.

Nuria Alabao: es periodista e investigadora. Doctora en Antropología. Forma parte de la Fundación de los Comunes y colabora en varios medios. Coordina la sección de feminismos de *Ctxt.es*. Integra el Grupo de Investigación sobre Exclusión y Control Sociales de la Universidad de Barcelona.

Palabras claves: democracia, feminismo de base, feminismo institucional, transfeminismo.

Entonces estábamos frente a un punto de bifurcación: si no se lograba frenar la salida antisocial a la crisis, y si en lugar de la profundización democrática arraigaba el miedo, llegarían los «hombres blancos cabreados» (*angry white man*) y una parte de la población los seguiría. Pero en ese entonces no lo sabíamos. No sabíamos que elementos como Donald Trump o Jair Bolsonaro acabarían gobernando sus países. En esos días, el problema era entender que, más que un conjunto de instituciones —elecciones, partidos, Parlamento—, la democracia por la que luchábamos estaba definida como la distribución-disolución social de toda forma de poder, la igualdad radical en la participación política y en la distribución de la riqueza y el reconocimiento del poder constituyente como la fuente raíz de esta democracia, como explica Emmanuel Rodríguez¹. Hoy en Europa ya no hablamos de

**De pronto, abrimos
una puerta y
al otro lado solo
había un muro**

esto, sino de «cordones sanitarios» o «democráticos», es decir, grandes coaliciones que dejen fuera a la ultraderecha, «frentes populares» y «votos útiles para frenar al fascismo». Nada de ello profundiza la democracia, nada de ello sirve para redistribuir más poder o recursos, más bien todo lo contrario: es funcional a la hipótesis conformista del mal menor. De pronto, abrimos una puerta y al otro lado solo había un muro.

Encontramos así dos líneas de fuerza. Una primera que dice que la democracia es siempre imperfecta y que necesita estar continuamente haciéndose —de ahí la necesidad de proteger con extremo cuidado el derecho a la protesta y la contestación, a pesar de las tensiones que pueda generar en el propio sistema—. Esta es una política que se construye como creación, como acto de autoinstitución social, y que determina que la única Constitución democrática es la que experimenta «una innovación continua», en palabras de Antonio Negri². Otra línea, en un sentido opuesto, asegura que la democracia debe ser protegida como un niño frágil de la amenaza de la ultraderecha, incluso a veces socavando sus propios principios —con determinadas restricciones al habla pública, con nuevos delitos de odio, con nuevas limitaciones a la protesta—, cuyo objetivo declarado es reducir la capacidad de influencia social de estos nuevos *ultras* y dirigir toda la energía política a frenar su ascenso. Se nos presentan como dos líneas divergentes: «si queréis democracia, conformaros con lo existente y no pidáis más». En este sentido, la emergencia de los posfascismos está siendo instrumentalizada por algunos

1. E. Rodríguez: *Hipótesis democracia. Quince tesis para una revolución anunciada*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2013.

2. A. Negri: *El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2015.

partidos para intentar revertir la crisis de legitimidad de la política institucional, del propio proyecto neoliberal y de sus comparsas, incluidas las fuerzas socialdemócratas en sus vertientes social-liberales. Sin embargo, el verdadero «frente antifascista», el único que quizás sí tenga posibilidad de recuperar la democracia, es el que se propone ampliarla, el que trata de dar respuestas a la crisis de representación imaginando y dando lugar a formas políticas que mantengan vivo el vínculo entre el poder distribuido en el cuerpo social y las instituciones que lo sostienen, apostando por las luchas que pueden dar lugar a una redistribución del poder y los recursos.

Un temblor morado

En los últimos años se activó otro ciclo de movilizaciones con carácter global y potencial democratizador, que tuvo su epicentro en América Latina y los países del sur europeo, con sus propias declinaciones o temblores en el resto del mundo: el grito feminista. Si la propuesta de los posfascismos está articulada a partir de los ejes de género, raza y nación, las luchas de las mujeres son un lugar privilegiado para confrontarlos. La agenda antigénero tiene un papel relevante en el ascenso o la presencia pública de estas opciones *ultras* y forma parte de una clara estrategia para conseguir poder –institucional, mediático o social– que en Europa central y oriental y América Latina es utilizado claramente para socavar la democracia liberal. Para explicar su éxito, sin embargo, tendremos que retroceder algo más, hasta el surgimiento del neoliberalismo y lo que han supuesto estos 40 años de dominio, lo que han dejado sus formas de gobierno sobre el planeta y nuestras subjetividades. Como explica Wendy Brown, estas derechas se han alimentado de los modos de subjetivación y de la destrucción de los mundos comunes que ha impuesto la regulación neoliberal desde finales de los años 70³. Este aspecto micropolítico es clave en la estrategia de generar una cultura antidemocrática desde abajo. Si sus discursos que se basan en la libertad y la moral para justificar sus exclusiones y ataques a la democracia, a la igualdad racial, de género y sexual, a la educación pública y a la esfera pública, son las privatizaciones masivas, el ataque a los derechos sociales, pero también el asalto a la misma idea de lo social y la sociedad los que han preparado el terreno para su emergencia.

Por tanto, defender la democracia contra los posfascismos implica en realidad acudir a su raíz, recuperar su sustancia cuando esta se despoja de su corsé liberal. Una sociedad es democrática únicamente cuando reconoce

3. W. Brown: *En las ruinas del neoliberalismo. El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2021.

que la libertad solo puede remitir a la igualdad. En palabras de Emmanuel Rodríguez, y dicho en términos clásicos: «Solo los iguales pueden ser libres, y solo los libres pueden ser iguales. La república de los iguales es aquella que reconoce y hace efectiva para todos la libertad política fundamental: la participación en toda forma de poder explícito. Y tal condición exige la supresión de todo privilegio». Los feminismos tienen mucho que aportar a esta propuesta.

Pero ¿qué feminismo?

Si nos hemos preguntado por el contenido de la democracia, no podemos continuar sin hacerlo por el de los feminismos. Es indudable que hoy existe un movimiento diverso con diferentes propuestas y visiones que están relacionadas también con distintos intereses de clase.

La cuestión de cómo se concibe la igualdad dibuja la principal demarcación

La cuestión de cómo se concibe la igualdad dibuja la principal demarcación. Simplificando mucho, una de las líneas de fractura más evidente es la que divide entre quienes concebimos el feminismo como una herramienta de transformación del sistema, que necesariamente tiene que estar vinculada con otros procesos de contestación en marcha –no es solo un posicionamiento teórico, es una práctica política–, y aquellas cuyo horizonte es la igualdad entre hombres y mujeres dentro de los marcos de lo existente: su 50% del infierno. Este feminismo liberal concibe la igualdad con los hombres dentro de cada estrato social pero manteniendo la jerarquización social intacta. Y esto es así porque la entiende como igualdad formal, de oportunidades, no como igualdad real, material, de condiciones y posibilidades de vida. Por ello, las medidas que propone son políticas muy centradas en superar el «techo de cristal», pensadas para que algunas mujeres lleguen a los lugares de poder social.

De hecho, esta posición liberal coincide con lo que hasta hace poco han sido las líneas fundamentales del feminismo institucional *mainstream*. Como explica Susan Watkins, el enorme empuje del ciclo feminista de luchas de las décadas de 1960 y 1970 quedó institucionalizado internacionalmente en un proyecto político que consistía en incorporar a las mujeres a los estratos empresariales y profesionales del orden existente⁴. El discurso del «empoderamiento» de las mujeres desde esta perspectiva liberal es, desde hace mucho tiempo, un mantra del establishment global y una línea fundamental del feminismo de las organizaciones internacionales –Organización de las

4. S. Watkins: «Qué feminismos» en *New Left Review*, segunda época, 3-4/2018.

Naciones Unidas (ONU), Banco Mundial, etc.–. Un proyecto vinculado a las políticas oficiales de desarrollo que fomentaban el sector privado y promovían la incorporación masiva de las mujeres a la fuerza de trabajo –como mano de obra barata–; o su inclusión en la economía formal mediante el emprendimiento a través de la economía de la deuda y el sistema financiero –como lo hizo el programa de promoción de microcréditos a mujeres pobres–. Así, dice Watkins, la agenda feminista global sirvió para impulsar las nuevas doctrinas y prácticas neoliberales. Sus principales consecuencias han sido que los avances en la igualdad de género, que indudablemente se han producido a escala global, hayan ido acompañados de un aumento de la desigualdad económica y del empeoramiento de las condiciones de vida en todo el planeta, también en muchos de aquellos países incorporados al «desarrollo». «Igualdad en el colapso» podría ser su lema.

Feminismo del desborde

El nuevo ciclo de movilizaciones feministas de los últimos años ha desbordado completamente la agenda de paridad liberal –o neoliberal– que había devaluado la potencia de los feminismos como movimiento social después de la ola de los años 60 y 70, según explica Raquel Gutiérrez Aguilar sobre la experiencia latinoamericana⁵. Algo que también podemos aplicar a los feminismos de base europeos con un fuerte acento anticapitalista –y más presencia en el sur–. Sorprende la fuerza del feminismo latinoamericano que ha estado presente en las revueltas chilenas que han dado lugar a una Convención Constitucional; la «marea verde» que ha inundado las calles hasta conseguir el derecho al aborto en Argentina; las feministas bolivianas que se organizaron en la Asamblea de las Mujeres para frenar el golpe mientras declaraban su independencia de todo gobierno. Mientras tanto, en México, la brutalidad de los feminicidios ha desatado multitudinarias manifestaciones y disturbios protagonizados por mujeres. Estas nuevas rebeliones que han desbaratado la lógica del feminismo liberal se han levantado sobre la urgencia de las vidas perdidas, los feminicidios –#NiUnaMenos–, las violencias sexuales, pero también sobre las muertes por abortos precarios y la imposibilidad, incluso después de décadas de lucha, de decidir sobre la propia maternidad –la agenda de derechos sexuales y reproductivos–.

El desborde se ha producido, según Gutiérrez, por una renovación de las claves feministas –la ampliación de sus sujetos de lucha, sus demandas y

5. R. Gutiérrez Aguilar: «Rebelión feminista, horizontes de transformación y amenazas fascistas en América Latina» en *Vimeo*, s.f., <<https://vimeo.com/366604329>>.

sus debates—, donde las movilizaciones de carácter radicalmente autónomo han tenido un fuerte componente de feminismos comunitarios, decoloniales y populares. Estos feminismos renovados han sabido «superar» la cuestión sexual —o no quedar atrapados en el pánico moral y la victimización, y la posición de demandante de protección estatal que esta implica—. Es decir, han conseguido conectar la lucha contra las violencias machistas con el resto de las violencias estructurales e institucionales —de los Estados, entre ellas las policiales— y las que se derivan de ser pobres o de estar en prisión, además de aquellas producidas por la explotación de la naturaleza, el extractivismo y la explotación neocolonial de los territorios. Las luchas feministas latinoamericanas han puesto el cuerpo en todas estas luchas que nos recuerdan cuál es la relación entre el proceso de globalización capitalista, el nuevo proceso de acumulación por desposesión y la escalada de violencia contra las mujeres, líneas feministas que vienen de autoras como Silvia Federici⁶ o Maria Mies.

Para Mies, «el capitalismo no puede funcionar sin el patriarcado, ya que el objetivo de este sistema, es decir, el proceso de acumulación continua de capital, no puede lograrse a menos que se mantengan o se recreen las relaciones hombre-mujer» y lo justifica precisamente en la necesidad que este proceso tiene del trabajo de cuidados no remunerado⁷, es decir, de la reproducción gratuita o semigratuita de la mano de obra. De esta reflexión que

Muchas de las luchas más importantes de la época tienen una vertiente reproductiva

hace la economía feminista sobre el trabajo proviene la aportación política más potente y con mayor capacidad de devolver su sentido a la palabra democracia: la de reorganizar la sociedad a partir de la preservación y la defensa de la vida —vidas vividas en condiciones, vidas que se abren a la potencia del ser y no de la acumulación de beneficios—. Muchas de las luchas más importantes de la época tienen una vertiente reproductiva: por el derecho a la salud o la educación, a la vivienda y otros servicios

públicos, por la seguridad alimentaria, contra la contaminación provocada por el agronegocio, contra el cambio climático, por un cuidado digno en la vejez y buenas condiciones para el trabajo doméstico o por la renta básica universal... El feminismo de los últimos años las encarna, las atraviesa o se compone con ellas.

6. S. Federici: *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2004.

7. M. Mies: *Patriarcado y acumulación a escala global*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2019, p. 95.

Armar alianzas de iguales

La tarea de organizar la fuerza colectiva que encarne ese proyecto solo puede partir de feminismos que no funcionen como identidad, sino que sumen a los hombres y a las personas que no encajen en este esquema binario en la lucha contra el sexismo y en la reivindicación de una democracia de iguales: un proyecto de cambio que se construya colectivamente y de forma antiautoritaria. Para hacer esto, se han tejido alianzas prácticas en conflictos concretos. Precisamente, una de las virtudes del feminismo latinoamericano, dice Gutiérrez Aguilar, es que está teniendo capacidad para conectar las luchas, por ejemplo, entre el movimiento indígena y el movimiento feminista. Según Verónica Gago, «hoy una revuelta, un paro, una ocupación popular, indígena, comunitaria, al mismo tiempo tiene en su interior perspectiva feminista»⁸. Lo mismo sucede en Europa, donde las alianzas más prometedoras son aquellas en las que el feminismo se compone con la movilización de las personas migrantes o racializadas en su lucha contra las leyes de extranjería, contra el racismo o por los derechos laborales de los sectores donde abunda esta mano de obra y se dan condiciones de hiperexplotación: trabajadoras domésticas, sector agrícola, trabajo sexual, etc... Un nuevo sindicalismo feminista está naciendo.

En Estados Unidos, el feminismo también ha tenido un papel destacado en las movilizaciones más importantes que se han producido en este país desde la década de 1970: las de Black Lives Matter [Las vidas negras importan], que han puesto el foco en las violencias institucionales racistas y sexistas desde una perspectiva antipunitiva. No en vano en este movimiento ha estado muy presente la demanda de abolir las prisiones y «desfinanciar» a la policía para, en su lugar, llevar educación y servicios a los barrios pobres de mayoría afroestadounidense. Desde allí nos llegan ejemplos de movilizaciones que trascienden los debates abstractos o mediáticos sobre el «sujeto del feminismo» y generan alianzas prácticas como las que se produjeron en Nueva York o Hollywood, donde miles de personas marcharon bajo el lema «Las vidas trans negras importan».

La capacidad del feminismo para «hacer democracia» radica pues en la posibilidad de tejer frentes amplios, en la posibilidad de manifestarse y atravesar los conflictos concretos que muchas veces no se identifican como luchas «de mujeres», sino «de todos». Por ejemplo, en algunos lugares donde las opciones de extrema derecha han llegado al poder –Brasil, Polonia, etc.–, las manifestaciones feministas y el propio movimiento han sido percibidos

8. V. Gago: «Los feminismos cambiaron las luchas en el continente» en *Tinta Limón*, 18/9/2020, <<https://tintalimon.com.ar/post/los-feminismos-cambiaron-las-luchas-en-el-continente/>>.

como un lugar fundamental, a veces el principal, de oposición a los gobiernos *ultras*. En Polonia, por ejemplo, en las manifestaciones por la defensa del derecho al aborto llegaron a movilizarse sectores sociales de todo tipo: transportistas, taxistas, en defensa de la libertad de prensa, etc... Además, la plataforma feminista polaca All-Poland Women's Strike [Huelga de mujeres de toda Polonia] amplió sus demandas más allá de las reivindicaciones LGTBI+ y de las mujeres y acabó incluyendo otros reclamos: derechos laborales, separación entre Iglesia y Estado e independencia total del Poder Legislativo, como explica Magda Grabowska⁹. En todas partes, las luchas feministas con capacidad de ampliar la democracia están junto a todos aquellos y aquellas que defienden las libertades conquistadas que nos permiten dar batalla con más capacidad.

¿Una nueva fase de institucionalización?

El feminismo se está articulando con otras luchas alrededor del mundo y forma parte de un impulso democratizador que pone en el centro la cuestión de la igualdad. Sin embargo, en muchos países, sobre todo aquellos que han atravesado con más intensidad las revueltas de valores del 68, se ha convertido también en un amplio consenso que forma parte del sistema que se quiere cuestionar. Hoy probablemente nos estemos enfrentando a un nuevo proceso de institucionalización de la actual ola feminista que avanza con intensidades diferentes según las regiones. Las grandes movilizaciones de los últimos años han aumentado en gran medida el capital político de mostrarse públicamente como feminista –y no solo para la izquierda, aunque sí en especial–. Presidentas del Fondo Monetario Internacional (FMI) o de grandes bancos se han declarado feministas e incluso algunas líderes de partidos de extrema derecha europeos¹⁰. Evidentemente, esto no sucede en todas partes, en muchos países hay guerras muy virulentas en marcha y mostrarse como feminista tiene costos políticos y vitales importantes. Sin embargo, en otros, el feminismo –liberal– distingue y «tiene premio» dentro del juego de los discursos políticos de la democracia representativa. En países europeos como España, este feminismo se ha convertido en ideología «oficial» –parte del *mainstream*– y por ello las extremas derechas pueden presentarse como «antisistema» cuando lo confrontan. Con estas dificultades

9. M. Grabowska: «El derecho al aborto desencadena la revuelta de la juventud polaca» en *CTXT*, 16/11/2020.

10. N. Alabao: «La extrema derecha que dice defender a las mujeres» en *Nueva Sociedad* edición digital, 1/2020, disponible en <www.nuso.org>.



se encuentra el feminismo de base: los ataques de los fundamentalismos cristianos y las extremas derechas y el hecho de que sea fuente de legitimidad y distinción para la izquierda –y buena parte de la derecha–.

El feminismo institucional –más allá de las políticas públicas más tradicionales– se identifica de manera abrumadora con la cuestión de la paridad. Este es el discurso de la presencia de mujeres en posiciones de poder, o en posiciones de prestigio social –nadie demanda paridad en los campos italianos o españoles donde se hiperexplota a inmigrantes, ni en el sector de la construcción sino, como mucho, igualdad de salario y de derechos–. Se sobreentiende falsamente que más mujeres implica más políticas feministas. La pregunta es: ¿qué cambia esta presencia de mujeres en lugares de poder, más allá de las cuestiones simbólicas? ¿A quiénes representan estas mujeres que llegan, si no a las de su propia clase? Desde los feminismos de base respondemos que el poder que necesitamos no es el poder de «representar» a las mujeres en los escalones más altos de la estructura social, sino el que emana de los proyectos colectivos, la única posibilidad real de mejorar la vida de todas las mujeres, sobre todo de las que están más abajo.

Como decíamos, el feminismo puede ser un discurso que distingue, que permite la integración de determinadas mujeres en los circuitos del poder con mayúsculas –ya sean socialdemócratas o neoliberales–. El problema al que nos enfrentamos aquí es el de la representación: determinadas mujeres

**De ahí también la
obsesión por
el «sujeto» del
feminismo –quién
puede formar
parte y quién no–**

se convierten en supuestas mediadoras entre el movimiento y las instituciones, y por tanto, en «traductoras» en políticas públicas de la enorme potencia desplegada por los movimientos de base. De ahí también la obsesión por el «sujeto» del feminismo –quién puede formar parte y quién no, sobre todo en referencia a la discusión sobre la inclusión de las personas trans–. Muchas de las que se erigen en vigilantes de las fronteras del feminismo son aquellas que pretenden representar

a «las mujeres» en estas instancias estatales. Así ha sucedido por ejemplo en España. Para este feminismo oficial, desestabilizar la categoría «mujer» pone en peligro las políticas de afirmación positiva o de protección de las mujeres –entendidas en gran medida como víctimas–. Este feminismo transexcluyente asegura luchar contra el género pero en realidad lo reafirma, porque lo ha convertido en eje de sus demandas de inserción en las políticas estatales. Profundizando un poco, descubrimos los hilos que permiten entender este debate como destinado en gran medida a confrontar a ese feminismo de base de carácter más transformador, que ha sido mayoritario en el impulso de las movilizaciones de esta última ola y mucho más cercano al «transfeminismo». Es decir, a un feminismo que identifica las luchas LGTBI+ como propias, que

es inclusivo con las personas trans –y las trabajadoras sexuales– y para el que son centrales las alianzas con otros movimientos por la transformación social.

Aquí nos enfrentamos otra vez con el significado profundo de la democracia. Según Gutiérrez Aguilar, el problema con la concepción liberal de la política no es la representación en sí, sino cómo esta se organiza a partir de mecanismos delegativos que separan a los gobernantes de los gobernados¹¹. Esta delegación ha reforzado el gobierno neoliberal del mundo a través de una democracia que, como hemos dicho, cada vez más se identifica con su forma procedimental, que está estructurada a través de partidos y ultrarreglamentada, «en la cual la representación va a ser siempre una representación en ausencia, donde los representados están ausentes y están callados»¹². Para esta pensadora mexicana, precisamente una «política en femenino» es una política no estadocéntrica, en tanto lo que busca es la «producción de lo común», identificada con la reproducción en conjunto de la propia vida. El marco es esta impugnación de la política liberal que sitúa a los individuos solos y aislados frente al Estado, mientras que la política de lo común se establece a partir de la construcción de un «nosotras» colectivo que se gesta en los lugares de encuentro, en el hacer juntas¹³.

Profundizar la democracia desde el feminismo supone pues la existencia de movimientos y movilizaciones autónomas. Formas de componernos que no ignoren la importancia del Estado, sino que establezcan y afirmen la posibilidad de que haya política más allá de él. No implica desconocer los derechos alcanzados, ni dejar de pensar en cómo usar nuestra fuerza para conseguir otros, sino afirmar que los derechos inscritos en el Estado son totalmente insuficientes para nosotras –e incluso que pueden debilitar los componentes emancipatorios de las luchas–. Esto sucede por ejemplo en un tema esencial para el feminismo: el de recuperar la autonomía corporal frente a las agresiones. No queremos ser reducidas a víctimas necesitadas de protección estatal, y de hecho, no todos los cuerpos feminizados pueden recibir esta protección –para muchos de ellos el Estado no solo no protege, sino que es una de las principales fuentes de la violencia y opresión que sufren, ya sean migrantes sin papeles, prostitutas o trans–. A veces parece que olvidamos que el Estado sigue siendo una máquina de dominación y que los derechos convergen siempre con poderes de estratificación

11. «Producir lo común. Más allá de las políticas estadocéntricas. Con Raquel Gutiérrez» en *Nociones comunes*, Universidad Experimental de Madrid, 18/3 a 22/4/2020, <<https://soundcloud.com/traficantesdesue-os/4-producir-lo-comun-mas-alla-de-las-politicas-estado-centricas-con-raquel-gutierrez>>.

12. *Ibíd.*

13. R. Gutiérrez Aguilar: *Horizontes comunitario-populares. Producción de común más allá de políticas Estado-céntricas*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2017.

social y líneas de demarcación social en modos que a veces amplían y otras veces atenúan esas mismas dominaciones y fronteras sociales. Volviendo a Wendy Brown, no hay que olvidar que los derechos surgieron como un medio de protección frente a los abusos arbitrarios del soberano y del poder social; pero también como un modo de asegurar y naturalizar los poderes dominantes de clase, género, etc.¹⁴. Aunque los discursos se han transformado profundamente desde el feminismo de la década de 1970 – que todavía hablaba el lenguaje de la liberación y que acompañaba la oleada revolucionaria del 68– y hoy se codifican cada vez más las demandas de los movimientos en términos de derechos, el horizonte sigue siendo la emancipación de todo poder, no la protección estatal. La verdadera democracia se realiza en la exigencia de compartir ese poder, no en regularlo para protegerse, recuerda Brown.

Es en las luchas por la vida, en los espacios de autonomía de lo social, donde podemos reconocer otras formas de política no liberales –de democracia directa–, ya sean indígenas, feministas, del sindicalismo social, por los bienes comunes, espacios de apoyo mutuo, cooperativas u organizaciones políticas de base. Es decir, que no están organizadas a través de mecanismos de delegación. Un movimiento de base fuerte tiene además la capacidad de reconstruir la ruptura del lazo social impulsada por el neoliberalismo que, como decíamos, ha posibilitado el arraigo de las ideas posfascistas. La organización por abajo, la que hace continuamente la democracia, es la mejor barrera para frenar su avance.

Por tanto, no necesitamos que hablen por nosotras y no todas las revueltas son traducibles en términos legislativos, sino que sus experiencias producen experiencias «no representables»: espacios de autosostenimiento de la vida que generan alternativas sin esperar la sanción estatal; espacios y prácticas que abren caminos posibles para imaginar y llevar a cabo salidas a la crisis ecológica o social; lugares donde elaborar sentidos y lenguajes comunes necesarios para transformar la sociedad y la cultura. En las luchas feministas de los últimos tiempos, vislumbramos esta exigencia de ir más allá de la democracia representativa, de hacerla «real». ☐

14. W. Brown: *Estados del agravio. Poder y libertad en la modernidad tardía*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2019.

La crisis de la democracia como melancolía

Santiago Gerchunoff

La crisis de representación y la transformación digital de la esfera pública suscitan lamentos y quejas tan impotentes como recurrentes. Frente a ello, es posible ensayar una reinterpretación de estos fenómenos a la luz del liberalismo clásico. Esta mirada permite comprender su profundo sentido histórico y repensar el nuevo espacio digital como una forma de conversación pública de masas.

Uno de los argumentos más recurrentes para subrayar la debilidad actual de nuestras democracias es el avance de la llamada «crisis de representación». La queja por la crisis de representación apunta, más o menos vagamente, a una (siempre) creciente distancia entre «la gente» y «los políticos» o, diciéndolo con algo más de precisión conceptual, entre «representados» y «representantes». Siempre me ha llamado la atención la recurrencia inconsciente de este lamento a lo largo de toda la historia de la democracia representativa. Básicamente, porque la representación jamás ha dejado de estar en crisis, pero todas las épocas han interpretado ese fenómeno como algo que les es propio, como algo coyuntural. Se trata, pues, de un malestar permanente que, sin embargo, siempre adopta una cualidad epocal: tenemos la impresión de que la distancia entre representantes y representados nunca deja de aumentar respecto de un pasado en el que ese hiato era menor, en que la representación no había entrado

Santiago Gerchunoff: es profesor de Teoría Política en la Universidad Carlos III (Madrid) y dirige la editorial Clave Intelectual. Es autor de *Ironía On. Una defensa de la conversación pública de masas* (Anagrama, Barcelona, 2019).

Palabras claves: democracia, conversación pública de masas, internet, Modernidad.

aún en crisis. No obstante, es imposible encontrar un solo periodo histórico en el que el desarrollo de la democracia representativa no haya tenido como telón de fondo el llanto por la crisis de la representación, aunque se utilizaran diversos lenguajes para señalarla. Lo que añoramos es algo que no ha existido jamás: nuestro lamento tiene una naturaleza esencialmente melancólica.

Por otra parte, si hubiera que elegir otro gran lugar común para expresar la desazón por los peligros y debilidades a los que están sometidas nuestras democracias, este se vincularía sin duda a la reacción ante el advenimiento y desarrollo de internet, los algoritmos y las redes sociales, con todas las patologías y desastres que parecen conllevar (noticias falsas, polarización, proliferación de discursos identitarios, narcisismo, etc.). De acuerdo con esta visión, la esfera pública posterior al advenimiento de internet (lo que suele denominarse, simple y téticamente, «las redes» y yo prefiero llamar «conversación pública de masas») parece ser una de las principales amenazas actuales. Crisis de representación y decadencia de la esfera pública desde el advenimiento de internet son dos elementos infaltables a la hora de señalar las debilidades de nuestras democracias.

El lamento por la crisis de representación tiene un aroma tecnocrático y voluntarista al mismo tiempo, como si la representación fuera una máquina averiada que pudiera ser arreglada de alguna manera. La sugerencia de fondo es que si los políticos «se acercaran» más o estuvieran «más conectados» con el día a día de los ciudadanos, otro gallo cantaría. Pero bajo esta forma de entender la crisis de representación, quien se afana en resolverla lo que está pidiendo en verdad es más «política personalista» (en lenguaje del siglo xx) o más «populismo» (en lenguaje del siglo XXI). En todo caso, da la sensación de que nos encontramos ante un problema de grado, ante un contratiempo que se podría solventar con sencillez cambiando el comportamiento de los políticos, «rompiendo su burbuja».

En cambio, el lamento por el modo en que la conversación pública de masas deteriora la democracia es mucho más virulento y parece tocar fibras más profundas: la polarización, la difusión de *fake news* o la conversión de la política en una batalla de «identidades»; la gente que dedica mucho más tiempo a exhibirse que a participar realmente en la transformación del mundo o la mejora de la vida colectiva. Los temores que despierta la conversación pública de masas son muchas veces contradictorios (miedo a la facilidad con que se manipula a las masas digitales mediante los algoritmos y, casi al mismo tiempo, temor ante el carácter ineducable, identitario y nihilista de esa misma turba...), pero no por eso son menos catastrofistas.

El lamento por la crisis de representación tiene un aroma tecnocrático y voluntarista al mismo tiempo

Los sentidos de la democracia

Me propongo rescatar en las siguientes páginas la idea de crisis de representación de esta comprensión circunstancial, recurrente, melancólica y frustrante, porque creo que la idea esconde un significado profundo y esencial para comprender el sentido de la democracia representativa. En mi opinión, la crisis de representación no constituye un problema «solucionable» de la democracia representativa, sino que es un rasgo estructural, esencial, del que esta no puede prescindir. La verdadera crisis no sería la distancia perogrullesca y supuestamente coyuntural entre representantes y representados, sino una división interna dentro de cada ciudadano, dentro de cada persona moderna; la distancia y separación que hay entre los dos elementos que componen la libertad política de la Modernidad: el derecho al voto y a la libertad de expresión. El sistema representativo es precisamente la afirmación de esta distancia, de esta separación, la idea de que su existencia es fundamental para que la libertad funcione. Es decir que se trata de una «crisis» (de una herida, de una división) *asumida* por el liberalismo, no de algo que mejora o empeora en función del momento y que podría modificarse con el tiempo. En la concepción que propongo, la crisis de representación sería una herida imposible de suturar cuyo origen está en la ruptura de dos realidades que en la democracia antigua (directa) se encontraban unidas: el gobierno y la expresión; la administración de lo colectivo y el espacio de aparición individual.

Enseguida explicaré mejor estas diferencias entre democracia antigua (directa) y democracia moderna (representativa), que son la esencia misma del liberalismo clásico y que me permiten reformular la idea de crisis de representación. Pero lo que más me interesa de esta reinterpretación de la idea de crisis de representación ya no anecdótica, sino esencial, es que puede ayudarnos a comprender mejor el sentido histórico del advenimiento de la conversación pública de masas digital y a vislumbrar el significado profundo que tiene el hecho de que la percibamos como una barbarie o como una amenaza contra la democracia. Mi hipótesis es que si entendemos bien en qué consiste la crisis de representación, como algo intrínseco e insuperable de la democracia moderna, también entenderemos mejor qué es lo que se juega en la conversación pública de masas que tanta preocupación parece suscitar. Mi sospecha es que la crisis de representación requería (por una pulsión de cierre de una herida constitutiva, un cierre en falso, quizás) la aparición de algo parecido a esa conversación pública de masas que la tecnología digital hizo eclosionar.

La bella totalidad en crisis

Pero ¿en qué consiste la reformulación de la crisis de representación como esencia de la democracia representativa? ¿Qué tiene que ver la distinción entre democracia antigua y moderna cristalizada en la teoría política liberal clásica? Un breve y superficial repaso histórico por la forma en que se gestó el dispositivo de la democracia representativa en la tradición liberal puede sernos de utilidad a la hora de responder a estos interrogantes.

Como bien señalaron sus críticos más lúcidos (Carl Schmitt entre ellos), el liberalismo es una ideología política a la contra, reactiva; no nace de una propuesta positiva de fundación de la sociedad, sino del contraste con poderes heredados y del intento de matizarlos o corroerlos, siempre con la

El liberalismo es una ideología política a la contra, reactiva

protección de la libertad individual como meta. Su adversario discursivo o teórico más evidente, aunque no sea más que por su concomitancia histórica, fue la monarquía absolutista del siglo xvii. Es probable que la doctrina de John Locke —que promovía una Constitución mixta para socavar el poder absoluto de los monarcas y para obligar a estos a «dividir» (corroer) su soberanía con los parlamentos— haya sido el primer gran planteamiento teórico político cristalinamente liberal de la historia. Pero, además del poder absolutista de raíz medieval, hay otro interlocutor/adversario teórico fundamental para la construcción de la teoría política liberal: la democracia ateniense, las llamadas «repúblicas antiguas». Digamos que la síntesis democrático-liberal moderna se construyó tanto contra (o en contraste con) el poder monárquico medieval como contra (o en contraste con) las democracias directas antiguas.

¿En qué consistían las democracias antiguas y cuáles eran los grandes contrastes con las modernas? Dentro de la teoría política de Benjamin Constant, uno de los pensadores políticos del liberalismo clásico más elegantes y precisos, la comparación entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos no ocupa un lugar anecdótico, no es simplemente un ejemplo, una ilustración o una analogía útil para comprender una teoría: representa uno de los pilares conceptuales más robustos de la construcción del sistema representativo moderno.

Empezamos a entender esto cuando recordamos que Constant construye su teoría política como una respuesta a (y un remedo de) la Revolución Francesa. El error fundamental que observa en este acontecimiento histórico (y en su inspirador, Jean-Jacques Rousseau) es haber tenido como ideal político las repúblicas antiguas. La idea de Constant es que cualquier intento de construir una república antigua (basada en la democracia directa) en el mundo moderno está condenado al desastre (al terror jacobino,

precedente del totalitarismo, por ejemplo). La aparición de lo que podríamos llamar el «espacio privado» hace necesario un sistema político que permita a los individuos cultivar su recién conquistada esfera de independencia, y en ese nuevo orden resulta imposible trasladar sin más la idea de libertad de los antiguos, cuyo fundamento era la participación de los ciudadanos en los asuntos colectivos.

En la Antigüedad, el *oikos*—el mundo doméstico y privado; el espacio de los cuidados, de la alimentación y de la reproducción— había sido un ámbito inferior y enteramente supeditado a la vida pública, verdadero lugar de privilegio y fuente de dignidad. Pero en el mundo moderno, según descubre Constant, al tiempo que nace un nuevo ámbito privado lleno de atractivos (el comercio, el crecimiento personal, el consumo, la prosperidad), el ámbito público, el de la gestión de los asuntos colectivos, se vuelve cada vez más engorroso, complejo y molesto. En este contexto, el mecanismo de la representación sirve precisamente para *liberar* a los ciudadanos de la onerosa carga que supone lo común y para permitirles que se consagren por entero a ese nuevo espacio privado, sede fundamental del corazón moderno y de su libertad propia; a partir de ese momento, serán los representantes (como si de unos sirvientes se tratara) quienes se ocuparán de los asuntos colectivos para que nosotros podamos dedicarnos al «apacible disfrute de la independencia individual»¹. De tal modo que, en el esquema liberal, la política será una herramienta, un aparato, un medio para proteger el verdadero fin de la vida del hombre moderno (tal como se decía entonces): el disfrute de su libertad individual.

Pero en este modelo, las personas modernas siguen teniendo una relación con la gloriosa libertad política antigua, aunque sea puramente instrumental: por un lado, tienen derecho a votar para cambiar cada tanto a sus sirvientes (a los representantes) y, por otro, gozan de la libertad de opinar, de expresarse públicamente para poder vigilar y denunciar el posible mal comportamiento de esos representantes. Voto y libertad de expresión serán las *garantías* (el término es de Constant) a mano para poder disfrutar de la libertad propia, la privada.

Pero más allá de esta inversión de la relevancia del ámbito público y del privado para las libertades modernas y antiguas, lo grandioso de la democracia directa antigua era que en ella la participación política constituía al mismo tiempo el gobierno y la expresión. La asamblea era de forma simultánea (y a través de un mismo procedimiento: la libre conversación entre iguales) un instrumento de administración de los asuntos comunes y un espacio de aparición. Ahí se daba la prodigiosa amalgama (la bella unidad) entre la participación en lo colectivo y la revelación de la identidad.

1. B. Constant: *Del espíritu de conquista y de la usurpación*, Tecnos, Madrid, 2008, p. 110.

En palabras de Hannah Arendt, cuya mirada estoy haciendo mía, «[l]a polis griega fue, en tiempos, precisamente esa forma de gobierno que daba a los hombres un espacio para sus apariciones, un espacio en el que podían actuar, una especie de teatro en el que podía mostrarse la libertad»². Una conversación libre entre iguales como forma de gobierno que era, al mismo tiempo y sin separación alguna, gobierno y expresión, administración y espacio de aparición.

Como he señalado, esto que estaba unido en el mundo antiguo llega al mundo moderno dividido, y esa división es la que podemos considerar como la fuente de la verdadera crisis de representación. Pero ¿por qué exactamente? ¿Cuál es el problema de esta separación en dos mitades, el voto y la libertad de expresión, de la libertad antigua? ¿Por qué implicaría una *herida*, una crisis, una frustración?

Excedente de expresividad

Dos son los problemas que implica esta división, a la que acabo de llamar «verdadera» crisis de representación, porque dos son las mitades que deja y las dos quedan incompletas. Y en esa incompletitud de cada mitad reside propiamente la herida, la frustración inherente a la democracia y, me atrevería a decir, a la subjetividad modernas.

¿En qué sentido es el derecho al voto una «mitad incompleta»? ¿Qué frustraciones conlleva? En este punto resultan especialmente luminosas las reflexiones alrededor de las consecuencias políticas de la implantación del sufragio universal de Albert O. Hirschman en la última parte de su libro *Compromisos variables: interés privado y acción pública* (1979), donde el sabio berlinés elaboraba una «teoría de la decepción» en la vida política moderna³. Aunque cabe imaginar que existen muchas maneras de participar en los asuntos públicos, la institución política central de la democracia moderna,

En el voto no se reflejan las diversas intensidades con que los votantes sostienen sus opiniones

según Hirschman, es nada menos y nada más que el voto. El problema es que la regla fundamental de la igualdad en democracia, «un hombre, un voto», proporciona a todos los ciudadanos una participación *mínima* en la toma de decisiones públicas, pero al mismo tiempo establece un *máximo* o un tope. En efecto, en el voto no se reflejan las diversas intensidades con que los votantes sostienen sus opiniones. Se podría decir que el voto supone una estandarización artificial de la *doxa*. Por

2. H. Arendt: «¿Qué es la libertad?» en *Entre el pasado y el futuro*, Península, Barcelona, 1996, p. 166.

3. Clave Intelectual, Madrid, 2022.

medio del voto no es posible expresar ni la particularidad ni la intensidad de las opiniones, ni mucho menos la «identidad personal», ya que en casi todos los sistemas electorales (y con buenos argumentos técnicos) el voto es incluso anónimo, cosa que ya irritaba hace más de un siglo a pensadores sensibles a esta problemática como John Stuart Mill.

La cuestión, en todo caso, es que el voto resulta extremadamente limitado en términos de expresión, o, directamente, es «inexpresivo». Por un lado, actúa en efecto como salvaguarda (garantía, decía Constant) frente a los impulsos represivos de las autoridades políticas, pero por otro lado estandariza y encarrila en una sola dirección el grueso de la participación política de la ciudadanía.

Lo más importante para nuestro argumento, sin embargo, es que la reflexión de Hirschman revela la existencia de una suerte de *excedente* o remanente de expresividad en los sujetos modernos que el voto no puede plasmar. Por consiguiente, cuando la institución casi muda del voto es el principal sostén de la participación política, los ciudadanos tienden a experimentar una profunda decepción: hay un deseo político que no encuentra forma de expresarse o canalizarse.

Y aquí es donde debería hacer acto de presencia la otra mitad de aquello que, según el argumento que venimos desarrollando, en la democracia antigua estaba unido y llegó a la Modernidad dividido: la libertad de expresión. El problema es que, en los términos del propio liberalismo, la libertad de expresión no tiene la función de hacerse cargo de un deseo de los ciudadanos (el deseo de aparición, de autorrevelación), sino que funciona como una salvaguarda, como una mera garantía; como una libertad negativa que, en lugar de ampliar la participación de los ciudadanos, sirve tan solo para limitar el poder de los gobernantes. Una vez más: no se trata del privilegio (positivo, como fin en sí mismo) de participar en lo público y a través de la expresión mostrar quién es uno, sino de la capacidad (negativa, meramente instrumental) de limitar el poder de los representantes. Pero, con la crisis de representación abierta, ese deseo vacante sigue buscando un cauce adecuado y la mejor manera de encontrarlo es a través de algún desarrollo en el campo de la libertad de expresión. Creo que la irrupción de la tecnología digital ha otorgado por primera vez a la libertad de expresión la posibilidad de ser el vehículo para ese deseo pendiente. Con todo el peligro que esa potencia (la de cerrar la herida, la crisis) conlleva para el equilibrio del esquema liberal, la conversación pública de masas es el escenario de ese intento de cierre.

Torrente de expresividad

Desde este punto de vista, convendría reinterpretar todas las críticas a la conversación pública de masas posterior al advenimiento de internet. Las tendencias que se despachan como meramente narcisistas, identitarias o polarizadoras pueden tener un sentido político profundo. La conversación pública de masas es, al fin y al cabo, el área de la libertad de expresión que se expande para hacerse cargo de los deseos que el esquema liberal, en sus crisis, no conseguía alojar. La multiplicación de los espacios de aparición que implica la implantación universal de los dispositivos conversacionales (ordenadores y teléfonos inteligentes) ha logrado infiltrar lo político en todas las esferas de la vida, incluso en las que tradicionalmente se han considerado domésticas o privadas. No parece haber ya ningún jardín donde podamos quedarnos al margen, donde no estemos en cierta manera conminados a posicionarnos, a declararnos y a exhibirnos.

Así, la conversación pública de masas produce una sociedad *hiperpolítica*, en la cual todo puede ser interpretado en términos de ideologías o polaridades (amigo/enemigo). La división que este torrente expresivo digital estaría anulando no sería ya entonces la que todavía separa voto y libertad de expresión, sino la que separaba lo público y lo privado. Pero si algo caracteriza a la tradición liberal es la resistencia a la fusión de estas dos esferas, cuya existencia independiente es uno de los rasgos más propios y esenciales de la Modernidad.

Quizás hayamos alcanzado entonces unas condiciones «posmodernas» en cierto sentido; el mismo que permitió a Marshall McLuhan comprender el mundo que traería la revolución electrónica mediante la imagen de una «aldea global» y ya no la de una ciudad-Estado moderna, insertando justo en el posible ocaso de la Modernidad un elemento premoderno. La conversación pública de masas representaría igualmente el retorno de lo antiguo reprimido, la vuelta de ese «teatro donde se muestra la libertad» del que todos queremos participar y que todo lo inunda. Con esta transformación de la libertad de expresión de una libertad negativa en una positiva, tal vez estemos experimentando la consumación o el final (todavía no lo sabemos) de la vieja libertad de los modernos. ☐

Democracia directa y movilización social: lo que nos muestra Uruguay

Alicia Lissidini

Además de por su estabilidad política, Uruguay es conocido por sus mecanismos de democracia directa. Más allá de los resultados concretos en cada caso, las iniciativas ciudadanas, casi siempre coordinadas con partidos políticos, dan densidad a la conversación pública y canalizan la movilización por vías institucionalizadas. El referéndum del 27 de marzo contra una megaley del actual gobierno es una muestra de ello.

Según diversas mediciones y análisis, Uruguay es uno de los países más democráticos de América Latina. Su proceso de redemocratización comenzó luego de la dictadura cívico-militar (1973-1985) impuesta tras un periodo de conflictos sociales y altos niveles de polarización y de violencia política –tanto de sectores de izquierda como de derecha–. Los partidos siguen siendo los principales mecanismos de representación, aunque, al igual que en la mayoría de las democracias, disminuyó la adhesión ciudadana hacia ellos y aumentaron el descontento y la protesta. Pero, y aquí yace una de las particularidades de este pequeño país de América del Sur, parte de ese descontento se canalizó a través de las iniciativas de democracia directa. La legislación uruguaya

Alicia Lissidini: es profesora titular e investigadora categoría II de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Argentina, e investigadora asociada del Centro de Información y Estudios del Uruguay.

Palabras claves: democracia directa, movilización social, referéndum, Uruguay.

Nota: este artículo se basa en la investigación plasmada en el artículo «Democracia directa contra déficit democrático: el caso uruguayo» en *RECERCA. Revista de Pensament i Anàlisi*, en prensa.

habilita una serie de mecanismos para ejercerla, con el referéndum como figura central, tanto para aprobar como para derogar leyes, y el plebiscito para los casos de reforma constitucional¹.

Uruguay es el país con mayor cantidad de ejercicios de democracia directa en América Latina² y el país de la región que más tempranamente la incorporó y la ejerció en el nivel nacional. Y un dato adicional: la inclusión de mecanismos de democracia directa se realizó en un contexto de ampliación y posterior consolidación de la democracia y no de crisis de representación³. Los partidos

Uruguay es el país con mayor cantidad de ejercicios de democracia directa en América Latina

políticos, artífices de esa democracia, operaron en un sistema pluralista y tuvieron un alto grado de existencia organizacional, implantación social y continuidad histórica. En definitiva, la inclusión de la consulta y de la iniciativa popular contribuyó a un uso eficaz de la voz, evitando así la *salida* y reforzando la *voz* y la *lealtad* hacia los partidos políticos y las decisiones tomadas por ellos,

siguiendo la teoría de Albert Hirschman⁴. En el caso uruguayo, a diferencia de otros países, la democracia directa no puede ser promovida por el Poder Ejecutivo (el presidente no puede convocar referendos) y no existen limitaciones ni restricciones respecto de los temas que pueden ser propuestos por la ciudadanía.

La democracia directa tiene larga data en el caso uruguayo. Sin embargo, a partir de 1989 adquirió una característica muy diferente: pasó a ser una herramienta de protesta —e incluso de «amenaza»— para (intentar) derogar leyes aprobadas en el Parlamento y para promover iniciativas de reforma constitucional. Nuestra hipótesis es que la democracia directa contribuyó a descomprimir el malestar y a darle cauce institucional a la protesta, evitando los estallidos sociales, democratizando el debate y, eventualmente, derogando leyes o favoreciendo su aprobación. Pero, al mismo tiempo, ha generado amplios debates ciudadanos. En un contexto de fuerte descontento social y gran pesimismo político, la democracia directa reaparece en el debate político y constitucional como una posibilidad de

1. La Constitución de 1967 habilita la realización de plebiscitos y referendos. Los primeros están destinados a ratificar reformas constitucionales, y los segundos, a derogar la totalidad de una ley o parte de ella. También se prevé la iniciativa ciudadana ante el Poder Legislativo para impulsar normas. En el referéndum se consulta a la ciudadanía acerca de un texto concreto, mientras que en el plebiscito se consulta sobre una decisión aún no plasmada en un texto normativo.

2. A. Lissidini: «Democracia directa en América Latina: avances y contradicciones» en Anja Minnaert y Gustavo Endara (coords.): *Democracia participativa e izquierdas. Logros, contradicciones y desafíos*, Fundación Friedrich Ebert, Quito, 2015.

3. A. Lissidini: «Los plebiscitos uruguayos durante el siglo xx: ni tan autoritarios ni tan democráticos» en *Cuadernos del CLAEH. Revista Uruguaya de Ciencias Sociales* N° 81-82, 1998.

4. A.O. Hirschman: *Salida, voz y lealtad*, FCE, Ciudad de México, 1977.

contribuir a reducir la distancia entre la ciudadanía y las elites políticas, entre las necesidades sociales y la agenda gubernamental. Y la experiencia uruguaya puede ayudar a aterrizar el debate.

Una larga tradición

La aprobación parlamentaria de la llamada Ley de Caducidad Punitiva del Estado (ley N° 15.848 de 1986), una suerte de amnistía a los militares que habían cometido violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, puso en marcha –por primera vez en la historia uruguaya– el mecanismo de referéndum en 1989. Y aunque no logró el resultado esperado por las organizaciones de derechos humanos –no se consiguió la mayoría para derogar la ley–, generó un debate inédito en Uruguay respecto al régimen dictatorial, las torturas y las desapariciones. El debate volvería a darse en un nuevo intento por modificar la misma ley en 1996. Todo ello contribuiría a mantener una conciencia ciudadana respecto a las violaciones a los derechos humanos que se refleja en cada multitudinaria Marcha del Silencio en Montevideo y en otras ciudades del país, en las que se conmemora el 20 de mayo. Estas marchas convocan no solo a quienes sufrieron directa o indirectamente la dictadura, sino especialmente a las generaciones más jóvenes, quienes justamente defienden los derechos humanos desde una concepción mucho más amplia que la de sus padres.

Con relación a las privatizaciones, también la sociedad se mantuvo alerta y en contra de las reformas liberalizadoras, en parte por conocer bien los efectos privatizadores en la vecina Argentina, que derivaron en el aumento del precio de los servicios públicos y no necesariamente en su mejoría. Pero también tiene un peso el carácter «estatista» de la sociedad uruguaya, que defiende las empresas públicas no solo por su buen funcionamiento, sino por valoraciones que trascienden los aspectos puramente económicos. El referéndum por iniciativa ciudadana sirvió para frenar de forma parcial la ley de privatizaciones (ley N° 16.211 de 1991), y en iniciativas sucesivas se puso freno a los diversos intentos en el mismo sentido (v. cuadro).

Hay también iniciativas ciudadanas que no alcanzan las firmas para impulsar la consulta o que no consiguen los votos requeridos, y casos en los que la iniciativa se abandona porque el Parlamento o el Poder Ejecutivo cambian su política frente a la demanda social⁵. En el caso de la Ley de Interrupción

5. Un caso notorio fue el de la eliminación de la obligación de la inclusión financiera («bancarización») para todas las transacciones, que era parte originalmente de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Un caso mucho menos publicitado fue la prohibición de la carrera de galgos que se hizo efectiva con un decreto del presidente Tabaré Vázquez.

Voluntaria del Embarazo (ley N° 18.987 de 2012), en 2013 fracasó el intento de llevar a referéndum su derogación por la vía «rápida»⁶. Ello tuvo como efecto que no se volviera a plantear más la posibilidad de su derogación, lo que significó, de hecho, una nueva victoria de las organizaciones feministas. En 2019 ocurrió lo propio con el intento de llevar a consulta popular la derogación de la Ley Integral para Personas Trans (ley N° 19.684 de 2018). Esas instancias terminaron legitimando las leyes en cuestión, que surgieron justamente de una intensa demanda social.

Distinto fue el caso de la Ley de Riego con Destino Agrario, de 2017, impulsada por el gobierno del Frente Amplio. Esta medida fue cuestionada por varias organizaciones ambientalistas e incluso por legisladores del oficialismo, quienes impulsaron un referéndum por la vía «lenta», es decir que la ciudadanía tenía un año para juntar firmas de 25% del padrón electoral para promover directamente un referéndum. Sin embargo, al no contar con el activismo de la izquierda, que entonces estaba en el gobierno, no se llegó a reunir las firmas requeridas. De cualquier manera, el malestar con este tipo de leyes y con las políticas que afectan el ambiente quedó de manifiesto y volvería a estar presente en otras oportunidades. Hay sectores sociales, todavía minoritarios, preocupados por recursos no renovables, como el agua, y en general por el ambiente y el cambio climático. Estos temas forman parte de esta nueva intersubjetividad que está presente especialmente en los movimientos sociales, pero también en las generaciones más jóvenes.

Tampoco han sido suficientes (hasta ahora) las firmas de los activistas de «Uruguay soberano» que buscan limitar y transparentar los acuerdos de los gobiernos con las empresas extranjeras que explotan recursos naturales en el país, para obligar a que esos acuerdos deban ser aprobados por el Parlamento.

La Ley de Urgente Consideración (LUC) en contexto pandémico

El 23 de abril de 2020, a 100 días del inicio del gobierno de la Coalición Multicolor (de centroderecha), liderada por Luis Lacalle Pou, y en un contexto de crecimiento exponencial de casos de covid-19 y de extrema incertidumbre respecto al futuro, el Poder Ejecutivo puso a consideración del Parlamento una ley de urgente consideración (LUC). Ese carácter, derivado del inciso 7 del artículo 168 de la Constitución, supone que la propuesta debe ser discutida y resuelta por los parlamentarios en 90 días; de lo contrario, se considera aprobada.

6. La vía rápida se activa presentando las firmas de 2% del padrón electoral —unas 52.000 firmas— para que la Corte Electoral convoque a un prerreferéndum al que debe adherir 25% de la ciudadanía para activar el referéndum. En los hechos, es un mecanismo más difícil.

Desde la reinstauración de la democracia en 1984, solo se apeló a esa figura en 13 ocasiones y para aprobar políticas puntuales. En este caso, se trató de una ley «ómnibus», pues abarcó al menos 15 temas diferentes, en 502 artículos, que modificaban unas 50 normas referidas a seguridad, educación, alquiler de viviendas, adopción de personas, privatización de servicios públicos e inclusión financiera, entre otros temas relevantes. En los aspectos económicos da un giro liberal, restringe el rol del Estado; en relación con la educación y otras áreas sociales, reduce y limita el papel de las organizaciones sindicales, y en términos de seguridad, aumenta el punitivismo, especialmente respecto a los delitos sobre la propiedad, pero también a las protestas sociales.

Si bien la versión original de la ley tuvo modificaciones a medida que avanzó su debate en las comisiones del Parlamento y se escucharon diversas voces de las organizaciones de la sociedad civil y de la propia coalición gobernante, que objetó aspectos sustantivos de la LUC, lo cierto es que esta conlleva una serie de modificaciones que afectan incluso los derechos humanos. Así lo afirmó el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en su último informe⁷.

Aunque el contexto pandémico impedía la realización de manifestaciones públicas contra la ley, hubo protestas en las calles y voces opositoras en medios y redes. Con los votos de los integrantes de la coalición –y en algunos artículos, también con los votos de la oposición–, la LUC fue aprobada el 8 de julio de 2020 con escaso debate en el Parlamento y fuera de él. Pero la reacción social operó incluso en el contexto pandémico. Y allí aparecieron a la mano, nuevamente, los mecanismos de la democracia directa.

Así como en 1992 el sindicato Federación ANCAP (que agrupa a empleados de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland) tuvo un rol central, esta vez el secretariado del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la entidad sindical matriz en Uruguay, ha venido desplegando una campaña contra la ley por sus efectos privatizadores sobre diversas empresas estatales. Lo novedoso en esta oportunidad es que las mujeres entraron en escena a través de la Intersocial Feminista. Fueron ellas quienes defendieron el referéndum y rechazaron la inclusión de ciertos artículos referidos a seguridad –al igual que lo hizo cada sector social– y la

Lo novedoso en esta oportunidad es que las mujeres entraron en escena a través de la Intersocial Feminista

7. «Nuevo informe de la INDDHH sobre la ley de urgente consideración», 15/6/2020, disponible en <www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/noticias/nuevo-informe-inddhh-sobre-ley-urgente-consideracion>.

negociaron con el Frente Amplio, que inicialmente se opuso a la propuesta de activar la democracia directa, en parte por temor a no alcanzar las firmas requeridas y también porque algunos sectores de izquierda son reacios al ejercicio de la democracia directa y en general a la participación ciudadana más allá del voto.

La gran mayoría de los analistas políticos y casi todos los políticos –en especial los del Frente Amplio– vaticinaron la derrota de la iniciativa. El contexto de pandemia, la alta popularidad del presidente Lacalle Pou, la escasa información pública sobre la LUC y sobre la recolección de firmas y un Frente adormecido tras su derrota electoral luego de 15 años consecutivos en el poder (2005-2020) no parecían el mejor escenario para recoger las 700.000 firmas necesarias para activar la consulta. Sin embargo, una vez que se llegó a un acuerdo y la campaña se inició, la movilización del sindicalismo, de las organizaciones sociales y del Frente Amplio le dieron visibilidad a la campaña. A juzgar por los datos, la coalición de izquierda habría aportado más de la mitad de las firmas, y el sindicalismo y las organizaciones, el resto; lo que habla de la centralidad de la militancia frenteamplista, pero también de una necesidad mutua entre movimientos sociales y partidos. En este caso, la iniciativa surgió a pesar de los líderes del Frente Amplio. Es decir, las organizaciones sindicales y sociales les impusieron a los frenteamplistas agenda, pero sin este actor político no se habría alcanzado la meta.

Este referéndum tuvo características inéditas (al momento de escribir este artículo, la campaña electoral entre el «Sí» y el «No» se encontraba en pleno desarrollo). Las firmas debieron juntarse en el peor momento de la pandemia en Uruguay: entre los primeros días de enero y el 8 de julio de 2021, cuando la cantidad de personas fallecidas, internadas y contagiadas llegaba a su récord histórico. Durante ese lapso estuvieron prohibidas las aglomeraciones, los actos públicos, los espectáculos, los partidos de fútbol, los recitales, los debates públicos presenciales... es decir, todos los eventos sociales en los que se suele juntar firmas. Las coordinadoras por la derogación total y parcial solicitaron una prórroga para obtener un plazo mayor, que les fue denegada. Además, los principales medios de comunicación tendieron a ignorar la campaña de recolección de firmas, aunque en los barrios y en las principales avenidas se notaba un número cada vez mayor de activistas, que con el tiempo se hicieron más visibles, tanto que, finalmente, terminaron siendo noticia.

Para el 8 de julio, se habían reunido más de 800.000 firmas, una cifra inesperada incluso para las propias activistas. La Corte Electoral convocó a la ciudadanía para el 27 de marzo de este año para que se expresara a favor o en contra de la derogación de la LUC. Aunque en esta oportunidad (única en Uruguay), la ciudadanía debe aprobar o rechazar la derogación *in totum* de 135 artículos, lo cual es muy complejo por la diversidad de

temas en juego y la imposibilidad de aprobar unos y rechazar otros, las personas se empezaron a informar y a debatir sobre los temas, y esto sin duda contribuye a la democratización de las decisiones políticas y a una mejora de la conversación pública.

Cuadro
Uruguay: principales iniciativas ciudadanas
y sus resultados (1989-2020)

| Consultas populares | Organizaciones que convocan y grupos que apoyan | Porcentaje de votos a favor |
|--|---|--|
| 16 de abril de 1989 Referéndum contra la Ley de Caducidad Punitiva del Estado. | Organización de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos. Frente Amplio y sectores de la izquierda de los partidos tradicionales. Central Sindical PIT-CNT. | 43,9 (no aprobada la derogación, se mantiene la ley). |
| 26 de noviembre de 1989 Plebiscito por el reajuste de pasividades según Índice Medio de Salarios. | Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Banco de Previsión Social. Frente Amplio (con la salvedad del MPP). Partido Colorado, con la excepción del grupo de Jorge Batlle; Partido Nacional, con la excepción de los sectores del gobierno (Lacalle-Aguirre). | 81,78 (aprobada la reforma). |
| 13 de diciembre de 1992 Referéndum parcial contra la Ley de Empresas Públicas (que habilitaba la privatización). | Central Sindical PIT-CNT, en particular el sindicato de trabajadores de la empresa telefónica. Frente Amplio y algunos sectores del Partido Colorado (en particular el Foro Batllista, liderado por Julio María Sanguinetti). Algunos grupos y líderes del Partido Nacional (como el Encuentro Wilsonista, liderado por Alberto Zumarán) y del Nuevo Espacio. | 72 (aprobada la derogación parcial de la ley). |
| 27 de noviembre de 1994 Plebiscito por la derogación de las reformas introducidas a la seguridad social y la prohibición de introducir modificaciones por la vía de la rendición de cuentas. | Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Organización Nacional de Jubilados y Central Sindical PIT-CNT. Frente Amplio; Partido Colorado (con la excepción de Jorge Batlle) y el sector de Alberto Volonté del Partido Nacional. | 69,8 (aprobada la reforma). |

| Consultas populares | Organizaciones que convocan y grupos que apoyan | Porcentaje de votos a favor |
|---|---|---|
| 27 de noviembre de 1994 Plebiscito por la obligación constitucional de otorgarle a la educación pública 27% del presupuesto nacional. | Sindicatos de la enseñanza (en especial docentes y funcionarios). Frente Amplio. | 32 (no aprobada la reforma). |
| 31 de octubre de 1999 Plebiscito para habilitar la autonomía financiera del Poder Judicial. | Asociación de Funcionarios Judiciales, Asociación de Actuarios, Asociación de Defensores de Oficio, Colegio de Abogados, Asociación de Escribanos y Asociación de Asistentes Sociales. Fue apoyada por sectores del Frente Amplio y del Partido Nacional. | 42,3 (no aprobada). |
| 7 de diciembre de 2003 Referéndum por la derogación de la llamada Ley de ANCAP, la norma que permitía la desregulación del monopolio que esta empresa petroquímica mantiene sobre la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y sus derivados. | Comisión de Defensa de ANCAP, PIT-CNT (sindicalismo) y el Encuentro Progresista-Frente Amplio (algunos sectores, como los liderados por Astori y Rubio, se opusieron a la derogación de la ley). | 62,2 (aprobada la derogación de la ley). |
| 31 de octubre de 2004 Plebiscito que proponía la introducción de dos artículos constitucionales referidos a la administración y el uso del agua (impidiendo su privatización futura). | Comisión en Defensa del Agua y la Vida. Federación de Funcionarios de ose (compañía de servicio público de agua). Frente Amplio y sectores del Partido Nacional (en particular, Alianza Nacional). | 63 (aprobada la reforma). |
| 25 de octubre de 2009 Plebiscito-reforma constitucional para anular los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986 (ley que evitó que se juzgara a los militares acusados de delitos contra los derechos humanos). | Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad. Fue apoyado por el Partido por la Victoria del Pueblo (sector político del Frente Amplio) y el PIT-CNT. Formalmente, contó con el apoyo de todo el Frente Amplio. | 47,9 (No aprobada). |

| | | |
|---|--|---|
| <p>23 de junio de 2013 Prerreferéndum «vía rápida»- intento de derogación de la ley que habilita el aborto.</p> | <p>Comisión Nacional Pro Derogación de la Despenalización del Aborto, integrado por grupos provida, Vamos Uruguay del Partido Colorado y el Partido Nacional. Apoyaron sectores de la Iglesia católica y apoyaron todos los candidatos presidenciales, incluido Tabaré Vázquez, del Frente Amplio.</p> | <p>No se lograron los votos necesarios para que se convocara a referéndum. La mayoría de los partidos se comprometió en las elecciones de 2019 a no volver a plantear la posibilidad de anular el aborto.</p> |
| <p>26 de octubre de 2014 Plebiscito, reforma constitucional. Se propone bajar la edad de imputabilidad, entre otras medidas punitivistas.</p> | <p>Propuesta impulsada por la Comisión para Vivir en Paz, integrada por líderes del Partido Nacional (especialmente Luis Alberto Lacalle) y Pedro del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Gran movilización en contra de las organizaciones sociales, especialmente de la juventud.</p> | <p>46,81 (no se logró el porcentaje requerido).</p> |
| <p>30 de octubre de 2019 Plebiscito, reforma constitucional. Se propone el levantamiento de la prohibición de los allanamientos nocturnos si existe orden judicial, el cumplimiento completo de las penas en los delitos graves, la prisión perpetua revisable en los casos de delitos gravísimos y la creación de una Guardia Nacional integrada por militares.</p> | <p>Comisión Vivir sin Miedo, integrada por partidarios del Partido Nacional (especialmente la Alianza Nacional), liderado por Jorge Larrañaga, ministro del Interior del gobierno de Luis Lacalle Pou.</p> | <p>46,83 (no alcanzó las adhesiones requeridas).</p> |
| <p>27 de marzo de 2022 Referéndum parcial contra la LUC. Se propone derogar 135 artículos referidos a la administración de la educación, seguridad, inclusión financiera y otros.</p> | <p>Comisión Nacional Pro Referéndum, conformada por organizaciones sindicales, sociales y políticas: PIT-CNT, Intersocial Feminista, FEUU, entre otras. Apoya el Frente Amplio.</p> | |

Nota: en este cuadro se incluyen solamente las consultas que fueron promovidas por la vía de la recolección de firmas, no aquellas que fueron propuestas al Parlamento por los grupos políticos con representación.
Fuente: elaboración de la autora.

Más allá del resultado en las urnas –derogación o no de estos artículos–, el ejercicio de la democracia directa iniciada y promovida por actores sociales obliga a los partidos políticos a tomar postura, a sus líderes a argumentar y defender públicamente su voto en el Parlamento, todo lo cual contribuye a fortalecer la democracia representativa. La participación ciudadana, cuando tiene canales institucionales de expresión, lejos de atentar contra la democracia, la refuerza y la expande. Uruguay sigue siendo un ejemplo de ello.

En definitiva, independientemente de los temas en cuestión, los plebiscitos y los referendos en Uruguay han contribuido a ampliar la democracia, a introducir temas en la agenda y a expresar opiniones contrarias a las leyes aprobadas. Esta afirmación surge no solo del análisis de estos casos, sino del estudio de la historia de la democracia directa en Uruguay desde sus orígenes. 

ÍCONOS

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

Enero-Abril de 2022

Quito

Vol. xxvi N° 72

EXTRACTIVISMO MINERO EN AMÉRICA LATINA: LA JURIDIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

DOSSIER: Presentación del dossier, **Rachel Sieder, Ainhoa Montoya y Yacotzin Bravo-Espinosa.** Experticias y juridificación comunitaria: defensa del subsuelo y tierras comunales en Oaxaca, México, **Salvador Aquino-Centeno.** Procesos de juridificación y defensa del agua en el sur andino del Ecuador, **Carlos Quizhpe e Ivette Vallejo.** Juridificación multiescalar frente a la industria minera: experiencias de Centroamérica y México, **Ainhoa Montoya, Rachel Sieder y Yacotzin Bravo-Espinosa.** Comunidades indígenas y extracción de litio en Argentina: juridificación y estrategias de acción, **Deborah Pragier, Mariano A. Novas y Lucas G. Christel.** Hacia la descolonización del régimen extractivo: patrones y límites de la judicialización en conflictos mineros, **María Ximena González-Serrano, Digno Montalván-Zambrano y Lieselotte Viaene.** TEMAS: La designación de jueces en Ecuador: en búsqueda de una nueva legitimidad, **Miguel Herrera.** Ciudades intermedias y parque automotriz en Chile. ¿En jaque la sustentabilidad territorial?, **Francisco Maturana, Mauricio Morales, Ulises Sepúlveda y Johana Maldonado.** Convivencia negociada y gobernanza ambiental en áreas naturales protegidas del Perú, **Mattias Borg Rasmussen.** Afecto y subjetividad de trabajadoras de la política de infancia en Chile, **Javiera García-Meneses y Giazú Enciso-Domínguez.** La situación del tercer sector en Ecuador: supervivencia de las ONG en un entorno adverso, **Bernardo Gortaire-Morejón, Andrés Matute, Valeria Romero y Juan Pablo Tinajero.**

Íconos es una publicación cuatrimestral de Flacso-Ecuador, La Pradera E7-174 y Av. Almagro, Quito, Ecuador. Tel.: (593 2) 3238888. Correo electrónico: <revistaiconos@flacso.edu.ec>. Página web: <www.revistaiconos.ec>.

América Latina y los gatos de Cambises

*Fragmentación política
y desafíos para la democracia*

Patricio Gómez Talavera

La crisis del covid-19 ha dejado expuestas vulnerabilidades en los sistemas de representación partidaria en América Latina. Pero no todos los factores negativos son de gestación reciente, y algunos muy importantes se encuentran enraizados en la génesis misma de la construcción política de los Estados latinoamericanos. Analizar los elementos que presionan sobre la estabilidad de los tejidos sociales en la pospandemia, identificar patrones y dinámicas para ofrecer una lectura abarcativa y aportar al debate para su superación son bases para repensar la situación de la democracia en la región.

Las esperanzas de atenuación y potencial convivencia con el covid-19 se solapan ahora con la percepción abierta de los efectos de más largo plazo de la pandemia. Los impactos sobre la estructura social, los problemas de logística y cadenas de suministro, el alza del costo de vida, las novedades reactivas en el mercado del trabajo –como el fenómeno de la «gran renuncia», que alteró costos salariales y disponibilidad de mano de obra en Estados Unidos–, la crisis en las comunidades educativas concomitante a los *lockdowns* y sus consecuencias económicas parecen revelarse en sus efectos más duraderos. Y todo esto condiciona

Patricio Gómez Talavera: es politólogo, historiador y consultor. Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se especializa en comportamiento y gestión electorales. Es candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de San Martín (UNSAM). Su tema de investigación es la relación entre los partidos políticos antisistema y la coyuntura económica en América Latina y Europa.

Palabras claves: elites, fragmentación, partidos políticos, América Latina.

mucho más el desenvolvimiento de naciones que partían de situaciones previas de mayor fragilidad, como se ve en Oriente Medio, África y el objeto de este artículo: América Latina.

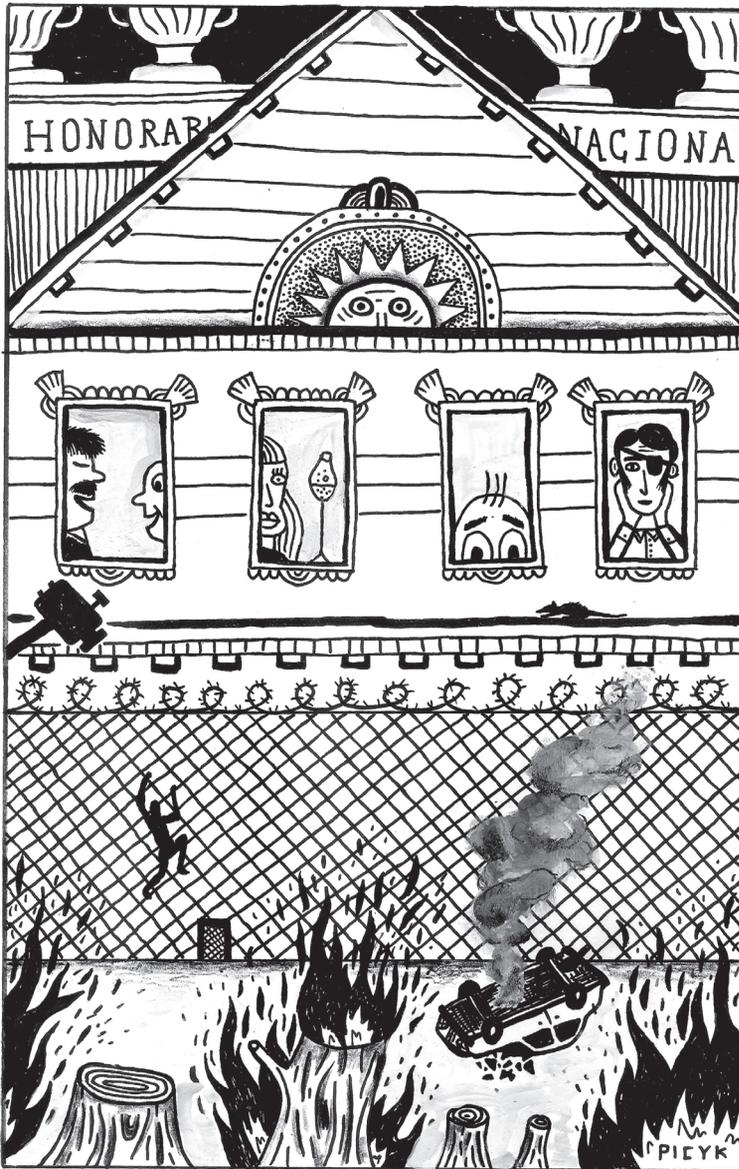
Latencias: la revuelta antes de la tormenta

El actual ciclo de fragmentación política cuenta con acicates de largo plazo. Uno de los más importantes está relacionado con las variaciones externas y *shocks* que afectan aún hoy a algunas economías. Fundamentalmente, estas economías están basadas en la exportación de productos primarios y son vulnerables a variables exógenas, como la tasa de interés estadounidense, que impone el *flight to quality* a capitales que buscan previsión frente a la inestabilidad latinoamericana.

Abordaremos dos elementos de largo plazo en particular. En primer lugar, las características de la construcción nacional en América Latina, y en paralelo, la interacción conflictiva de cierta noción de individualismo con la construcción de colectivos de representación política.

En cuanto al primer punto, como sostiene Sebastián Mazzuca¹, es importante contraponer el origen de los Estados en América Latina con el de sus homólogos europeos. Mientras que en el Viejo Continente los Estados se construyeron como emanaciones conclusivas de conflictos bélicos (Reino Unido, Francia, Alemania), en América Latina fueron edificados por desplazamiento e incrementalidad progresiva, en un proceso que abarcó, según los casos, desde finales del siglo XIX hasta bien traspuesta la Gran Depresión. Si en Francia y Alemania la punta de lanza del proceso fueron estadistas guerreros (Napoleón, Bismarck), en América Latina fueron dirigentes, negociantes y, en última instancia, *brokers* políticos ávidos de conquistar mercados antes que cualquier otra consideración territorial. Si bien este formato logró, más tarde o más temprano, la construcción del Estado, también implicó por sus mismas características deficiencias profundas en su confección interna, lo que derivó en agencias estatales con problemas severos de capilaridad territorial, implantación social, legitimidad política y estabilidad jurídica. Y todo ello se tradujo en la gestación y regulación de políticas públicas sumamente intermitentes y sesgadas como rasgo crónico de la actuación estatal. En este sentido, para Mazzuca hubo tres incentivos para la construcción de estatalidad: (a) puertos que permitieron a las clases dirigentes edificarse a sí mismas como actores privilegiados en la interacción

1. S. Mazzuca: *Latecomer State Formation: Political Geography and Capacity Failure in Latin America*, Yale UP, New Haven, 2021.



© Nueva Sociedad / Pablo Picyk 2022

Pablo Picyk (Buenos Aires, 1978) se dedica al dibujo, la pintura, el diseño gráfico y la construcción de objetos. Ha ilustrado y escrito numerosos libros infantiles. Ha publicado y exhibido su trabajo en Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España, Alemania, Corea y Japón. Da talleres de arte para niños y de dibujo e ilustración para adultos. Junto con Darío Chapur forma 2hueso, grupo dedicado al dibujo, la pintura y la escultura. Página web: <www.pablopicyk.com.ar/>.

con su entorno, dotando de base territorial al proyecto (Argentina, Brasil, Chile); (b) organizaciones políticas que se constituyeron como coagulantes y contenedores de elites geográficamente heterogéneas (México, Colombia); (c) grandes latifundistas que no se vieron obligados a consensuar con otros sectores de elite, permitiéndose un Estado de dimensiones territoriales relativamente pequeñas, lo cual también constituyó un elemento cronificante de su propia dominación (Venezuela, Perú, Guatemala).

Sea por la heterogeneidad de los actores a incluir o por la ausencia de cualquier forma de pacto, el proceso debilitó la potencia abarcativa del Estado. Las agencias públicas quedaron afectadas en su eficiencia, o bien por no estar suficientemente dotadas ante las variaciones sociales internas o por haber sido construidas por un grupo de influencia excesivamente homogéneo y a menudo poco representativo. Esta característica fundamental del Estado fractal latinoamericano mostraría siempre sus distintas fases en ciclos bien diferenciados, tanto en momentos de expansión de Estados de Bienestar incompletos como en etapas de retracción en favor de agentes privados. Los casos de avance de iglesias evangélicas en Brasil y organizaciones sociales en Argentina como meca-

**Los arreglos
institucionales
constituidos
originalmente
fueron regenerados
época tras época**

nismos de administración del deterioro social en los tardíos años 90 del siglo xx y principios de la década de 2000 parecen bastante representativos de este fenómeno. Los arreglos institucionales constituidos originalmente fueron regenerados época tras época, con cierta continuidad en relación con los intereses económicos subyacentes, y modelaron instituciones que reprodujeron una dinámica que no palió los déficits originales y que marcó con rigidez el paso de los actores sociales de forma duradera². El ideario liberal, alguna vez promotor de la centralización y el reformismo desde el Estado, se levantó luego como reservorio de la autonomía individual frente a la influencia corporativa y la preeminencia de lo público, tan abarcativo como deficitario en su accionar.

Casos exitosos de construcción estatal como el Chile de Diego Portales luego de la guerra civil entre pipiols y pelucones (1829-1830) se caracterizaron por la percepción positiva de las elites con respecto a las iniciativas de centralización, dado que no amenazaban su control sobre la mano de obra, en un marco de cooperación intraelite que avaló mecanismos autoritarios

2. Katherine Thelen: «How Institutions Evolve: Insights from Comparative-Historical Analysis» en James Mahoney y Dietrich Rueschemeyer (eds.): *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences*, Cambridge UP, Nueva York, 2003, pp. 3-40; Marcus Kurtz y Andrew Schrank: «Growth and Governance: Models, Measures, and Mechanisms» en *Journal of Politics* vol. 69 Nº 2, 2007, pp. 538-554.

en la edificación de un sistema político conservador con tendencia a la exclusión de elementos no oligárquicos³. Esto contrasta con casos como el de Colombia, donde la pluralidad de ciudades abortó la «primacía urbana»⁴ (preeminencia económica y demográfica de una región), y con ella, el proyecto de concentración estatal ordenador de la vida social del país.

Este modelo de construcción estatal, sincronizado por perspectivas comerciales y bajos niveles de consenso internos en muchos casos, crearon estructuras poco eficientes, pero, además, sumamente rígidas y con baja adaptabilidad a coyunturas críticas. Y si la proliferación de los valores de las elites liberales urbanas sirvió para edificar las estructuras, en periodos de crisis económicas el mismo liberalismo puede ser bandera de enganche para la representación de discursos «antioligárquicos» basados en la confrontación de la individualidad y sus fueros contra el control concentrado de redes de solidaridad tejidas por elites políticas y sociales. Y todo esto daba material para condensar fuerzas alrededor de coaliciones invertebradas de excluidos que utilizan su voto como castigo contra el establishment, lo que aumenta los costos de transacción, reduce los incentivos para el pacto y extrema la distancia ideológica y los intereses particulares entre los vehículos de representación partidaria. Esto lo vemos tanto en sociedades con elites fuertes y enraizadas (Chile, Uruguay) como en aquellas donde las esquilas del poder político, social y económico descansan en un archipiélago de actores con vetos cruzados (Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil). Algo que, como señaló Ryan Saylor⁵, también puede darse en contextos de *boom* económico, donde la necesidad de provisión de bienes públicos ante el nuevo ciclo de expansión permite generar beneficios relevantes para sectores puntuales en detrimento de otros⁶. Esto puede a su vez obturar la cooperación y fomentar la competencia defensiva, máxime si el entramado institucional carece de enraizamiento suficiente para mantener burocracias profesionales, coherencia corporativa y autonomía de acción, elementos necesarios para que las burocracias orienten políticas e instrumental de largo plazo con canales para la retroalimentación, reformulación y reorientación con actores privados, sin subsumirse en ellos⁷.

Esto nos lleva al segundo punto: el atractivo y potencial del individualismo político en América Latina. El individualismo, figura preeminente en

3. Simon Collier y William Sater: *A History of Chile: 1808-1994*, Cambridge UP, Nueva York, 2004.

4. Hillel Soifer: *State Building in Latin America*, Cambridge UP, Nueva York, 2015.

5. R. Saylor: *State Building in Boom Times: Commodities and Coalitions in Latin America and Africa*, Oxford UP, Oxford, 2014.

6. *Ibíd.*

7. Peter Evans: «El Estado como problema y como solución» en Carlos Acuña (comp.): *Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas. Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual*, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Buenos Aires, 2007.

los andamiajes jurídicos, se transformó en la figura contrapuesta perfecta a la construcción de elementos colectivos como la Nación, y, sobre todo, el «pueblo». La reacción a la individualidad desde la cima del Estado como disolvente de la comunidad fue llevando a plantear esa misma individualidad, con el correr de las décadas (y con la acumulación de crisis irregularmente gestionadas), como la alternativa más creíble frente al avance del Estado en la vida social latinoamericana. Así llegamos hasta finales de los años 50, cuando a partir de determinadas fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) se promueven valores liberales a fin de irradiar alternativas al pesado andamiaje heredado del esquema de sustitución por importaciones. El proceso llegaría a sus máximos históricos con las experiencias liberalizadoras de finales de los años 80 y casi toda la década del 90 en Brasil, México, Argentina, Ecuador, Chile, Perú y, en menor medida, Venezuela y Uruguay. Sistemas de partidos altamente cartelizados, como el Frente Nacional colombiano o el «turnismo» entre Acción Democrática y el COPEI en Venezuela, fueron señalados por la tradición del individualismo liberal como artífices y beneficiarios espurios del Estado inflamado de atribuciones, y por tanto inhibidor de la auténtica creación de riqueza. Tal creación, bajo estas premisas, estaba en manos de la iniciativa individual y la industria del mérito personal, de manera que los individuos, librados de esos yugos y regulaciones castrantes, quedarían listos para desarrollar todo su potencial, en un sistema donde los excluidos no son válidamente reconocidos, sino archivados en la categoría de «ineficientes». Golpeados por el colapso de finales de los años 90 (de gobiernos como los presididos por Rafael Caldera en Venezuela, Fernando Henrique Cardoso en Brasil, Carlos Menem en Argentina, Luis Lacalle en Uruguay, Alberto Fujimori en Perú, etc.), los partidos resistieron y resurgieron luego de un periodo de hibernación y renovación interna. Opciones como Creando Oportunidades (CREO), el partido del presidente Guillermo Lasso en Ecuador; Unidad

**Outsider que
insiste se vuelve
insider y ve limitada
su capacidad
de representar
una ruptura o una
renovación radical**

Nacional, en Bolivia; el partido de derecha Novo en Brasil y, más recientemente, La Libertad Avanza, una fuerza libertaria de derecha en Argentina, se constituyeron como fuerzas políticas en la resistencia a los gobiernos de centroizquierda a partir de la década de 2000. De alguna manera, la noción «antioligárquica» con la cual se había construido la idea de «pueblo», cimentando los liderazgos populares de América Latina, fue virando a medida que esos liderazgos se consolidaban y pasaban a ser parte del establishment político. *Outsider* que insiste se vuelve *insider* y, por tanto, ve limitada su capacidad, con el paso del tiempo y con el éxito electoral, de representar una ruptura o una renovación radical.

Así llegamos a finales de la década de 2010, con múltiples señales de tensión, agotamiento de la capacidad estatal, fractura social y política anticorrupción instalada como *issue* central. Al cabo de dos décadas, una generación completa de votantes vivió casi la totalidad de su vida cívicamente consciente en convivencia con gobiernos de centroizquierda, a excepción de Perú, Colombia, Paraguay y gran parte de Centroamérica. Lo contestatario cruzaba la calle y cambiaba de vereda, y el rupturismo quedaba en manos de las banderas contra el Estado «regresivo» y «autoritario», y la revalorización potente de defender la libertad individual como protección de lo propio, del libre albedrío, de ejercer tendencias y decisiones personales sin interferencias ni solidaridades pensadas sobre la base de una nivelación hacia abajo y la castración del potencial creativo individual. Y en esa defensa del fuero personal se da una curiosa convergencia: la mancomunidad con las ideas conservadoras tradicionales, afincadas en determinadas formas de educación, el tradicionalismo, la familia nuclear. Se da una redefinición del *ethos* a defender, replegado sobre la individualidad, en colaboración abierta con las subunidades de pertenencia por debajo del Estado, «pueblo» y Nación. Las tensiones cruceñistas en Bolivia y la dicotomía entre las grandes ciudades como Lima o Buenos Aires y el resto del país ilustran esta deriva que enlaza liberalismo económico contrario al Estado con tradicionalismo familiarista y regionalismo reivindicativo, en una mixtura contra natura en otro tiempo. «Primero, los míos» es el lema, siendo los «otros» la miríada de dependientes de la asistencia estatal, vituperados como una masa informe de naturaleza parasitaria y extractiva a costa del emprendedor que persigue el progreso de su industria, lícita, para él y su familia. La figura del emprendedor sin formación pero exitoso a fuerza de arremetidas (César Acuña en Perú), el gestor/especialista ideológicamente híbrido vociferante contra la «casta» política (Javier Milei en Argentina, Rodrigo Chaves en Costa Rica, Juan Sartori en Uruguay, Franco Parisi en Chile) y los portavoces autoritarios de un pasado percibido como más próspero (Guido Manini Ríos en Uruguay) se manifiestan en pleno contraste con respecto al ideal de atildamiento tecnocrático que caracterizó a la referencia liberal de los años 90, aquel tipo de liderazgo que con frialdad matemática separaba con su bisturí la política de la técnica en el Estado.

Sin embargo, estos nuevos actores emergentes, sumamente heterogéneos, no descansan su capital únicamente en la reacción contra lo establecido, la retracción vindicativa hacia lo hogareño, la intimidad de la adhesión confesional o el grito regionalista. Mantienen elementos que, si bien bajo un prisma determinado, pueden resultar amenazantes, también pueden resultar un gran aliviador de tensiones democráticas y un reclamo genuino de replanteo del pacto entre representantes y representados en tiempos de estrés social extremo.

Prosopagnosia: la fragmentación de rebaño

La crisis ha sido de tal magnitud que también ha operado en casos de sistemas de alta institucionalización partidaria

Este esquema de tensiones en forma de pinza, las heredadas y las sobrevenidas por la pandemia, supuso un marco de exigencia extrema para las estructuras partidarias, ya deficitarias frente a los reclamos de sectores con pérdida de capacidad adquisitiva y esperanzas de ascenso social frustradas. Los bajos niveles de institucionalización del sistema de partidos inherentes a la dinámica de muchos países se mostraron como predictores eficaces de nuevas referencias partidarias que tuvieron y tienen todos los incentivos para ingresar en la competencia electoral. Pero la crisis ha sido de tal magnitud que también ha operado en casos de sistemas de alta institucionalización partidaria, como El Salvador, donde llevó al surgimiento de Nuevas Ideas, la agrupación de Nayib Bukele, o Chile, donde ganó espacio el Partido Republicano de José Antonio Kast. Referencias clásicas, como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y los herederos de la Concertación y Chile Vamos, se vieron o bien empujados a la irrelevancia en el primer caso, o desplazados de la posibilidad de ingresar en la segunda vuelta electoral de 2021 en el segundo. Aun cuando se reportan situaciones de estabilidad en la distribución de fuerzas, estas se dieron también con cambios dramáticos en los actores: Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en México, Nuevas Ideas en El Salvador, la Unidad Nacional Opositora de Honduras empujaron en un corto lapso a varios partidos tradicionales a la casi nula influencia política. A estos cambios podemos añadir algunos aspectos más que dotan de mayor complejidad a la coyuntura.

Turbopolítica. Se produce la aceleración de recurrencias antes particularmente inusuales. Por ejemplo, se estrechan dramáticamente los tiempos de imagen positiva para gobiernos recién electos, y los lapsos en los cuales los gestores públicos conviven con porciones de reprobación amplia se prolongan, e incluso dejan de ser inhibidores decisivos para mantenerse competitivos. Con 64% de rechazo, el ex-presidente José María Figueres es actualmente el favorito para ganar la segunda vuelta presidencial en Costa Rica⁸; con un prohibitivo 60% de opiniones negativas⁹, Jair Bolsonaro se mantiene en Brasil como principal contendor de Luiz Inácio Lula da Silva para los comicios de octubre de

8. Esteban Arrieta: «Lineth Saborío es la candidata con menor nivel de rechazo para una segunda ronda» en *La República*, 24/1/2022.

9. Vitória Queiroz: «PoderData: 56% rejeitam voto em Bolsonaro; 38%, em Lula» en *Poder 360*, 22/1/2022.

2022. En Colombia, Gustavo Petro, Alex Char y Sergio Fajardo encabezan las preferencias para las presidenciales de 2022, con niveles de rechazo muy superiores a sus niveles de aceptación¹⁰. En Perú, pasaron a la segunda vuelta dos candidatos con menos de 20% de los votos: Pedro Castillo (19%) y Keiko Fujimori (13%), y la segunda vuelta se definió por un porcentaje mínimo. El impacto de este tipo de coyunturas en la conformación de los parlamentos, cada vez más fragmentados, es considerable: se elevan los costos de transacción, se enlentecen los acuerdos legislativos y con ellos, se tornan menos dinámicas la formulación, aplicación y control de las políticas públicas.

A esto se suman elementos como la reversión de primeras vueltas en balotajes: en la última década se dio en ocho ocasiones, contra cuatro en los 15 años anteriores a 2012.

Autenticidad. Cada vez es más frecuente la evaluación personal como forma de reprobación a un dirigente político. Así, se observa con asiduidad cómo el electorado rechaza a un candidato por sus características personales, usualmente vinculadas a la percepción de falta de autenticidad, antes que por evaluaciones relacionadas con la gestión, pasada o potencial. Sergio Massa en Argentina, João Doria en Brasil y Keiko Fujimori en Perú son ejemplos de este fenómeno.

Hikikomori. En un fenómeno típicamente japonés, se trata de un amplio colectivo de personas que ven aumentado su tiempo en soledad, viviendo retirados de todo contacto social. En América Latina, la pandemia ha incrementado las dosis de aislamiento social, tanto en adultos mayores¹¹ como en jóvenes y adolescentes¹² en, como mínimo, 20% del tiempo. Esto ocurrió especialmente en Brasil, Chile, México y Perú durante los últimos 20 años, con un mayor ritmo alcista en la última década. Los cuadros de estrés, ansiedad y depresión se suman a la reducción de los circuitos de socialización, mientras que una mayor interacción condicionada por redes sociales como principal vía de información y relacionamiento disloca la construcción de confianza y la legitimidad de proximidad¹³.

10. «Baja la favorabilidad de Petro y Fajardo en encuesta Invamer» en *El Espectador*, 6/1/2022.

11. Qiang Gao et al.: «Loneliness Among Older Adults in Latin America, China, and India: Prevalence, Correlates and Association with Mortality» en *International Journal of Public Health* vol. 66, 3/2021.

12. Jean Twenge et al.: «Worldwide Increases in Adolescent Loneliness» en *Journal of Adolescence* vol. 93, pp. 257-269.

13. Rocío Annunziata, Ana Ariza y Valeria March: «Gobernar es estar cerca. Las estrategias de proximidad en el uso de las redes sociales de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal» en *Revista Mexicana de Opinión Pública* año 13 N° 24, 1-6/2018, pp. 71-93.

Desconfianza. A partir de los datos de Latinobarómetro, uno de los elementos fundamentales que se vieron afectados entre 2015¹⁴ y 2020¹⁵ es la confianza interpersonal. De los cuatro países líderes en niveles de confianza de 2015 según la encuesta, Uruguay, Panamá, Argentina y Ecuador, tres padecieron abruptas caídas de alrededor de diez puntos, la mitad de la confianza interpersonal total. Latinoamérica como un todo se ubicaba en 17% de confianza en 2015 y bajó a 12% en 2020. Esto puede tener un impacto relevante en el mantenimiento en el tiempo de niveles de indecisos, voto

La confianza en los partidos declinó de 20% a 14% a escala regional

oculto y adhesión a formaciones tradicionales, a la vez que afecta los espacios de reclutamiento de electores y simpatizantes de manera aún no mensurable. La confianza en los partidos declinó de 20% a 14% a escala regional¹⁶. Todo esto se produce en un contexto de mecanismos de autoinformación que incluyen a las redes sociales como móvil. Esto representa un desafío a formas de influencia más corporativas y colectivas como los partidos políticos, despojados de exclusividad en su propuesta de intermediación por identidad.

Conectividad. Ya antes de la pandemia, América Latina mostraba una gran progresión en la cantidad de tiempo que las personas pasan frente a una pantalla móvil, con una media de conexión diaria de 212 minutos, según los datos de Global Web Index¹⁷, y tres de los cinco países con mayor tiempo de conexión del mundo (Colombia, Brasil y Argentina), 80% más que en Canadá y Estados Unidos. Los argentinos de entre 16 y 24 años dedicaban 257 minutos por día a la conexión, contra 175 del promedio global de la misma franja etaria. La crisis de la presencialidad en la educación debido a los regímenes de cuarentena llevó a países como Perú, Panamá, Argentina, Costa Rica y México a cierres de escuelas (entre parciales y totales) de alrededor de 50 semanas entre marzo de 2020 y abril de 2021¹⁸, lo que aceleró de manera decisiva la interacción en las redes sociales. Esto necesariamente implica un impacto de profundidad aún no mensurable sobre los patrones de consumo tanto comerciales como de sociabilidad política, que ya se insinuaban previamente. Con menores niveles de conexión, la actividad en redes se había demostrado fundamental para explicar el comportamiento del

14. Corporación Latinobarómetro: *Informe 1995-2015*, Santiago de Chile, 2021, p. 23.

15. Corporación Latinobarómetro: *Informe 2021*, Santiago de Chile, p. 62.

16. *Ibíd.*, p. 70.

17. Datos disponibles en <www.gwi.com/data-coverage> para 2019, fecha de consulta: 5/2/ 2022.

18. Unesco Institute for Statistics: «Global Monitoring of School Closures», <<https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#schoolclosures>>, fecha de consulta: 3/2/2022.

voto urbano en lugares como Montevideo, Rosario o el Área Metropolitana de Santiago de Chile. El caso de la campaña de redes de Xavier Hervas e Izquierda Democrática en Ecuador en 2021, con un robusto millón y medio de votos, o de Franco Parisi en Chile, que se desarrolló en ausencia del candidato, son ejemplos paradigmáticos de esto.

La prosopagnosia es una agnosia visual que consiste en la dificultad para distinguir los rostros de las personas. Se trata de una metáfora útil para describir la actual situación: la impugación del sistema en este ciclo de descontento tiene como ariete fundamental la contestación abajo-arriba y, por tanto, la indistinción ideológica que a los ojos de los electores padecen las formaciones tradicionales. Estas se perciben como un mismo bloque con diferencias que obedecen estrictamente a una dinámica endogámica de intereses, sin conexión con las necesidades de la mayoría. Al no distinguirse novedad entre los rostros de la oferta política, la ruptura queda servida como mecanismo potencial de renovación, rechazo de lo establecido y búsqueda de autenticidad, conexión y atención, tanto como de pertenencia y representación.

Democracia para (re)armar

En una escala global, pero con fuertes raíces en América Latina, el electorado ya no parece buscar ni aceptar liderazgos de arriba hacia abajo (*top-down*), es decir, una lógica en la que los representados alienan su autonomía en favor de los representantes. En contraposición, cada vez es más perceptible la búsqueda de fórmulas de abajo hacia arriba (*bottom-up*), consustanciadas con la proximidad, temáticas puntuales, identidades tangibles y problemas concretos, antes que con cruzadas ideológicas o problemáticas polarizantes en el nivel de las elites. Si eso implica transponer fronteras partidarias, clivajes sociales y estructuras ideológicas, se las rebasa sin inconvenientes. Esto, si bien configura una dificultad adicional para ordenar la oferta política y, además, hacerla competitiva, puede ser también una oportunidad para retraer el debate político a temas más focalizados, como los problemas de los suburbios, los mecanismos de provisión de bienes públicos, la orientación de la política sobre las drogas o la contención a las nuevas formas de familia y educación. Sin embargo, las dificultades en los procesos de coordinación colectiva, las restricciones en materia de recursos y la desafección política entorpecen el desarrollo de esta oportunidad, y se requiere muchas veces de profesionalismo político ausente en partidos de nuevo cuño, y de apertura política, tendencialmente ausente en dirigentes tradicionales arrinconados por la fuga de electores.

Si las grandes corporaciones políticas, en su expansión transclasista, no logran canalizar esas nuevas demandas, es lógico que se apueste a fórmulas

de carácter más acotado, pero más próximas y conocedoras de los temas que preocupan a los votantes. Bajo este prisma puede leerse el colapso de formaciones con décadas de vigencia, como el Partido Aprista Peruano, el Partido Demócrata Cristiano de Chile, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) mexicano, el Partido Colorado en Uruguay, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) boliviano o el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Y también puede leerse en este sentido el ascenso de los nuevos actores, sean de una esfera más cosmopolita, liberal y/o reformista, o más tradicional, conservadora y nostálgica; tanto para el *boom* de los independientes en Chile (pasaron de 52 a 105 alcaldes sobre 345 en 2021), como para los actores emergentes como Cabildo Abierto en Uruguay y el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), o el Partido Libertad y Justicia del cacique Lenox Shuman, que quebró la lógica Westminster del bipartidismo en Guyana.

Todo esto crea un escenario de dispersión electoral, que detona los incentivos para la cooperación, no ya entre nuevas y viejas formaciones, sino entre los mismos partidos tradicionales, lanzados a la carrera de contener los márgenes en rebeldía. A su vez, el proceso debilita la capacidad de moverse hacia electores no naturales por parte de los actores políticos, lo que redundará en una magnificación del rol de coyunturas adversas, estrategias de nicho, errores de cálculo y crisis de coordinación, antes administrables dada la fortaleza política propia de posturas dominantes. Se genera así una dinámica donde la competencia política se reduce a una cronología de percances mutuos, unos «juegos del hambre» donde gana quien sobrevive y llega en menos malas condiciones, en agendas (y por tanto confrontaciones) módicas, cuyos efectos son igual de mínimos pero que, en un contexto de debilidad general, marcan el pulso. El inconveniente es que, superado el instante electoral decisivo, y a la hora de poner en marcha el maltrecho aparato estatal, las condiciones de desarrollo político de la fuerza triunfadora son, por la dinámica descrita, extremadamente frágiles, y los problemas de gobernabilidad son la consecuencia lógica. Las oposiciones friccionales crean gobiernos facciosos. Los compuestos que son muy activos son poco selectivos, y la reactividad en la función ejecutiva no genera política pública de calidad, ni consensos superadores, ni visiones complejas que enriquezcan el producido final, que debe ser siempre más práctico que teórico.

En este contexto, la fragmentación puede resultar un mecanismo social compensador para rehabilitar la relación representante-representado, más que un síntoma del propio desprestigio de la resolución pacífica y democrática de los conflictos. La politóloga norteamericana Katherine Cramer analiza el ascenso de un Partido Republicano más radicalizado en Wisconsin a partir de un trabajo etnográfico donde señala, resumidamente, que el

fenómeno se produce a partir de la desconfianza general hacia el gobierno, no por una preferencia ideológica por un gobierno pequeño *per se*¹⁹. Cramer encontró poca evidencia en Wisconsin de que los electores se guíen por motivos culturales antes que económicos. El concepto explicativo clave de Cramer es *conciencia rural*. En pequeños pueblos, encontró un sentimiento compartido de agravio, una sensación de que sus necesidades fueron ignoradas por el gobierno a escala estatal y federal, y de que sus valores fueron despreciados por la elite cultural, política y económica, personificada en la capital del Estado, el gobierno y la universidad. Esto estaría íntimamente relacionado con, por ejemplo, la idea de que funcionarios públicos con privilegios, sin aportar nada ellos mismos, sobrerregulan con leyes medioambientales a quienes producen riqueza. Parece claro que, como fenómeno, no es privativo de Wisconsin.

Cuenta el cronista griego Polieno que, en la batalla de Pelusium, en el año 525 a.C., el emperador persa Cambises ordenó a su ejército utilizar como escudo contra los egipcios gatos, perros e íbices. Como los egipcios consideraban sagrados a estos animales, huyeron. Los persas ganaron la batalla sin pelear. Envalentonado por el tipo de victoria, fundamentada en la debilidad del rival, Cambises no consideró desarrollar estrategias basadas en construir superioridad militar. Pronto, la debilidad en la extensión de la expansión, los problemas logísticos y el clima lo forzaron a retirarse, a la vez que estallaba una revuelta interna contra el monarca a miles de kilómetros de distancia. Derrotado en la vanguardia y en la retaguardia, Cambises sucumbió en el desierto apenas dos años después de su particular triunfo.

La política defensiva, basada en la especulación con el rival, la capitalización de la fragmentación en el formato de vender el «mal menor» y la polarización extremada de las políticas de nicho, parece traer solo el menú de la ebullición intraelite. La inestabilidad política, la irresolución económica y un desanclaje agresivo y cada vez mayor entre nuevas demandas ciudadanas y el sistema de representación suelen ser fenómenos colindantes a lo señalado. Solo una política de iniciativa, reforma, consenso y agenda apegada a lo concreto, fundamentada en la construcción institucional, la gestión de soledades y el largo plazo podrá conjurar la política de la alteridad negativa y la especulación facciosa, transformando la ciénaga de pequeñas victorias irrelevantes en un río de oportunidades para el desarrollo y la convivencia colectiva. ☐

19. K. Cramer: *The Politics of Resentment: Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker*, Chicago UP, Chicago, 2016.

Pensar y actuar de manera anfibia

Entrevista a Maristella Svampa

Pablo Stefanoni

Maristella Svampa (Río Negro, Argentina, 1961) ha venido ocupando, desde hace más de dos décadas, un lugar de intelectual pública cada vez más visible, con una proyección que supera las fronteras argentinas y en una clave cada vez más latinoamericana.

Sus trabajos como académica han contribuido a abrir debates y a ampliar los focos de atención hacia una variedad de temáticas: la acción colectiva, los populismos latinoamericanos, el extractivismo, entre otros, con el cuestionamiento al carácter excluyente de las sociedades latinoamericanas como telón de fondo. Con un giro desde la filosofía hacia la sociología, en combinación con la escritura literaria, su obra refleja a un tipo de intelectual que define como «anfibia», modelo puesto en práctica en diferentes contextos de investigación y compromiso social.

En esta entrevista, Svampa repasa esa trayectoria biográfica, en conexión con diversos momentos argentinos y latinoamericanos que jalónaron lo que va del siglo XXI.

Me gustaría comenzar por el 2001 argentino. Precisamente en diciembre pasado se cumplieron 20 años de ese acontecimiento que generó una enorme movilización social y abrió un horizonte político de cambio cuando parecía que eso estaba cancelado. Pero también conllevó un cambio en su perspectiva, hacia una mirada más latinoamericana... ¿cómo lo recuerda y qué balance biográfico, político e intelectual le activan esas jornadas?

El 2001 argentino, es cierto, me llevó a pensar en clave latinoamericana, pero en realidad hay dos claves esenciales: una personal y otra que, *a posteriori*,

Pablo Stefanoni: es jefe de redacción de NUEVA SOCIEDAD.

Palabras claves: ambientalismo, intelectualidad anfibia, movimientos sociales, neoextractivismo, Maristella Svampa.

interpreté como latinoamericana. En principio, hay que decir que el 2001 reúne muchas capas o niveles de acumulación: fue una crisis hegemónica, una fuerte crisis política de representación y, al mismo tiempo, un acontecimiento que dio visibilidad a luchas y movimientos sociales que cuestionaban el neoliberalismo. Y el 2002, luego de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, fue, como contracara paradójica de la crisis, un año extraordinario, marcado por un proceso de liberación cognitiva que abrió al protagonismo y la movilización de numerosos actores sociales. Este es un tema fundamental, el de poner de relieve la apertura de un nuevo umbral, porque durante los 90 se expandió mucho el escepticismo en la sociedad, la idea de que no había «alternativa» al neoliberalismo, y de alguna manera las jornadas de 2001 terminaron con esa actitud de inacción, de pasividad y de impotencia individual y colectiva. Ese proceso de liberación o de apertura cognitiva implicó que los propios actores que hasta hacía poco tiempo se concebían como pesimistas o impotentes respecto de su capacidad de acción descubrieran que podía intervenir y modificar la realidad a través de la acción colectiva. Eso es lo que en la sociología de los movimientos sociales se llama «liberación cognitiva».

El 2001-2002 produjo también una aceleración del tiempo. En realidad, toda gran crisis produce la aceleración del tiempo, un tiempo vertiginoso que provoca una suerte de suspensión —o al menos creímos así— de esa dialéctica cosificada entre estructura y acción, de esa asimetría entre sectores de poder y

actores subalternos. Lo cierto es que el sistema de poder entró en un tembladeral. De ahí la potencia de los sujetos colectivos en su interpelación al poder, de ahí también la respuesta represiva del Estado, que se expresó de modo aleccionador en la violencia contra los movimientos piqueteros movilizadas el 26 de junio de 2002. Esa gran represión apuntaba directamente contra la posibilidad de articulación entre sectores populares y clases medias, y mostraba hasta qué punto el modelo de dominación había entrado en un tembladeral. Esto último se vincula con el hecho de que la crisis de 2001-2002 abrió a un periodo intenso de movilizaciones sociales y de cruce intersocial o interclase, que nos hizo pensar en la posibilidad de articulación de sectores excluidos con clases medias bajas y clases medias culturales. Ese cruce interclase —que se podía leer en el espejo de los años 70— aparecía ahora como una novedad, ya que durante el neoliberalismo de la década de 1990, durante los años de Carlos Menem, lo notorio no solo había sido la polarización social y la respuesta individualista, sino también la segregación espacial y social.

Fue un proceso muy novedoso y también muy radical e hiperbólico, a la manera argentina. Con el correr del tiempo, tomamos conciencia de que las grandes crisis abren un portal, un nuevo umbral cuya apertura es también transitoria, porque toda gran crisis se caracteriza siempre por demandas ambivalentes, tanto de transformación y de cambio como de retorno a la normalidad.

En mi caso personal, era la primera vez que yo vivía una situación de crisis de esas características y ese proceso de apertura y vinculación interclase. Todo eso me interpeló. ¿Por qué? Yo venía despidiéndome de la sociología. En octubre de 2001 había publicado un libro titulado *Los que ganaron*¹, que analizaba el proceso de segregación espacial, algo nuevo para Argentina y muy ligado a la dinámica neoliberal, donde colocaba el acento en la separación y la desconexión, en el interior mismo de las clases medias. Yo había formado un equipo con jóvenes investigadoras de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), con el cual habíamos hecho más de 100 entrevistas en diferentes urbanizaciones privadas, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Y ese trabajo, que fue una inmersión muy profunda en el mundo de las clases medias y altas, individualistas e insolidarias, terminó de convencerme de que ya no me interesaba la sociología. También había terminado una novela, mi primera novela, *Los reinos perdidos*². Entonces, en octubre de 2001 había decidido que no quería dedicarme a hacer «sociología de la descomposición social», como dijera en la presentación de un libro mío el historiador y sociólogo Juan Carlos Torre. Cuando en diciembre de 2001 la gente salió a la calle, yo también salí, y la verdad es que esa movilización y las que vinieron me hicieron cambiar de opinión, pero también cambiar de tema. Si bien yo había dado

clases y seminarios sobre acción colectiva, pocas veces había tenido la oportunidad de utilizar esas herramientas analíticas y ahora sucedía por primera vez que me sentía absolutamente interpelada por lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires con las asambleas barriales y luego con las manifestaciones callejeras. A principios de 2002 tomé la decisión de cambiar de tema y también de posiciones. Hablé con Sebastián Peyreya y le propuse recorrer el país para armar un mapa nacional de las organizaciones de desocupados o piqueteros, que en ese momento tenían una gran centralidad política.

Alguna vez escribió que esa nueva realidad puso en tensión el propio quehacer académico, al menos en las ciencias sociales.

Claro, en el interior de las ciencias sociales en Argentina se instaló un gran debate. Veníamos de un periodo de profesionalización muy fuerte, en el cual el involucramiento con la realidad social, con los actores sociales, era mal visto. 2001 abrió varias preguntas: ¿qué hacer?, ¿cómo involucrarse?, ¿es posible tomar distancia o no?, ¿hasta dónde involucrarse?, ¿qué validez conservaba el modelo de intelectual orgánico? A mí, el modelo de intelectual militante me parecía insuficiente, y comencé a pensar en una suerte de modelo más anfíbio que, sin despegarse del trabajo universitario, tratara de conectarse y vincularse con esa otra realidad. Un modelo

1. *Los que ganaron. La vida en los countries y los barrios privados*, Biblos, Buenos Aires, 2001 (reedición en 2009).

2. *Sudamericana*, Buenos Aires, 2005.

anfibia, que sobre todo responde a dos claves fundamentales. Por un lado, plantea salir de la endogamia propia de los expertos y el mundo de las universidades y abrirse a otras reflexividades sociales. Y, por otro lado, plantea no caer tampoco en el mero discurso producido por los actores sociales, como proponían tantos militantes. Había que apuntar a ese equilibrio tensional del que habla Norbert Elias; ese era de alguna manera el desafío. Así que, bueno, en lo personal, 2001 me marcó por esta razón, porque yo fui parte de las movilizaciones y traté de ir construyendo un modelo de intelectual anfibia que buscaba navegar o transitar esas diferentes realidades. El libro que escribimos sobre los piqueteros³ fue para mí un punto de inflexión. Y de hecho presentamos ese libro en 2004 con la mayor parte de los dirigentes piqueteros sentados a la mesa, en el Centro Cultural Rojas, con una gran cantidad de público.

Tampoco olvidemos que en la época asistimos a la emergencia de una nueva figura militante. 2001 dio lugar a un nuevo *ethos* militante que ha caracterizado hasta ahora a Argentina, muy conectado con el *ethos* de los movimientos alterglobalización y, posteriormente, con los movimientos socioambientales. Este se caracteriza por la territorialidad, por el activismo asambleario, por la demanda de horizontalidad y de democratización, por la defensa de niveles de autonomía muy grandes. Ese era el modelo novedoso que se forjó al calor de las luchas en 2001. Ese *ethos* militante,

insisto, se ha ido transformando y matizando en sus dimensiones hiperbólicas, pero sigue presente en las luchas sociales latinoamericanas, en conexión con otros horizontes de movilización. Pero, volviendo al proceso político, hacia el final de 2002 ya podía percibirse un proceso de reflujo y de clausura cognitiva. Podía verse que efectivamente la capacidad de esas movilizaciones que reclamaban la refundación de la sociedad era más bien destituyente, que las propuestas se licuaban en términos de acción política institucional, que el peronismo se estaba reconfigurando velozmente y que una parte de la sociedad estaba cansada de las movilizaciones callejeras y comenzaba a demonizar a los actores movilizadados. Asistimos entonces a un proceso de clausura y reconfiguración, en la medida en que el peronismo, bajo la forma del kirchnerismo, supo retomar ciertos temas que emergieron de la movilización social (antineoliberalismo, derechos humanos, crítica a la Justicia) generando una nueva institucionalización, un cierre por arriba.

Al mismo tiempo, empecé mi periplo latinoamericano. Recuerdo que en octubre de 2003 varios canales de televisión de Argentina, entre ellos Crónica, pasaron en directo las movilizaciones de El Alto y la caída de [Gonzalo] Sánchez de Lozada, y que con mi amiga ya fallecida, la socióloga Norma Giarracca, no nos podíamos despegar del televisor y comentar por teléfono todo lo que estaba pasando en Bolivia,

3. M. Svampa y S. Pereyra: *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Biblos, Buenos Aires, 2003.

en el marco de la llamada Guerra del Gas. Entonces, a fines de ese año, viajé a La Paz por primera vez y me puse en contacto con los miembros del Grupo Comuna, y construí con algunos de ellos un vínculo de amistad y colaboración de largo plazo; también conocí a Felipe Quispe, entre otros líderes sociales, y sobre todo, comencé a viajar a menudo a ese país, siguiendo el proceso político-social con gran expectativa. Era fines de 2003, un momento en el cual se abría una nueva experiencia política que muy rápidamente iba a desembocar en el ascenso a la Presidencia de Evo Morales, a fines de 2005. Y la gran diferencia que presentaba el caso boliviano respecto del argentino es que de toda esa gran movilización y conglomerado de organizaciones sociales surgiría una propuesta común: la nacionalización de los recursos naturales y la Asamblea Constituyente. Entonces ahí se abrió una nueva puerta para mí, la del fascinante mundo andino, que de alguna manera iluminaba la posibilidad de un destino político diferente para las movilizaciones sociales. Después vendrían Ecuador, Venezuela y otros países de la región, pero en el comienzo del periplo latinoamericano, fue Bolivia, sobre todo La Paz, la gran ciudad plebeya, y El Alto, una ciudad con gran peso del mundo aymara.

¿Podría desarrollar más la idea del intelectual anfibio?

Si lo miramos en términos históricos, América Latina se ha caracterizado por un modelo de intelectual público que

interviene activamente en los debates de sociedad y que además piensa en clave latinoamericana. Es un modelo en el cual las fronteras entre lo político y lo intelectual son porosas. Y de hecho, en términos históricos, los referentes de la economía política y la sociología política, de varias de las corrientes más importantes del pensamiento social latinoamericano, como el estructuralismo de la Cepal [Comisión Económica para América Latina y el Caribe] y el dependientismo, fueron intelectuales políticos muy activos en la vida pública. Sin embargo, sabemos que durante los años 70 la derrota política implicó la caída de muchos paradigmas y eso hizo que se cuestionara no solo la tradición marxista, sino también el modelo «ideológico» —entre comillas— de intelectual, y que entre 1980 y 2000 asistiéramos a la consolidación de un modelo de intelectual mucho más profesionalizado. El modelo del experto, en palabras de Zygmunt Bauman. Siempre afirmo que ese modelo tenía a la vez elementos positivos y elementos negativos. Positivos, porque creo que en términos de consolidación de distintos campos disciplinarios hizo aportes considerables. En el caso argentino, pienso en la historia como disciplina, que fue quizá la más atravesada por las disputas ideológicas. Imagino que en diferentes países eso también ocurrió. Pero al mismo tiempo hubo un rechazo casi mecánico a todo aquello que era identificado con la tradición marxista y el modelo del intelectual orgánico/militante. Además de eso, podríamos decir, siguiendo a Bauman, que el modelo del

intelectual intérprete también se había impuesto en la academia. Este respondía a un modelo más etnográfico, ligado a la labor de académicos que desde abajo buscaban dar visibilidad a los actores, sin sobreponer demasiado su voz, renunciando a la mirada más macrosocial. Yo edité en esa línea el libro *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales*⁴, un libro que tuvo bastante éxito y que reunía estudios de la entonces joven generación de antropólogos y sociólogos argentinos. Y la verdad es que, hacia 2002, esos modelos a mí me parecían insuficientes. De hecho, pienso que no fue tanto un cuestionamiento teórico el que hizo estallar esos modelos de intelectuales académicos, sino que fue la realidad la que puso en cuestión todo eso, porque aquello que emerge en 2001 exige visiones más integrales, en términos macro y no solo microsociales.

Para tratar de dar en la tecla, solía jugar con el título del libro Norbert Elias, *Compromiso y distanciamiento*⁵, en relación con la apuesta por ese equilibrio tensional entre, por un lado, el compromiso honesto con una realidad que está lejos de ser externa (al contrario, esta nos envuelve, nos atraviesa y constituye fuertemente) y, por otro lado, el obligado distanciamiento crítico que requiere cualquier investigación en las ciencias sociales. Pero sobre todo en la época había mucho cansancio con cierta postura academicista, desvinculada de la realidad social; que rechazaba la

posibilidad de intervenir y posicionarse en la esfera pública, en nombre de una supuesta neutralidad científica. Y 2001 hizo estallar todo, todo ese quietismo, y llevó a los académicos a posicionarse, sobre todo a aquellos que estudiábamos las movilizaciones sociales y que nos veíamos interpelados por ellas. Lo curioso es que en mi caso tuve debates con gente que defendió la postura del academicismo al extremo pero también con los ultramilitantes, porque consideraban que no se podía llegar a un equilibrio. El equilibrio en tensión es siempre un vaivén inestable, un espacio de geometría variable, lo importante es incorporar la reflexividad de distintos ámbitos, dialogar con diferentes actores y poder enriquecer la visión y la práctica que uno pueda tener. Tanto es así que en 2007 di una conferencia en la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México] en el marco de la ALAS [Asociación Latinoamericana de Sociología] –en un momento muy fugaz en que dirigí el Observatorio Social de América Latina, de Clacso [Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales]– y ahí propuse el modelo de intelectual anfibia. Recuerdo el auditorio lleno de estudiantes que se sintieron interpelados y que me llenaron de preguntas e intervenciones sobre el tema. ¡Todo un contraste con lo que sucedía en el ámbito de los profesores! Con Norma Giarracca y Julián Rebón habíamos estado pensando para hacer firmar a algunos profesores una

4. Biblos, Buenos Aires, 2000.

5. *Compromiso y distanciamiento. Ensayos de sociología del conocimiento*, Edicions 62, Barcelona, 1990.

declaración crítica sobre la represión que se había desatado en Oaxaca... Hoy en día conviven una pluralidad de modelos de intelectuales-académicos, pero durante 20 años, durante la época en que estudié en Francia y escribí mis primeros libros en Argentina, no era así. Entonces, este posicionamiento anfibio y el periplo latinoamericano después me dieron una suerte de respiro, abrieron un espacio de libertad y de creación colectiva, que hizo que, si bien mi posición cambió enormemente con respecto al mundo académico, tampoco sintiera que tenía que cortar lazos con él.

Decía que el intelectual anfibio se diferencia también del intelectual militante, ¿podría ampliar?

Desde mi punto de vista, yo veía que quienes se decían intelectuales militantes también se instalaban en una zona de confort, creyendo que eran la única voz válida de los actores sociales, como si la producción de saber fuera solamente una cuestión de traducción de lo que dicen los actores subalternos movilizados. Como intelectual anfibia, el gran desafío es, desde mi punto de vista, superar esa visión del traductor, apuntar a un diálogo de saberes, sin desconectarse ni del mundo militante ni tampoco del mundo académico, tratando de instalar nuevas agendas en lo público. Es decir, seguir formando parte del mundo académico y también del activismo, pero no para reproducir simplemente lo que

dicen los actores. En realidad, esa mirada que podemos brindar de los procesos a veces puede entrar en tensión y conflicto con la visión exclusivamente militante. Me sucedió muchas veces, al calor del declive y de la criminalización de los movimientos piqueteros en Argentina.

En los años 2000 también volvió de algún modo a un tema que había sido su tema de tesis en Francia⁶, el de los populismos latinoamericanos o populismos de izquierda, pero ahora ya no los populismos clásicos sino los del siglo XXI.

Ahí destacaría dos grandes temáticas interconectadas. Por un lado, hacia 2007 comencé a seguir los movimientos socioambientales con mucho interés, y por otro lado había una necesidad de caracterizar el ciclo progresista que se abría en la región. Ese nuevo ciclo político lograría consolidar una hegemonía nacional-estatal. En realidad, los gobiernos progresistas despertaron en sus comienzos grandes expectativas políticas y fueron asociados a una nueva izquierda, pero a medida que atravesamos el ciclo progresista y se consolida una hegemonía nacional-estatal, de la mano de procesos de fuerte concentración de poder, resultaría claro que estábamos ante modelos de dominación tradicional muy ligados a los populismos latinoamericanos. Populismos de nuevo tipo, populismos en plural y del siglo XXI con sus diferentes

6. *Dilema argentino: civilización o barbarie* [1994], Taurus, Buenos Aires, 2006.

características. Soy consciente de que el concepto «populismo» es muy controversial y algunos piensan que hay que abandonarlo. Pero por otro lado, siempre pensé que es un concepto en disputa y que resulta muy iluminador volver a los análisis desarrollados en los años 50, 60 y 70 por muchos intelectuales de izquierda latinoamericanos que fueron críticos con procesos populistas en sus países. Y ahí me parecía que había conceptualizaciones muy, muy interesantes, que provenían de intelectuales brasileños como Francisco Weffort y Octavio Ianni, o de intelectuales argentinos, como Juan Carlos Torre, lecturas que trataban de dar cuenta de la complejidad y ambivalencia de los populismos. De hecho, hay un artículo súper interesante, de Emilio de Ípola y Juan Carlos Portantiero, que yo siempre cito⁷. Es un artículo brillante. La primera vez que lo leí, no comprendí su alcance y no lo comprendí porque no tenía realidad vivida con la cual contrastarlo. Podía entenderlo teóricamente, pero no comprenderlo en su alcance fáctico. Fue recién cuando tuve enfrente de mí los populismos latinoamericanos realmente existentes cuando me planteé también la pregunta acerca de la hegemonía. ¿Qué tipo de hegemonía están construyendo estos regímenes tan ambivalentes que articulan y reúnen elementos democráticos y elementos autoritarios? Lo había entrevistado con el

peronismo, entre comillas, casi como historiadora, cuando hicimos una relectura del peronismo en el libro *La plaza vacía*⁸, en la década de 1990. Así que en 2010 retomé la lectura que hicieron los grandes intelectuales latinoamericanos en los años 70 y 80. Y volver a ellos para interpretar lo que sucedía en el siglo XXI con los regímenes progresistas me resultó muy productivo. Sobre todo, por el hecho de mostrar la complejidad y la ambivalencia de los populismos latinoamericanos, la diferencia con los populismos de derecha que hay en Europa, pero al mismo tiempo por mostrar a través de la complejidad cuáles son sus límites. Por eso volví a la lectura de los progresismos como populismos, en un momento en el cual la lectura dominante era la de Ernesto Laclau, que le había dado carta de nobleza a los populismos y se había propuesto identificar el populismo con la democracia, diluyendo de alguna manera o minimizando los elementos más negativos a través de la idea de las lógicas de la equivalencia. Eso era muy complicado, y sobre todo lo que era muy complicado de ver es que todo populismo genera un campo de polarización. Una dicotomía del campo político que simplifica las divisiones, entrampándonos en una polarización. En Venezuela este dispositivo polarizador se había activado muy tempranamente, en el año 2002, con el intento de golpe de Estado

7. «Lo nacional popular y los populismos realmente existentes» en *Nueva Sociedad* N° 54, 5-6/1981, disponible en <www.nuso.org>.

8. M. Svampa y Danilo Martuccelli: *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*, Losada, Buenos Aires, 1997.

contra [Hugo] Chávez; en Argentina se activó en 2008, cuando Cristina Fernández de Kirchner, en sus primeros meses de gobierno, implementa la suba de las retenciones a la exportación de soja. Si analizamos los progresismos latinoamericanos realmente existentes, lo que aparecía es que en todos los casos había un momento de articulación de ese campo de oposición, algo que para Laclau ampliaba sus posibilidades políticas y que, en mi perspectiva, lo que hace es más bien estrecharlas; es cierto que fija identidades, pero no solo en el campo oficialista/populista sino también en el opositor.

Es un momento también fundacional o de articulación de las derechas, con un discurso altamente confrontativo que además apunta a monopolizar o apropiarse del concepto de democracia, que a su vez los populismos buscaron también resignificar. Es muy problemático, pero al mismo tiempo inevitable. Y la historia de todos los populismos muestra que, en algún momento, tarde o temprano, se articula este campo de polarización que deviene tóxico. Y de hecho, estructura nuevos campos de acción hasta el día de hoy. No hemos salido de esa polarización tóxica, navegamos por sus dinámicas recursivas, en medio de grandes cambios globales. No es que sean siempre las mismas. Pero las dinámicas recursivas van generando nuevos umbrales de normalidad, nuevas limitaciones políticas. Pero bueno, a mí me sigue pareciendo un tema muy

interesante el de los populismos realmente existentes, aunque en lo personal y políticamente es agotador... A lo largo del ciclo progresista, a mucha gente que se identifica con el campo popular no le simpatizaba que usara el término «populismo», porque veía detrás de esa caracterización una descalificación. La derecha y gran parte del periodismo creían que hablábamos de lo mismo, pero mi concepción está lejos de esas visiones simplistas y estigmatizantes. Yo siempre digo que la mía es una propuesta crítica y comprensiva que busca abarcar los populismos en su complejidad y expresiones nacionales, sin demonizarlos, y al mismo tiempo, sin idealizarlos identificándolos únicamente con la democracia. Dentro de las izquierdas, los progresismos latinoamericanos producían un sentimiento encontrado, a raíz de la distancia entre relato y realidad. Hay una frase de un sindicalista argentino que yo cito en uno de mis libros, en *Del cambio de época al fin de ciclo*, que irónicamente decía: «Todos queríamos vivir en el país del otro»⁹.

Y el populismo piensa al pueblo como una entidad transparente y homogénea...

Sí, una idea favorecida por el propio papel del líder (o el «significante vacío», en palabras de Laclau). Pero los populismos han dejado de tener el monopolio de lo popular (si es que en algún momento lo tuvieron). Algo que a partir de los años 70 se ve con claridad es

9. *Del cambio de época al fin de ciclo. Gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales en América Latina*, Edhasa, Buenos Aires, 2017.

la heterogeneidad de los actores. A fin de cuentas, los populismos suelen tener bastante éxito en esta captura de lo popular y sus intentos de monopolizarlo.

Mencionaba que junto con la línea del populismo estaba la del ambientalismo. ¿Cómo fue su tránsito? ¿Qué elementos pusieron esa temática en su radar intelectual?

Fue algo multicausal, aunque hubo un evento clave. Por un lado, yo sentí que mi acompañamiento y mi lectura del movimiento piquetero estaba agotada. En 2005 publiqué *La sociedad excluyente*¹⁰, que de alguna manera sintetiza también mi recorrido académico y mi propuesta de leer las transformaciones políticas de Argentina en los años 90 y 2000. Y siento que ahí cerré una etapa: la de mi lectura sobre Argentina y la de los procesos ligados a las organizaciones piqueteras. Se abría otro periodo y también la escala más latinoamericana. Fue así como en 2006 presenté un proyecto de investigación sobre las demandas ambientales. Porque de manera sistemática percibía que había un aumento de las demandas socioambientales en América Latina. En mi breve pasaje por Clacso, encargué un trabajo a distintos grupos nacionales para que indagaran si efectivamente había habido un incremento de las demandas o luchas socioambientales. Y después ocurrió meses más tarde que, estando yo en Bariloche de vacaciones, a inicios de 2007, un amigo, Pablo Bergel, uno de los pioneros del ecologismo en Argentina, me

insistió para que me acercara a Lago Puelo, a 130 kilómetros de distancia, un lugar maravilloso en la Comarca Andina, y asistiera a una reunión de las diferentes asambleas socioambientales de la Patagonia. Yo estaba reclusa escribiendo. Pero bueno, insistió tanto que finalmente decidí ir y cuando llegué a Lago Puelo y participé de esa asamblea, sentí que no salía más de ahí, y así como habían sido un camino de ida para mí el 19 y 20 de diciembre de 2001, también lo era haber sido espectadora de esa asamblea en la cual me sorprendió la gran cantidad de demandas que convergían en lo socioambiental, desde las demandas de los pueblos originarios por territorio, la denuncia del acaparamiento de tierras, la lucha contra la megaminería, las luchas contra las megarrepresas, a las cuales se sumarían después las luchas contra el *fracking* y los monocultivos, etc. En ese caso, en el contexto de la Patagonia, había una multiplicidad y heterogeneidad de demandas. Y recuerdo que salí de ahí comprometiéndome con la gente de la Asamblea de Esquel a organizar un evento en Buenos Aires una semana más tarde, ya que algunos de ellos, que estaban criminalizados en ese momento, tenían que ir a declarar. De ahí en más, me lancé de manera sistemática a estudiar y acompañar esas luchas socioambientales, que inclusive implicaron para mí también una resignificación del rol del intelectual, una vuelta de tuerca a lo que era el intelectual anfibia.

10. *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*, Taurus, Buenos Aires, 2005.

Recuerdo que en 2002 íbamos a las asambleas de la Corriente Clasista y Combativa, una de las más grandes expresiones del movimiento piquetero del conurbano bonaerense, en el corazón de La Matanza. Íbamos con dos o tres jóvenes investigadoras y apenas me bajaba del auto, yo les decía: «Recuerden, nosotras no somos piqueteras. Nuestro lugar es otro». En las luchas socioambientales, era difícil decir eso; era difícil porque son luchas más transversales y policlasistas, con una composición social más heterogénea. No estaba frente a un actor claramente tipificado, no desde el punto de vista social. Acá estaba ante un conglomerado de actores sociales, desde un ama de casa, una maestra, una trabajadora social, un representante de pueblos indígenas. Por otro lado, realmente esa heterogeneidad interpelaba de manera diferente el rol de intelectual anfibio. Y de hecho, mi inmersión en las luchas socioambientales se hizo entonces desde un lugar mucho más activo, de acompañamiento y de interpelación, siempre, digamos, tratando de aportar algo más de lo que dicen los actores, estableciendo mapas y conexiones de las luchas socioambientales, contribuyendo al diálogo de saberes, dando visibilidad a las luchas, analizando las narrativas emergentes. Arranqué con las luchas contra la megaminería en Argentina, a lo cual le siguió la frontera petrolera, el modelo sojero, los corredores de exportación que iban diseñando nuevas hidrovías y megarrepresas a través de grandes obras de infraestructura, el creciente acaparamiento de tierras y el urbanismo neoliberal a través de nuevos

emprendimientos inmobiliarios. Todas eran problemáticas que cuestionaban los modelos de desarrollo vigentes, trascendían las fronteras nacionales y reconfiguraban la cartografía social del conflicto a una escala decididamente regional y global. Pero esta crítica a los modelos de desarrollo –ya lo planteábamos así en 2007– también me interpeló desde otro lugar. Fue el disparador que me obligó a salir de la mirada más centrada en el conurbano bonaerense. Todo ello hizo que cambiara el modo y el lugar desde donde mirar la realidad argentina, desplazándome del centro a la periferia. Fue un reencuentro con las provincias, y con la apuesta colectiva, algo que no me había ocurrido del todo con el abordaje de las organizaciones piqueteras, a través del encuentro con otros investigadores que estaban en la misma situación que yo y con los cuales nos embarcamos en el análisis de esa realidad, en la construcción de saber contraexperto y en la necesidad de dar visibilidad académica y pública a esos nuevos conflictos. Y encontré que era mucho más rico ese trabajo colectivo que hacíamos con investigadores de Córdoba, Catamarca, Mendoza, no solo la gente que estaba en Buenos Aires. Eso fue muy rico, fue volver a encontrar al país a través de las provincias, salir de esa mirada porteñocéntrica que tienen muchos académicos argentinos.

También fue una vuelta a su origen patagónico, ¿cómo lo vivió?

El análisis de las luchas ambientales y la crítica a los modelos de desarrollo

descentraron mis estudios, que ya no pasaban por Buenos Aires y por el conurbano bonaerense y podían pasar por el norte neuquino, Catamarca, Intag (en Ecuador) o Tolima (en Colombia). En todo caso, era una geografía latinoamericana itinerante, de pequeñas y medianas localidades en las cuales se habían constituido colectivos campesinos, pueblos originarios, colectivos ciudadanos policlasistas, que cuestionaban alguna forma de extractivismo, a través de la defensa de sus territorios. Y sí, volviendo a la pregunta, la Patagonia entraba con claridad ahí; y de hecho había sido el gran disparador. Pero la Patagonia no era para mí un foco de estudio. En realidad, siempre traté de que no lo fuera de manera directa. Yo escribí tres novelas que tienen como territorio la Patagonia¹¹. Entonces, para mí la Patagonia era mi territorio literario, no el territorio de las luchas ambientales o sociales. Esto cambió en 2011, cuando me involucré personalmente en la lucha contra la expansión del *fracking*, no solo en Vaca Muerta, sino también en mi propio lugar de origen, en Allen, Río Negro, donde el *fracking* actualmente está desplazando la producción de peras y manzanas. Escribí un libro en clave personal, yendo de la experiencia familiar al análisis de la expansión de la frontera petrolera y la crisis socioecológica en tiempos del Antropoceno. Ese ha sido

mi libro más personal, un libro que se instala entre el ensayo y la literatura¹². En todo caso, a partir de 2007, las luchas socioambientales me llevaron, por un lado, a recorrer las provincias, algo maravilloso, y por otro lado, a conocer desde otro lugar también América Latina, más allá de las grandes ciudades. En 2009, publicamos con Mirta Antonelli y colegas como Horacio Machado y Norma Giarraca *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*¹³, que fue el primer libro que sistematizó la cuestión de la resistencia a la minería en Argentina. En ese momento, hablábamos de modelo extractivo exportador, pero luego se impuso la categoría de «neextractivismo», que resultó ser más productiva e interpeladora. En 2010 armamos una alianza muy duradera con Enrique Viale, que viene de otro palo, es abogado ambientalista. Empezamos con la lucha parlamentaria por lograr la Ley Nacional de Glaciares y seguimos hasta ahora recorriendo territorios, interviniendo en los debates públicamente, promoviendo leyes ambientales y escribiendo libros. También a partir de 2011 empecé a formar parte de un espacio muy interesante a escala latinoamericana para debatir sobre la expansión del neextractivismo, las nuevas luchas socioambientales o lo que yo llamo el «giro ecoterritorial», y los horizontes alternativos, en el Grupo

11. Además de *Los reinos perdidos*, cit., *Dónde están enterrados nuestros muertos* (2012) y *El muro* (2013), ambas editadas por Edhasa, Buenos Aires.

12. *Chacra 51. Regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking*, Sudamericana, Buenos Aires, 2018.

13. Biblos, Buenos Aires, 2009.

de Trabajo Permanente en Alternativas al Desarrollo, impulsado por la Fundación Rosa Luxemburgo de la región andina. Fue el lugar donde comenzamos a discutir los límites de los procesos progresistas latinoamericanos, con énfasis en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Un espacio maravilloso, que todavía sigue siendo para mí muy enriquecedor, junto con intelectuales como Edgardo Lander, Alberto Acosta, Esperanza Martínez, Miriam Lang, entre muchos otros, a los cuales se ha agregado gente joven, investigadores jóvenes como Breno Bringel, Emiliano Terán y muchos otros. Entonces este fue y sigue siendo un espacio privilegiado para reflexionar sobre América Latina. Creo, y lo digo sin ser rimbombante, que somos quienes han puesto en la agenda regional el tema del extractivismo y la discusión sobre los modelos de desarrollo, cuestionando los límites y las derivas de los gobiernos progresistas. Entre 2015 y 2018, lanzamos varias declaraciones, suscriptas por numerosos intelectuales de izquierda del continente, cuestionando el gobierno de [Nicolás] Maduro en Venezuela y el régimen nicaragüense de [Daniel] Ortega-[Rosario] Murillo. Todo eso nos trajo mucho enfrentamiento con intelectuales que siguen una línea de solidaridad automática para con los gobiernos progresistas. El Grupo Permanente ha sido para mí una referencia en la construcción de una posición de izquierda crítica, asociada al respeto de los derechos humanos, la democracia y, más que nunca, a las luchas ecoterritoriales, indígenas/campesinas y feministas.

Hablemos de la articulación entre la cuestión ambiental y el feminismo. ¿Cómo llegó a eso? ¿Fue algo que surgió de manera evidente de esas luchas o de elaboraciones más teóricas?

Es una buena pregunta, creo que surgió de la necesidad de explicar el protagonismo de las mujeres al calor de las luchas sociales. Lo había visto en las mujeres piqueteras, con quienes tuve diálogos extraordinarios; mujeres humildes, para quienes la autolimitación es un rasgo de clase, no solo de género, que apenas se atrevían a hablar en público y que al calor de las luchas fueron encontrando una voz propia. Y esa apertura había significado conflictos enormes en el interior de su familia, con sus compañeros. Así que entré por el lado de los feminismos populares, el de los márgenes. Y cuando empecé a avanzar en la agenda ambiental, la cuestión de los protagonismos femeninos fue tomado cada vez más fuerza. Veía ese vaivén que va de lo público a lo privado, que permite descubrir los vínculos patriarcales en el espacio de lo privado para después volver a lo público con una voz propia, una voz que se reconoce no solo en la lucha socioambiental sino también en la lucha feminista, aunque al principio haya mirado con desconfianza al feminismo. En ese vaivén que nunca se termina, las mujeres rompen con la autolimitación de género y de clase y generan una voz propia. Lo vi en las mujeres de Famatina, en las líderes mapuches, en las mujeres chilenas que denuncian las zonas de sacrificio, en las Madres del Barrio Ituzaingó que

denuncian los agrotóxicos, en las mujeres campesinas-indígenas de Bolivia que defienden la agroecología, en las mujeres colombianas que luchan contra la expansión de la frontera petrolera o en las mujeres brasileñas que en la isla de Maré denuncian la contaminación petrolera. Por otro lado, en las luchas ecoterritoriales me encontré con un feminismo que colocaba otros temas en la agenda: la defensa del agua y la vida, el cuerpo, el territorio, la demanda de tierra y de soberanía alimentaria, la relación con la naturaleza, la preocupación por el cuidado y la sostenibilidad de la vida. Todo lo cual me llevó indefectiblemente a reflexionar sobre el ecofeminismo y sus diferentes variantes, o lo que llamo los «feminismos ecoterritoriales» latinoamericanos. Yendo más al fondo, percibía que en América Latina las grandes luchas antineoliberales que abrieron el ciclo progresista se caracterizaron por un gran protagonismo de los pueblos originarios, que generaron esa potente narrativa emancipatoria en torno del buen vivir, de los derechos de la naturaleza, bienes comunes, autonomía, plurinacionalidad. Quince años más tarde, hacia el final del ciclo progresista, más allá de la suerte política que tuvieron algunas de esas categorías, vemos emerger una nueva narrativa emancipatoria asociada a los feminismos ecoterritoriales. Categorías como la sostenibilidad de la vida, la importancia de la interdependencia y el cuidado recrean el vínculo sociedad-naturaleza, humano-no humano. Encontramos una nueva epistemología feminista, un ecofeminismo que es

diferente del ecofeminismo constructivista que podemos encontrar por ejemplo en España, donde tiene teóricas potentes como Yayo Herrero, Alicia Puleo y Marta Pascual. El ecofeminismo territorial latinoamericano es praxis, una praxis que va configurando una epistemología de los afectos y las emociones, en el contacto espiritual y material con otros seres sintientes, no humanos, en contacto con el agua, los cerros y montañas, las semillas y las plantas. Esta interconexión y espiritualidad es la que aparece reflejada en la breve y concisa frase de la gran activista hondureña asesinada hace unos años, Berta Cáceres, cuando le preguntaron por qué creía que la lucha contra la megarrepresa iba a triunfar, y ella respondió: «Me lo dijo el río». En esa narrativa aparecen la espiritualidad y la interdependencia. Es algo que hemos comenzado a comprender, sobre todo al calor de los impactos del covid-19, algo elemental: pensarnos desde la interdependencia no solo entre seres humanos, sino entre lo humano y lo no humano.

Esa narrativa ecofeminista también nos abre otras puertas, en términos de pensamiento y de identificación, volviendo al plano de las categorías intermedias contrahegemónicas que se han gestado en América Latina. Gran parte de ellas reconoce un origen en los pueblos originarios, ¿y qué pasa con quienes no somos indígenas? Para mí, esta nueva epistemología feminista abre las puertas a repensar en estos tiempos de Antropoceno la relación sociedad-naturaleza, humano-no humano desde otro lugar, que es el lugar de la

sostenibilidad de la vida; abre la posibilidad de generar un discurso emancipatorio diferente que guarda fuertes afinidades con el de los pueblos originarios.

En su libro más reciente¹⁴ habla del colapso. Por un lado, es un término muy poderoso que pone sobre la mesa los riesgos que penden sobre el planeta; pero por otro, ¿no puede resultar funcional a la actual cancelación de la idea de futuro y el auge de las distopías?

En primer lugar, si bien el libro que escribimos con Enrique Viale se titula *El colapso ecológico ya llegó*, la nuestra es una apuesta por la resiliencia, es una apuesta por otros horizontes societales, por la transición ecosocial justa, por la necesidad de discutir también qué es transición. En segundo lugar, dicho esto, lo que hay que reconocer es que estamos en colapso. No necesitamos esperar que el permafrost se derrita y libere el gas metano que está enterrado hace siglos. No tenemos más que ver la cara visible de ese colapso expresado en los eventos extremos, las sequías, los grandes incendios forestales. Por ejemplo, recientemente en Argentina los incendios arrasaron con 40% de los Esteros del Iberá, que está entre los diez humedales más grandes del planeta. Pero no hay que confundir colapso con distopía. En ese sentido, tenemos que reconocer la realidad del colapso. Tenemos que reconocer también la variabilidad y la complejidad de ese colapso. El

colapso no implica el hundimiento de una sociedad de un día para otro. Implica que se dan cambios en un sentido negativo, en una sociedad que va hacia el caos, que va hacia la descomposición social y el descalabro de los ecosistemas. Hay mucha reflexión sobre todo en España y Francia, existe una teoría de la colapsología.

Hablando con gente de Europa del Este, ellos dicen «Nosotros conocimos el colapso», evocando la caída de la Unión Soviética; Argentina conoció en 2001 el colapso; Venezuela conoció el colapso. De hecho, recuerdo haber estado en Venezuela a fines de 2017, cuando en el aeropuerto casi no había vuelos, como anticipando la pandemia, en medio de la hiperinflación y el desabastecimiento. Pero esto es más sistémico. Más allá de la crisis climática, de la frecuencia y aceleración de los eventos extremos, de aquellos que se ven y los que no se ven, imaginemos el colapso ecológico que puede comenzar con una severa crisis energética, y el efecto en cascada que esto conllevaría. En esa línea, la crisis socioecológica es de tal gravedad que no podemos escapar a esta realidad del colapso: está sucediendo y tenemos que tomar decisiones ya. Tenemos que tomar una actitud proactiva y no seguir instalados en nuestra zona de confort diciendo que no se puede hacer nada o quedarnos paralizados esperando el fin del mundo. Entonces, una cosa es afirmar la realidad del colapso en sus diferentes niveles, algo que no es de un

14. M. Svampa y E. Viale: *El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal)desarrollo*, Siglo Veintiuno, 2020.

día para el otro, pero que es un tránsito que puede llevar mucho tiempo o poco según las coyunturas, y otra es afirmar la distopía, el «mal lugar», o «el peor de los mundos», como horizonte.

Es cierto que hay mucha gente y a veces muchos jóvenes que caen en la inacción porque consideran que no hay posibilidad de intervenir y modificar el presente para poder tener otro futuro. Pero también hay muchos jóvenes que se están movilizando, el llamado de Greta Thunberg los ha interpelado y han tomado la iniciativa para activar, no solo para dar una batalla en relación con una agenda de defensa de los bienes comunes, sino también para una agenda de transición ecosocial. Hay que luchar contra el lenguaje y el discurso distópico que insisten en que está todo perdido. Ahí vuelvo a la metáfora de la liberación cognitiva. Necesitamos salir de la zona de confort en la cual las ciencias sociales y las ciencias humanas han estado instaladas en los últimos tiempos y recuperar la imaginación política. Mientras que el arte contemporáneo busca tematizar la crisis socioecológica dialogando con esas otras epistemologías, rompiendo barreras y mezclando lenguajes, mientras que desde las ciencias naturales tenemos científicos e investigadores involucrados en estudios del cambio climático que están muy preocupados y que alientan la necesidad de reformas estructurales, una parte importante de las ciencias sociales y humanas siguen empantanadas en una gran crisis. En ellas existe una izquierda entrampada en sus lealtades políticas o en miradas

irónicas sobre las posibilidades de otras salidas, una izquierda que es analfabeta desde el punto de vista ambiental o que padece de ceguera epistémica y que todavía piensa que habitamos un planeta infinito. Necesitamos más imaginación política y menos cobardía epistémica, volver a pensar en clave utópica para alentar la posibilidad de otra realidad, de otra sociedad posible.

Para concluir, ¿hasta qué punto la pandemia funciona como una suerte de colapso, o lo más parecido que vimos en estos tiempos, y a escala global?

Efectivamente, más allá de las diferencias en cada país, la pandemia mostró la limitación de la globalización neoliberal. Por un lado, la profundización de las desigualdades; por otro lado, aunque no aparece en los discursos de muchos, la relación entre pandemia y crisis socioecológica. El covid-19 es una enfermedad zoonótica y su expansión está ligada a la destrucción de ecosistemas silvestres. La crisis extraordinaria que abrió el covid-19 también nos alentó a colocarnos en otro lugar para mirar la realidad. Nos puso en una suerte de umbral y posibilitó una apertura, una apertura que siempre implica una desnaturalización de la situación y nos obliga a mirarla desde otro lugar. Entonces, la pandemia activó estas posibilidades de resignificar o de desnaturalizar la realidad y habilitó también la discusión de la transición ecosocial. Propuestas que antes parecían reservadas a los especialistas se instalaron en la agenda global. Hoy en día, la

transición ecosocial, pero sobre todo la transición energética, está ya en las agendas de muchos países. En la agenda de Joe Biden, en la agenda de la Unión Europea, y en América Latina, si bien no fueron nuestros gobiernos los que la han tomado, sí desde ciertos sectores sociales se ha buscado debatir y promover una agenda de transición ecosocial. Así, por ejemplo, desde un grupo de activistas, organizaciones e intelectuales venimos promoviendo el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur¹⁵. Vemos en los países del Norte una agenda sobre la necesidad de la transición energética con sus idas y vueltas, materializada en el Green New Deal (Nuevo Pacto Verde). Y nos preguntamos entonces: ¿qué se considera energía limpia?, ¿la reforma alcanzará el modelo de consumo? Lamentablemente, América Latina sigue siendo hablada por los países del Norte porque no tiene una definición de transición energética propia. Con algunas excepciones, se prosigue con la idea de reactivar la economía con más extractivismo, profundizando la matriz fosilista para obtener divisas y supuestamente resolver los problemas económicos que se agudizaron al calor de la pandemia. Todo esto es parte del problema, no de la solución.

¿Quedó algo en el tintero?

Tres cuestiones telegráficas para el final. Una es que acabo de publicar con Pablo Bertinat y el equipo de investigadores que coordinamos ambos un

libro que lleva el título de *La transición energética en Argentina*. Es también el primer libro de la colección que comienzo a dirigir para la editorial Siglo Veintiuno, «Otros futuros posibles», en la cual habrá una serie de libros de divulgación y además una serie de libros académicos sobre la crisis socioecológica. Nos interesa socializar y acercar al público los conocimientos acerca de la crisis climática y ecológica en un lenguaje accesible, al tiempo que queremos poner en agenda la necesidad de debatir una hoja de ruta para una transición ecosocial justa.

Segundo, quiero volver sobre el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y decir que este nos abrió las puertas para debatir sobre la transición con otros colectivos del Norte, partidarios del Green New Deal, o partidarios del decrecimiento (España y Francia). Es una plataforma abierta y dinámica, que nos permite construir una idea de transición justa vista desde el Sur global, en momentos en que nuestros territorios enfrentan una nueva embestida del extractivismo, parte de la cual se hace en nombre de la transición energética: litio, cobre, minerales raros. Si no debatimos una agenda de transición justa, vamos camino a la aceptación sin más de una nueva fase de depredación que afectará muy particularmente a las poblaciones y territorios de América del Sur.

Y por último, quiero decir que estamos viviendo un periodo de gran tensión entre quienes siguen en su

15. Página web: <<https://pactoecosocialdelsur.com/>>.

apuesta por los modelos hegemónicos de desarrollo y buscan oponer lo social a lo ambiental, y quienes creemos que hay que cambiar las reglas de juego y el modo de pensar las relaciones economía/naturaleza, para apuntar a una articulación entre lo social y lo ambiental. Gran parte de esta disputa pasa por entender que no podemos pedirle más a la naturaleza, al ambiente, a los ecosistemas, en fin, a la crisis climática, que ya han sido impactados severamente por determinadas actividades económicas, que se adapten a la

economía. Es el sistema económico el que tiene que adaptarse a la crisis climática, si realmente queremos evitar un colapso mayor.

Es una verdad de perogrullo, pero esto implica un cambio de paradigma. Tenemos que repensar la economía para que esta se adapte a los límites naturales y ecológicos del planeta. Y no seguir pensando que es el planeta el que tiene que adaptarse a las llamadas «actividades productivas», que hoy están destruyendo los ecosistemas estratégicos y amenazan el tejido de la vida. ☒

RELACIONES INTERNACIONALES

Julio-Diciembre de 2021

La Plata

Año 30, N° 61

EDITORIAL: Norberto Consani. DIÁLOGOS: **Niniek Kun Naryatie.** ESTUDIOS: Internalizando la flexibilidad en la regulación del cambio climático: un análisis del caso brasileño, **Christopher Kurt Kiessling.** Lo que necesita este país es más internacionalistas: el recurso a la serie animada *Los Simpsons* para la enseñanza del derecho internacional, **Leopoldo M. A. Godio, Luciano Pezzano.** Pierre Bourdieu, la estadística y el estudio de las relaciones internacionales, **Víctor Montoya.** Sobre chuteiras e coturnos: Fútbol como instrumento de soft power de regímenes autoritarios en Argentina, Brasil e Chile, **Ian Rebouças Batista y Larýssa Vidal Amazonas de Souza.** La relevancia de los enfoques de género en las Relaciones Internacionales y su aplicación al estudio de las mujeres en Medio Oriente, **Alejandra Gutiérrez Luna.** Narcoterrorismo e neoliberalismo: Condicionamientos e (Re)enquadramentos do conflito social colombiano, **Wanderley dos Reis Nascimento Júnior y Rafaela Cristina Silva de Souza.** La doble excepcionalidad antártica en tiempos de pandemia, **Cristian Lorenzo y Diego Navarro Drazich.** La importancia estratégica del Ártico en la geopolítica marítima, **Silvia Marina Rivas de Hernández.** Cooperación en la gobernanza sanitaria entre China y Argentina en el contexto de la covid-19 desde la perspectiva de la gobernanza multinivel, **Xiaoyu Ruan y Jingtíng Zhang.** Más allá del petróleo. En el umbral de la acumulación por desfosilización, **Martín Kazimierski y Melisa Argento.** RESÚMENES DE TESIS: La Unión Africana en la política exterior argentina (2003-2015), **Pablo Exequiel Virasoro.** REFLEXIONES: Comercio y cambio climático: regímenes en tensión, **Roberto Bouzas.** HISTORIA: La profecía cumplida. A 20 años de los atentados del 11-s, **Patricia Kreibohm.**

Director – Fundador: Dr. Norberto Consani

Relaciones Internacionales es una publicación del Instituto de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata. Calle 48 e/ 6 y 7 – 5° Piso, 1900, La Plata, Argentina. Tel.: (54-221) 4230628. Página web: <www.iri.edu.ar>. Correo electrónico: <iri@iri.edu.ar >.

Summaries

Resúmenes en inglés

Natalia A. Volosin: In the Sewers of Politics: Politicization and «Self-Employment» of Argentine Intelligence [4767]

In Argentina, the recent scandal over the use of intelligence services to set up legal cases against opponents and trade unionists during the government of Mauricio Macri revealed, once again, the extortive role of Argentine spies and the impossibility of building a modern agency, in accordance with the rule of law.

Keywords: Democracy, Intelligence, Federal Intelligence Agency (AFI), Argentina.

Benedicte Bull / Antulio Rosales / Manuel Sutherland: Venezuela: Luxury, Inequalities, and «Bodegonero Capitalism» [4768]

In Venezuela, the expansion of *bodegoneros* – shops selling imported products, even luxury ones, for those who can

afford them– goes hand in hand with the process of «dollarization» of the economy (and the appeal to various forms of payments) and opaque decision-making mechanisms on the part of the government to establish winners and losers from «liberalization» measures. The special economic zones (ZEE, by its Spanish acronym) are the complementary face of this process.

Keywords: Bodegoneros, Dollarization, Hyperinflation, Inequality, Venezuela.

Pavel Barša: Eastern Europe: The Lost Dreams of the Liberals of 89 [4769]

The «illiberal» turn in Central and Eastern Europe has ended post-Cold War liberal hopes. Three recent books try to explain how it was possible that, in less than three decades, history has encountered new forms of authoritarianism. But the theses of totalitarianism, whether

progressive or conservative, are incapable of understanding the endogenous tendencies of authoritarianism in Central and Eastern Europe (and also the drift of Donald Trump's United States).

Keywords: 1989, Anti-Totalitarianism, Communism, Illiberalism, Eastern Europe.

Yanina Welp: Without Parties, Democracy Does Not Work; But With These Parties, It Doesn't Either [4770]

Although political parties have not disappeared from the democratic game, today they show serious difficulties in articulating social demands and channeling citizen aspirations. In this framework, tools such as referendums can reinvigorate democracy. But for this, simple and transparent mechanisms are needed to be able to activate them. If not, as is often the case, they turn to be more useful for political powers than for citizen participation.

Keywords: Democracy, Participation, Political Parties, Referendum.

Nabila Abbas / Yves Sintomer: Three Imaginaries of Sortition in Politics: Deliberative, Anti-Political, or Radical Democracy? [4771]

Sortition as a form of political selection has returned, promoted by different imaginaries. In the context of the crisis of political parties and traditional forms

of representation, selection by lot and mini-publics appear as alternative ways to guarantee the presence of ordinary people against the power of the elites. At least, those in positions favorable to deliberative democracy, anti-political democracy, and radical democracy believe that.

Keywords: Democracy, Mini-Publics, Representation, Sortition.

Steven Forti: Post-Truth, Fake News, and the Extreme Right against Democracy [4772]

Fake news is not a new phenomenon, but its articulation with the spread of social networks and internet platforms is transforming its breadth and nature. At the same time, the extreme Right has known how to adapt to this new communicational ecology and has taken advantage of it. Today the so-called «post-truth» overflows the margins and crosses the conventional press and even parliaments.

Keywords: Democracy, Extreme Right, Fake News, Post-Truth, Europe.

Cristina Lafont: Citizen Assemblies and the Populist Concept of Representation [4773]

Proposals to insert citizen assemblies and other deliberative mini-publics into the political process in order to bridge the many representation «gaps» currently afflicting traditional party systems bear some resemblance to populism's notion

of representation as the «incarnation» of the people. This ends up weakening the idea of plural societies with different visions, beyond the «place» that each person occupies in society.

Keywords: Citizen Participation, Democracy, Lottocracy, Mini-publics, Populism, Representation.

Nuria Alabao: For a Feminist Democracy (Always Pending) [4774]

What tools does feminism give us to deepen democracy? The grassroots feminism of the autonomous movement understands democracy as something that is being done continuously, that is, it needs a strong organized society that constantly pushes for the redistribution of power and resources. Its political subject is configured by a sum of ongoing struggles.

Keywords: Democracy, Grassroots Feminism, Institutional Feminism, Transfeminism.

Santiago Gerchunoff: The Crisis of Democracy as Melancholy [4775]

The crisis of representation and the digital transformation of the public sphere bring forward laments and complaints that are as impotent as they are recurrent. Faced with this, it is possible to try a reinterpretation of these phenomena in the light of classical liberalism. This view allows us to understand its

deep historical meaning and rethink the new digital space as a form of mass public conversation.

Keywords: Democracy, Internet, Mass Public Conversation, Modernity.

Alicia Lissidini: Direct Democracy and Social Mobilization: What Uruguay Shows Us [4776]

In addition to its political stability, Uruguay is known for its mechanisms of direct democracy. Beyond the concrete results in each case, citizen initiatives, almost always coordinated with political parties, give density to the public conversation and channel the mobilization through institutionalized channels. The referendum on March 27th against a mega-law issued by the current government is an example of this.

Keywords: Direct Democracy, Referendum, Social Mobilization, Uruguay.

Patricio Gómez Talavera: Latin America and Cambyses' Cat: Political Fragmentation and Challenges for Democracy [4777]

The Covid-19 crisis has exposed vulnerabilities in party representation systems in Latin America. But not all the negative factors are of recent gestation, and some very important ones are rooted in the very genesis of the Latin American States. Analyzing those elements that put pressure on the stability of social fabrics in the post-pandemic, identifying

patterns and dynamics to offer a comprehensive reading and contributing to the debate to overcome them are bases for rethinking the situation of democracy in the region.

Keywords: Elites, Fragmentation, Political Parties, Latin America.

Pablo Stefanoni: Thinking and Acting Amphibiously: Interview with Maristella Svampa [4778]

Keywords: Amphibian Intelligentsia, Environmentalism, Neo-Extractivism, Social Movements, Maristella Svampa.

El Cotidiano

REVISTA DE LA REALIDAD MEXICANA

Noviembre-Diciembre de 2021

Ciudad de México

Nº 230

MIGRACIÓN FORZADA EN TIEMPOS DEL COVID-19

MIGRACIÓN FORZADA EN TIEMPOS DEL COVID-19: Presentación. La esperanza en los caminos de la migración del sur de México, **Lucas Aguenier**. Espacios y representaciones: Mujeres migrantes centroamericanas en tránsito por México, **Alejandra Uribe Aguirre**. Las casas de migrantes: el humanitarismo ante la crisis, **Eric Oliver Luna González**. El desplazamiento forzado interno: su construcción como problema público en México, **Mariana Guadalupe Martínez Estrada**. Repercusiones sociales, culturales y económicas de la migración internacional en una comunidad indígena nahua de la Sierra de Zongolica, el caso del municipio de Astacinga en el estado de Veracruz, **Jorge Mercado Mondragón**. MIGRACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19: La instrumentalización de la Covid-19 en la política migratoria de EEUU. y México, **Julia Martínez Díez**. Deportaciones masivas de la niñez migrante en tiempos de la pandemia del Covid-19, **Elida Beatriz Calixto y Toxqui Fernando Tenorio Tagle**. ESTUDIO DE GÉNERO: ¿Debe implementarse la paridad política en las comunidades indígenas?: una reflexión desde la comunalidad y la perspectiva de género, **María Magdalena Sam Bautista y Maricarmen Sánchez Pérez**.

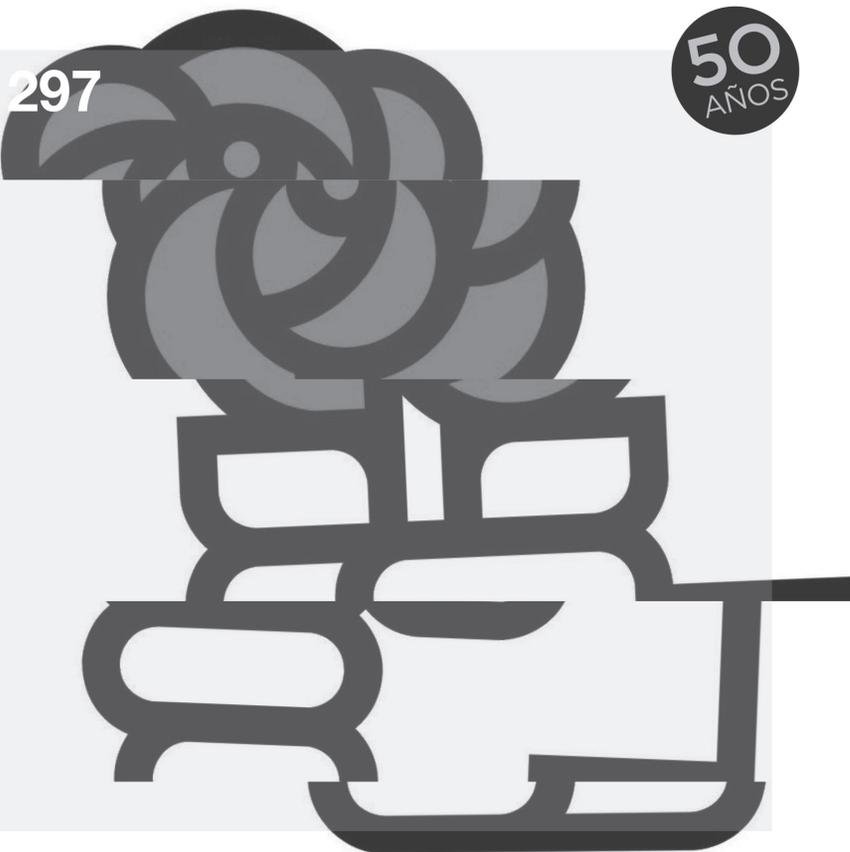
<www.elcotidianoenlinea.com.mx>

El Cotidiano es una publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Av. San Pablo 180, Edif. K-011, Col. Reynosa Tamaulipas, C.P. 02200, Ciudad de México. Tel. 53 18 93 36. Apartado Postal 32-031, Ciudad de México, 06031. Correo electrónico: <cotid@correo.azc.uam.mx>.

NUEVA SOCIEDAD 297



**La socialdemocracia ha muerto,
viva la socialdemocracia**





50 años, 50 artículos

Una nueva sección en nuestra web en la que recuperamos todas las semanas artículos publicados desde la primera edición de la revista en 1972.

www.nuso.org/50aniversario

Alemania: F. Delbanco, Tel.: (49 4131) 2428-8, e-mail: <post@delbanco.de>.

Argentina: Distribuidor: Jorge Waldhuter, Pavón 2636, Buenos Aires, Tel./Fax: (5411) 6091.4786, e-mail: <hola@waldhuter.com.ar>.

Bolivia: en La Paz: Yachaywasi, Tel.: (591) 2 2441.042, e-mail: <yachaywa@acelerate.com>. En Santa Cruz de la Sierra: Lewylibros, Junín 229, Tel.: (591) 3 3360709.

Colombia: Librería Fondo de Cultura Económica, Calle 11 No. 5-60, Barrio La Candelaria, Bogotá, Colombia. Tel.: (571) 2832200, e-mail: <libreria@fce.com.co>.

Costa Rica: Librería Nueva Década, Tel.: (506) 2225.8540, e-mail: <ndecada@ice.co.cr>.

Ecuador: LibriMundi, Tel.: (5932) 252.1606, 223.4791, e-mail: <librimu1@librimundi.com.ec>.

España: Marcial Pons-Librero, Tel.: (34 914) 304.3303, e-mail: <revistas@marcialpons.es>.

Japón: Italia Shobo, Fax: 3234.6469; Spain Shobo Co., Ltd., Tel.: 84.1280, Fax: 84.1283, e-mail: <info@spainshobo.co.jp>.

Perú: El Virrey, Bolognesi 510, Miraflores, Lima, Tel.: 444.4141, e-mail: <info@elvirrey.com>.

Puerto Rico: Laberinto, 251 calle de la Cruz, San Juan, Tel.: (787) 724.8200, e-mail: <info@librerialaberinto.com>.

Ventas y consultas por internet:
<www.nuso.org>

Distribución internacional a librerías:
<distribucion@nuso.org>

PARA SUSCRIBIRSE A NUEVA SOCIEDAD

| SUSCRIPCIÓN | ANUAL | BIENAL |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Incluye flete aéreo | 6 números | 12 números |
| América Latina | US\$ 70 | US\$ 121 |
| Resto del mundo | US\$ 107 | US\$ 196 |
| Argentina | \$ 2.900 | \$ 5.800 |

> Formas de pago

1. **Pago online:** Ingrese en <www.nuso.org/suscribirse/>, donde encontrará un formulario para registrar su pedido y efectuar el pago.

2. **Pago con tarjeta de crédito:** Solicite instrucciones a <distribucion@nuso.org>

3. **Pago con cheque:** Envíe un cheque por el importe correspondiente a la orden de Fundación Foro Nueva Sociedad a la siguiente dirección: Nueva Sociedad, Humberto Primo 531, C1103ACK Buenos Aires, R. Argentina, acompañado de los datos del suscriptor (nombre, domicilio postal completo, teléfono, correo electrónico).

> Para otros medios de pago y cualquier otra consulta, escriba a <distribucion@nuso.org>.

¿NORMALIDAD DESPUÉS
DE LA PESTE?

COYUNTURA

Augusto Barrera G. Ecuador:
los laberintos de Guillermo Lasso

TRIBUNA GLOBAL

Cyryl Ryzak. Tiempos de
descontento en Bielorrusia

TEMA CENTRAL

Roger Chartier. Leer en tiempos
de pandemia

Juan Villoro. Ventana al virus:
las formas que no vemos

Martín Kohan. La distancia, el futuro,
la muerte

Ana Longoni. París/partir

Alejandro Katz / Nicolás Kwiatkowski.
Soledad y pandemia. Un diálogo
con Claudia Hilb

Peio H. Riaño. ¿Sobrevivirá el
patrimonio cultural? Cambio climático
y pandemia

Cristina Rivera Garza. Instrucciones
para abrir una puerta

María Fernanda Ampuero. Neblina

Benjamin Bratton. Cómo evitar
el colapso

Santiago Alba Rico. El regreso de
la Peste. Pansindemia y normalidad

Iván de la Nuez. El museo
(hipernormal) que viene

Íñigo Errejón. Lo que aprendí
de la pandemia

ENSAYO

Martín Baña. ¿Quién extraña el
comunismo? Rusia a 30 años de la
disolución de la Unión Soviética

SUMMARIES

LA SOCIALDEMOCRACIA HA MUERTO,
VIVA LA SOCIALDEMOCRACIA

COYUNTURA

José Luis Rocha. Nicaragua:
¿del mecenazgo bolivariano a las
sombras chinescas?

Giancarlo Summa. El regreso de Lula
a un Brasil de rodillas

TRIBUNA GLOBAL

Jake Werner. ¿Cómo escapó China
a la terapia de choque?

TEMA CENTRAL

Joan Subirats. Replantear las políticas
de bienestar. Dilemas y tensiones
entre igualdad y diversidad

Roger Martelli. La izquierda en
busca de sentido. Reflexiones desde
la experiencia francesa

Göran Therborn. Las paradojas
de las socialdemocracias nórdicas

Cristina Monge. La socialdemocracia
se juega en la batalla contra el miedo

Mariano Schuster. Socialistas, otra vez

Ricard Gomà / Gemma Ubasart.

Tejer ciudadanía social en el siglo XXI.
Nuevos pactos sociales, ecológicos
y de género

Christian Krell. El «retorno» de la
socialdemocracia alemana

Rodrigo Arocena. ¿Nuevos encuentros
entre democracia y transformación?

Ricardo Martínez Mazzola. ¿Por qué
no hay socialismo en América Latina?
Una vieja pregunta y algunas respuestas
desde Argentina

Joe Bilsborough. Lo que nos
enseña la socialdemocracia danesa.
Entrevista a Pelle Dragsted.

ENTREVISTAS | 50 AÑOS

Gisèle Sapiro / Violeta Garrido.

¿Qué hacemos con los autores
«incómodos»?

SUMMARIES

www.nuso.org

Marzo-Abril 2022



NUEVA SOCIEDAD | 298

Los desafíos de la democracia

COYUNTURA

Natalia A. Volosin Politización y cuentapropismo de la inteligencia argentina
Benedicte Bull / Antulio Rosales / Manuel Sutherland Venezuela: «capitalismo bodegonero»

TRIBUNA GLOBAL

Pavel Barša Europa del Este: los sueños extraviados de los liberales del 89

TEMA CENTRAL

Yanina Welp Sin partidos la democracia no funciona; con estos partidos, tampoco
Nabila Abbas / Yves Sintomer Tres imaginarios del sorteo en la política
Steven Forti Posverdad, *fake news* y extrema derecha contra la democracia
Cristina Lafont Las asambleas ciudadanas y la concepción populista de representación
Nuria Alabao Por una democracia feminista (siempre por hacer)
Santiago Gerchunoff La crisis de la democracia como melancolía
Alicia Lissidini Democracia directa y movilización social: lo que nos muestra Uruguay
Patricio Gómez Talavera América Latina y los gatos de Cambises

ENTREVISTAS | 50 AÑOS

Maristella Svampa / Pablo Stefanoni Pensar y actuar de manera anfibia